

CARMELO MESA-LAGO BREVE HISTORIA ECONÓMICA DE LA CUBA SOCIALISTA

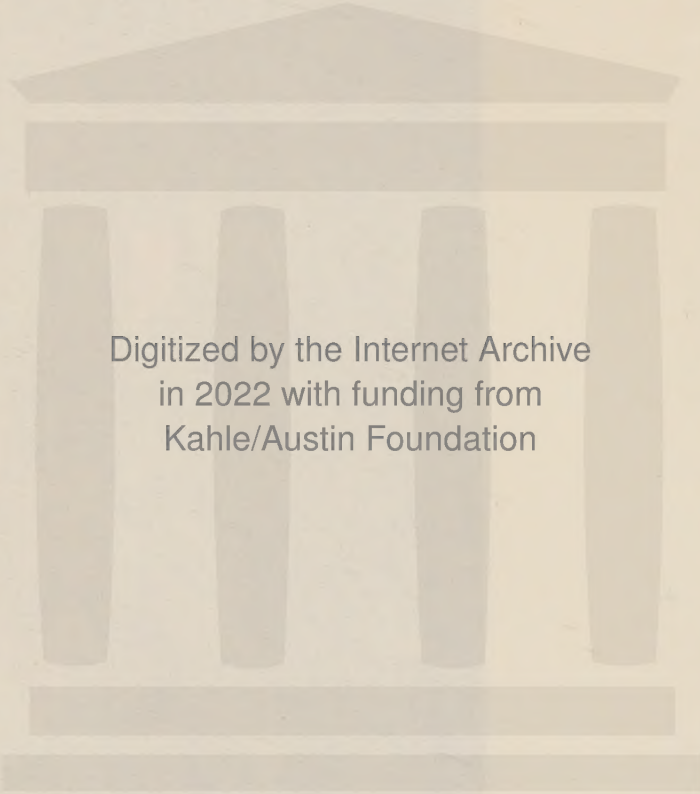
Políticas, resultados
y perspectivas

ALIANZA AMÉRICA









Digitized by the Internet Archive
in 2022 with funding from
Kahle/Austin Foundation

Breve historia económica
de la Cuba socialista

Política, resultados y perspectivas

Breve historia económica
de la Cuba socialista

Política, resultados y perspectivas

Editorial Alfa
Calle 100, No. 100, La Habana

Alfa Editorial

Alianza América
Monografías

Carmelo Mesa-Lago

Breve historia económica de la Cuba socialista

Políticas, resultados y perspectivas

Versión española
de Eva Rodríguez Halfter

Alianza Editorial

Reservados todos los derechos. De conformidad con lo dispuesto en el art. 534 bis del Código Penal vigente, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes reprodujeran o plagiaran, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica fijada en cualquier tipo de soporte sin la preceptiva autorización.

© Carmelo Mesa-Lago

© Alianza Editorial, S. A., Madrid, 1994

Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 15; 28027 Madrid; teléf. 741 66 00

ISBN: 84-206-4235-5

Depósito legal: M. 31.241-1994

Fotocomposición: EFCA, S. A.

Avda. Doctor Federico Rubio y Galí, 16. 28039 Madrid

Impreso en Lavel. Los Llanos, nave 6. Humanes (Madrid)

Printed in Spain

Índice

Introducción	9
1. Situación prerrevolucionaria y periodización de las políticas revolucionarias	13
A. Resumen de las políticas económicas y las condiciones en vísperas de la Revolución, 13.—B. Políticas económicas bajo la Revolución: 1959-93, 16.	
2. Liquidación del capitalismo y erosión del mercado: 1959-60	18
1. Políticas: estatización y populismo, 18.—2. Resultados: avances moderado económico y notable social, 23.	
3. Modelo ortodoxo (estalinista) de planificación central: 1961-63	26
1. Políticas: planificación central, intento de industrialización y lazos crecientes con la URSS, 26.—2. Resultados. La primera doble crisis: fracasos del Plan Central y de la estrategia de desarrollo, 37.	
4. Debate y ensayo de modelos socialistas alternativos: 1964-66	43
1. Políticas. Guevaristas contra pragmatistas y la vuelta al azúcar, 45.—2. Resultados. Breve recuperación económica, 55.	
5. Adopción y radicalización del modelo guevarista: 1966-70	60
1. Políticas. El Hombre Nuevo, el declive del Plan Central y la zafra gigante, 60.—2. Resultados. La segunda doble crisis: fracasos de la «economía moral» y del Plan Azucarero, 73.	
6. Introducción del modelo moderado soviético (pre-Gorbachov) de reforma económica: 1971-85	82
1. Políticas. Reforma tímida de mercado e integración plena en el campo socialista, 83.—2. Resultados. El auge económico y las limitaciones externas, 111.	
7. El proceso de rectificación antimercado, la caída del bloque soviético y la reforma económica: 1986-93	127
1. Políticas. La reforma antimercado, la pérdida de la ayuda de mercados socialistas y la reforma hacia el mercado, 130.—2. Resultados. La tercera doble crisis, 160.	

8.	Factores de cambio y escenarios politicoeconómicos futuros.....	175
	A. Características comunes y diferentes en los regímenes de Europa oriental y Cuba, 176.—B. ¿Están presentes en Cuba los factores que determinaron la caída del «socialismo real» en Europa oriental?, 178.—1. Falta de legitimidad política, 178.—2. Grupos alienados: antiguos y nuevos, 179.—3. Deterioro económico, 180.—4. Un contramodelo capitalista cercano y exitoso, 181.—5. Existencia de una alternativa política interna, 183.—6. El derrumbamiento simultáneo de regímenes y el «beneplácito» soviético, 185.—C. Escenarios politicoeconómicos, 188.—1. Continuación del <i>statu quo</i> , 190.—2. Militarización y represión crecientes sin cambio económico profundo, 191.—3. Movimiento hacia el modelo chino de socialismo de mercado con autoritarismo político, 194.—4. Democratización y reforma económica de mercado, 199.—5. Colapso violento del sistema, 202.	
9.	Cuadros estadísticos	206
10.	Bibliografía	241

Introducción

Al concluir el año 1993 la Revolución cubana cumplió treinta y cinco años. Cuba no sólo es la única nación comunista en las Américas, sino además uno de los últimos países de socialismo real en el mundo y que aún mantiene un sistema económico de «mandato» o de alta centralización en las decisiones. Más aún, el régimen de Fidel Castro es el más longevo en el continente americano y uno de los más antiguos en el plano internacional. Su larga historia ya se aproxima o sobrepasa la de los regímenes de Stalin, Mao, Tito, Franco y Trujillo. Y no menos importante es el hecho de que la Revolución cubana ha sido una de las más radicales del siglo XX: existen pocos aspectos de la sociedad, la economía y la política de ese país que no hayan sido tocados por ese proceso de transformación profunda y totalizadora.

Sin embargo, el continuismo político y longevidad del régimen político y de sus altos dirigentes no encuentran equivalentes en el campo económico, pues Cuba ha experimentado con múltiples modelos de organización económica y estrategias de desarrollo, si bien dentro del marco amplio del socialismo real. El modelo tradicional estalinista, el intento de crear un Hombre Nuevo comunista, la implantación de una reforma tímida de mercado, el Proceso de Rectificación y el Período Especial en Tiempo de Paz, así como el plan de industrialización rápida y las zafras azucareras gigantes, la integración casi total en el campo económico socialista y el esfuerzo de reincorporarse al mercado capitalista mundial son algunas de las políticas oscilantes —a menudo contradictorias— aplicadas en la isla en los últimos tres decenios.

Otro aspecto sorprendente del proceso es que, a pesar de un cambio tan global y radical, hay elementos del pasado que han persistido, como la dependencia notable en las exportaciones azucareras y la concentración en un socio comercial (al menos hasta años recientes). Más preocupante aún es el desarrollo de un ciclo a largo plazo al estilo del utópico Macondo, en que los grandes avances revolucionarios en el plano social (salud, educación, equidad) se están esfumando en medio de la grave crisis que consume al país.

Este libro intenta responder a esos planteamientos así como, directa o indirectamente, a una serie de preguntas cruciales, como las siguientes: ¿cuáles son los logros y fracasos económicos de la Revolución cubana?, ¿hubiera sido posible su larga historia sin el apoyo financiero de la URSS?, ¿es factible la supervivencia de dicha Revolución después del colapso del socialismo real en Europa?, ¿cuál es el papel del embargo impuesto a Cuba por los Estados Unidos?, ¿permitirá Fidel Castro una reforma o apertura profundas del sistema para que se mueva hacia una economía de mercado y un régimen democrático?, ¿existe otra alternativa distinta para Cuba?

La prolongada historia de la Revolución, cuajada de zigzag frecuentes, reclama un análisis sistemático de sus políticas económicas así como una evaluación seria y objetiva de sus resultados. Este es mi segundo intento de realizar esa difícil tarea. El primero fue con el libro *La economía de Cuba socialista: una evaluación de dos décadas* (Editorial Playor, 1983), que abarcó el período 1959-79. Pero este nuevo libro no sólo cubre un período más largo (1959-93), sino que además consolida y decanta las numerosas investigaciones que he efectuado en los últimos treinta años y, por último, está organizado de manera totalmente diferente al libro anterior. En vez de analizar la gestión económica en cinco áreas clave a través del proceso, se divide la historia de éste en siete etapas que se estudian en otros tantos capítulos. En cada uno de ellos se descubren las cambiantes políticas económicas y se evalúan sus consecuencias. Esta labor se realiza de manera consistente, identificando ocho aspectos específicos de las políticas (propiedad, planificación, financiación, estabilización y precios, estrategia de desarrollo, sector externo, trabajo y empleo, distribución y servicios sociales), así como siete áreas en cuanto a resultados (crecimiento, inflación, diversificación, balanza comercial y dependencia externa, desempleo, igualdad e indicadores sociales). Series estadísticas históricas (1959-93), basadas primordialmente en fuentes cubanas, permiten visualizar la trayectoria revolucionaria y sus efectos. Un capítulo final extrae lecciones del pasado y explora el futuro. Primero identifica los factores que determinaron el colapso del socialismo real en la URSS y la Europa oriental, para luego determinar la presencia o

ausencia de dichos factores en la Cuba de hoy. Después se presentan cinco escenarios politicoeconómicos en el futuro cercano de Cuba y se escoge cuál de ellos parece ser el más posible.

Este libro se ha beneficiado de la excelente colección bibliográfica cubana de la Universidad de Pittsburgh, de cuatro visitas a Cuba efectuadas entre 1978 y 1990, de mi labor como director de la revista/anuario *Cuban Studies* por veinte años y de entrevistas realizadas con numerosos expertos dentro y fuera de la isla. Agradezco también el apoyo financiero otorgado por la Fundación Alexander von Humboldt y la Fundación Andrew W. Mellon. Por último, la Universidad de Pittsburgh, el Instituto Universitario Ortega y Gasset (Madrid) y el Instituto Max Planck de Política Social Internacional (Munich) prestaron asistencia en varias etapas del proyecto. Este libro nunca se hubiera publicado en castellano sin la iniciativa de don Nicolás Sánchez-Albornoz, que facilitó el proceso de manera que esta edición aparece mucho antes que la versión inglesa; la traducción se hizo con eficiencia por Eva Rodríguez y fue revisada y puesta al día por mí en febrero de 1993. Obviamente sólo yo, y no dichas instituciones y personas, son responsables de lo que aquí se dice.

Aunque nunca he pretendido que mi obra sea completamente imparcial, he intentado siempre asumir una posición relativamente objetiva en el análisis de la revolución cubana, un fenómeno que ha polarizado la opinión mundial durante la segunda mitad del siglo xx. Espero que este libro pueda contribuir a un mejor conocimiento de ese fenómeno y que sus lecciones sean de cierta utilidad a otros países del mundo hispánico. Mi mayor anhelo es que Cuba arribe al siglo xxi habiendo concluido una transición pacífica hacia un sistema democrático, que mantenga los logros sociales de la Revolución y corrija sus defectos.

1. Situación prerrevolucionaria y periodización de las políticas revolucionarias

A. *Resumen de las políticas económicas y las condiciones en vísperas de la Revolución*

En varias comparaciones entre Cuba y otros países latinoamericanos realizadas en los años cincuenta se situaba a la isla entre los primeros dos o tres lugares en términos de desarrollo económico y social. Pero la economía cubana adolecía de graves problemas no corregidos ni por el mercado ni por el gobierno. (Esta sección está basada en su mayoría en CERP, 1965, y Mesa-Lago, 1983.)

Comparado con otros países latinoamericanos con niveles similares de desarrollo, en 1958 el Estado cubano tenía un grado bajísimo de propiedad en los ámbitos de la producción y los servicios (véase cuadro 2): era nula en la industria y la agricultura, y de proporciones mínimas en la banca, la construcción, los transportes y el comercio. Los servicios públicos, como la electricidad y el teléfono, eran propiedad de corporaciones estadounidenses que también controlaban una parte significativa de la banca. La única propiedad estatal amplia se encontraba en la educación y en los servicios de salud pública.

Aunque era mayoritariamente una economía de mercado, desde la Revolución de 1933 el Estado cubano había empezado a intervenir en la regulación de las condiciones de trabajo, así como en los asuntos económicos. A fines de la década de 1940 y en la de 1950, se crearon varias instituciones importantes, como el Banco Nacional (Central) de

Cuba (BNC), el Banco de Desarrollo Agrícola y el Banco de Desarrollo Económico y Social. Estos dos últimos bancos concedían créditos para la promoción industrial y la diversificación agrícola, mientras que una ley de Fomento Industrial introdujo incentivos fiscales y arancelarios para la creación de nuevas industrias. El Estado expandió también las obras públicas y los servicios sociales. En los años cincuenta se fundó el Consejo Nacional de Economía para programar la política económica, pero este Consejo carecía de auténtico poder para convertirse en una agencia de planificación de tipo indicativa.

La dependencia del azúcar era muy fuerte: en la década de 1950 las secciones agrícola e industrial del azúcar generaron un 28-29 % del producto nacional bruto (PNB), las exportaciones de azúcar supusieron el 81 % de las exportaciones totales y un 20-25 % de la fuerza de trabajo estaba empleada en los campos y los molinos de caña de azúcar (Pérez-López, 1991). Las fluctuaciones del precio del azúcar en el mercado mundial, así como las alteraciones en la cuota de compra y los precios del azúcar fijados por Estados Unidos eran factores exógenos que Cuba no podía controlar. Debido al papel predominante del azúcar, dichas fluctuaciones incidían seriamente sobre el PNB, generando inestabilidad. El sector azucarero estaba esencialmente estancado y no podía generar el dinamismo necesitado para un crecimiento vigoroso de la economía. Había, no obstante, algunos indicios de que la dependencia del azúcar iba descendiendo paulatinamente; así, en 1957-58 el azúcar originó sólo el 25 % del PNB, no obstante ser elevadas la producción y las exportaciones de azúcar durante aquellos años, y la producción industrial no azucarera creció un 47 % en 1957-58.

La inflación media de 1950-58 fue del 1 % anual. El PNB *per capita* en precios constantes creció a un ritmo anual muy lento en el mismo período: aproximadamente el 1 %. El coeficiente de inversión alcanzó un promedio del 18 % y mostró una tendencia ascendente, suscitando esperanzas de que la tasa de crecimiento aumentara en el futuro.

La legislación cubana sobre condiciones de trabajo y seguridad social era una de las más avanzadas de la región y el movimiento sindical —así como el grado de negociación colectiva— era fuerte, aunque generalmente bajo control gubernamental. Ahora bien, en 1956-57 un 16 % de la fuerza de trabajo estaba en desempleo y aproximadamente un 14 % subempleada. Además, el desempleo declarado se multiplicaba en más del doble en el período anual inactivo («estación muerta») del sector azucarero respecto de la temporada de cosecha. La expansión del empleo en la construcción, el comercio y la industria no bastaba para absorber ni una fuerza de trabajo en rápido crecimiento, ni la migración

del campo a la ciudad. Los escasos datos de 1943-57 indican que el desempleo total iba en aumento (CERP, 1963; Mesa-Lago, 1972).

No existen datos sobre la distribución de la renta, pero en 1949-58 la participación laboral en la renta nacional era del 65 %, la más alta de la región: los empleados contaban con fuerza suficiente para captar una parte significativa de la renta nacional, pero sus logros se obtuvieron en buena medida a expensas de los subempleados y los campesinos. En 1957-58 los promedios nacionales cubanos en educación, salud y seguridad social estaban entre los tres puestos más altos de América Latina, pero las instalaciones de servicios sociales estaban concentradas ante todo en la capital y las zonas urbanas, mientras que su acceso y calidad descendían acusadamente en las zonas rurales. Por ejemplo, en 1953 la tasa de analfabetismo de las zonas rurales era 3,6 veces superior a la de las zonas urbanas (41,7 y 11,6 %, respectivamente) y se estimaban disparidades aproximadamente similares en ingreso, mortalidad infantil y vivienda. La mayoría de los emigrantes rurales a La Habana vivían en barriadas de chabolas, encontraban trabajos mal remunerados en el sector terciario (servicio doméstico, venta ambulante) o mendigaban por las calles. El elevado y creciente porcentaje de la fuerza de trabajo empleada en actividades terciarias era indicio de subempleo y ausencia de formalización económica.

La economía cubana era extraordinariamente abierta: en 1957-58 el rendimiento comercial (exportaciones más importaciones) fue superior a la mitad del PNB. Dos terceras partes del comercio exterior cubano se realizaban con Estados Unidos y esta dependencia comercial resultaba invariablemente en déficit (la inversión norteamericana en Cuba era posiblemente la segunda mayor de América Latina). El peso cubano se cambiaba a la par con el dólar estadounidense y era convertible libremente en el mercado mundial. Según una opinión crítica, la economía cubana era totalmente dependiente de Estados Unidos (una situación que impedía un grado satisfactorio de integración interior en la isla), perpetuaba la dependencia del azúcar, obstruía la industrialización y generaba desigualdades significativas (Boorstein, 1968). La opinión contraria sostiene que las pequeñas dimensiones de Cuba y su proximidad a la más fuerte economía mundial hacían inevitable la integración, y que las inversiones de Estados Unidos y las transferencias de tecnología eran en buena medida responsables del desarrollo relativamente alto logrado en la isla (CERP, 1965).

En resumen, durante el decenio anterior a la Revolución la economía cubana tenía una tasa de crecimiento reducida que beneficiaba en gran medida al capital y a la mano de obra empleada. El predominante sector azucarero estaba básicamente estancado, mientras que el sector no azuca-

rero, aunque se expandía, no tenía suficiente dinamismo para generar un crecimiento económico vigoroso y absorber la transferencia de mano de obra desde la agricultura. El desempleo total y el subempleo eran altos y aparentemente iban en aumento. La isla se encontraba entre los primeros países de la región en cuanto a servicios sociales, pero los promedios nacionales ocultaban importantes diferencias entre zonas urbanas y rurales. Debido a la gran apertura de la economía cubana, así como a su fuerte dependencia de la exportaciones de azúcar y de las cuotas y precios de Estados Unidos, las fluctuaciones en el precio mundial del azúcar y las alteraciones en la política estadounidense repercutían de manera significativa en la economía de la isla, creando considerable inestabilidad. La economía cubana estaba integrada con la economía de Estados Unidos y tenía muy poca independencia, pero no existe consenso en cuanto a si dicha situación era evitable ni sobre sus consecuencias generales. Aunque desde 1933 los sucesivos gobiernos cubanos incrementaron gradualmente su intervención en la economía, particularmente en las décadas de los cuarenta y cincuenta, tanto la propiedad como la regulación estatales eran considerablemente reducidas en comparación con otros países latinoamericanos con el mismo nivel de desarrollo.

B. *Políticas económicas bajo la Revolución: 1959-93*

Existe un amplio acuerdo entre los expertos extranjeros en cuanto a la periodización bajo el gobierno revolucionario (una excepción son Zimbalist y Eckstein, 1987). Los economistas cubanos suelen seguir la misma periodización, pero destacan la continuidad del proceso (Rodríguez, 1989). En algunos de mis anteriores trabajos he demarcado seis etapas en la política económica cubana relativas al modelo de organización: 1) 1959-60, liquidación del capitalismo y erosión del mercado; 2) 1961-63, intento de introducir un modelo ortodoxo (estalinista) de planificación central; 3) 1964-66, debate y ensayo de modelos socialistas alternativos; 4) 1966-70, adopción y radicalización del modelo guevarista; 5) 1971-85, introducción de un modelo moderado soviético (pre-Gorbachov) de reforma económica, y 6) a partir de 1986, primero el Proceso de Rectificación y el alejamiento del mercado (agravados por la caída del bloque soviético desde 1989) y luego la reforma hacia el mercado (desde principios de los años noventa). Más de tres decenios de política revolucionaria se caracterizan por cambios pendulares entre el plan y el mercado, pero con un abrumador predominio del primero. Entrelazados con las diversas etapas de la política de organización económica hubo diferentes enfoques en cuanto a la estrategia de desarrollo elegida: 1) 1959-63,

sesgo antiazúcar, industrialización y diversificación agrícola; 2) 1964-70, vuelta a la prioridad del sector azucarero con un énfasis en las zafras gigantes, y 3) 1971 en adelante, una estrategia más equilibrada con un predominio continuo del azúcar, pero con mejor distribución de recursos entre los diversos sectores económicos (Mesa-Lago, 1971, 1978, 1983, 1988*a*, 1990*a*). En el cuadro 1 se ofrece un resumen de las políticas específicas de cada estadio.

2. Liquidación del capitalismo y erosión del mercado: 1959-60

1. *Políticas: estatización y populismo*

En sus comienzos, la Revolución carecía de una ideología explícita, si bien Fidel Castro hablaba de una vaga doctrina de «humanismo». Algunos estudiosos han observado que el estructuralismo de la CEPAL (que favorece la economía mixta, la planificación descentralizada-indicativa, una industrialización por sustitución de importaciones, reformas fiscales y agrarias y una redistribución progresiva de las rentas) ejerció cierta influencia en este período por medio de conocidos asesores del gobierno cubano. Otros estudiosos han intentado demostrar que la mayoría de los revolucionarios eran criptomarxistas. Hubiera o no una ideología subyacente, los nuevos líderes pronto mostraron preferencias nacionalistas, estatistas, antimercado, antiburocráticas y distributivas. Fidel Castro y sus compañeros más próximos no tenían conocimientos de economía (la mayoría eran abogados) y los escasos economistas que tuvieron cargos gubernamentales fueron pronto destituidos, ocupando sus puestos revolucionarios entusiastas pero inexpertos. Por ejemplo, Ernesto Guevara, un médico, fue primero nombrado director del Departamento de Industrialización del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), después presidente del Banco Nacional y por último ministro de Industria. Burócratas y técnicos eran considerados como oportunistas que complicaban deliberadamente los asuntos económicos y administrativos con la esperanza de hacerse indispensables. En parte debido a su

ignorancia de cuestiones económicas y en parte porque estaban seducidos por el éxito casi mágico de la Revolución contra el ejército supuestamente técnico de la dictadura derrocada, los dirigentes revolucionarios propusieron la aplicación de técnicas guerrilleras a la economía cubana. Era creencia muy extendida que los grandes problemas socioeconómicos de la nación serían resueltos rápida y simultáneamente en virtud del poder de la Revolución, el celo y el trabajo incesante de los líderes, la audacia de la improvisación y el entusiasmo y apoyo del pueblo. Voluntad, conciencia, moral, austeridad y lealtad eran exaltados frente a los recursos materiales y humanos, la tecnología, los conocimientos y la pericia (Mesa-Lago, 1983).

a. *Propiedad*

La colectivización de los medios de producción aumentó lentamente en 1959 y fue cobrando impulso en la segunda mitad de 1960. Esto se debió o bien a que la jefatura creía que era un paso necesario para lograr sus fines desarrollistas, o bien a que se vieron forzados a hacerlo por los acontecimientos nacionales e internacionales, o por una combinación de ambos. En 1959 se emplearon diversos medios en el proceso colectivizador: confiscación de propiedades y bienes ilícitamente apropiados por los funcionarios de la dictadura derrocada; expropiación de latifundios (fincas que excedieran el límite de 400 hectáreas) mediante la primera Ley de Reforma Agraria; expropiación de viviendas de alquiler; intervención estatal en empresas (fábricas, almacenes, transporte) abandonadas por sus propietarios o aquellas en que los conflictos laborales perturbaran la producción; confiscación de bienes de las personas que no pagaran los impuestos debidos, y confiscación de todas las propiedades pertenecientes a los condenados por delitos contrarrevolucionarios o que habían ido al exilio político.

Las fincas expropiadas bajo la Reforma Agraria de 1959 fueron divididas y distribuidas entre 200.000 campesinos sin tierras. Pero la mayor parte de la tierra expropiada (particularmente las plantaciones de caña de azúcar y los ranchos ganaderos) no se dividió, sino que se organizó en cooperativas bajo control estatal, alegando que la participación de latifundios provocaría descensos de productividad y producción.

En oleadas sucesivas, entre junio y octubre de 1960, el proceso colectivizador se extendió rápidamente. En él quedaron incluidas todas las refinerías de petróleo de propiedad extranjera, las azucareras pertenecientes a Estados Unidos, los bancos, las corporaciones de teléfonos y electricidad y todas las restantes propiedades estadounidenses, así como

la mayoría de las grandes industrias de propiedad doméstica, los bancos y las empresas de transporte. Hacia fines de 1960 todo el comercio interior al por mayor y el exterior, la banca y la mayor parte de los transportes, la industria, la construcción y el comercio al por menor, así como más de la tercera parte de la agricultura estaban en manos del gobierno. Esta rápida transferencia de propiedad liquidó el sistema capitalista y produjo la erosión de los mecanismos automáticos del mercado; como consecuencia, la producción y distribución de bienes y servicios dejó en parte de quedar determinada por las leyes de la oferta y la demanda (CERP, 1965; Mesa-Lago, 1983).

b. Planificación, financiación, estabilización y precios

Durante este período se crearon varias agencias gubernamentales para regular o dominar las actividades económicas. La primera fue el INRA, que fue gradualmente creciendo hasta convertirse en un gigante burocrático que controlaba un tercio de la agricultura y una parte considerable de la industria, y que elaboró los primeros experimentos en planificación central. La Junta Central de Planificación (JUCEPLAN) se creó inicialmente en marzo de 1960 para coordinar la política del gobierno y conducir al sector privado por la vía de la planificación indicativa; sin embargo, dichas funciones no fueron nunca ejercidas y, en la segunda etapa, la JUCEPLAN se convertiría en la agencia de planificación central del Estado. La financiación de la economía recayó cada vez más en el Estado y la financiación privada quedó en gran medida restringida a la agricultura. El Ministerio de Hacienda empezó a controlar el proceso financiador a través del presupuesto del Estado, mientras el Banco Nacional ampliaba sus competencias sobre el crédito y los tipos de cambio. El Ministerio de Trabajo desempeñó un papel cada vez más activo, actuando como árbitro laboral y determinando las condiciones de trabajo como vía hacia el dominio de los sindicatos. Durante la mayor parte de este período, los precios fueron principalmente fijados en el mercado, pero el gobierno empezó ya a controlar los precios, en gran medida a través de la colectivización de servicios públicos (electricidad, teléfonos, transporte). El incremento de los gastos del Estado se vio parcialmente compensado por unas rentas gubernamentales en aumento, sobre todo gracias a un sistema fiscal más eficiente y a los beneficios producidos por las empresas colectivizadas. Con todo, se produjo un significativo aumento de la oferta monetaria, probablemente superior a la producción. El proceso colectivizador y la insatisfacción de gerentes y técnicos indujeron el éxodo de este grupo vital. Sus puestos fueron inmediatamente

ocupados por revolucionarios leales pero inexpertos, los cuadros que a comienzos de los años sesenta serían responsables de la puesta en práctica de la planificación central para sustituir a las fuerzas de mercado (Boorstein, 1968; Mesa-Lago y Zepherin, 1971).

c. *Estrategia de desarrollo*

Los líderes cubanos asociaron los problemas económicos de la isla a la dependencia del azúcar, y de ahí que su primera estrategia de desarrollo (que se inició en 1960, cobró impulso en 1961 y finalizó en 1963) tuviera un claro sesgo antiazúcar. El objetivo de la diversificación iba a lograrse gracias a dos medios: un rápido proceso de industrialización por sustitución de importaciones y de diversificación agrícola en detrimento del azúcar (y a favor del arroz, los tubérculos, las frutas y las verduras). La inversión pública concedió prioridad a estos sectores económicos, y la reforma agraria junto a la nacionalización de la industria iban a proporcionar las premisas necesarias para este ambicioso programa de diversificación (Mesa-Lago, 1971; Ritter, 1974).

d. *Sector exterior*

Una de las principales metas de Cuba era reducir la dependencia económica de Estados Unidos. A principios de 1960 se celebró en La Habana una feria industrial soviética y se firmó un acuerdo comercial de cinco años (1960-64) con la URSS que otorgaba trato preferente a la isla; comprometía a los soviéticos a comprar un millón de toneladas de azúcar anuales y a suministrar petróleo, maquinaria y productos químicos. La URSS abrió además una línea de créditos por valor de 100 millones de dólares para proveer los bienes de capital necesarios, construir nuevas fábricas y emprender prospecciones geológicas. Otros acuerdos comerciales y económicos se firmaron con la República Democrática Alemana (RDA) y Checoslovaquia. A mediados de los años sesenta las refinerías norteamericanas se negaron a elaborar las importaciones de crudo soviético; fueron por ello nacionalizadas y empezaron a refinar petróleo soviético; a finales del mismo año prácticamente todo el petróleo se importaba de la URSS. Estados Unidos reaccionó suspendiendo la cuota de importación de azúcar cubana; la URSS y China se comprometieron a su vez a comprar (a precios del mercado mundial) la mayoría de dicho azúcar. Las importaciones soviéticas de azúcar cubano eran en realidad muy superiores a la pérdida de las importaciones norteamericanas.

nas sufrida por la isla, y todas las importaciones socialistas unidas superaron las importaciones de Estados Unidos en la primera parte de aquel año. En octubre la nacionalización de todas las inversiones estadounidenses produjo la imposición de un embargo económico de Estados Unidos sobre la isla y el cese de relaciones comerciales entre ambos países. A fines de 1960 el gobierno cubano controlaba estrechamente el comercio exterior. En este período el peso cubano seguía cambiándose libremente a la par con el dólar estadounidense (Mesa-Lago, 1971, 1978; Mesa-Lago y Gil, 1989; Pérez-López, 1991).

e. *Trabajo y empleo*

Los sindicatos celebraron elecciones libres en 1959, pero la injerencia y las presiones gubernamentales comenzaron a finales de aquel año y en 1960 surgieron medidas de control explícitas. Toda actividad en torno a la negociación colectiva fue interrumpida a fines de 1959, y en 1960 el Ministerio de Trabajo empezó a fijar los salarios y a regular las condiciones de trabajo.

Debido al proceso colectivizador, el empleo en el sector público aumentó desde el 9 % hasta aproximadamente la mitad de la fuerza de trabajo en 1959-60. Con semejante control, uno de los objetivos importantes de la política pública era reducir el desempleo. En la agricultura el paro estacional se redujo mediante la migración del campo a la ciudad, en parte fomentada por las movilizaciones de campesinos hacia las mayores ciudades. Así, en 1960 la población de La Habana aumentó más del doble del promedio anual de crecimiento de la década de 1950. Parte de estos migrantes fueron contratados en las fuerzas armadas, la seguridad del Estado y la policía, los sindicatos y otras organizaciones de masas, las obras públicas y los servicios sociales; otros se unieron a las filas de los desempleados y subempleados urbanos. Miles de jóvenes campesinos recibieron becas que evitaron su incorporación inmediata a la fuerza de trabajo. La propiedad de la tierra otorgada por la reforma agraria no incrementó de modo significativo el empleo rural, porque la mayoría de los nuevos propietarios agrícolas habían trabajado la misma tierra anteriormente como aparceros, arrendadores y demás (Mesa-Lago y Hernández, 1971; Mesa-Lago, 1972).

f. *Distribución y servicios sociales*

Las políticas distributivas incluían incrementos de los salarios generales, del salario mínimo en la agricultura y de las pensiones mínimas.

Las rentas disponibles del sector más pobre fueron aumentadas reduciendo los precios de la electricidad y de los alquileres de viviendas urbanas hasta un 50 %: la ley de reforma urbana de 1960 también daba derecho a los inquilinos a comprar la casa en que vivían mediante el pago del alquiler al Estado durante un período que oscilaba entre los cinco y los veinte años. Las rentas disponibles también ascendieron debido a la expansión de la educación y la sanidad gratuitas y de la vivienda pública subvencionada (el gobierno lanzó un ambicioso programa de construcción de viviendas). La colectivización de la tierra, los bienes inmuebles, la banca y la mayoría de los medios de producción eliminó prácticamente los dividendos, los réditos y los intereses salvo en la agricultura. El resultado neto de estos dos conjuntos de políticas fue el descenso de los diferenciales extremos en los ingresos. Además, la expansión de los servicios sociales se concentró en las áreas rurales, lo cual contribuyó a reducir la diferencia en nivel de vida con las zonas urbanas. Todas estas políticas garantizaron un general respaldo popular a la Revolución, pero redujeron acusadamente la porción inversora del PNB; además, el consumo se incrementó a mayor ritmo que la producción y las importaciones, agotando las existencias rápidamente (Mesa-Lago, 1971, 1983).

2. *Resultados: avances moderado económico y notable social*

a. *Crecimiento*

Los resultados socioeconómicos de los dos primeros años de la Revolución son de valoración extremadamente difícil debido a la falta de datos. Las series estadísticas suelen comenzar en 1962 con la introducción de la planificación, y suelen omitir el período de 1959-61. Al parecer, el crecimiento económico continuó en los dos primeros años gracias a las buenas cosechas de azúcar, la plena utilización de los equipos instalados, las existencias y suministros acumulados y las reservas de divisas. La producción de azúcar ascendió un 3 % en 1959 (debido a la conclusión de la guerra civil) y descendió ligeramente en 1960, pero seguía estando por encima del nivel de 1958 (cuadro 6). La producción de níquel descendió fuertemente en 1960, después que las dos plantas de níquel estadounidenses fueran nacionalizadas; la mayor y más moderna de estas fábricas, la de Moa, quedó paralizada durante varios años por la huida de sus gerentes y técnicos. Con la excepción del tabaco y los cigarros puros, la producción de la mayoría de los productos agrícolas e industriales se incrementó en este período. El índice de producción agrícola *per capita* de la FAO aumentó en 1959 y permaneció en el

mismo nivel en 1960, mientras que los índices de producción industrial parecen indicar incrementos sostenidos en ambos años. La nueva estrategia de diversificación se inició en 1960, sin embargo, y no hubo tiempo suficiente para que se produjera una mejora significativa en este frente. Las estimaciones no oficiales del porcentaje de inversión en el PNB indican un descenso significativo en este período.

b. *Inflación*

No hay cifras precisas disponibles sobre inflación: probablemente ascendió debido a la fuerte expansión de las rentas disponibles y a la política expansionista del gobierno, pero no quedó fuera de control porque las rentas del Estado experimentaron un auge gracias a los impuestos pagados por los morosos. Una estimación cubana publicada en 1989 fija en el 2 % la tasa media anual de inflación de 1959-61.

c. *Balanza comercial*

El valor de la exportaciones descendió en 1959-60, pero también el valor de las importaciones, por lo que en 1959 el déficit de la balanza comercial fue similar al del año anterior y en 1960 se generó un diminuto excedente comercial. El comercio con la URSS ascendió del 1 al 16 % (17 % si se incluyen otros países de Europa oriental) en 1959-60, generando saludables excedentes (cuadros 11 y 12). La URSS y otros países socialistas impidieron que la Revolución se quebrantara bajo las represalias de la política comercial estadounidense.

d. *Desempleo e indicadores sociales*

El desempleo total quedó estancado o se redujo en alguna medida gracias al crecimiento del empleo en las zonas rurales, pero probablemente aumentó en las zonas urbanas. Un censo laboral de 1960 registró un incremento en desempleo declarado, mientras que los sondeos anuales indicaban cierto descenso (cuadro 19). En este período ascendieron gradualmente los gastos en seguridad social, educación, salud y vivienda. La distribución de la renta se hizo más igualitaria en virtud de la reducción de los ingresos no salariales en el extremo superior de la escala de rentas y de un aumento de los ingresos disponibles en el extremo inferior. La tasa de natalidad ascendió sostenidamente mientras que la tasa

general de mortalidad permaneció casi estancada, por lo que la tasa de crecimiento demográfico se incrementó en 1959, pero una primera oleada emigratoria redujo esta tasa en 1960 (cuadro 21).

e. *Resumen*

En esta etapa de la Revolución los dirigentes intentaron acometer simultáneamente todos los problemas socioeconómicos prerrevolucionarios, pero con resultados desiguales. Se logró un crecimiento económico moderado aprovechando equipamientos infrautilizados, las existencias y las reservas, y con la ayuda de unas cosechas de azúcar bastante buenas y una activa política de gastos gubernamentales. No obstante esta política expansionista, la inflación no se disparó gracias al incremento en rentas fiscales y al control de los precios de los servicios públicos. La gran ola de colectivización que tuvo lugar hacia fines de 1960 no tuvo efectos negativos graves de modo inmediato. Se logró poco en cuanto a reducir el monocultivo azucarero. El desempleo declarado subió en 1959 y en 1960 aminoró su ritmo o siguió creciendo, dependiendo de los datos, no obstante las medidas gubernamentales para reducirlo radicalmente. La dependencia económica de Estados Unidos descendió sustancialmente y comenzó el rápido giro del comercio y la ayuda hacia el campo socialista. La distribución de la renta se hizo considerablemente menos desigual y favoreció especialmente a las zonas rurales. Esta subida en los ingresos de los sectores más pobres de la población y la expansión de los servicios públicos tuvieron una función progresiva en la distribución, pero dicha política redujo la formación de capital.

3. Modelo ortodoxo (estalinista) de planificación central: 1961-63

El año 1961 trajo consigo la ruptura de relaciones diplomáticas con Estados Unidos, la derrota de la invasión de Bahía de Cochinos —patrocinada por Estados Unidos—, que consolidó la Revolución, y la declaración de que ésta era socialista y su máximo dirigente era un marxista. Enfrentados a la caída del mercado y habiendo establecido una estrecha alianza politicoeconómica con la URSS (que garantizó la supervivencia de la Revolución), los líderes cubanos decidieron copiar el modelo soviético de planificación entonces en uso. La estrategia cubana de industrialización, iniciada en la primera etapa, también se ajustaba al modelo de desarrollo soviético y, por tanto, siguió vigente. Pero una multiplicidad de factores pronto hicieron inviables ambos procedimientos.

1. *Políticas: planificación central, intento de industrialización y lazos crecientes con la URSS*

a. *Propiedad*

⇒ No obstante las advertencias en contra de una colectivización excesivamente amplia y rápida de algunos planificadores marxistas occidentales (por ejemplo, Charles Bettelheim y René Dumont), el proceso continuó sin descanso en la segunda etapa: en 1961 fueron nacionalizadas todas las instituciones educativas privadas y los grandes hospitales; en

1962 se introdujo el racionamiento y fueron colectivizados la mayoría de los comercios privados al por menor que aún quedaban, integrándolos en una red estatal de tiendas de comestibles y de otra índole; también en 1962 las cooperativas agrícolas semiprivadas —creadas en 1959 en los latifundios nacionalizados— se transformaron en fincas agrícolas del Estado. En 1963 la segunda Ley de Reforma Agraria expropió las tierras de las fincas que sobrepasaban las 67 hectáreas, eliminando con ello al agricultor mediano; entretanto, el Estado se aseguró el control de la agricultura privada a través del INRA al introducir el *acopio*, esto es, la venta obligatoria de una parte de la cosecha al Estado a precios inferiores a los del mercado, y la incorporación de todos los campesinos privados a una Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) bajo control estatal. Por último, en 1963 se completó el proceso de colectivización de los fondos de seguros sociales privados y estos fondos quedaron integrados en un sistema unificado estatal de seguridad social/sanidad.

En 1963 sólo el 30 % de la agricultura y el 25 % del comercio minorista (en su mayoría vendedores ambulantes) estaban en manos privadas; el resto de la economía estaba virtualmente en manos del Estado. El proceso de colectivización, por consiguiente, se realizó con extraordinaria velocidad (cinco años) y alcance, evitándose los enfrentamientos sangrientos ocurridos en otros países socialistas, aunque en 1963-65 algunos grupos de campesinos lucharon en las montañas (Mesa-Lago, 1971, 1983).

b. *Planificación*

El giro de mercado a plan estuvo influido por intelectuales marxistas occidentales como Leo Huberman, Paul Sweezy, Paul Baran y Ernest Mandel, pero la mayor parte del asesoramiento técnico provino de la URSS y Checoslovaquia.

La jefatura cubana rechazó la alternativa del socialismo de mercado (elaborado teóricamente en Occidente a fines de la década de 1920 y en la de 1930, y ensayado primeramente en Yugoslavia en los años cincuenta), que tenía unos cuantos adeptos domésticos, así como el refrendo de dos conocidos planificadores franceses (Dumont y Bettelheim). Cuba, por el contrario, copió el modelo de planificación física fuertemente centralizado típico de las economías socialistas. Introducido por Stalin en la URSS a fines de la década de 1920, fue aplicado allí, con una tímida añadidura de unos mecanismos de mercado muy limitados a mediados de los años sesenta, hasta la *perestroika* de Gorbachov. Desde la URSS, el modelo estalinista se difundió por todos los países comunistas de Eu-

ropa oriental y Asia hasta que las reformas orientadas al mercado, que comenzaron en los años cincuenta, fueron cobrando fuerza en las décadas de 1970 y 1980.

El modelo estalinista empezó a ser introducido en Cuba a comienzos de 1961 con la creación de una nueva estructura administrativa. En su centro estaba la JUCEPLAN, ya modificada y encargada de la formulación y puesta en práctica de planes económicos anuales y de alcance medio. Se creó una red de ministerios y agencias centrales para dirigir los sectores recientemente colectivizados, que fueron organizados mayoritariamente en monopolios del Estado. En el sector industrial se fundó un nuevo ministerio que unía las fábricas del INRA y las nuevas industrias nacionalizadas. Con el tiempo este Ministerio de Industrias se subdividiría en varios ministerios menores que se ocuparían del azúcar, la industria básica, la industria ligera, la minería y la metalurgia y la producción alimentaria. El INRA siguió a cargo de la agricultura, pero más adelante su sector azucarero sería transferido al nuevo Ministerio del Azúcar y el INRA pasaría a ser Ministerio de Agricultura. A un Ministerio de la Construcción se le dio competencia sobre todo lo concerniente a la construcción pública. El Banco Nacional (BNC) se convirtió en tesoro, emisor y controlador de la moneda, banco de depósito y administrador de los créditos. A su vez, se dio al Ministerio de Hacienda la responsabilidad sobre el presupuesto del Estado, que se convirtió en el plan nacional financiero para la inversión. El Ministerio de Comercio Interior se hizo cargo de la red nacional de tiendas del Estado y de la administración del racionamiento, así como de la distribución de artículos no racionados. El Ministerio de Comercio Exterior ejercía un control directo prácticamente sobre todas las importaciones y exportaciones. El Ministerio de Trabajo empezó a fijar los salarios y normas de producción a escala nacional. Los ministerios anteriormente existentes para los servicios sociales pasaron a ser únicos administradores de servicios tales como la educación y la sanidad.

Las empresas públicas que producían el mismo tipo de artículos (o proporcionaban servicios similares) se fusionaron en consolidados controlados por el ministerio central correspondiente. En 1958 había aproximadamente 38.300 empresas industriales; hacia 1961, 18.500 empresas industriales, responsables del 80 % de la producción industrial, habían sido unidas en varios consolidados. En la agricultura las fincas agrícolas del Estado (similares al *sovkhoz* soviético) se integraron o bien en el INRA o bien en el Ministerio del Azúcar. En 1961 el tamaño medio de las fincas estatales era de 8.870 hectáreas, pero aumentó hasta aproximadamente 10.000 hectáreas en un período de dos años (Bernardo, 1971). Los ministerios y agencias centrales fueron apresuradamente organizados

y equipados con personal inadecuado, puesto que una mayoría de técnicos y directores-gerentes había huido del país desde mediados de la década de 1960 (con la gran ola de nacionalización) y particularmente después de la derrota de la invasión de Bahía de Cochinos en 1961.

Tres planes de alcance medio —cortados todos por técnicas soviéticas— fueron rápidamente elaborados: por el planificador polaco Michael Kalecki, a fines de 1960, y por el francés Charles Bettelheim y el ruso A. Efinov, a mediados de 1961. El segundo plan cubría el período 1962-65 con objeto de adaptarlo a los períodos de planificación de la URSS y Europa oriental. Este plan se convirtió en un estudio teórico divorciado de la realidad, lo cual impedía su aplicación práctica. Las razones eran: la falta de auténtico conocimiento de la economía por parte de los planificadores, la ausencia de estudios sectoriales así como de estadísticas amplias y fiables, y el hecho de que los dirigentes no hubieran definido las directrices económicas con suficiente claridad para permitir a los planificadores la elaboración de objetivos concretos. Además, la estrategia de desarrollo basada en la diversificación fracasó en 1963 haciendo inviable el plan de 1962-65.

En marzo de 1961 se empezó a trabajar en el plan anual de 1962 con ayuda de asesores checos. Sus esfuerzos quedaron, no obstante, obstaculizados por el poco tiempo de que disponían, la falta de estadísticas exactas y de cuadros adiestrados y porque el modelo era inadecuado para Cuba. Era excesivamente centralizado; había sido configurado por una economía desarrollada e industrializada; y fue rígidamente aplicado sin esfuerzo alguno para adaptarlo a la economía cubana, que era insular, de monocultivo y en vías de desarrollo. Las cifras se estimaron de forma aproximada o se inventaron, no hubo verdadero insumo ni retroalimentación desde los escalones inferiores, y por ello los objetivos de producción fueron excesivamente optimistas, sin fundamento en la realidad. Este problema se agravó debido a que las metas del plan se calibraron en su mayoría por la producción bruta, desatendiendo a la eficiencia y rentabilidad de la empresa así como a la calidad del producto. Cuando estuvo preparada la versión final del plan (en mayo de 1962), sus toscos errores de cálculo lo hicieron prácticamente inútil. Al parecer se elaboraron otros planes para 1963 y 1964, pero carecemos de información sobre si fueron o no aplicados.

Acuña según el viejo troquel soviético, la planificación cubana abarcaba cinco aspectos: i) «directrices económicas básicas» consistentes en metas muy agregadas (tasa de crecimiento deseable, proporciones generales de consumo e inversión) decididas por el Ejecutivo y entregadas a los planificadores; ii) «modelo global» o proyecciones agregadas y metas generales preparadas por la JUCEPLAN, que también debía garantizar

su coherencia (los instrumentos para conseguirlo eran, entre otros, los equilibrios materiales financieros); iii) «cifras de control» o metas preliminares desagregadas fijadas mediante aproximación sucesiva en discusiones de la JUCEPLAN con los ministerios centrales y entre estos últimos y las empresas correspondientes (había que garantizar las necesarias interrelaciones entre empresas); iv) «cifras directrices» o metas finales desagregadas determinadas tras el proceso realizado por la JUCEPLAN de revisar las cifras de control y eliminar las discrepancias e incongruencias, y v) control de la ejecución y revisiones. Este proceso adolecía de los típicos fallos experimentados por los planes centrales en otros países; por ejemplo, las interrelaciones necesarias entre empresas no siempre pudieron desarrollarse, ni se logró coherencia entre las diversas metas, creándose con ello cuernos de botella, excedentes y carencias. El incumplimiento de una meta por parte de una unidad decisiva (cuya producción era insumo para otras unidades) desataba una reacción en cadena de incumplimiento. Unas metas optimistas de producción doméstica, junto al fallo/retraso de importaciones, generaban nuevos problemas. Por último —aunque no en orden de importancia—, la información sobre los cambios que se iban produciendo no era elaborada y transmitida con celeridad suficiente para evitar algunos de los problemas descritos anteriormente.

Otras razones peculiares a Cuba contribuyeron al fracaso de la planificación en esta etapa. La colectivización fue excesivamente amplia y rápida; de ahí que millones de microrrelaciones económicas quedaran destruidas de golpe, eliminando los mecanismos automáticos del mercado cuando el Estado no estaba preparado para asumir estas funciones. Los nuevos ministerios y agencias centrales carecían de coordinación entre sí, se organizaron apresuradamente y se dotaron de personal inexperto y funcionaban desorganizadamente, sin procedimientos de control. Las decisiones económicas eran tomadas por la dirección política sin consultar a la JUCEPLAN, lo cual producía graves inconsecuencias. No existía plan alguno de inversión y las decisiones inversoras no estaban coordinadas. La colectivización de la tierra y el sistema de acopio dislocaron el flujo de abastecimientos del campo a las ciudades. Debido a falta de información o de control de la gestión, algunos productos agrícolas muy necesitados en las ciudades se echaban a perder en la misma tierra o, después de haber sido cosechados, se estropeaban debido a la carencia de medios para transportarlos (Boorstein, 1968; Mesa-Lago y Zepherin, 1971; Bernardo, 1971).

c. *Financiación*

La financiación de la economía del Estado la llevaban a cabo todas las empresas, fincas agrícolas y agencias a través de asignaciones centrales del Ministerio de Hacienda. Este método, denominado «sistema presupuestario», se inició a fines de 1960 en el Departamento de Industria del INRA, controlado por Guevara. Diversas leyes promulgadas en 1961 organizaron las nuevas agencias de planificación y agencias centrales en torno al sistema presupuestario de financiación. Por la ley presupuestaria de 1962 se centralizaron prácticamente todas las finanzas en un presupuesto nacional administrado por el Ministerio de Hacienda. Finalmente, a mediados de 1963 entró en vigor la regulación de las empresas públicas bajo financiación presupuestaria (para una descripción de este sistema, véase capítulo 4, 1-c).

El gobierno intentó reducir el consumo (sobre todo mediante el racionamiento) con objeto de incrementar la formación de capital. Además, la parte de inversión del sector productivo ascendió de 70,7 % a 74,6 % en 1962-63, mientras que la parte correspondiente del sector «no productivo» (servicios sociales) descendió de 29,3 a 25,4 %. Con el mismo talante, las asignaciones del presupuesto nacional para financiar la producción se elevaron de 32,9 % a 41,6 %, mientras que la proporción correspondiente a servicios sociales se redujo de 35,7 a 33,7 %. En la asignación de capital entre proyectos alternativos los cubanos no emplearon el «coeficiente de eficacia inversora» de corte estalinista (basado en el período de amortización) ni la tasa de interés; por el contrario, las decisiones inversoras eran tomadas por la jefatura máxima de modo arbitrario. Careciendo de mecanismos para garantizar la eficiencia, parte del incremento en inversión se perdió debido a una deficiente productividad del capital (Bernardo, 1971; Mesa-Lago, 1971).

d. *Estabilización y precios*

A partir de 1962 el Ministerio de Hacienda preparó unos presupuestos del Estado anuales de enorme alcance (prácticamente abarcaban toda la economía de la nación). Sin embargo, no siempre se logró la necesaria integración entre presupuesto y plan, y las técnicas de contabilidad del presupuesto eran primitivas. Más de un tercio del presupuesto se asignaba a financiar la producción; otro tercio, a servicios sociales, y la mayor parte del tercer tercio, a defensa y administración pública. En la versión preliminar del presupuesto; rentas y gastos estaban equilibrados y no se publicaba ninguna información más sobre la ejecución presupuestaria.

Los escasos datos sobre inflación sugieren que ésta era alta para niveles cubanos, un resultado lógico de la expansión de las rentas de la población unida a una producción estancada o decreciente.

La mayoría de los precios empezaron a fijarse centralmente en 1962 y en el mismo año se inició la asignación física de bienes de consumo mediante el racionamiento. Los bienes de consumo racionados estaban subvencionados y sus precios permanecieron esencialmente congelados desde 1961. Según la lógica gubernamental, si se hubiera permitido al mercado determinar los precios de los artículos de consumo esenciales, el considerable exceso de la demanda sobre la oferta (debido a unas rentas disponibles en expansión y una producción estancada o en descenso) habría provocado una inflación galopante que perjudicaría a los grupos de renta más baja, los más firmes partidarios del régimen. El racionamiento y las subvenciones, por tanto, tenían fines tanto igualitaristas como políticos. Siguiendo el ejemplo soviético, los precios del acopio se fijaban por debajo de los del mercado como una forma de impuesto indirecto a los agricultores privados, a fin de generar rentas para la industrialización e impedir a dicho grupo obtener ingresos excesivos (Mesa-Lago, 1971, 1983).

e. Estrategia de desarrollo

Como parte del programa de diversificación agraria y para reducir la dependencia del azúcar, las grandes fincas que producían caña de azúcar fueron desbrozadas y replantadas con arroz, frutas y verduras. El área total de tierra dedicada al azúcar se redujo en un 25 % en 1958-63. En 1961, 175.000 hectáreas de tierras cañeras en cooperativa pasaron al cultivo de habichuelas, cacahuètes, arroz, algodón, tubérculos y pastos, y en 1959-62 fueron desmantelados nueve molinos de azúcar, con una capacidad conjunta de molienda de casi el 3 %. Pero otras dos razones que acaso informaran estas acciones pudieron ser: la zafra excepcionalmente grande de 1961 en Cuba —que, unida a la elevada producción de azúcar de Europa occidental, provocó un descenso del precio del azúcar en el mercado mundial— y la falta de oportunidades de exportación para Cuba tras la pérdida del mercado estadounidense. En esta etapa se produjo una sostenida expansión de la flota pesquera cubana: en 1962, 17 navíos de largo alcance soviéticos y de la RDA empezaron a pescar en mares lejanos, mientras que 100 naves de madera organizadas en 1963 pescaban en aguas más próximas a Cuba.

En 1962-63 la porción de inversión en la industria se incrementó acusadamente de 23 a 31,6 %, mientras que la porción correspondiente

a la agricultura se redujo de 29,4 a 24,3 % (JUCEPLAN, *Boletín*, 1966). Una cantidad considerable de inversión interna, junto a préstamos exteriores, se emplearon para adquirir equipos de manufactura de la URSS, Checoslovaquia y la RDA. En 1961 el ministro de Economía, Regino Boti, pronosticó que para 1965 Cuba estaría a la cabeza de América Latina en producción *per capita* de electricidad, acero, cemento, tractores y petróleo refinado. A su vez, el ministro de Industrias, Guevara, CG habló de planes para producir camiones, motores de combustión interna e incluso automóviles (Mesa-Lago, 1971; Ritter, 1974; Pérez-López, 1991). Estos ambiciosos planes de industrialización no se materializaron debido a las siguientes razones: parte de los equipos de manufactura para las nuevas fábricas, importados del bloque socialista, eran obsoletos, ✓ lo cual hacía difícil que los productos de fabricación cubana pudieran competir en el mercado internacional. La falta de técnicos impedía a los cubanos instalar los nuevos equipos en cuanto eran recibidos; por ello, en algunos casos, la maquinaria se amontonaba en los muelles y se oxidaba mientras esperaba a ser puesta en funcionamiento. ↓ Algunas de las nuevas fábricas (por ejemplo, las que producían clavos, tornillos y herramientas) necesitaban materias primas que no se producían en Cuba y habían de ser importadas de los países socialistas, reforzando con ello la dependencia comercial de Cuba. Las prospecciones petrolíferas realizadas por geólogos soviéticos no produjeron resultados satisfactorios; la isla carece de carbón y sus ríos no tienen la fuerza requerida para generar suficiente energía hidroeléctrica, y el abastecimiento de petróleo de la URSS (98 % de las necesidades cubanas) era muy caro, debido a las distancias enormes, y exigía el envío de buques cisterna cada dos días y medio por término medio. La isla tiene un mercado interior muy reducido y casi ninguna oportunidad para exportar artículos manufacturados al hemisferio occidental debido al embargo norteamericano, que hacía difícil la obtención de piezas de recambio para los equipos estadounidenses. La amenaza de Estados Unidos, junto a la subversión cubana en Latinoamérica, obligaron a Cuba a gastar en defensa el 13,3 % del presupuesto de 1962, lo cual restó recursos para el desarrollo. Finalmente, los países menos industrializados del bloque socialista estaban muy absorbidos por sus propios esfuerzos para lograr un desarrollo equilibrado y, por consiguiente, no eran compradores lógicos de los excedentes industriales cubanos.

f. *Sector exterior*

El giro cubano de Estados Unidos a la URSS en cuanto a relaciones comerciales y ayuda económica se completó en este período. Dos acontecimientos de 1962 aceleraron dicha tendencia: la crisis de los misiles, que produjo la interrupción de todos los vuelos norteamericanos a Cuba, y la decisión de la Organización de Estados Americanos (OEA) de expulsar a Cuba, iniciándose con ello su gradual aislamiento del hemisferio occidental.

En 1961 la URSS compró el 51 % de las exportaciones cubanas de azúcar y todos los países socialistas juntos adquirieron el 75 %. Ahora bien, cuando los precios mundiales del azúcar se dispararon en 1963, estas proporciones descendieron a 28 y 59 %, respectivamente, mientras Cuba se beneficiaba de los elevados precios mundiales del azúcar. En 1961-63 Cuba recibió de la Unión Soviética ayuda técnica y nuevos préstamos (54 millones de dólares) para: un puerto y flota pesqueros, la instalación de riegos, la industria del níquel, vivienda y fábricas de abonos. Más de 1.000 técnicos soviéticos empezaron a trabajar en la isla (Mesa-Lago y Gil, 1989). Europa oriental y China ofrecieron relaciones comerciales y ayuda adicionales. Sin embargo, el acuerdo soviético con Estados Unidos de retirar los misiles (sin consultar a los líderes cubanos) provocó la primera escaramuza política entre los dos socios socialistas.

g. *Trabajo y empleo*

El gobierno completó su control sobre el movimiento obrero apartando a los líderes democráticos e instalando a antiguos comunistas en la Confederación de Trabajadores de Cuba (CTC). Una ley sobre organización sindical, promulgada en 1961, establecía entre los objetivos del sindicato el de ayudar a la administración de las empresas públicas en el cumplimiento de los planes de producción y en fomentar la eficiencia. Los nuevos dirigentes sindicales alegaban que, bajo el capitalismo, la principal función del movimiento sindical era luchar por sus demandas laborales, pero que, bajo el socialismo y la dictadura del proletariado, dicha lucha dejaba de tener sentido (porque la administración del Estado y los trabajadores estaban unidos), de ahí el cambio en objetivos sindicales. En 1962 el Ministerio de Trabajo, que en teoría representaba a los obreros, fue facultado para fijar todos los salarios y condiciones de trabajo. En consecuencia, también en la negociación colectiva se sustituyó la finalidad de regular las condiciones de trabajo por la de cumplir los planes de producción y mejorar la productividad. Los dirigentes gu-

bernamentales afirmaron además que las huelgas se habían hecho anacrónicas, dado que era impensable que los trabajadores se declararan en huelga contra sí mismos. En 1961 comenzó un movimiento, dirigido por los sindicatos controlados, que exhortaba a los obreros con salarios altos y beneficios suplementarios a abandonar toda demanda de aumento salarial y renunciar a algunos de los «privilegios» resultantes del carácter estratégico de sus oficios o de la rentabilidad de sus empresas. En 1963 se inició un plan piloto para determinar las cuotas de producción o normas de trabajo y las escalas salariales. Las primeras especificaban el número de artículos de calidad normal que debía producir un trabajador en un tiempo dado, o el período de tiempo que el trabajador debía invertir en producir dicho artículo. Las escalas fijaban salarios uniformes nacionales por la realización del mismo tipo de trabajo, al margen de la rentabilidad de la empresa. Las normas y las escalas eran establecidas por el Ministerio de Trabajo y fueron gradualmente interconectándose: el trabajador debía cumplir totalmente su cuota con objeto de obtener la tasa salarial correspondiente a su escala salarial. Si la cuota se superaba, se pagaba una bonificación (a razón de 0,5 % por cada 1 % de más); a la inversa, si la cuota no se alcanzaba, el salario era reducido proporcionalmente. En 1962 los trabajadores empezaron a ser movilizados por el gobierno y los sindicatos para realizar labores voluntarias (no remuneradas) después de su horario de trabajo, en fines de semana y en vacaciones. La finalidad principal de esto era ayudar en la cosecha del azúcar y otros cultivos que sufrían un déficit de mano de obra (Mesa-Lago y Hernández, 1971).

El empleo público se incrementó desde aproximadamente la mitad de la fuerza de trabajo en 1960 hasta dos terceras partes en 1963 debido al proceso de colectivización en la agricultura y los servicios. Las fincas del Estado proporcionaron trabajo estable durante todo el año a muchos campesinos anteriormente afectados por el desempleo estacional. La mayor parte de los parados encontró empleo en el sector de servicios del Estado, que se duplicó en 1959-64. Muchos se incorporaron a las fuerzas armadas, que alcanzaron el 16 % de la fuerza de trabajo en 1963, y otros fueron contratados en los servicios sociales y la burocracia del Estado. Al parecer, se produjo también un aumento de trabajadores autónomos en servicios personales (como trabajos de reparación, sastrería, peluquería), así como en el floreciente mercado negro. Pero se contrajo el empleo en el comercio, el turismo, los seguros y en agencias de la propiedad inmobiliaria y bufetes legales a consecuencia de la colectivización. Los excedentes laborales acumulados en las ciudades no podían emplearse productivamente en el sector industrial porque la contracción de la antigua industria procedente de Estados Unidos no estaba compensada por

la pequeña expansión de las nuevas industrias adquiridas en los países socialistas. Así, en 1982 Guevara reconoció que ninguna de las industrias básicas adquiridas en el campo socialista funcionarían en 1961-65 y, por tanto, no podían reducir el paro. Además, las nuevas fábricas estaban fuertemente mecanizadas y exigían una cantidad relativamente pequeña de mano de obra. La política de fusionar las fábricas en consolidados (que eliminaba puestos innecesarios) y promocionar la mecanización (en la fabricación de puros, el envasado de azúcar y su carga a granel) también generó excedentes laborales. Sin embargo, esta política no estuvo seguida por despidos masivos porque la mayoría de los obreros sobrantes fueron mantenidos en nómina en calidad de «excedentes», a la espera de ser transferidos a trabajos productivos o de recibir nueva calificación.

La subvención de miles de excedentes a través de las nóminas empresariales debió provocar un descenso de productividad en la industria. Un efecto similar se produjo en la agricultura, donde los agricultores del Estado redujeron su esfuerzo laboral puesto que no temían ya el desempleo, disfrutaban de unos salarios garantizados y carecían de incentivos y controles. Esta disminución del esfuerzo laboral creó un déficit artificial de mano de obra, particularmente acusado en la zafra, anteriormente realizada por los parados estacionales. En un clásico círculo vicioso, los directores de fincas estatales reforzaron el exceso de personal al contratar nuevos empleados (Mesa-Lago y Hernández, 1971; Mesa-Lago, 1972, 1983).

h. Distribución y servicios sociales

Mediante el continuo proceso de colectivización, en esta etapa se redujo aún más la desigualdad en las rentas: los propietarios privados de servicios educativos o sanitarios perdieron sus elevados ingresos, los agricultores medios fueron eliminados y el acopio limitó los ingresos de los pequeños agricultores. Debido a que la mayoría de los medios de producción había pasado a ser propiedad del Estado (salvo el 30 % en la agricultura y el 25 % en el comercio minorista —en su mayoría vendedores ambulantes—), prácticamente todos los ingresos de los cubanos eran fijados y pagados por el gobierno en forma de sueldos y salarios (así como de acopio a los campesinos y de pensiones). La congelación de sueldos, la renuncia a los «privilegios» disfrutados por la «aristocracia laboral» y la introducción de escalas salariales contribuyeron a disminuir las diferencias salariales (reduciendo particularmente las rentas de los niveles superiores). La continua expansión de servicios sociales gratuitos (aunque a ritmo menor en este período) benefició a los grupos de rentas

más bajas. Por último, el racionamiento fue un igualador al garantizar el suministro mínimo de bienes de consumo esenciales a toda la población al margen de sus ingresos.

En este período ocurrieron dos importantes acontecimientos sociales. En 1961 el gobierno inició una campaña nacional para eliminar el analfabetismo, movilizando a miles de estudiantes, sobre todo en el campo. En 1963 la ley de seguridad social completó la unificación y estandarización del sistema (salvo para las fuerzas armadas, que fueron excluidas del proceso), extendió la cobertura de pensiones a toda la fuerza laboral asalariada y creó un sistema nacional de sanidad universal y unificado para la totalidad de la población (Mesa-Lago, 1971, 1983, 1990b; Paulston, 1971).

2. *Resultados. La primera doble crisis: fracasos del Plan Central y de la estrategia de desarrollo*

a. *Crecimiento*

Aunque carecemos de estadísticas, está claro que el crecimiento económico continuó en 1961 impulsado por la segunda mayor cosecha de azúcar de la historia. La zafra se realizó durante los primeros cuatro meses del año cuando el pleno impacto de la colectivización y la reforma administrativa no se había dejado sentir aún. Pero durante los dos años siguientes la situación degeneró rápidamente provocando la primera recesión de la Revolución. La reducción del 25 % del área cultivada con caña de azúcar, la escasez de cortadores de caña profesionales (que se trasladaron a trabajos más fáciles) y la desorganización creada en este sector por la nueva estructura de fincas del Estado se cobraron un precio alto en la producción de azúcar: un descenso del 28 % en 1962 y otro del 21 % en 1963 (esta última es la cosecha más baja de la Revolución). Además, varios productos agrícolas (tabaco, café, habichuelas, tubérculos) sufrieron descensos de producción y, aunque se declaró que el número de cabezas de ganado y aves de corral había aumentado, el de cerdos disminuyó. Según la FAO, la producción agrícola *per capita* de 1963 era 38 puntos porcentuales inferior a la de 1961. (A los resultados negativos de 1963 contribuyeron los devastadores efectos del huracán Flora, que azotó las provincias orientales de Cuba.) Sin embargo, la producción pesquera se incrementó en un 13 % en 1960-63. En la minería la producción de níquel casi recuperó su nivel de 1957, pero decreció la producción de otros minerales y, tras una recuperación en 1962, la producción de petróleo crudo disminuyó acusadamente en 1963. La pro-

ducción de productos industriales fundamentales como la electricidad, los puros, los textiles y la cerveza descendió o permaneció estancada, mientras que la de cemento aumentó y después disminuyó. (Dos índices industriales disponibles dan cifras contradictorias: según uno, el nivel de 1963 era igual al de 1960, mientras que el otro mostró un incremento sustancial.) A este fracaso contribuyeron la falta de piezas de recambio —virtualmente todas las fábricas cubanas seguían siendo de origen estadounidense—, el éxodo de gerentes y técnicos industriales tanto extranjeros como nacionales y la mala planificación y los retrasos en la instalación de las fábricas recién adquiridas. Contrariamente al pronóstico de los dirigentes, en 1963 en Cuba no se fabricaban ni tractores ni camiones ni motores de combustión, y el sueño cubano de ponerse a la cabeza de la producción industrial *per capita* de América Latina se hizo añicos. En los servicios el número de turistas se redujo a la mitad en 1959-60, y se interrumpieron las estadísticas a partir de entonces hasta 1970. Es probable que los crecientes costes militares tuvieran un efecto negativo sobre el crecimiento.

Los datos serios sobre indicadores macroeconómicos de esta etapa son muy escasos. La única cifra de crecimiento económico de este período corresponde a 1963; ésta muestra que el producto social global (PSG) * *per capita* en precios constantes disminuyó un 3,7 % en aquel año. Debido a las restricciones en consumo y servicios sociales, sin embargo, la parte de inversión interior bruta en PSG ascendió, al parecer, del 11,1 al 12,4 % en 1962-63 (no hay datos disponibles para 1961), pero la productividad de la inversión probablemente descendiera debido a la ineficiente asignación y uso de capitales.

b. Inflación

Pese al racionamiento, en 1963 la inflación alcanzó el 10,2 %, posiblemente la segunda tasa más elevada bajo la Revolución (cuadro 2). En 1962 el excedente monetario acumulativo de la población (exceso de dinero en circulación con el cual no se puede comprar prácticamente

* El PSG está basado en el sistema del «producto material» de corte soviético, que difiere del PNB en el sistema de cuentas nacionales usado en las economías de mercado. El PSG excluye el valor de los «servicios no productivos» (servicios sociales, defensa, burocracia) y, en este sentido, es menor que el PNB. Por el contrario, el PSG no utiliza el método del «valor adicional» típico en el cálculo del PNB; el primero frecuentemente es inflado por la doble cuenta en un mismo artículo, lo cual lo hace mayor que el PNB. La conversión del PSG cubano a PNB sólo se ha hecho en el año 1974, aunque existen cifras no corroboradas en otros años.

nada fuera del racionamiento) se aproximó al total de rentas de la población de aquel año, un hecho que afectó negativamente a los incentivos laborales. Los precios del mercado negro eran entre cinco y diez veces superiores a los precios oficiales. Además, la falta de una oferta suficiente de artículos para cumplir las cuotas oficiales de racionamiento para toda la población produjo largas colas frente a las tiendas del Estado. Los bajos precios del acopio se convirtieron en un incentivo para los agricultores privados, que intentaron evitar la venta de sus cosechas al Estado y en gran medida volcaron sus excedentes en el mercado negro. Por último, la rigidez de los precios en las tiendas del Estado impidió la reducción de los precios de productos perecederos.

c. *Diversificación y balanza comercial*

Cuba consiguió reducir su dependencia del azúcar en 1962-63 (debido a un descenso en la producción azucarera), al menos en términos del PSG, pero no en relación a la concentración exportadora que, en realidad, aumentó (cuadros 6 y 13). Además, la disminución en producción y exportación de azúcar creó un cuello de botella en el programa de industrialización. El descenso en producción de las principales exportaciones (azúcar y tabaco) redujo en un 13 % el valor de las exportaciones totales en 1961-63, mientras que el valor de las importaciones aumentó un 27 %. Aunque en 1961 se produjo un reducido excedente comercial, en 1961 apareció un pequeño déficit comercial, y el déficit acumulativo de 1962-63 superó los 500 millones de pesos (el cambio peso-dólar seguía haciéndose a la par en esta etapa). El volumen total de transacciones comerciales de Cuba con el Consejo de Asistencia Mutua Económica (COMECON: mercado común de URSS-Europa oriental) alcanzó el 67 % en 1962 y casi el 50 con la URSS; el 92 % del déficit comercial cubano de 1963 era con la URSS (cuadros 11 y 12). (En 1963 se produjo un auge en el precio mundial del azúcar —en buena medida a causa de la mala cosecha cubana y de la contracción en exportaciones— mientras que los precios soviéticos permanecieron sin cambios, con el resultado de una razón de 2,3 a 1 contraria a Cuba.) Los soviéticos concedieron créditos para financiar el déficit comercial cubano, pero esta ayuda incrementó rápidamente la deuda exterior de la isla. La dependencia del petróleo soviético no se alteró: se produjeron indicios de un vigoroso aumento de la producción doméstica en 1962, pero éste sólo supuso el 0,8 % de la oferta total, y la producción de petróleo nacional decayó en 1963 (cuadro 15). Estas limitaciones externas, unidas a los problemas internos ya expuestos, hicieron patente que la estrategia de desarrollo a

base de una industrialización rápida era inviable. Cuba logró la plena independencia económica de Estados Unidos (y sobrevivió al embargo norteamericano, así como al creciente aislamiento del hemisferio occidental) para hacerse dependiente de la URSS. Es cierto que ésta no tenía inversiones directas en Cuba y le proporcionaba una ayuda generosa, pero, con todo, la isla no podía sobrevivir sin la vital fuente soviética de petróleo, créditos, armas y un millar de importaciones más.

d. *Desempleo*

Para 1963 el desempleo declarado en Cuba probablemente había sido reducido a la mitad de su tasa prerrevolucionaria, pero ello se logró mediante la transformación de la mayor parte del desempleo declarado en subempleo. Dicho cambio significó la solución a corto plazo del problema, pero también extendió los costes económicos entre toda la población y tuvo un efecto negativo en la productividad laboral y el crecimiento económico. Los agricultores en las fincas del Estado disfrutaban de empleo y salarios garantizados durante todo el año, pero su productividad era la mitad de la de los agricultores privados. En 1963 los agricultores de las fincas estatales sólo trabajaban una media de 4,5 a 5 horas diarias, pero se les pagaban 8. Las fusiones y cierres industriales tendrían que haber generado desempleo, pero los trabajadores excedentes permanecieron en la nómina de las empresas. El sector terciario sufrió una hipertrofia con la expansión de la burocracia, los servicios sociales, las fuerzas armadas y la seguridad interior. (La única cifra disponible de productividad laboral muestra estancamiento en 1963.) En 1962 se produjo un déficit artificial de mano de obra en los principales cultivos, particularmente el azúcar. Para resolverlo, el gobierno recurrió a la movilización de trabajadores voluntarios, intentando transferir al campo el excedente laboral urbano. En muchos casos, sin embargo, el coste de movilizar a voluntarios inexpertos fue más elevado que el valor del producto creado por ellos. La esperanza inicial de emplear productivamente al sector laboral urbano excedente en las nuevas industrias se esfumó en 1963.

e. *Igualdad*

Carecemos de datos oficiales sobre la distribución de la renta antes y con la Revolución, y sólo tenemos unas estimaciones muy especulativas elaboradas por estudiosos occidentales (algunas de sus cifras se citan en

las publicaciones cubanas sin añadir dato nuevo alguno). Dos de estas estimaciones indican una sustancial redistribución de la renta en los cuatro primeros años de la Revolución, pero con algunas diferencias importantes: según una estimación, basada en las rentas familiares de 1958 y 1962, en torno al 8 % de las rentas del quintil más rico era transferido en su mayor parte, en proporción similar, al quintil más pobre y siguiente a éste, mientras que las rentas del quintil medio sólo se incrementaban ligeramente; la otra estimación, basada en las rentas personales de 1953 y 1962, mostraba que un 16,5 % de él era transferido desde el quintil más rico, pero la parte menor (4,1 %) recaía en los quintiles más bajos, y una proporción mayor en los quintiles segundo y tercero (6,6 y 5,2 %, respectivamente; véase Brundenius, 1979). Cualesquiera que sean los defectos de otras estimaciones (y ya sea que el grupo de renta media permaneció casi inalterado o se benefició considerablemente), el análisis de la anterior sección no deja duda en cuanto a que se produjo una impresionante redistribución de la renta en los primeros cuatro años de la Revolución y que este proceso se continuó en la segunda etapa, aunque posiblemente a ritmo más lento que en la etapa primera. Por otra parte, los altos precios del mercado negro (que reflejaban de modo realista la oferta y la demanda) eran discriminatorios respecto a los grupos de renta más baja que no podían comprar estos artículos.

f. *Indicadores sociales*

Los indicadores sociales continuaron su expansión en esta etapa pero a ritmo mucho más lento (como muestran las proporciones decrecientes de dicho sector en el presupuesto nacional y la inversión) debido a la recesión económica y al esfuerzo para incrementar la inversión. En educación el gobierno sostenía que la tasa de analfabetismo (23,6 % en 1953) se había reducido a 3,9 % en 1961 (cuadro 23) a consecuencia de la campaña de alfabetización, pero el censo de 1970 demostró más tarde que dicha tasa era tres veces más alta. La matriculación en centros educativos siguió aumentando en el nivel primario y, en menor medida, en el secundario. La nacionalización de los servicios educativos en 1961 proporcionó un salto estadístico a la matriculación pública, ya que la antigua matriculación privada (no registrada previamente) empezó a registrarse de golpe como matriculación pública. Más de la mitad de los profesores universitarios se marcharon, lesionando con ello la calidad de la enseñanza superior. No obstante las mejoras en sanidad, la mayoría de los indicadores mostraban un deterioro en 1960-62: la tasa general de mortalidad ascendió de 6,1 a 7,1 ‰ y la mortalidad infantil de 35,9 a

41,5 ‰; las tasas de las enfermedades más contagiosas también se elevaron en esta etapa. El éxodo de aproximadamente la mitad de los médicos, las enormes movilizaciones de masas y la escasez de medicinas eran parcialmente responsables de estos fenómenos. Pero es posible que también contribuyera a ello una mejor contabilización estadística de muertes y enfermedades. La tasa de natalidad ascendió sostenidamente y alcanzó un máximo de 35,1 ‰ en 1963; ahora bien, el incremento en mortalidad infantil y la gigantesca emigración de 1960-62 (próxima a los 200.000) redujeron la tasa de crecimiento demográfico. Sin embargo, la interrupción de vuelos estadounidenses a Cuba tras la crisis de los misiles de 1962 redujo acusadamente la emigración en 1963 y dio origen en aquel año a la tasa de crecimiento demográfico más alta bajo la Revolución (cuadro 21).

g. *Resumen*

En esta etapa el descenso en rentas y exportaciones azucareras provocó una grave crisis económica. Se concedió prioridad a la diversificación, pero sin apreciarse incrementos significativos en la producción no azucarera, y con el resultado negativo de unos déficit comerciales en aumento y unas tasas de crecimiento en disminución. La inflación aumentó, y aunque los coeficientes de inversión se elevaron algo, parte de esta ganancia se perdió debido a la deficiente productividad de capital y trabajo. La plena independencia económica de Estados Unidos se logró al precio de ampliar la dependencia de la URSS. El desempleo declarado se redujo significativamente y se mantuvo el énfasis en la igualdad y la distribución, pero estos logros tuvieron un efecto adverso en la productividad y el crecimiento. Por último, la Revolución se enfrentó al fracaso en dos frentes: en la estrategia de desarrollo basada en una industrialización rápida con diversificación agrícola y en el modelo de planificación centralizada. Esta situación originó una nueva etapa de vivo debate económico.

4. Debate y ensayo de modelos socialistas alternativos: 1964-66

sección imp. y nótese
las diferencias

Hacia 1962 se inició un debate entre los líderes cubanos sobre modelos socialistas alternativos de organización económica. El doble fracaso de 1963 suscitó serias dudas sobre la cuestión de si el modelo soviético era adecuado para una economía insular dependiente. En primer lugar se decidió prorrogar la industrialización pesada y volver al azúcar como motor del desarrollo. Este cambio en cuanto al desarrollo estuvo acompañado en esta etapa por un animado debate ideológico y económico en torno a dos modelos alternativos de organización económica: el guevarismo y el libermanismo. (2)

Ernesto Che Guevara y un grupo de adeptos incondicionales, influidos indirectamente por el Comunismo de Guerra (ensayado en la URSS en 1918-20) y por el Gran Salto Adelante maoísta (aplicado en China en 1958-60), suscribían una línea de pensamiento idealista contraria a la doctrina soviética convencional. Guevara creía que las «condiciones subjetivas» (ideas, conciencia, voluntad, todas ellas pertenecientes a la superestructura en términos marxistas) podían influir decisivamente en las «condiciones objetivas», es decir, la base material, las fuerzas de producción, la estructura que en la interpretación convencional del marxismo determina la superestructura. Guevara y otros sostenían que un logrado desarrollo de la conciencia previo al desarrollo de base material podía permitir al país saltarse la etapa socialista de transición del capitalismo al comunismo, o construir socialismo y comunismo simultáneamente. ✓

Se propusieron dos conjuntos de acciones (en los ámbitos material e ideal) para conseguir los fines guevaristas. En el ámbito material el objetivo esencial era la eliminación total del mercado o de la ley de la oferta y la demanda. Ello se lograría con las siguientes medidas: plena colectivización de todos los medios de producción, planificación fuertemente centralizada con las empresas funcionando como oficinas gubernamentales, financiación presupuestaria, eliminación de relaciones mercantiles entre empresas, gradual erradicación del dinero, reducción de los incentivos materiales (que debían ser sobre todo colectivos) y asignación física y fijación centralizada del precio de los bienes de consumo para reemplazar a la ley de la oferta y la demanda. En el ámbito ideal los incentivos económicos para garantizar la productividad, calidad y eficiencia de la inversión y la reducción de costes debían ser en gran medida sustituidos por una concienciación intensificada de gerentes y obreros. Así pues, el modelo de Guevara, para tener éxito, debía crear un Hombre Nuevo que, contrariamente al hombre económico, fuera generoso, frugal, igualitario, que no estuviera motivado por la codicia sino por el patriotismo y la solidaridad, que entregara sus máximos esfuerzos laborales a la colectividad y recibiera de ésta lo esencial para satisfacer sus necesidades (los guevaristas eran partidarios de un movimiento rápido hacia la distribución de acuerdo con las necesidades). Este ser humano ideal sería producto de la concienciación a través de la educación, la movilización, el trabajo voluntario no remunerado, los incentivos morales y la gradual ampliación de servicios sociales gratuitos suministrados por el Estado.

- ② Frente a los guevaristas había un grupo moderado y pragmático dirigido por el economista Carlos Rafael Rodríguez (entonces director del INRA) y compuesto en su mayoría por miembros del partido comunista prerrevolucionario y prosoviético. Este grupo estaba directamente influido por el «socialismo de mercado» —la aplicación de determinados mecanismos de mercado dentro del marco de una economía socialista—. Este modelo había influido tanto en la reforma económica de la Europa oriental como en el tímido programa de reforma económica del economista ruso E. G. Liberman. Krushev había experimentado con dicho programa en la URSS a principios de la década de 1960 y había sido moderadamente aplicado por Brezhnev-Kosigin en 1965, pero sin éxito. Con el fin de reanimar la apática economía soviética, el grupo de Rodríguez, adhiriéndose a la interpretación convencional del marxismo, sostenía que las condiciones subjetivas no pueden desatender a las condiciones objetivas, que un país socialista no puede ir más allá de lo que su estructura le permite, que hay que desarrollar primero la base material y ésta, a su vez, intensificará la concienciación y que es imposible

saltarse la etapa de transición —socialista— entre capitalismo y pleno comunismo.

En esta necesaria etapa de transición habrá rasgos del pasado capitalismo y algunas características del futuro comunismo. En esta fase no sería posible eliminar la ley de la oferta y la demanda y, por tanto, habría que utilizar algunos mecanismos de mercado (por ejemplo, dinero, beneficios, intereses y renta diferencial). El grupo de Rodríguez no era partidario de extender la colectivización y, aunque apoyaba la planificación central, intentaba mejorar la eficiencia empleando instrumentos de mercado selectos. Las empresas locales tendrían mucha más autonomía que en el planteamiento guevarista a la hora de contratar y despedir a la mano de obra, de tomar decisiones de inversión y demás y podrían comprar y vender entre sí utilizando el dinero como medio de intercambio. Este grupo era contrario a la financiación presupuestaria y abogaba, por el contrario, por la «autofinanciación». Para fomentar la productividad laboral, el grupo proponía incentivos materiales en lugar de morales en esta etapa de transición. Creía también que desatender a la ley de la oferta y la demanda y reducir los incentivos materiales tendría efectos nocivos sobre la producción y el desarrollo de la base material. Por consiguiente, abogaban por la distribución de acuerdo con el trabajo y estaban dispuestos a aceptar cierto grado de desigualdad (Mesa-Lago, 1971).

1. *Políticas. Guevaristas contra pragmatistas y la vuelta al azúcar*

a. *Propiedad*

Como ya se ha observado, los guevaristas propugnaban la plena colectivización de los medios de producción, mientras los pragmatistas eran reacios a seguir expandiendo el sector del Estado, particularmente en la pequeña agricultura, el comercio al por menor y los servicios personales. Los partidarios extranjeros de los pragmatistas, entre ellos Dumont y Bettelheim, eran contrarios a la excesiva colectivización y favorecían las empresas y las cooperativas privadas (en la pequeña industria y agricultura), en lugar de las gigantescas fincas estatales y los enormes consolidados industriales. Bettelheim afirmaba que la economía cubana adolecía de una enfermedad fundamental, porque las relaciones productivas no estaban tan desarrolladas como las fuerzas productivas (incluida la propiedad de los medios de producción) y, por ello, el Estado carecía de auténtico control económico; para corregir este problema, Cuba debía

adoptar aquellas formas de propiedad adecuadas a su nivel de desarrollo. Ya fuera porque los razonamientos de los pragmatistas eran convincentes o simplemente porque el gobierno necesitaba tiempo para digerir todos los medios de producción colectivizados en las dos etapas previas, no se tomaron en este período nuevas medidas de nacionalización (Mesa-Lago, 1971, 1983).

b. *Planificación*

Ambas partes del debate propugnaban la planificación central y el uso de las matemáticas y la cibernética, pero tenían concepciones distintas. Guevara concebía el plan ideal como una maquinaria de relojería perfecta, fuertemente centralizada, haciéndose las asignaciones físicamente, con todas las empresas y fincas agrícolas funcionando como sucursales del gobierno central y los indicadores directrices basados en la producción bruta. Sus oponentes defendían el uso selectivo de instrumentos de mercado para mejorar la eficiencia de la planificación; abogaban también por una cierta descentralización de las decisiones económicas a través de una mayor autoridad de los administradores de empresa, la competencia entre empresas, la formación de precios de mercado en los artículos no estratégicos y el uso de costes y beneficios como mejores indicadores de los resultados de la gestión. Varias de estas medidas fueron apoyadas por Dumont, que también recomendó el uso de las rentas diferenciales en las tierras del Estado, así como medidas monetarias y fiscales para promover el equilibrio interior.

Ambos modelos funcionaron al mismo tiempo en distintos sectores de la economía cubana, aunque el modelo libermanista estaba adulterado con características del modelo guevarista. El modelo libermanista fue ensayado en un tercio de las empresas cubanas, en su mayoría en la agricultura y el comercio interior y exterior; el modelo guevarista operaba en dos tercios del sector público, primordialmente la industria. El modelo centralista de Guevara podía funcionar en el sector muy concentrado y proporcionalmente pequeño de la industria, en el que la mano de obra es especializada y el control de su producción es relativamente fácil. (Pero en la agricultura hay factores naturales imposibles de pronosticar y controlar, la producción está dispersa y en manos de cientos de miles de trabajadores y campesinos no especializados, y el control de esta producción es mucho más difícil. La economía cubana es esencialmente agraria y depende mucho del comercio exterior. Los mecanismos de mercado parecían más apropiados para la agricultura y el comercio exterior y, en este último sector, los funcionarios cubanos se enfrentaban

al mundo exterior real de unos precios de mercado determinados internacionalmente, una dura competencia basada en los costes y la necesidad de divisas. Cada uno de estos dos grupos controlaba además una institución financiera decisiva afín a su modelo respectivo: los guevaristas tenían el Ministerio de Hacienda, que estaba a cargo del presupuesto y las asignaciones de capital; y el grupo Rodríguez tenía el Banco Nacional, tradicional expendedor de préstamos a devolver con intereses.

En la práctica los planes anuales no se aplicaron aparentemente en esta etapa; el plan de 1962-65 se suspendió y no se debatió, y menos aún se elaboró el plan a medio plazo de 1966-70. En su lugar empezaron a proliferar planes sectoriales para el azúcar, la ganadería, la electricidad y otros (véanse más detalles en la etapa siguiente). La explicación oficial fue que, debido a la falta de cuadros y datos, era mejor concentrar todos los recursos y esfuerzos en planes sectoriales y prácticos, en lugar de abstracciones macroeconómicas. Careciendo de un aparato eficaz de planificación central, las decisiones económicas, clave las tomaba la dirección política. En 1965 el entonces presidente, Dorticós, se puso al frente de la JUCEPLAN, y el primer ministro, Castro, asumió el control del INRA; a finales de aquel año prácticamente todo el poder económico estaba concentrado en el despacho de Castro. El proceso de fusión de empresas continuó en esta fase; así, en 1966 en torno al 86 % de la producción industrial estaba generado por 26 empresas y el restante 14 % por otras 30 empresas. Se produjeron varios intentos de descentralización, tanto en la industria como en la agricultura, pero con escasas consecuencias prácticas. La división de la economía en dos sectores con modelos organizativos divergentes, la decadencia de la planificación central y la continuada concentración empresarial dejaron la responsabilidad de tomar decisiones en manos de un pequeño grupo en la cúspide de poder (Mesa-Lago y Zepherin, 1971; Bernardo, 1971).

c. *Financiación, estabilidad, precios*

Cada uno de los dos sistemas divergentes de financiación se convirtió en el centro de un debate y en columna vertebral de los respectivos modelos en contienda. Los guevaristas utilizaron la financiación presu-^①puestaria («sistema presupuestario») en el 69 % del total de empresas del país, en su mayoría industrias. Bajo este sistema, toda la actividad económica de la nación se concibe como una sola e inmensa empresa estatal de la cual las fábricas, fincas agrícolas y agencias de servicios son meras sucursales. Las transacciones entre empresas no pueden adoptar la forma de compras y ventas (puesto que toda la propiedad pertenece

al Estado), sino que se llevan a cabo en forma de transferencias contables y no se permite la competencia entre empresas. El sistema está controlado por el Ministerio de Hacienda a través del presupuesto nacional, que es el principal instrumento para la asignación de fondos. Las empresas no poseen ni propiedades ni capital y reciben todos los fondos para sus gastos del presupuesto del Estado en forma de donaciones no reembolsables y libres de interés. Todos los excedentes empresariales (beneficios) van automáticamente al presupuesto del Estado y si hay déficit éste es cancelado y absorbido por el presupuesto. No existe, por consiguiente, relación entre rentas y gastos empresariales, siendo ambas cosas independientes; los gastos pueden exceder los límites establecidos mientras que los beneficios pueden ser inferiores a las previsiones. Los planificadores deciden cómo invertir los excedentes generados por la empresa al margen de su rentabilidad, pero tomando en consideración las necesidades nacionales. Los gerentes de empresas tienen que seguir las órdenes del centro, minuciosamente especificadas, y su actuación (y la de los trabajadores) se evalúa por el cumplimiento de las metas de producción y las normas laborales, sin tomar en consideración la rentabilidad de la empresa. El dinero no se emplea como medio para estimar la rentabilidad, sino solamente como unidad para fines de contabilidad: para reducir los elementos divergentes (salarios, insumos) a un común denominador. No se utiliza ningún mecanismo de mercado para conseguir equilibrio entre oferta y demanda, de ahí que esta labor haya de realizarse mediante calibración y control físicos. No existe un conjunto de palancas e incentivos económicos para incrementar la producción, mejorar la calidad, cumplir programas de entrega, reducir costes, utilizar las inversiones eficientemente o hacer innovaciones. El único móvil interno para lograr estos objetivos es el grado de concienciación de gerentes y trabajadores y la respuesta a estímulos morales (no materiales). Guevara creía que un sistema centralizado e idealista como éste podía funcionar en Cuba debido a las pequeñas dimensiones del país y a su buen sistema de comunicaciones, unido a las matemáticas y las técnicas computadoras, así como a la estimulación moral (Bernardo, 1971).

Los libermanistas utilizaron la autofinanciación (equivalente al *khozraschet* soviético) en aproximadamente el 31 % de las empresas cubanas, sobre todo en la agricultura y el comercio exterior e interior. Este sistema permite el desarrollo de tantas empresas como sean necesarias y con toda la autonomía posible; las transacciones y la competencia entre empresas estatales están permitidas. El sistema está bajo control del Banco Nacional y las empresas reciben créditos de la red bancaria en forma de préstamos reembolsables con interés. Las empresas tienen que cubrir sus costes con sus propios ingresos y ser rentables o enfrentarse

al cierre. Parte de los beneficios empresariales se apartan para su distribución interna (como forma de incentivo), y parte se dedica a la inversión descentralizada, propuesta por la empresa y aprobada por el aparato de planificación central. Los gerentes están autorizados para determinar las especificaciones últimas de las órdenes que reciben del centro, y la evaluación de la actuación gestora se hace en gran medida basándose en índices monetario-mercantiles, como son los costes y beneficios. El uso parcial de dinero facilita la transmisión de información en diversos niveles. Los incentivos materiales se emplean para motivar a gerentes y trabajadores, ligando su actuación a los beneficios de la empresa mediante bonificaciones, primas o concesión de servicios empresariales (clubs sociales, bibliotecas, guarderías). Según algunos observadores, Cuba carecía de las condiciones necesarias para desarrollar la autofinanciación/de ahí que este sistema no tuviera posibilidad de madurar y se convirtiera, en la práctica, en financiación presupuestaria encubierta: había desconexión entre ingresos y gastos, los déficit se cubrían con transferencias del presupuesto o préstamos bancarios que no se devolvían, el gobierno se llevaba todos los fondos de inversión, y el sistema de incentivos materiales no estaba realmente desarrollado (Bernardo, 1971).

d. *Estrategia de desarrollo*

El aplazamiento del programa de industrialización pesada obligó a Cuba a volver al azúcar como fuente más prometedora de exportaciones y divisas. (No se produjo deliberación pública alguna sobre este importante cambio porque las dos partes del debate se concentraron en el modelo de organización económica.) En vista de la anterior postura contraria a la dependencia del azúcar, los líderes cubanos justificaron esta nueva estrategia con la siguiente lógica: la vuelta al azúcar iba a ser transitoria y la producción azucarera se incrementaría sostenidamente en la segunda mitad de los años sesenta, permitiendo a Cuba la consecución de tres objetivos decisivos en los años setenta: i) proporcionar recursos para retomar el esfuerzo industrializador (y, por tanto, diversificar la producción sobre terreno más firme); ii) reducir el déficit comercial y devolver la deuda exterior contraída con los países socialistas y lograr divisas para importar de Occidente artículos necesarios (diversificando con ello los socios comerciales), y iii) incrementar significativamente el nivel de vida de la población. Debido a la excelencia de sus suelos y su clima sería mucho más barato producir caña de azúcar en Cuba que cultivar remolacha azucarera en la URSS, la RDA o Checoslovaquia. En estos países, y gracias a los avances tecnológicos y el personal espe-

cializado, la producción de maquinaria y equipos era más económica que en Cuba. Fundándose en la teoría de las ventajas comparativas, tanto Cuba como sus socios se beneficiarían mutuamente a través de la especialización y el comercio. Además, la solidaridad socialista internacional impediría que la URSS y otros países desarrollados del COMECON sacaran provecho de su posición privilegiada en su comercio con Cuba, como había hecho Estados Unidos en el pasado: los países socialistas pagarían precios justos por el azúcar cubano y suministrarían combustibles, maquinaria y manufacturas de buena calidad a precios razonables. Este cambio en la estrategia de desarrollo fue anunciada públicamente por Castro a mediados de 1963, a la vuelta de su primer viaje a Moscú, y fue más concretamente definido en 1964, a su regreso del segundo viaje.

Como se ha dicho, el plan sectorial más importante era el Plan Prospectivo Azucarero (1965-70), elaborado para la industria azucarera con una inversión prevista de más de mil millones de pesos. En el plan figuraban: una ampliación del 50 % de la tierra cañera, a ser plantada con una variedad de caña de alto rendimiento y distinta maduración; la casi total mecanización de la zafra para sostener la escasez de mano de obra; la irrigación y abono de los campos de caña con objeto de aumentar su rendimiento, y la expansión de la capacidad de molienda mediante la modernización de los molinos de azúcar existentes y la construcción de tres nuevos molinos. El plan preveía el incremento gradual de la producción de azúcar de seis millones de toneladas en 1965 a diez millones en 1970.

Un segundo objetivo del programa de desarrollo era la ampliación de instalaciones agrícolas: la expansión de la tierra cultivada e irrigada, la mecanización y el uso de fertilizantes en la agricultura. Una tercera meta del programa era el desarrollo de la ganadería mediante inseminación artificial y de la pesca mediante la ampliación de la flota pesquera. Un cuarto objetivo era aumentar la producción de electricidad, níquel y cemento (estos planes se analizan en detalle en la siguiente etapa). El porcentaje de la agricultura en la inversión pública ascendió de 24,3 a 40,5 % en 1963-65, mientras que la porción industrial descendió de 31,6 a 18,1 % (JUCEPLAN, *Boletín*, 1966).

Según el nuevo programa de desarrollo, el incremento en producción de azúcar y productos agrícolas en general resultaría en un acusado aumento de las exportaciones, con la consiguiente mejoría de la balanza de pagos y expansión de la capacidad importadora del país. Ello permitiría la adquisición de fábricas de abonos, equipos de riego y maquinaria agrícola (por ejemplo, tractores, cargadores); de toros sementales y equipos de inseminación artificial; de barcos pesqueros (en 1964 fue botada una nueva flota pesquera); de maquinaria para la extracción de minera-

les, incluido el petróleo, y de plantas eléctricas y de cemento. En suma, Cuba intentaba aplicar la estrategia del desarrollo económico desequilibrado, centrando todos los esfuerzos de la nación en torno a la producción azucarera, con la esperanza de que la expansión de este sector generase un desarrollo general de la agricultura y sectores relacionados de la industria (Mesa-Lago, 1971, 1981; Ritter, 1974; Brunner, 1977).

Aunque la asignación del presupuesto del Estado a defensa y seguridad interior descendió del 13,3 al 8,4 % en 1962-65 (cuadro 6), seguía dedicándose una parte desproporcionadamente elevada a actividades militares (en parte a consecuencia de la amenaza estadounidense, en parte debido a las actividades subversivas cubanas en el exterior), restando estos recursos al desarrollo.

e. Sector exterior

Las dos partes del debate adoptaron posturas diferentes respecto al comercio exterior. Los guevaristas eran fuertemente partidarios de un monopolio ejercido por el correspondiente ministerio central, mientras que sus contrarios proponían mayor libertad de las empresas para comerciar de forma directa con socios extranjeros, aunque bajo supervisión central.

En 1963-64 subieron los precios del azúcar en el mercado mundial, en buena medida debido al descenso en producción cubana de caña de azúcar en dicho período. En aquel momento Cuba contaba con un producto valioso (el azúcar) para comerciar con las economías de mercado y, en consecuencia, disminuyó el comercio con los países socialistas. Este importante cambio de socios comerciales puso en cuestión la hipótesis de la nueva estrategia de desarrollo según la cual el comercio con los países socialistas era siempre más provechoso que con los países capitalistas. Parcialmente para corregir esta situación y ayudar a Cuba en su nueva estrategia, la URSS firmó un acuerdo sexenal comercial y económico (1965-70) por el cual se comprometía a aumentar las importaciones anuales de azúcar cubano de 2 a 5 millones de toneladas en dicho período (adquiriendo por tanto la mayor parte del incremento previsto de la producción cubana), por un total de 24 millones de toneladas a 6,11 centavos la libra, un aumento de casi el 50 % respecto al precio anterior. (Las adquisiciones chinas de azúcar cubano también ascendieron en este momento.) Además, la URSS otorgó ayuda técnica a Cuba por valor de 138 millones de dólares para expandir y modernizar la industria azucarera y, posteriormente, otros 46 millones de dólares para el mismo fin, así como para prospecciones geológicas. Por último, la URSS y otros

países del COMECON prometieron suministrar a Cuba la mayor parte de las importaciones necesarias para aplicar esta nueva política.

① En 1964 la OEA acordó la imposición de un embargo colectivo a Cuba que fue aplicado por todos sus miembros, salvo México. Por ello el comercio general con las economías de mercado disminuyó, tanto por esta razón como por la posterior caída del precio mundial del azúcar y el aumento de los precios subvencionados soviéticos. El comercio cubano con las economías de mercado se concentró en Europa occidental y, en menor grado, en Canadá y Japón (Mesa-Lago, 1971, 1978, 1983; Mesa-Lago y Gil, 1989).

f. *Trabajo y empleo*

Una nueva ley de justicia laboral, vigente desde 1965, omitió el derecho a la huelga, introdujo sanciones contra la violación de la disciplina laboral y autorizó a los agentes de empresa a imponer directamente estas sanciones. El sistema de normas de trabajo y escalas salariales abarcó prácticamente a toda la economía a fines de 1965 y comienzos de 1966, aunque su aplicación era débil en la agricultura.

El desempleo declarado siguió siendo abordado con políticas similares en esta etapa, aunque surgió una nueva preocupación por la productividad laboral. El aplazamiento del plan de industrialización eliminó la esperanza de poder emplear productivamente al excedente laboral urbano en el sector industrial. Por otra parte, la vuelta al azúcar y la agricultura reforzó la demanda de mano de obra en el campo. Los líderes cubanos se vieron ante un excedente de mano de obra en las zonas urbanas (compuesto por los parados, los trabajadores subvencionados despedidos de la industria y una burocracia excesiva en los servicios), junto a un déficit artificial de mano de obra en el campo. Así pues, en 1964 se inició un enérgico esfuerzo para corregir el desequilibrio de mano de obra reduciendo la migración del campo a la ciudad, calibrando el máximo de fuerza laboral que podía emplearse eficientemente, despidiendo a los empleados superfluos y transfiriendo el excedente laboral urbano al campo.

El monopolio estatal sobre el empleo fue la clave para el control migratorio. Las medidas empleadas fueron principalmente tres: emisión de una tarjeta de identidad laboral obligatoria indispensable para solicitar trabajo, seguido posteriormente por una cartilla laboral con el expediente completo de las actividades del trabajador; el requisito de una autorización del Ministerio de Trabajo para cualquier transferencia de empleo, y la restricción de las cartillas de racionamiento a un lugar es-

pecífico, limitando con ello la movilidad laboral. Se dieron también determinados incentivos al campo en forma de mejores viviendas, escuelas y hospitales. La eficacia de estas medidas se advierte en una menor tasa de crecimiento demográfico en la ciudad de La Habana. Aunque en 1960-61 La Habana tuvo una tasa media de crecimiento del 4,4 %, esta proporción decreció a 2,1 en 1964, 1,5 en 1965 y 0,9 en 1966.

Las verdaderas necesidades de mano de obra iban a ser calculadas por las normas laborales, ampliadas en 1964-65. Se estimó entonces que un 2,4 % de la fuerza de trabajo (unos 60.000 trabajadores) era innecesaria. Las protestas en algunas fábricas muy perjudicadas por los despidos suscitaron una respuesta del ministro de Trabajo, según el cual era preciso prescindir de la mano de obra excedente porque, dado que las fábricas pertenecían a los obreros, había que colocarlos donde más falta hicieran.

La tarea de reducir el número de puestos administrativos fue confiada a unas Comisiones para la Lucha Contra el Burocratismo establecidas en todo el país desde 1965, especialmente en La Habana. Los obreros despedidos eran enviados a una «reserva laboral» y sus sueldos les eran pagados hasta que podían recibir nueva formación y ser transferidos a otros puestos (una política similar a la de los «excedentes» de 1961-63). Se calculó que cerca del 1 % de la fuerza laboral (22.000 trabajadores) quedarían inactivos y serían despedidos, la mitad en La Habana; sin embargo, sólo un tercio volvió a ser empleado (la mayoría de ellos trasladados de un puesto burocrático a otro) y el resto hubo de esperar o estudiar mientras el Estado seguía pagándoles.

La transferencia al campo de una parte del excedente urbano se intentó empleando tres medidas: la introducción del servicio militar obligatorio en 1964, que reclutaba un promedio anual de 100.000 jóvenes (de 16 a 20 años, retrasando, por tanto, su incorporación al mercado laboral), empleando a la mayoría en trabajos agrícolas durante el servicio militar de tres años; la organización de brigadas de trabajo integradas por unos 50.000 jóvenes reclutados en puestos no productivos, que firmaban contratos de tres años para trabajar en la agricultura, y un aumento en la movilización del trabajo voluntario (en su mayoría trabajadores urbanos en puestos improductivos) para la zafra y otras cosechas (Mesa-Lago y Hernández, 1971; Mesa-Lago, 1972).

g. Distribución y servicios sociales

Los guevaristas propugnaban un avance sostenido hacia la distribución de acuerdo con las necesidades mediante una reducción gradual de

«salario monetario» y de los diferenciales salariales extremos y una expansión del «salario social», es decir, servicios sociales gratuitamente suministrados por el Estado a la población. Este programa de acción contenía fuertes connotaciones igualitaristas y la convicción de que un cambio de valores humanos contribuiría a lograr una rápida transformación del anterior hombre económico en un altruista Hombre Nuevo. Los incentivos no materiales serían gradualmente sustituidos por incentivos morales; éstos pueden dividirse en individuales (por ejemplo, una medalla al obrero) y colectivos (una bandera a los obreros de una fábrica), positivos (la concesión de una medalla a un obrero o una bandera a la fábrica, ganados en la «emulación socialista») y negativos (enumerar públicamente a los peores obreros de la empresa).

Por el contrario, sus contrincantes creían que en el período de transición había que hacer la distribución de acuerdo con el trabajo y, por consiguiente, aceptaban cierto grado de desigualdad. Ellos defendían los incentivos materiales: individuales (por ejemplo, una bonificación por exceder las normas de trabajo) y colectivos (una participación en los beneficios de la empresa), positivos (como en los dos anteriores ejemplos) o negativos (una reducción salarial proporcional a la norma laboral no cumplida). Los libermanistas eran cautos en cuanto a una mayor ampliación de servicios sociales gratuitos y algunos de sus partidarios proponían unas cargas moderadas al usuario para reducir el derroche y los costes de los servicios sociales. Hemos observado, no obstante, que nunca se aplicó un sistema pleno de incentivos materiales (particularmente la participación en los beneficios).

Ambas partes propugnaban las normas de trabajo y las escalas salariales (posiblemente con menor entusiasmo por parte de los guevaristas) y la puesta en práctica de este sistema contribuyó a una nueva disminución de la desigualdad. En 1965 la razón del diferencial salarial extremo entre los sueldos más altos y los más bajos de la escala —un peón agrícola no especializado ganaba 70 pesos mensuales y un ministro gubernamental 700— era de 10 a 1, aunque otros estudiosos citan 4,3 a 1 (Mesa-Lago, 1983; Zimbalist y Brundenius, 1989). Ahora bien, cuando el antiguo sueldo recibido por un trabajador era superior al de la correspondiente nueva escala salarial, el anterior no se reducía sino que se mantenía igual, denominándolo «salario histórico»: en 1965 un 70 % de la mano de obra no agrícola recibía esta forma de pago. En la competencia por los obreros más especializados las empresas encubrían los pagos que superaban la debida escala salarial en forma de salario histórico. Los trabajadores que rendían bien o prestaban un esfuerzo mayor eran premiados con bonificaciones de producción y pago de horas extraordinarias. Los agricultores privados aumentaron sus ingresos a con-

secuencia de un ligero aumento en los precios del acopio en la agricultura. La ampliación del número de artículos racionados era un igualador, pero los precios en auge del creciente mercado negro tenían el efecto contrario. Finalmente, la parte del presupuesto dedicada a servicios sociales quedó estancada en este período, mientras que la parte de la inversión asignada a dichos servicios descendió aún más, de 25,4 a 21,3 % en 1963-65 (Mesa-Lago, 1971, 1983).

2. Resultados. Breve recuperación económica

a. Crecimiento

La recesión de 1963-64 terminó cuando el PSG constante *per capita* aumentó un 4,7 % en 1964, aunque descendió a 1,5 % en 1965 (cuadro 3; puesto que el año 1966 está repartido entre esta etapa y la próxima, he decidido analizarlo en la etapa siguiente). Las estimaciones del crecimiento económico anual medio de 1961-65 no son consistentes: varían entre 2,7 y 7,1 %, dependiendo de las diferentes magnitudes y técnicas empleadas (cuadro 4). Sin embargo, estos datos indican que los buenos resultados de 1961, unido a la recuperación de 1964-65, compensó con creces el descenso de 1962-63 (pero el nivel de producción de 1965 podría haber sido inferior al de 1961; véase más adelante).

La meta de producción para el primer año del Plan Prospectivo Azucarero (6 millones de toneladas en 1965) se superó en un 2,6 %, pero adviértase que dicha meta no exigía un incremento de producción por encima de los niveles de 1959 y 1961. En la agricultura no azucarera y la ganadería los resultados fueron mixtos: hubo una cantidad ligeramente mayor de productos con producción decreciente o estancada que con producción creciente (sin embargo, se elevó el número de cabezas de ganado vacuno, cerdos y aves de corral, así como de capturas de pescado). El efecto de la segunda ley de reforma agraria (que se sejó sentir plenamente en 1964), más el giro hacia la producción de azúcar pueden quizá explicar los resultados agrícolas mixtos de esta etapa. El índice de producción agrícola *per capita* de la FAO se recuperó en esta fase, pero, con todo, el nivel de 1965 fue 17 puntos porcentuales inferior al nivel de 1961. La producción de níquel y petróleo, así como de electricidad, puros y pesca, aumentó en esta etapa, mientras un número menor de artículos industriales decisivos se estancaba o descendía. Diversos índices de producción industrial no azucarera indican un crecimiento sostenido en este período. Sin embargo, el índice conjunto de producción agrícola e industrial en precios constantes sugiere que, no obstante la recupera-

ción, el nivel de 1965 era considerablemente inferior al de 1961 (Mesa-Lago, 1971). La proporción de la inversión en el PSG disminuyó en 1964, pero recuperó su nivel de 1963 en 1965.

b. *Inflación*

La inflación siguió siendo muy alta en 1964, aunque era más baja que en 1963 (8,5 y 10,2 %, respectivamente), pero en 1965 se anunció una deflación del 1,7 %. La única estimación disponible de la inflación de 1963-65 da una tasa anual del 5,7 %. En 1965 el excedente monetario acumulativo se había reducido al 73 % de las rentas de la población (bajando desde el 91 % de 1962), pero seguía siendo muy elevado (cuadro 2; Mesa-Lago y Pérez-López, 1992).

c. *Diversificación*

La distribución general del PSG por sectores económicos no incluye datos para esta etapa (en la década de 1960 sólo existen para 1962; cuadro 4). Como resultado de la vuelta al azúcar (así como de mejores cosechas y precios), sin embargo, la parte del PSG correspondiente a la producción de azúcar aumentó de 9,8 a 13,8 % en 1963-65, mientras que la parte correspondiente a exportaciones de azúcar/PSG ascendió de 8,4 a 8,8 % (cuadro 6).

d. *Balanza comercial*

Debido sobre todo al incremento de las exportaciones azucareras (tanto en cantidad como en precios más altos en los mercados soviético y mundial), el valor de las exportaciones cubanas se elevó un 31 % en 1964; y aunque se redujo en 1965, seguía siendo un 27 % superior al nivel de 1963. El valor de las importaciones aumentó en un 17 % en 1964 y en 1965 bajó al mismo nivel de 1963. Así pues, el déficit comercial cubano decreció ligeramente en 1964 y se redujo fuertemente en el año siguiente. Aprovechando los altos precios del azúcar en el mercado mundial, Cuba expandió su volumen de comercio con las economías de mercado (de 17,5 a 35,7 % en 1962-64), mientras que el volumen de comercio con la URSS se redujo del 49,4 a 39,5 % (de 67 a 51,8 % con el COMECON). Pero en 1965 un aumento del precio soviético para el azúcar cubano y la bajada del precio mundial resultaron en una razón

de precios de 3,8 a 1 a favor de Cuba. Este incentivo de precios unido a créditos atados proporcionados por la URSS generaron una expansión del comercio cubano con este país en 1965 que alcanzó el 48,2 % (61,5 % con el COMECON) con un precipitado descenso del comercio realizado con las economías de mercado (que bajó hasta un 23,2 %). Además, debido al incremento de los precios soviéticos, el déficit comercial cubano con la URSS se redujo a un tercio en 1963-65 y la parte soviética del déficit comercial de Cuba descendió de 92 a 60 % (cuadros 11 y 12). La concentración exportadora siguió inalterada en esta etapa: las exportaciones de azúcar representaron el 87 % de las exportaciones totales de la isla. La dependencia de las importaciones de petróleo soviético se mantuvo igual pese al incremento en la producción doméstica (en 1965 la URSS suministró el 98,4 % del abastecimiento de Cuba). Los soviéticos cobraron básicamente los mismos precios petrolíferos que en el mercado mundial (cuadro 15; Pérez-López, 1979; Mesa-Lago, 1983).

e. *Desempleo*

En 1965 el desempleo declarado se había reducido probablemente al 6,5 %, aproximadamente el 40 % de la tasa prerrevolucionaria. La aplicación de normas laborales y escalas salariales podrían haber contribuido a los declarados incrementos en productividad de 1964-65. No obstante ello, el desempleo encubierto y el subempleo continuaron en esta etapa: el número total de obreros sobrantes, calculado en 1965 tanto por las cuotas laborales como por las Comisiones contra el Burocratismo, representaba el 3,4 % de la fuerza de trabajo. Si esta cifra se suma a la de desempleo total, se obtiene una tasa conjunta próxima al 10 % de la fuerza de trabajo.

f. *Igualdad*

No hay estimaciones disponibles sobre la distribución de la renta en esta etapa y es imposible valorar el resultado neto de las políticas divergentes aplicadas. Sin embargo, el diferencial extremo entre los salarios más alto y más bajo por sectores económicos descendió de 4,1:1 en 1962 a 3,6:1 en 1966.

g. *Indicadores sociales*

En 1965 la matriculación en enseñanza media era 11 puntos porcentuales superior a la de 1960. La mayor parte de este avance se debió a una expansión real de servicios educativos, pero la nacionalización de la enseñanza privada en 1961 contribuyó a engordar las cifras de matriculación pública. La mortalidad infantil alcanzó un máximo de 37,8 % en 1965, mientras que la tasa general de mortalidad disminuyó en esta etapa. Aumentaron las tasas de cinco enfermedades contagiosas, mientras disminuían las tasas de cuatro enfermedades (difteria, malaria, polio y tifus) gracias a las masivas campañas de vacunación. El número de pensionistas ascendió un 40 % en 1962-65 debido a la ampliación de cobertura de seguridad social y jubilación a muchos agricultores expropiados bajo la ley de la segunda reforma agraria, así como a muchos «excedentes». La construcción de viviendas descendió desde una media anual de 17.000 unidades en 1959-63 a 5.000 unidades en 1965. La emigración fue más controlada y reducida y la tasa de natalidad siguió siendo elevada (alcanzó un máximo en 1963 y a partir de ese momento fue descendiendo paulatinamente), de ahí que el crecimiento demográfico fuera bastante elevado en este período (2,5 %), añadiendo presión a la demanda de servicios sociales (cuadros 21, 22, 23 y 25).

h. *Resumen*

En esta etapa se reanudó el crecimiento, en su mayoría generado por mayores cosechas de azúcar y precios azucareros más altos en los mercados mundial y soviético. Ello se logró a expensas de sacrificar el programa de industrialización y volver al azúcar, un cambio de estrategia que justificó por las ventajas comparativas, las buenas condiciones del comercio con el campo socialista y los objetivos de desarrollo a largo plazo. La inflación siguió alta, no obstante el racionamiento y la reducción de la partida de servicios sociales en el presupuesto y la inversión, pero disminuyó a finales del período. La dependencia comercial de la URSS decreció primero, con ayuda de un giro hacia las economías de mercado respaldado por los altos precios mundiales del azúcar, un hecho que puso en cuestión la calidad y/o precio de las importaciones soviéticas. Pero la dependencia se reanudó en 1965 fomentada por los precios preferenciales otorgados por la URSS, el descenso del precio mundial del azúcar y el aislamiento hemisférico de Cuba. El mayor valor de las exportaciones de azúcar contribuyó a reducir el déficit comercial, pero la concentración en la exportación azucarera permaneció inalterada mien-

tras aumentaba la dependencia económica general del azúcar. El desempleo total siguió su tendencia descendente, pero la importancia del subempleo se hizo patente con el intento de reducir la mano de obra excedente con objeto de aumentar la productividad. Continuaron las mejoras en educación, pero, no obstante los crecientes gastos en sanidad, el deterioro de los indicadores sanitarios no se detuvo y la construcción de viviendas disminuyó acusadamente.

5. Adopción y radicalización del modelo guevarista: 1966-70

El debate y el enfrentamiento entre dos ideologías económicas y dos modelos organizativos en competencia no podía durar mucho tiempo. Durante tres años Castro se abstuvo de participar abiertamente en la polémica, pero a fines de 1965 los dirigentes de los dos grupos contendientes no estaban ya al mando del asunto. Guevara dimitió como ministro de Industria y abandonó Cuba para dirigir la revolución en América del Sur, donde al fin encontró la muerte. Rodríguez dimitió como director del INRA, pero tuvo la habilidad de permanecer en Cuba como ministro sin cartera. En el verano de 1966 Castro anunció las nuevas directrices de la organización económica. Fundamentalmente, éstas seguían el modelo guevarista, pero se pusieron en práctica con un estilo radicalizado, más idealista, mediante la contribución del propio Castro.

1. *Políticas. El Hombre Nuevo, el declive del Plan Central y la zafra gigante*

a. *Propiedad*

El proceso de colectivización se reanudó con brío en esta etapa, concentrándose en las dos bolsas de propiedad privada que quedaban: la agricultura y los servicios. A fines de 1968 sólo una quinta parte de la agricultura y el 2 % de los transportes seguían en manos privadas.

En 1967 se tomaron cuatro medidas para incrementar el control del

Estado sobre la agricultura: i) los trabajadores de las fincas estatales fueron despojados de sus diminutas parcelas familiares, donde producían para su propio consumo, para transacciones de trueque y para el mercado negro; ii) la tenencia privada de tierras se limitó a la duración de la vida del agricultor; por tanto, no podía transmitir la tenencia a sus herederos; más aún, el Estado tenía prioridad para comprar las fincas privadas si sus propietarios decidían venderlas; iii) la ANAP acordó no vender excedentes agrícolas de fincas privadas en el mercado, sino entregar toda la producción al gobierno sobre la base de los bajos precios del acopio, y iv) se alentó a los agricultores privados a que se unieran a las brigadas de trabajo colectivo y grupos que emplean su potencial humano y sus equipos en el servicio común.

El 25 % del comercio minorista que aún quedaba en manos privadas además de la mayor parte del 2 a 5 % de la industria y el transporte fueron colectivizados de un solo golpe en marzo de 1968 bajo la «Ofensiva revolucionaria». Más de 58.000 pequeños negocios fueron confiscados, incluidos despachos de alimentos al por menor, tiendas de servicios al consumidor, restaurantes y bares, establecimientos de reparación y artesanía e incluso puestos de venta callejera. Además de expandir el sector estatal (y elevar ideológicamente el nivel de propiedad), esta medida estaba oficialmente dirigida a la erradicación de las compras ilícitas que los pequeños comerciantes hacían a los agricultores privados, adquisiciones que reducían las ventas de acopio al Estado y fomentaban el mercado negro. La mayoría de estos negocios quedaron a cargo de amas de casa inexpertas que eran miembros de los Comités para la Defensa de la Revolución (CDR), o el gobierno intentó administrarlos directamente. En 1970 Castro dijo que la mayor parte de los establecimientos confiscados funcionaban o bien con métodos primitivos de contabilidad o sin contabilidad alguna, pero con gran eficiencia porque sus propietarios conocían todos los pormenores de oferta, demanda y distribución. Añadió que el Estado no podía reunir, agregar y utilizar toda la información necesaria, y que los gerentes de nuevo nombramiento no poseían formación y conocimiento suficientes de las condiciones locales y, por ello, la ineficiencia se extendía rápidamente. Más adelante un estudioso cubano explicaría que la razón subyacente de la nacionalización de los pequeños comercios en 1968 había sido que muchos de ellos competían con éxito con el Estado debido a su mayor iniciativa y flexibilidad y que, por ello, sus productos eran preferidos incluso por el sector estatal. Además, dicho estudioso (siguiendo el anterior argumento de Bettelheim, pero sin citarlo) criticaba dicha «nacionalización» por no ser auténtica «socialización», puesto que se había limitado a un acto legal oficial y los establecimientos no se habían administrado eficientemente a fin de au-

mentar la producción y la productividad, sino que, en realidad, habían sufrido un retroceso (Mesa-Lago, 1971, 1983; Ayala, 1982; Castro, 1982).

b. *Planificación*

Acelerando una tendencia iniciada en la etapa precedente, el macroplan central prácticamente desapareció en esta etapa. Las decisiones económicas más importantes no se fundaban en un aparato central de planificación «científico y objetivo», sino que eran tomadas por la jefatura política. A fines de 1966 las actividades de la JUCEPLAN se reducían a la investigación y a las funciones logísticas de garantizar los insumos necesarios para cumplir los objetivos productivos fijados por los líderes políticos y resolver las incongruencias que pudieran surgir. Hemos observado ya que, a partir de 1965, los macroplanes a plazo medio y anuales fueron sustituidos por planes sectoriales o miniplanes.

Además, la jefatura introdujo también planes especiales o extra con un criterio casuístico para abordar los problemas económicos urgentes. La administración de estos planes solía confiarse a revolucionarios leales y la asignación de recursos para los planes se realizaba por «orden superior», al margen de JUCEPLAN. Ello resultó en una reducción de la asignación de recursos para los proyectos centrales que estaban ya en funcionamiento pero eran clasificados de menor prioridad que los planes especiales o extra. Las incompatibilidades entre los planes central y especiales eran resueltas de modo arbitrario por la jefatura política según iban surgiendo los conflictos.

La falta de un plan central y de coordinación entre los planes especiales provocó escasez de insumos, cuellos de botella, cierres y la proliferación de proyectos inconclusos. Los avances logrados en ciertos sectores eran contrapesados por los retrocesos en otros. Los equipos importados permanecían inutilizados durante años (en ocasiones oxidándose en los muelles, incluidos los vitales tanques de petróleo) porque no se habían terminado las instalaciones para alojarlos. Algunas fábricas estaban casi acabadas, pero no podían funcionar porque faltaba un componente o una pieza. La construcción de pequeñas presas no estaba a la altura del desarrollo de los riegos y, por consiguiente, la mayor parte del agua acumulada no podía utilizarse. La ausencia de información centralizada, rematada por una mala administración, tenía efectos nocivos: los artículos perecederos se amontonaban en los muelles o en almacenes; ciertos productos agrícolas se perdían debido a la excesiva humedad del terreno, mientras otros se secaban por falta de agua; otros se perdían parcialmente a causa de la falta de mano de obra, y valiosas plantas de

semillero se almacenaron y olvidaron. El descuido de los costes de depreciación desembocó en el deterioro de instalaciones y equipos con posterior contracción o cierre; por ejemplo, apagones eléctricos y cortes en el abastecimiento de agua (Mesa-Lago, 1971).

c. *Financiación*

En 1966 se produjo una importante reorganización del aparato gubernamental. El Ministerio de Hacienda fue abolido y todas sus funciones absorbidas por el Banco Nacional. Este acto, en lugar de significar la desaparición del sistema de financiación presupuestaria, facilitó su extensión a toda la economía, porque el Banco Nacional pasó de suministrador de préstamos a supervisor de la financiación de la economía. El número de empresas públicas se redujo a 300, algunas de las cuales abarcaban ramos industriales enteros; por ejemplo, la industria azucarera se componía de más de 100 molinos y operaciones relacionadas. Se abandonó el uso de cálculos monetarios y mecanismos de mercado en la agricultura y el comercio. Pero el presupuesto del Estado, que debía desempeñar un papel fundamental en el modelo guevarista, también perdió importancia y aparentemente desapareció durante todo un decenio (1967-77). Se restó importancia a las técnicas de contabilidad; en 1969 la matriculación de estudiantes en universidades y escuelas técnicas en las especialidades de economía y gestión era una doceava parte de la de 1965.

El énfasis en la acumulación de capital al precio de rebajar el consumo alcanzó su cenit en esta etapa. Un acusado incremento del ahorro nacional iba a generarse mediante la reducción del consumo a través de la expansión del racionamiento, la exportación de productos previamente asignados al consumo interior y el recorte de importaciones consideradas innecesarias. Además, los incentivos materiales se redujeron fuertemente y la población fue exhortada a trabajar más, ahorrar más y aceptar las privaciones con espíritu revolucionario. Debido a que en esta etapa se suprimió el presupuesto del Estado, es imposible saber cuál fue la porción presupuestaria asignada a financiar la producción, pero la parte de inversión asignada a la esfera productiva aumentó de 78,7 a 85,8 % en 1965-70, siendo la última la mayor proporción jamás alcanzada bajo la Revolución.

Sin embargo, los economistas cubanos y extranjeros advirtieron un descenso de eficiencia en la asignación y uso del capital tan duramente conseguido, por varias razones: i) las decisiones arbitrarias tomadas por líderes políticos que no utilizaban ni los instrumentos de planificación ni

los de mercado para mejorar la eficiencia en la asignación de capitales; ii) la generalización de la financiación presupuestaria, basada en donaciones de capital y desvinculada de la rentabilidad, lo cual generó irresponsabilidad financiera; iii) proliferación de planes sectoriales y extras careciendo de un plan central de inversión que garantizase una coordinación mínima, y iv) falta de capacitación o responsabilidad entre los obreros que no sabían manejar los costosos y complejos equipos de importación, los cuales manipulaban sin cuidado y sin el debido mantenimiento o prescindían de ellos debido a que ignoraban cómo repararlos; por ejemplo, la mitad de las locomotoras existentes quedaron destrozadas por trabajadores negligentes y el número de tractores importados se redujo al 14 % en términos de años de servicio (Lataste, 1968; Bernardo, 1971; Mesa-Lago, 1971).

d. *Estabilidad y precios*

Los precios del creciente número de artículos racionados siguieron congelados en este período, no obstante el incremento en costes de la producción nacional y las importaciones desde 1962, por lo cual las subvenciones del Estado aumentaron rápidamente. Por lo mismo, se acrecentaron las subvenciones a un número en ascenso de empresas. Todos los impuestos personales fueron en apariencia eliminados, mayor cantidad de servicios sociales quedaron prácticamente exentos de impuestos o se redujeron sus tasas, una proporción considerable de la población consiguió la propiedad de sus viviendas previamente alquiladas y dejó de pagar su alquiler al Estado. Se incrementó sustancialmente la masa monetaria en circulación y, con menos artículos de consumo disponibles, el dinero empezó a perder valor como medio de intercambio y también como incentivo para el esfuerzo laboral. La reducción de las operaciones del mercado negro a partir de 1968 cerró otra vía de uso del dinero. Los precios se distorsionaron progresivamente y las colas frente a las tiendas del Estado se hicieron cada vez más largas (Mesa-Lago, 1971).

e. *Estrategia de desarrollo*

La concentración en la producción de azúcar alcanzó su apogeo en esta etapa, dado que el 70 % de la inversión se destinó a la industria azucarera. Con todo, como ya se dijo, había otros planes para ampliar el número de cabezas de ganado y la producción agrícola no azucarera,

así como las capturas de pesca y la producción de níquel, electricidad y cemento.

Los objetivos anuales de producción del Plan Prospectivo Azucarero se incrementaron sostenidamente en 1966-70 a 6,5, 7,5, 8, 9 y 10 millones de toneladas. Se esperaba que la producción conjunta de azúcar y melaza superara los 25 millones de toneladas a fines de la década de 1970. El objetivo inicial fijado para 1970 era de 7,5 millones de toneladas, pero Castro lo elevó a 10 millones sin un estudio técnico previo sobre su viabilidad; la planificación se hizo precipitadamente *a posteriori*. El cumplimiento de aquel objetivo colosal se convirtió en una batalla politicoeconómica, una prueba de fuego para la Revolución, puesto que Castro calificó de derrota moral cualquier nivel de producción inferior a aquella meta.

Pero una serie de factores conspiraron contra el éxito del Plan. La duración de la cosecha fue de 334 días (un 50 % más que en la anterior zafra récord de 1952); se inició en octubre cuando la caña no estaba aún madura y finalizó en agosto, debiendo enfrentarse al obstáculo de la temporada lluviosa que comienza en mayo. El área de caña cultivada aumentó, en efecto, de 1 a 1,5 millones de hectáreas, pero este inmenso objetivo se logró en los 18 meses anteriores a la cosecha y se hizo con precipitación, lo cual originó considerables pérdidas de semillas. La nueva caña de azúcar era una variedad mejorada que producía mayor rendimiento, pero necesitaba un período mínimo de 18 meses para madurar, una condición no cumplida en una gran proporción de la semilla plantada. Las instalaciones de riego se proyectaron para cubrir 385.000 hectáreas, pero sólo el 40 % o menos estaban ya montadas en la primavera de 1969 y el incumplimiento del objetivo de abonos fue aún más deficiente. De los 350.000 cortadores de caña requeridos, sólo una cuarta parte eran segadores profesionales y los restantes eran voluntarios movilizados, procedentes de las ciudades, que carecían de experiencia y tenían una productividad muy baja (y, además, los antiguos técnicos de los molinos azucareros abandonaron el país a comienzos de los años sesenta o fueron despedidos durante la campaña antiburocracia). Una parte de la cosecha iba a ser mecanizada, pero las cosechadoras soviéticas eran demasiado pesadas y se averiaban con facilidad (las piezas de recambio eran muy escasas) y se producían muy pocas cosechadoras de fabricación cubana, por lo cual la siega de la caña sólo estaba mecanizada en un 1 %; además, la labor de arado sólo estaba mecanizada en menos del 40 %. Debido a que la mayoría de las cosechadoras no limpiaban la caña de hojas y desperdicios, esta tarea tenía que hacerse mecánicamente en nuevos centros de acondicionamiento de la caña, que no se construyeron en cantidad suficiente (sólo el 25 % de la caña se

limpiaba de esta forma) y, por consiguiente, el volumen de la caña transportada se elevó considerablemente, aumentando la presión sobre el equipamiento existente. El rendimiento industrial planificado (porcentaje de azúcar cruda producida en relación al peso de la caña triturada) era del 12,3 %, exactamente el promedio de rendimiento de los años sesenta, pero debido al exceso de hojas y desperdicio de la caña, el bajo contenido en azúcar, los problemas con la maquinaria de molienda y desatención a los indicadores de producción, el rendimiento real fue de sólo un 10,7 %, el más bajo en tres decenios (los costes de producción fueron superiores al precio del azúcar fijado en el mercado mundial). Sólo se había logrado el 40 % de la inversión necesaria de un billón de dólares al comenzar la cosecha, y no se había construido ninguna de las tres nuevas azucareras proyectadas; el desfase resultante se iba a suplir con la capacidad de molienda ampliada de las fábricas existentes, pero en realidad sólo se alcanzó la mitad de dicho objetivo. Los equipos importados para los molinos se retrasaron o se recibieron sin tiempo suficiente para adaptarlos y para adiestrar al personal; además, se descuidó el mantenimiento del antiguo equipamiento y el considerable esfuerzo adicional exigido produjo frecuentes averías. Había que construir de 4.000 a 5.000 kilómetros de ferrocarriles y carreteras, pero sólo una parte estuvo terminada a tiempo; además del volumen extra de caña sin limpiar, el sistema de transporte hubo de asumir el traslado de caña desde los molinos que sufrían dificultades con los nuevos equipos hacia antiguos y sobrecargados molinos (Mesa-Lago, 1971; Roca, 1976; Brunner, 1977).

Una premisa importante del plan azucarero era que no perjudicara la producción en otros sectores, particularmente la agricultura. En realidad, la nueva estrategia de desarrollo contemplaba la expansión de la tierra, el equipamiento y otros insumos de la agricultura no azucarera; pero la mayoría de estas metas no se cumplieron. El área de tierra cultivada tenía que incrementarse en 900.000 hectáreas, pero sólo se logró en dos tercios. Se esperaba que la construcción de embalses añadiera un billón de metros cúbicos de agua solamente en 1965-70, pero sólo el 86 % de dicho volumen se había conseguido en todo el período de 1959-70. El número anual previsto de tractores importados en esta etapa era de 7.000, y probablemente los hubo, pero una utilización descuidada y la falta de mantenimiento redujeron fuertemente el número real de tractores en funcionamiento. El consumo de abonos iba a expandirse significativamente gracias a la producción doméstica y a las importaciones. Finalmente, el sector azucarero desvió recursos considerables del resto de la agricultura.

El plan ganadero fijó el objetivo de 8 millones de cabezas para 1970, un incremento del 18 % frente al número de 1965, así como un aumento

al cuádruple de la producción de leche en 1968-70. Ello se conseguiría con: i) inseminación artificial (dos millones de vacas habían sido inseminadas para 1968); ii) el cruce de la raza autóctona cubana (cebú, una deficiente productora de leche) con toros importados (Holstein y Suiza parda) para desarrollar una raza resistente y de mayor producción lechera (la F-1), y iii) la utilización de pastos y melaza (cuya producción iba a ascender de modo impresionante) como piensos ganaderos (para reducir la importación del costoso maíz) y la disminución del consumo interior de carne de vacuno mediante un racionamiento continuado. Según datos cubanos, la F-1 producía cuatro veces más leche que la cebú, mientras que una segunda generación de dicho híbrido (la F-2) mostró un aumento del doble de leche con respecto a la F-1. Sin embargo, en un congreso de ciencias animales celebrado en La Habana en 1969, un equipo de asesores británicos del gobierno cubano presentó un informe demostrando que la producción lechera de la F-1 era de sólo el 16 % de la Holstein, y que las vacas F-1 quedaban secas tras sólo 100 días de amamantar a sus crías. Otro informe británico desaconsejaba el uso de pastos y melaza como piensos para el ganado, insistiendo en que el maíz era el mejor forraje para el vacuno. Castro criticó duramente ambos informes, dando a conocer nuevos datos para demostrar la inexactitud del británico y mantuvo que era muy barato producir pastos y melaza en Cuba, pero muy caro producir o importar maíz. Pese a ello, en 1970 Castro reconoció varios problemas: la tasa de natalidad del vacuno no había sido suficientemente alta, las tierras de pasto no habían recibido los debidos cuidados en varios años y la tasa de matanza de reses había ascendido debido al poco peso del ganado.

Quizá el programa más logrado de esta etapa fuera la pesca. A las tres flotas sucesivamente reunidas en 1962-64 se añadió una nueva flota en 1968 compuesta por 90 naves españolas, 30 barcos frigoríficos franceses y 15 balandros de la RDA para la fabricación de harina de pescado. El número de naves de esta nueva flota superaba el número total conjunto de las anteriores tres flotas. Además, en los astilleros cubanos se construyeron 500 naves pequeñas de madera en 1959-68. Al llegar 1968 había más de 3.500 barcos de pesca en funcionamiento: 93 % de éstos eran pequeños, en su mayoría de madera y organizados en cooperativas y generaban el 58 % de la producción total (ligeramente superior al nivel de 1961). El 7 % restante eran naves importadas (bastante avanzadas, con un pequeño número de pescadores bien adiestrados) que operaban en la flota del Estado y procuraban el 42 % de las capturas.

A comienzos de 1966 Cuba había tenido un enfrentamiento político con China, su principal abastecedor de arroz, producto esencial en la dieta cubana. Como proporción del total de importaciones de Cuba, las

importaciones chinas (principalmente arroz) descendieron del 14,2 % en 1965 al 7,3 en 1967. Ello forzó a Cuba a preparar rápidamente un plan arrocero para satisfacer la demanda de consumo; a consecuencia de ello, en este período se sembraron grandes plantaciones mecanizadas de arroz.

Cuba tiene la cuarta mayor reserva de níquel del mundo, y hacia 1958 tenía una capacidad extractora de 40.000 toneladas métricas de este mineral (en dos plantas de construcción estadounidense). Tras la inicial disminución en producción, los técnicos cubanos consiguieron recuperar el nivel de producción prerrevolucionario en 1963-64 y fijaron como objetivo para 1970 la plena utilización de la capacidad instalada. Por otra parte, la producción eléctrica iba a ampliarse en 570 millones de kilovatios-hora mediante la adición de dos plantas termoeléctricas. Por último, la producción de cemento iba a incrementarse también gracias a la expansión de la capacidad instalada (Mesa-Lago, 1971, 1978, 1983).

f. *Sector exterior*

En esta etapa la URSS siguió cumpliendo el acuerdo comercial y económico de 1965-70 (salvo en el petróleo en 1967), a pesar de los conflictos con Cuba a causa de sus poco ortodoxos modelo económico y política exterior. Sin embargo, el número de acuerdos soviético-cubanos de todo tipo firmados en 1967-68 fue el menor desde 1960. Más aún, la URSS redujo en un 3 % el suministro de petróleo a Cuba en 1967, en lugar del proyectado incremento. Castro denunció esta acción a principios de 1968 y en represalia procesó a varios militantes pro soviéticos del partido comunista prerrevolucionario de Cuba (la «Microfacción») acusándoles, entre otras cosas, de proporcionar información a la URSS sobre algunos factores negativos que hacían inviable la meta de 1970 para la producción de azúcar (en 1970 muchos de estos factores resultaron ciertos y fueron públicamente reconocidos por Castro). La invasión soviética de Checoslovaquia en el verano de 1968 fue un momento decisivo en las relaciones soviético-cubanas. Castro apoyó la invasión (si bien con algunas reservas) y la política exterior de la isla se aproximó más a la de la Unión Soviética (la muerte de Che Guevara en Bolivia produjo un cese de la guerrilla y facilitó una política exterior cubana más moderada).

El precio del azúcar cubano pagado por la URSS se mantuvo en 6,11 centavos la libra en este período. Ahora bien, debido a la creciente producción y exportación de azúcar cubano (unido a la expansión de las exportaciones de América Latina y otros productores de azúcar), el precio mundial del azúcar descendió de 5,87 a 1,86 centavos la libra en

1964-66, el más bajo desde la Gran Depresión. Pese a ello, el precio mundial del azúcar volvió a elevarse en 1969-70, alcanzando los 3,75 centavos la libra en este último año (un incremento influido por las bajas cosechas cubanas de 1968-69); con todo, este precio era muy inferior al precio medio de 4,38 centavos de 1957-64. Durante toda esta etapa la proporción entre los precios soviético y mundial del azúcar fue más de dos a uno, por lo que Cuba siguió exportando a la URSS aproximadamente el 40 % de su azúcar (67 % a países socialistas). Más de la mitad del comercio cubano se realizaba con la URSS y en torno a las dos terceras partes con el COMECON. El conflicto político con China redujo considerablemente el comercio con dicho país, principalmente en términos de exportación de azúcar e importación de arroz.

Cuba amplió significativamente su marina mercante en este período. El número de buques cubanos ascendió de 18, con un peso muerto de 106.000 toneladas, en 1965 a 37 barcos con 282.000 toneladas en 1970, lo cual convirtió a la marina mercante cubana en la quinta de América Latina. Sin embargo, debido a las grandes distancias que habían de recorrer los barcos cubanos, en 1970 sólo el 6 % del comercio exterior era transportado por naves cubanas (Mesa-Lago, 1971, 1978, 1983).

g. Trabajo y empleo

En esta etapa una parte del excedente laboral urbano fue transferido a la agricultura (mediante la aplicación y expansión de las políticas examinadas en la etapa precedente), que sufría una escasez de mano de obra, y el desempleo declarado quedó prácticamente eliminado. Y, sin embargo, seguía presente el desempleo encubierto y se agudizaron los problemas de productividad laboral, mal uso del trabajo voluntario y absentismo. El gobierno intentó corregir dichos problemas con estímulos morales, en lugar de hacerlo con incentivos materiales, y cuando esto no funcionó recurrió a la militarización de la mano de obra y a medidas de control.

Castro anunció el cambio del modelo organizativo cubano en el Congreso de la CTC de 1966, cuyo secretario general, un viejo comunista y líder pro soviético, fue rápidamente sustituido por un fidelista leal. En aquel año, en una declaración de principios, los sindicatos ratificaron que su labor consistía en aumentar la producción y la productividad, mejorar la calidad, reducir costes, cuidar debidamente la propiedad socialista y organizar el trabajo voluntario y la competencia socialista. Según una declaración oficial, los sindicatos se convirtieron en correa de transmisión de las directrices del Partido. Un movimiento de Trabajadores de

Vanguardia, compuesto por los más destacados en cuanto a concienciación, militancia y productividad, fue absorbiendo gradualmente las funciones sindicales, dejando a los sindicatos con obligaciones aún más limitadas, como la educación de la fuerza de trabajo, el fomento de la disciplina y la lucha contra el egoísmo. Algunos funcionarios cubanos reconocieron posteriormente que hacia 1970 el movimiento sindical estaba en decadencia.

Para 1970 el gobierno cubano controlaba casi todo el empleo, dado que el 86,3 % de la fuerza de trabajo civil (excluidos ejército y fuerzas de seguridad) estaba empleada por el Estado. El 13,7 % de empleo no estatal eran en su mayoría agricultores privados (11 %); el resto eran trabajadores autónomos y asalariados privados.

La movilización laboral ascendió rápidamente de 106.000 obreros en 1966 a 302.000 en 1968 y 700.000 en 1970. La mala organización del trabajo voluntario y la falta de preparación de los voluntarios resultaron en una considerable pérdida de tiempo y recursos. El trabajo voluntario se utilizaba muchas veces sin verdadera necesidad de ello; en otros casos, los voluntarios pasaban horas esperando ser transportados a los campos, para después permanecer inactivos una vez allí por falta de los implementos necesarios. Un último inconveniente era que el coste de movilizar, alimentar y proporcionar semillas y herramientas a los voluntarios era muchas veces superior al exiguo producto creado por aquella fuerza de trabajo ineficiente. El fiasco de la movilización para la zafra de 1970 suscitó una revisión de esta política. En un documento de la CTC —hecho público a mediados de 1970— tras el anuncio de que no se iba a cumplir la meta para la zafra—: i) se criticaba la práctica generalizada entre los líderes sindicales de presionar a los trabajadores para incrementar la producción a base de trabajo voluntario después del horario normal del día y en fines de semana; ii) se insistía en que, tras el esfuerzo extraordinario de la zafra, debían ser respetadas las vacaciones de los trabajadores, y iii) se exhortaba a gerentes y sindicatos a elevar la producción en el futuro mediante una mejor organización del trabajo, la plena utilización del horario laboral y el incremento de la productividad en lugar del trabajo voluntario. Pocos meses después Castro reconocía que la mala organización del trabajo voluntario había resultado en una pérdida de tiempo y esfuerzo.

La aplicación de las normas de trabajo se debilitó en esta etapa, y hacia 1970 se habían perdido los niveles conseguidos en 1965. La relación entre normas laborales y escalas salariales también se erosionó gradualmente. Según un informe oficial, la política salarial de estos años en modo alguno se basó en la eficiencia empresarial sino precisamente en lo contrario: en general, la productividad industrial tuvo en general una

relación inversa con la parte salarial del valor añadido. Además, los bonos a la producción y otros incentivos materiales fueron suprimidos o reducidos y se realizó un esfuerzo fútil para sustituirlos por incentivos morales y educación política. Cuando dicha acción fracasó, la jefatura recurrió a la militarización de los trabajadores, particularmente en la agricultura: la mayoría de las fincas agrícolas estatales estaban dirigidas por oficiales del ejército, se aplicó la disciplina militar y se presentaron como modelo las brigadas de trabajo militarizadas (también en la construcción).

Al finalizar 1966 Castro denunció la burocratización de las Comisiones de Lucha contra el Burocratismo, anunció duras sanciones contra los infractores y nombró un comité de investigación. Éste determinó que el 43 % de todos los empleados despedidos desde 1965 había sido reemplazado en empresas que acababan de ser despojadas de burócratas. Siguió a ello una nueva ola de 31.500 despidos, llegando al 1,2 % de la fuerza de trabajo en 1967. Al final de aquel año un tercio de los despedidos (que continuaban recibiendo sus salarios) seguía esperando su traslado a otros trabajos o estudiando, mientras que dos tercios fueron reemplazados, probablemente en la agricultura, en la construcción o, una vez más, en la burocracia.

El absentismo laboral aumentó sostenidamente debido, según un informe del Partido emitido en 1969, a que el sistema socialista no había desarrollado mecanismos propios para sustituir al sistema de mercado de controles e incentivos de la fuerza de trabajo: el desempleo no era ya temido y los salarios habían dejado de ser un incentivo porque había más dinero en circulación que artículos en que gastarlo. En septiembre de 1970 el absentismo alcanzó el 20 % de la población activa, puesto que los trabajadores podían quedarse en sus casas y seguir, no obstante, comprando los escasos productos existentes con el dinero que ganaban. En esta coyuntura el ministro de Trabajo declaró que la introducción de diversas medidas de control laboral en 1968-69 no había sido eficaz para la reducción del absentismo y que se requerían políticas más estrictas. A principios de 1971 entró en vigor una ley contra la vagancia que establecía la obligación de trabajar de todos los hombres aptos entre 17 y 60 años, sancionaba duramente el absentismo, reducía la posibilidad de trabajar fuera del sector público y calificaba de vagos a los asalariados temporalmente empleados en el sector privado. Incluso antes de aplicarse dicha ley, una campaña masiva para detectar a sus posibles infractores indujo a 100.000 hombres a incorporarse a la fuerza de trabajo, la mitad de ellos en la agricultura (Mesa-Lago y Hernández, 1971; Mesa-Lago, 1971, 1982, 1983).

h. *Distribución y servicios sociales*

En esta etapa se produjo un fuerte impulso hacia una mayor igualdad en Cuba. Se pidió a los trabajadores que renunciaran al pago de horas extra, a los bonos por sobrecumplimiento de las normas laborales y a los salarios históricos, al tiempo que se aplazaban los pagos extra por el trabajo realizado en condiciones extremadamente duras. Cesaron las recompensas en género (viajes, refrigeradores, motocicletas) que habían sido otorgadas a los trabajadores del azúcar como incentivos para incrementar la producción. Las parcelas familiares concedidas a los agricultores del Estado fueron suprimidas y se presionó a los agricultores privados para que vendieran al Estado sus cosechas a los bajos precios del acopio. (En 1970 los pagos estatales a los agricultores privados fueron posiblemente un 60 % inferiores al nivel de 1965, induciéndolos con ello a vender lo más posible en el mercado negro; cuando éste fue severamente reprimido en 1968, los agricultores redujeron su producción.) Incluso se abolieron los derechos de autor. Los diferenciales salariales iban a reducirse de modo gradual elevando los sueldos y pensiones más bajos y congelando los más altos; con el tiempo, todos los trabajadores ganarían el mismo sueldo, ya fueran cortadores de caña o ingenieros, e incluso los alimentos y la ropa serían gratuitos, haciendo virtualmente innecesarios salarios y dinero. Al mismo tiempo se ampliaron los servicios sociales gratuitos, incluyendo llamadas telefónicas públicas, entierros, guarderías y espectáculos deportivos, y se dio la promesa de que la vivienda, el esparcimiento, los transportes y los servicios públicos pronto serían gratuitos. Los alquileres de viviendas se fijaron en un 6 % de los ingresos mensuales de la familia, pero aquellas familias con ingresos inferiores a los 25 pesos mensuales quedaban exentas de pagar alquiler. Sin embargo, el porcentaje de inversión destinada a servicios sociales decreció de 21,3 a 14,2 % en 1965-70; y el gasto social *per capita*, que había ascendido un 127 % en 1960-65, sólo aumentó un 35 % en 1966-70). Se amplió el racionamiento y se acrecentaron las subvenciones a artículos de consumo primarios, con lo cual los escasos artículos disponibles fueron distribuidos por igual entre la población (Mesa-Lago, 1971, 1983, 1993d).

2. Resultados. La segunda doble crisis: fracasos de la «economía moral» y del Plan Azucarero

A. Crecimiento

Los indicadores macroeconómicos son escasos y no fiables en esta etapa. El gobierno cubano nunca ha publicado una sola serie de PSG en precios constantes para la totalidad del período de 1966-70. En su lugar tenemos tres series que no pueden ser conectadas: 1962-66 en precios constantes, 1967-69 en precios corrientes y una tercera que empieza en 1970, también en precios corrientes. Según estos datos dispersos, en 1966 la tasa constante del PSG *per capita* descendió un 2 %, mientras que en precios corrientes el descenso fue de 0,1 % en 1968 y 2,9 en 1969 (cuadro 2). Algunos estudiosos cubanos y extranjeros han elaborado estimaciones aproximadas del crecimiento económico anual promedio en precios constantes para todo el período de 1966-70, pero o bien se abstienen de mostrar sus cálculos o su metodología es defectuosa. La amplia divergencia entre dichas estimaciones aumenta las dudas sobre su fiabilidad; oscilan éstas entre el 0,4 % (PSG) y el 7,1 (PIB) o -1,3 y 5,4 % *per capita* (Mesa-Lago, 1994). Mi conclusión es que es imposible obtener una estimación sólida para esta etapa, pero que los datos dispersos de producción que se examinan más adelante indican estancamiento o descenso económicos.

Ninguno de los objetivos de producción anual del Plan Azucarero para 1966-70 se cumplieron; la producción total acumulada de este período fue 12 millones de toneladas inferior a la meta prevista, que sólo se cumplió en un 75 %. La cosecha de 1970 (8,5 millones de toneladas) estableció un récord histórico, pero se logró parcialmente tomando caña de azúcar sin cortar de la cosecha de 1969 (sólo 4,5 millones de toneladas frente a la meta de 9 millones) y la producción de 1970 quedó todavía un 15 % por debajo de la meta. Además, esta fue una victoria pírrica conseguida a base de desviar recursos de otros sectores de la economía que, a su vez, sufrieron descensos de producción que contrapesaron parcial o totalmente el incremento en producción azucarera. Por último, la meta de producir un superávit de azúcar de 1,5 millones de toneladas en 1970 no se hizo realidad; dicho superávit era esencial para reducir el déficit comercial y la deuda con la URSS, reanudar el programa de industrialización e incrementar significativamente la calidad de vida. Aún más lejano quedaba el sueño de elevar a más del doble la producción de azúcar y melaza en la década de 1970. El fiasco del Plan Azucarero hizo fracasar tanto la estrategia de desarrollo como el modelo de organización aplicados en la segunda mitad de los años sesenta.

La producción del sector no azucarero fue aún más decepcionante. La meta de 8 millones de toneladas del plan ganadero no se alcanzó por un 29 % y, en realidad, el número de cabezas de ganado, en lugar de incrementarse, descendió un 20 % en 1965-70. La razón de cabezas de ganado por habitante disminuyó de 0,87 en 1967 a 0,67 en 1970, y también descendió el peso de las reses (cuadro 7). Causas importantes de estos resultados negativos fueron los fracasos del cruce pecuario, la inseminación artificial y los programas de piensos tan duramente criticados por los geneticistas británicos. Descendió la producción de carne de vacuno, leche, tabaco, carne de cerdo, café, cítricos, habichuelas, tubérculos y verduras, y se redujo el número de cerdos un 18 % en 1967-70. La producción de arroz aumentó siete veces, pero el nivel de producción de 1970 era sólo levemente superior al de 1959-60. Cuba permitió la disminución de la producción de arroz nacional en 1961-66 a causa de un rentable intercambio de azúcar por arroz chino, pero después de su pelea con China volvió a impulsar la producción apresuradamente. El mejor resultado sostenido en el sector agropecuario fue en los huevos, que mostraron un impresionante aumento del 64 % en aquellos cinco años. Aún más extraordinario fue el incremento de 2,6 veces de la producción de pescado y marisco, favorecido por la rápida expansión y avances tecnológicos de la flota pesquera (cuadros 5 y 7). Según la FAO, el índice cubano de producción agrícola *per capita* descendió 18 puntos porcentuales en 1965-69; ahora bien, dicho índice subió 38 puntos porcentuales en 1970 (8 puntos por encima de 1961) debido a la cosecha récord de azúcar de aquel año (FAO, 1970-86).

La producción de níquel siguió elevándose sostenidamente en esta etapa con un crecimiento del 32 % en 1965-70; la producción de este último año era sólo 7,5 % inferior a la capacidad total instalada; por lo tanto, el plan del níquel tuvo éxito. Por el contrario, el sector fabril no azucarero obtuvo unos resultados míseros: la producción de cemento, abonos, textiles, cigarros puros, jabón, cerveza, frutas envasadas, neveras y radios de 1970 fue considerablemente inferior a la de 1965 (en algunos productos el descenso osciló entre el 20 y el 45 %). Por otra parte, se obtuvo un crecimiento impresionante en el acero (un incremento casi cuádruple en 1965-70, pero del doble en 1969-70) y la electricidad (aumento de 44 % [cuadro 5]). El índice de producción industrial de Zimbalist (incluido el azúcar) muestra un aumento de 9 puntos porcentuales (Zimbalist y Brundenius, 1989).

Se produjo un descenso en la calidad de los artículos y, en algunos casos, una pérdida total debido a graves deficiencias. Dichos artículos se acumulaban sin que nadie quisiera comprarlos. Por consiguiente, se malgastaban insumos materiales, mano de obra y espacio de almacenaje. En

otros casos los artículos se vendían pero sus deficiencias acortaban su duración.

El número de turistas decreció a menos de 2.000 (de 271.000 en 1957), cayendo a su punto más bajo (cuadro 10). No puede medirse el deterioro en otros servicios, pero debió ser considerable.

Para resumir, con la excepción del azúcar (sólo en 1970) y unos cuantos productos agrícolas e industriales, se produjo un descenso generalizado en la economía cubana durante este período.

En agosto de 1970, en una sombría evaluación del fracaso de la estrategia de desarrollo, Castro reconoció que el enemigo tenía razón cuando advertía que la zafra de 10 millones de toneladas iba a causar todos aquellos problemas. Él culpó a la jefatura, incluido él mismo, de tan grave revés, y propuso su dimisión si el pueblo así lo quisiera. El único funcionario civil cesado fue, sin embargo, el ministro de la industria azucarera. Dos meses después, Castro, olvidando su primordial responsabilidad en decidir la meta de los 10 millones de toneladas y realizar un esfuerzo desesperado para lograrla a cualquier precio, responsabilizó a los técnicos del ministerio por asegurarle que ellos sabían cómo cumplir dicha meta y por trasladar recursos del resto de la economía al sector azucarero, provocando un descenso generalizado en la producción no azucarera (Mesa-Lago, 1971).

La proporción de inversión en el PSG ascendió de 12,4 a 14,3 % en 1965-67, pero descendió a 12,5 % en 1968 y a 9,6 en 1970, la cantidad más baja desde que comenzó la serie en 1962 (cuadro 2). Una comparación entre el valor anual medio de inversión/PSG de 1962-65 y de 1966-70 muestra un aumento desde 11,7 a 12,5 %. Pero parte de todo este beneficio se perdió debido al descenso en eficiencia del capital.

b. *Inflación*

Las estimaciones del promedio anual de inflación para esta etapa indican un aminoramiento desde 5,7 % en 1963-65 a 1,3 en 1966-70 (Mesa-Lago y Pérez-López, 1985a, 1985c). Pese a ello, Castro describió este período como uno de tremenda inflación a consecuencia de que la masa monetaria en circulación era superior al valor de los bienes y servicios disponibles. Y, en efecto, el excedente monetario acumulativo alcanzó un máximo en 1970, llegando al 83 % de la renta de la población, casi dos veces el valor de la oferta disponible de bienes y servicios; el excedente *per capita* fue de 388 pesos, el más alto hasta aquel momento bajo la Revolución. Esta cifra resalta la contracción del valor del dinero y

explica por qué el absentismo se acrecentó hasta el 20 % en aquel año (Mesa-Lago, 1983).

c. *Diversificación*

Una comparación entre la distribución general del PSG por sector económico en 1962 y 1970 (únicos años disponibles [cuadro 4]) muestra los siguientes descensos (en puntos porcentuales) en los capítulos de: agricultura (3,1), industria (0,3), construcción (2) y comunicaciones (0,1). Los únicos sectores que aumentaron fueron los transportes (3,8) y el comercio (1,7). Una parte de dicho incremento ha sido atribuida a la inflación exterior (Zimbalist y Brundenius, 1989). Y, sin embargo, el cuadro no muestra ningún indicio de diversificación, particularmente en la industria. La proporción de producción de azúcar en el PSG aumentó de 10,1 al 15,1 % en este período, mientras que la proporción de exportaciones de azúcar/PSG se elevó de 7,4 a 9,7 %, ambos claros indicios de la renovada dependencia del azúcar (cuadro 6).

d. *Balanza comercial y dependencia exterior*

Uno de los objetivos de la estrategia de desarrollo era corregir el desequilibrio comercial. Pero los datos muestran que dicho desequilibrio se agravó aún más en esta etapa, salvo en 1970. El valor de las exportaciones cubanas permaneció básicamente estancado en 1965-69, pero aumentó un 57 % en 1970 (el más alto de su historia) debido a la cosecha de azúcar récord y a la subida de los precios en el mercado mundial. El valor de las importaciones cubanas se elevó sostenidamente en esta etapa; en 1970 el volumen de importaciones fue el más alto de su historia, un 51 % superior al nivel de 1965. El déficit comercial creció de forma constante en 1966-69 (un aumento del 69 % en este período) superando 500 millones de dólares en 1969 (estableciendo un nuevo récord), pero el salto en exportaciones de 1970 redujo a la mitad el déficit comercial de aquel año.

La incapacidad para cumplir las metas del Plan Azucarero en lugar de generar un sustancial excedente creó un enorme déficit en los compromisos de exportación, particularmente con la URSS. En 1965-70 el total de los compromisos de exportación a aquel país fue de 24 millones de toneladas, pero los envíos reales fueron de 13 millones (un 54 % por debajo de lo previsto); de ello resultó un déficit acumulativo de 11 millones de toneladas, equivalente a dos buenas cosechas de azúcar (Pé-

rez-López, 1991). El racionamiento del consumo interior de azúcar (introducido en 1969 para ahorrar 200.000 toneladas para la exportación) y la adquisición de azúcar en el mercado internacional tuvieron un efecto mínimo en el déficit. La URSS hubo de diferir parte de las obligaciones exportadoras de Cuba para que la isla pudiera cumplir otros compromisos, particularmente con el mundo occidental (Mesa-Lago, 1971).

Aumentó la dependencia de la URSS y también aumentó el déficit comercial cubano con dicho país. Con el estímulo de los ventajosos precios preferenciales soviéticos para el azúcar, la porción de la URSS en el volumen comercial de Cuba promedió 52 % en esta etapa, mientras que la porción del COMECON fue del 66 %. Pero las importaciones soviéticas se incrementaron dos veces más que las exportaciones cubanas y el déficit comercial acumulativo de 1966-70 alcanzó los 1.400 millones de dólares, el doble del déficit de 1961-65 (el cambio oficial cubano peso/dólar USA se mantuvo a la par artificialmente en este período). Casi el 75 % del déficit cubano de este período era con la URSS (cuadros 11 y 12). Los créditos soviéticos para cubrir el déficit se duplicaron, aumentando con ello fuertemente la deuda cubana con la URSS. En 1960-70 Cuba recibió 2.400 millones de dólares en préstamos soviéticos para cubrir el déficit comercial y para desarrollo, lo cual constituía el 68 % del total de ayuda externa soviética (cuadro 16).

La estimación de la subvención soviética al precio del azúcar (donaciones no reembolsables) resulta más difícil debido a las diversas bases de cálculo. Si se utiliza el precio del mercado mundial, las subvenciones acumulativas soviéticas fueron de 778 millones de dólares en 1966-70 o 2,5 veces las subvenciones del quinquenio precedente; respecto al precio de importación preferencial de la Comunidad Económica Europea (CEE), la subvención fue de 162 millones de dólares, pero si empleamos el precio de importación preferencial de Estados Unidos, la subvención fue negativa en 399 millones de dólares. (En otras palabras, si se hubiera vendido azúcar a Estados Unidos bajo las anteriores cuotas y precios preferenciales, Cuba habría ganado 399 millones de dólares más que vendiendo el azúcar a la URSS.) Basándose en los precios del mercado mundial, las subvenciones soviéticas a los precios sumaban 1.100 millones de dólares y suponían el 32 % del total de ayuda soviética (cuadro 16). El comercio con las economías de mercado sumó una media del 24 % del volumen comercial de Cuba (en su mayoría con Japón y Europa occidental), mientras que el comercio con China se redujo de 14,3 a 6,6 %. La dependencia de las importaciones de petróleo soviético disminuyó levemente de 97 a 92 % del suministro total en 1966-69, dado que la producción nacional cubana se triplicó y las importaciones soviéticas sólo aumentaron ligeramente (en 1987 se redujeron); pero en 1970

la combinación de un acusado descenso en producción interior y mayores importaciones soviéticas (que en realidad se elevaron considerablemente a partir de 1969) generaron una recaída en la dependencia petrolífera hasta el 94 % (cuadro 15). Los precios soviéticos del petróleo siguieron siendo básicamente los mismos que los precios mundiales. No obstante la creciente dependencia de la URSS, Castro afirmó (en el momento de la invasión soviética de Checoslovaquia) que numerosos países socialistas mantenían prácticas comerciales con los países en vías de desarrollo similares a las utilizadas por los países capitalistas; entre ellas, envíos de artículos defectuosos o tecnológicamente desfasados (Mesa-Lago, 1971, 1983; Pérez-López, 1979; Mesa-Lago y Gil, 1989).

La concentración en la exportación decreció durante esta etapa pese a la vuelta al azúcar: la parte correspondiente al azúcar en el total de exportaciones descendió de 85 a 77 %. El incremento en las exportaciones de níquel desde 1968 y, en menor medida, los bajos precios mundiales del azúcar determinaron dicho resultado (cuadro 13). Este indicador está, no obstante, en contradicción con el valor de las exportaciones de azúcar en el PSG que, como vimos, aumentó en este período. Los datos disponibles, sólo para 1958 y 1970, sobre la composición de las importaciones indican que Cuba redujo la parte de artículos manufacturados (un descenso de 6 puntos porcentuales) y combustibles (-2 puntos), mientras aumentaba la importación de maquinaria y equipos de transporte (5 puntos) y de productos químicos (3 puntos). Este es un indicador positivo pero, pese a ello, las importaciones de alimentos y grasas se incrementaron un punto porcentual, indicio de una menor autosuficiencia en la producción alimentaria interior (cuadro 14).

e. *Desempleo*

En 1970 se logró prácticamente el pleno empleo cuando sólo 1,3 % de la fuerza de trabajo estaba registrada como desempleados declarados (cuadro 19). Esta hazaña se consiguió junto a una mayor participación de la mujer en la fuerza de trabajo: de 12,6 % en 1956-57 a 18,3 en 1970. Una comparación entre la distribución de la fuerza de trabajo en 1956-57 y en 1970 indica que la parte proporcional del sector primario descendió (8,8 puntos porcentuales), por tanto, la mayoría del empleo se creó en el sector terciario (un aumento de 5,3 puntos) —particularmente en servicios (3,6 puntos)— y en el sector secundario (5,1 puntos, repartidos casi por igual entre la industria-minería y la construcción). Por consiguiente, el sector más dinámico fue el de servicios, en lugar de la industria. Las mujeres encontraron empleo sobre todo en el comercio,

que experimentó un aumento de 15,8 puntos porcentuales entre 1953 y 1970, y la gran mayoría —no obstante la contracción— siguió empleada en el sector terciario, en el cual se encontraba el 67,5 % del total del empleo femenino en 1970. Estas cifras ocultan el grave problema de subempleo y desempleo encubierto, que debieron incrementarse en este período. Así, se calculó que un 1,2 % de la fuerza de trabajo era excedente en 1967; y en 1968-69 una encuesta entre dos tercios de todas las empresas públicas mostró que entre una cuarta parte y la mitad de la jornada laboral se perdía, ante todo debido a fallos en la organización del trabajo y al tiempo perdido por absentismo, actividades políticas y holgazanería. La productividad laboral decayó un 2,1 % en 1966 y, aunque no se han publicado estadísticas para 1967-70, una abundante información indica que la productividad se deterioró más en este período debido al debilitamiento de las normas de trabajo, a las movilizaciones laborales, a un incremento del absentismo y demás. En 1970 Castro reconoció que aunque había sido erradicado el desempleo declarado, seguía habiendo muchas personas sin empleo que recibían subvenciones del gobierno (Mesa-Lago, 1971, 1972, 1983, 1994).

f. *Igualdad*

No hay estimaciones extranjeras de la distribución de la renta para 1970; no obstante lo cual, una comparación entre 1962 y 1973 (que adolece tanto de fallos metodológicos como de la comparación de grupos diferentes) indica una nueva reducción de la parte de la renta correspondiente al quintil más rico (−6,9) que recayó en el quintil medio (2,9) y los dos quintiles más pobres (en torno a 1,5 cada uno [Brundenius, 1979]). No existen datos disponibles sobre escalas salariales para este período. El diferencial extremo entre las medias salariales más alta y más baja de los diversos sectores económicos disminuyó aún más en esta etapa, de 3,6:1 en 1966 a 2,6:1 en 1971. El racionamiento se amplió considerablemente entre 1962 y 1969: entre 20 productos seleccionados, se redujeron las cuotas de racionamiento de 12 (o se distribuyeron gratuitamente en 1962 y fueron racionados a partir de entonces), mientras que 5 quedaron inalteradas y sólo se incrementaron 3 (cuadro 20).

g. *Indicadores sociales*

La tasa de analfabetismo, que oficialmente había sido reducida a 3,9 % en 1961, se mostró que era, en verdad, un 12,9 % en el censo de

población de 1970, un logro importante, pero no tanto como se pretendió en un principio. Ahora bien, la brecha de alfabetismo entre el medio urbano y el rural se redujo a la mitad, de 12 y 42 % en 1953 a 7 y 22 % en 1970. La matriculación en enseñanza media estuvo estancada en 1965-70, mientras que la matriculación en educación superior se elevó de 4 a 5 % (cuadro 23). La tasa de mortalidad general permaneció estancada en esta etapa, mientras que la de mortalidad infantil ascendió de 37,8 a 46,7 % en 1965-69, y después disminuyó a 38,7 en 1970. Si el incremento de la mortalidad infantil a comienzos de la Revolución pudo ser parcialmente explicado por un mejor registro de defunciones, este argumento perdió vigencia pasados diez años. La tasa de diarrea aguda aumentó significativamente y también cuatro enfermedades contagiosas, mientras otras seis disminuían (cuadro 22). La cobertura de la seguridad social se hizo universal en sanidad y llegó casi al 89 % de la fuerza de trabajo en pensiones (cuadro 24). Desde mediados de los años sesenta, el gobierno presionó a los trabajadores más viejos para que siguieran trabajando con objeto de ahorrar pensiones (el número de pensionistas se estancó en 1965-67), pero la nacionalización de las pequeñas empresas en 1968 generó una gran oleada de pensionistas (un incremento del 14 % en dos años). La construcción de viviendas alcanzó un máximo de 10.257 unidades en 1967 (todavía inferior al promedio anual de 17.089 de 1959-63), pero descendió precipitadamente a 4.004 en 1970, la cifra más baja registrada. El déficit de viviendas se estimó en 755.000 unidades (cuadro 25). Más que la expansión de los servicios sociales (la proporción de inversión en este sector volvió a ser fuertemente reducida durante esta etapa), la característica más importante de los servicios fue la ampliación de los que se ofrecían de modo gratuito (como entierros, teléfonos públicos, deportes) o la reducción de sus costes (autobuses públicos).

La tasa de crecimiento demográfico descendió sostenidamente de 2,5 a 1,5 % en 1965-70 a consecuencia de una disminución de la tasa de natalidad, de 34,3 a 27,7‰, unido a una mayor emigración neta: una media anual de aproximadamente 50.000 (cuadro 21). Contribuyeron a la baja tasa de natalidad factores tales como una mayor participación de las mujeres en la fuerza de trabajo, el aumento de la educación y las restricciones del consumo y la vivienda.

h. *Resumen*

En esta etapa el crecimiento económico se estancó o descendió junto al capítulo de inversión y la eficiencia del capital. El exceso de dinero

en circulación alcanzó su cenit y el dinero perdió su valor en gran medida, mientras se expandía el racionamiento generando un rápido aumento del absentismo laboral. En 1970 la zafra alcanzó un volumen récord, pero en 1966-70 no se cumplieron los objetivos del Plan Azucarero en un 25 %, la dependencia del azúcar se intensificó y la producción de la mayoría del sector no azucarero decreció con contadas excepciones. Se elevaron los déficit comerciales acusadamente, hasta una cifra récord, y aumentó la dependencia de la URSS al incrementarse la parte soviética en el volumen comercial y el déficit comercial de Cuba, y también los empréstitos y subsidios soviéticos. Se logró el pleno empleo, aunque al precio de expandir el subempleo y de una menor productividad laboral. La distribución de la renta y los servicios sociales se hizo más igualitaria y se ofrecieron mayor cantidad de servicios públicos gratuitos, pero se redujeron los incentivos materiales y también el esfuerzo laboral. Descendió la tasa de analfabetismo (aunque no tanto como se había afirmado anteriormente), y la seguridad social llegó a ser casi universal, pero se elevó la mortalidad infantil y la construcción de viviendas bajó a un mínimo. No se cumplió ninguna de las metas de la estrategia de desarrollo centrada en el azúcar, y el modelo guevarista-fidelista de organización económica tampoco funcionó. El Hombre Nuevo y el principio utópico de distribución de acuerdo a las necesidades tenían que haber sustituido tanto a los mecanismos automáticos de mercado como a las directrices de la planificación central. En contra de las expectativas, el viejo «hombre económico» no fue transformado y se desató el caos económico. Como en 1963, los dirigentes cubanos volvieron a enfrentarse a un costoso doble fracaso y se vieron forzados a cambiar una vez más tanto la estrategia de desarrollo como el modelo de organización económica.

6. Introducción del modelo moderado soviético (pre-Gorbachov) de reforma económica: 1971-85

En 1970 los dirigentes cubanos se enfrentaron a una catástrofe económica y a unas alternativas escasas para resolverla. La vuelta radical al mercado tropezaba tanto con la resistencia ideológica interior como con la imposibilidad de restablecer relaciones económicas con Estados Unidos o recibir una ayuda sustancial de Europa occidental o Japón. La opción de radicalizar aún más la economía revolucionaria siguiendo las líneas de 1966-70 estaba bloqueada por el caos desatado por el fracaso del experimento guevarista-fidelista. Por último, las continuas desavenencias de Cuba con China y el devastador efecto de la Gran Revolución Cultural Proletaria de dicho país representaban impedimentos para recibir dinero de éste. La URSS era el único país económicamente capacitado y dispuesto a ayudar a Cuba, pero, obviamente, en sus propios términos. Por tanto, era lógico que el modelo soviético de tímida reforma económica (que había sido suscrito en Cuba por el grupo pragmatista en el debate de 1964-66 e introducido en la URSS en 1965) fuera el adoptado por los dirigentes cubanos en los años setenta. La nueva etapa, la más prolongada de la Revolución (pues duró quince años, frente a una media de tres años en las cuatro etapas previas), se caracterizó por el pragmatismo económico y la institucionalización politicoadministrativa. Pero antes de introducir dichos cambios era necesario desacreditar el modelo anteriormente ensalzado.

En varios discursos pronunciados durante los años setenta, Castro criticó la etapa precedente tachándola de utópica, y explicó los errores

cometidos en los siguientes términos: aunque los cubanos carecían de buenos economistas, científicos y teóricos para hacer una contribución significativa a la construcción del socialismo, habían intentado inventar una nueva vía. Al hacerlo desdeñaron las experiencias de otros países socialistas más avanzados, experiencias que podían haberles ayudado considerablemente. Los planteamientos cubanos de aquellos años eran intensamente idealistas, minimizaban las dificultades reales y pretendían que la voluntad podía vencer la falta de condiciones objetivas. Los dirigentes fueron culpables de idealismo al suponer que la actitud de una minoría consciente de vanguardia era típica de toda una sociedad, y este error de interpretación había resultado perjudicial para la economía. En la nueva etapa pragmatista se había comprendido que era más fácil cambiar la estructura económica que la conciencia del hombre, que a éste le quedaba mucho camino por recorrer y que el desarrollo de la base material debía preceder a todo esfuerzo por concienciar a la sociedad. Se aceptó también que no se podía omitir la etapa de transición entre capitalismo y comunismo; era una locura creer que la sociedad cubana podía abandonar el capitalismo y entrar de un solo golpe en una sociedad en que todo el mundo se comportara de modo ético y moral. Se reconocía que en esta nueva etapa Cuba sólo construía los cimientos del socialismo, mientras que la URSS había sobrepasado el socialismo pleno y construía los cimientos del comunismo. En el futuro Cuba debía avanzar lentamente, con prudencia y de modo realista; si intentaba ir más allá de lo que era posible, pronto se vería obligada a retroceder. Ciertas medidas de carácter comunista puestas en práctica anteriormente fueron reconsideradas en esta nueva etapa: cuando podría parecer (en la etapa guevarista) que Cuba se aproximaba más a formas comunistas de producción y distribución, estaba en realidad alejándose de los métodos adecuados a la etapa de construcción de los cimientos del socialismo (Mesa-Lago, 1978, 1983).

1. *Políticas. Reforma tímida de mercado e integración plena en el campo socialista*

a. *Propiedad*

Pese a ciertas tendencias descentralizadoras y una tímida introducción de algunos mecanismos de mercado, el proceso de colectivización de la tierra continuó en esta etapa. En la primera mitad de la década de 1980 fueron introducidas, no obstante, algunas medidas liberalizadoras en la agricultura, los servicios y la vivienda. En todo caso, en el programa del

PCC para 1975 se declaraba que, a largo plazo, la construcción del socialismo significaba la superación de la propiedad privada de todos los medios de producción.

En la agricultura el objetivo del Estado era eliminar gradualmente las fincas privadas mediante la adquisición de la tierra cuando los propietarios murieran o se jubilaran, o mediante presión política de tal modo que las fincas individuales quedaran integradas en fincas estatales o cooperativas. A consecuencia de esta política, en 1967-81 disminuyó el número de agricultores privados en un 58 %, de 233.679 a 98.113. El 4.º Congreso de la ANAP, celebrado en 1971, acordó alentar la progresiva incorporación de las fincas privadas al sector estatal (de modo voluntario pero empleando la educación política), y este objetivo se convirtió en norma en la Constitución de 1976. Pero en 1977 el 5.º Congreso de la ANAP reconoció que la absorción por parte del Estado iba a llevar mucho tiempo y propugnó en su lugar la integración de las fincas privadas en cooperativas similares a los *kolkhozes* soviéticos. En 1977-83 el número de cooperativas aumentó de 44 a 1.472, su área total de tierra se elevó de 6.000 a 938.000 hectáreas y el número de agricultores cooperativistas aumentó de unos pocos cientos a 82.611. La tierra en cooperativas, como porcentaje del total de tierra agrícola, se incrementó de 0,4 % en 1977 hasta una estimación de 10,2 en 1986. Al añadirse el 80,8 % de tierra controlada por las fincas estatales en 1986, sólo quedaba en torno al 6,5 % en manos de agricultores privados y 2,5 en parcelas familiares. Ahora bien, en 1983-85 el creciente número de cooperativistas jubilados redujo la cifra de cooperativas a 1.378 y el número de cooperativistas a 69.896.

En contra de la continuada tendencia colectivizadora, las parcelas familiares dentro de fincas del Estado, eliminadas en 1967, fueron reinstauradas en los años setenta. Sin embargo, se fundieron en parcelas colectivas a comienzos de los años ochenta; estas parcelas no son cultivadas individualmente, sino por brigadas, y su producción está destinada exclusivamente al autoconsumo y entregas al Estado. Los precios estatales del acopio fueron incrementados y el gobierno empezó a pagar sus compras de acopio con mayor puntualidad.

La medida liberalizadora más importante de la agricultura fue la introducción de mercados libres campesinos en 1980, en los que los pequeños agricultores privados podían vender sus excedentes agrícolas (después de cumplir con el acopio del Estado y satisfacer sus propias necesidades de consumo) a precios libremente fijados por la oferta y la demanda. Dichos mercados, a decir del gobierno, debían alentar a los agricultores privados a aumentar su producción con el beneficio resultante de mejorar la oferta (en cantidad, variedad y calidad) de los pro-

ductos agrícolas, e ir eliminando gradualmente el mercado negro y el racionamiento. Además, estos mercados proporcionarían incentivos a la fuerza laboral para trabajar más con el fin de ganar más dinero y comprar más productos en el mercado libre. No obstante estos objetivos y la positiva reacción de los agricultores, el gobierno les prohibió vender sus excedentes fuera de la zona donde residían y se proscribieron los intermediarios que compraban el producto de estos agricultores para venderlo en los mercados. Estas normas conspiraban de modo evidente contra las propias metas de competitividad del gobierno y reducían los precios y los beneficios de los campesinos. Los intermediarios permitían a los agricultores concentrarse en el cultivo de la tierra en lugar de invertir tiempo en transportar y vender sus productos en los mercados (especialmente cuando el excedente era pequeño), mientras que permitir a los agricultores la venta de sus productos fuera de sus zonas habría contribuido a corregir los desequilibrios del mercado. En 1982 la policía, alegando violaciones de la normativa gubernamental, arrestó a numerosos vendedores de los mercados libres y confiscó sus productos. Castro acusó a los agricultores de cobrar precios muy altos y obtener jugosas ganancias (aumentando con ello la desigualdad), amenazó con incrementar sus impuestos y fijar precios máximos para sus productos y pronosticó la desaparición de las fincas privadas (y los mercados libres) a largo plazo. Castro atacó también a los intermediarios que, decía, alquilaban camiones para el transporte de productos agrícolas y ganaban hasta 40.000 pesos anuales vendiéndolos en los mercados campesinos (el salario medio anual en aquel momento era de 2.160 pesos). Dos economistas cubanos sostuvieron, no obstante, que los beneficios devengados por los mercados libres compensaban sus supuestos fallos, algunos de los cuales quedaban controlados por los impuestos. Además, argumentaban que los elevados precios de los productos en dichos mercados estaban causados parcialmente por la insuficiente oferta de los sectores del Estado y las cooperativas, así como la inflación de 1980-81, y por las normas extremadamente burocráticas del gobierno para controlar los mercados. Estos últimos se mantuvieron (hasta 1986) con algunas modificaciones menores, pero con graves perjuicios para los incentivos de los campesinos y su confianza en el gobierno.

En 1980-81 el gobierno también legalizó y fomentó el empleo autónomo en servicios; por ejemplo, peluqueros, sastres, jardineros, taxistas, fotógrafos, electricistas, carpinteros y mecánicos, junto a profesionales como arquitectos, ingenieros, médicos y dentistas. Bajo un nuevo sistema de libre contratación de mano de obra, las empresas estatales podían firmar contratos con artesanos y trabajadores autónomos, proporcionándoles insumos a cambio de un 30 % de sus beneficios. En ciudades gran-

des como La Habana los pequeños fabricantes de manufacturas empezaron a vender sus productos en los mercados libres. Como en otras cuestiones, el gobierno emitía mensajes contradictorios: impuso una contribución sobre los ingresos de los autónomos, recomendó la creación de cooperativas de autónomos para facilitar el cobro de impuestos y otras formas de control y en 1982 lanzó un fuerte ataque contra aquellos trabajadores autónomos que estaban haciéndose «ricos». El ataque lo encabezó Castro, que ofreció diversos ejemplos de conducta impropia: ingenieros y arquitectos que cobraban de 800 a 1.000 pesos por un proyecto de reforma de vivienda, algo que consideraba una «prostitución del concepto de empleo autónomo»; había gerentes del Estado que contrataban equipos de trabajadores especializados para hacer trabajos privados en su tiempo libre, lo cual criticó calificándolo de «violación repulsiva» de las normas y «ejemplo de corrupción»; en el mercado libre de La Habana los artesanos vendían artículos hechos a manos a precios diez veces superiores a los oficiales (un par de pantalones a 90 pesos, que era la mitad del salario medio mensual), lo cual debía cesar —dijo Castro— para evitar que la ciudad se viera atestada de puestos de venta. Algunas de estas actividades podían considerarse técnicamente ilegales, pero otras no lo eran. En cualquier caso, demostraban que había necesidad de aquellos bienes y servicios y que el público estaba dispuesto a pagarlos a precios elevados. Pero Castro acusó a las pequeñas empresas de ladrones, de haberse convertido en una «nueva burguesía con actitudes capitalistas», un «lumpen proletariat viciado que estaba corrompiendo a las masas». Así pues, fueron arrestados 250 autónomos, y Castro propuso que se duplicaran los impuestos sobre las rentas de los así empleados. Como en el caso de los mercados libres agrícolas, los correctivos aplicados al empleo autónomo y los pequeños empresarios fueron perniciosos para los incentivos y una contradicción del objetivo gubernamental de mejorar la oferta y calidad de los bienes y servicios en pro de la población.

Finalmente, en la primera mitad de los años ochenta el Estado relajó las anteriores restricciones sobre la construcción de viviendas privadas, y esta política, unida a la expansión del empleo autónomo y a un mejor acceso a los materiales de construcción, generó un robusto mercado de la vivienda en 1980-85 y el mayor auge de la construcción residencial en la historia de la Revolución: dos tercios de las viviendas construidas en este período eran privadas (Mesa-Lago, 1982, 1983, 1988*a*, 1990*a*; CEE, AEC, 1980 a 1988 [cuadro 25]).

b. *Planificación*

La planificación central volvió a instaurarse en esta etapa como principal mecanismo económico, quedando subordinados a ella los planes mini, sectoriales y especiales. Desde 1973 se elaboraron y aplicaron macroplanes anuales, y también un modelo económico global (1973-75), el primer y segundo plan quinquenal (1976-80 y 1981-85) y un plan de desarrollo a veinte años (1980-2000). Desde 1977 toda la actividad estadística quedó centralizada en el Comité Estatal de Estadística (CEE), y se incrementó el uso de técnicas informáticas con equipos importados del COMECON y de Europa occidental. Se produjo una renovación de los estudios económicos, de contabilidad y de gestión administrativa, todos los cuales habían sufrido un fuerte retroceso en 1966-70; la matriculación en estas especialidades aumentó siete veces en 1970-76, y en 1976 se crearon una Escuela Nacional de Gestión y tres escuelas provinciales.

El nuevo modelo económico —que aceptaba las «condiciones objetivas» de la etapa socialista— estaba encarnado en el Sistema de Dirección y Planificación de la Economía (SDPE) que empezó a aplicarse en 1976, y cuya entrada en vigor plena a escala nacional estaba programada para fines de 1980. El SDPE era una versión moderada del modelo de tímida reforma económica introducido en la URSS en 1965 con malos resultados, y muchos de sus fines y características se asemejaban a los del modelo pragmatista parcialmente ensayado en 1964-66: i) descentralización de las empresas del Estado subdividiéndolas en unidades menores (el número de empresas aumentó de 300 a 3.000 en 1968-79; ii) transferencia de muchas decisiones del centro a los gerentes de empresa; iii) mayor influencia de los precios de escasez en las asignaciones (se proyectaba una reforma global de precios); iv) total sustitución de la financiación presupuestaria por la autofinanciación; v) utilización de los beneficios como principal indicador de los resultados de gestión, junto a otros indicadores como producción, costes, calidad y productividad; vi) reintroducción del interés y la depreciación, así como mayor uso de impuestos y reducción de subvenciones, y vii) reforzamiento de las normas de trabajo y las escalas salariales y reintroducción de incentivos materiales, así como creación de un fondo de incentivo colectivo en la empresa basado en la rentabilidad de la misma.

Cuando llegó 1980, año fijado para la entrada en vigor a escala nacional del SDPE, ninguno de sus elementos se encontraba en pleno funcionamiento; por ejemplo: las normas de trabajo afectaban al 59 % de la mano de obra, y la fecha de su plena aplicación se aplazó a 1982; el fondo de incentivo colectivo funcionaba sólo en un 7 % de las empresas

y fue retrasado hasta 1981-85, y la reforma de los precios no se había emprendido y se pospuso hasta 1986-90.

Anualmente se realizaban evaluaciones de la puesta en práctica de SDPE, y tenemos información de las efectuadas en 1979, 1980 y 1985. Estas evaluaciones (así como varios discursos de Castro en 1986) revelaron serios fallos en el SDPE, algunos de ellos expuestos una y otra vez en las sucesivas evaluaciones, sin indicios de mejora. Veamos a continuación un resumen de dichos defectos. *Generales*: poca disciplina en el cumplimiento del plan y en la aplicación de su metodología; datos incongruentes, poco fiables y obsoletos; cambios constantes, graves incompatibilidades y falta de coordinación entre los insumos asignados y las metas, y metas agregadas cuyo cumplimiento exigía mayor desagregación y la aplicación de medidas operativas específicas. *Indicadores directrices*: su número superaba los 500 y no estaban integrados en un sistema unificado, con el resultado de falta de coherencia entre ellos, y entre ellos y otros indicadores (como el presupuesto, el plan financiero); los indicadores eran definidos centralmente, restringiendo con ello la autonomía del gerente de empresa; los indicadores de producción física (como los equilibrios materiales y las metas de producción bruta) tenían prioridad sobre los indicadores financieros (beneficios, costes). *Toma de decisiones*: los fallos mencionados impedían la descentralización y generaban desconexión entre productores y consumidores y falta de responsabilidad por parte de los productores en su calidad de oferentes; a su vez, estos fallos provocaban una constante demanda de recursos (cuanto mayor el insumo con que cuenta un gerente, más fácil es cumplir las metas), lo cual originaba recursos inactivos en la empresa y mayores importaciones. *Inventarios*: más de un tercio de las empresas no hacían inventario y la mitad no entregaba listas de inventarios no utilizados, a consecuencia de lo cual algunas empresas fueron cerradas por falta de unos suministros que permanecían inutilizados en otras empresas. *Contratos*: el incumplimiento de contrato entre empresas fue muy común, en gran medida porque no se castigaba a los infractores, creando con ello retrasos y una reacción en cadena de cuellos de botella. *Precios*: en 1980 fueron juzgadas 500 violaciones de los precios fijados por el Estado; por otra parte, debido a rigideces de los precios, en los inventarios se almacenaban mercancías pasadas de moda o poco atractivas y se perdían productos perecederos. *Calidad*: casi un tercio de las empresas carecían totalmente de controles de calidad en 1980, y un 90 % de los productos no cumplían los requisitos de calidad. *Burocracia*: las regulaciones alcanzaron niveles sin precedentes; por ejemplo, 102.047 normas de consumo material, 334 volúmenes para cubrir parcialmente los precios al por mayor, tres millones de normas laborales. *Personal*: en 1973-84 el personal administrativo

casi se triplicó (de 90.000 a 250.000); aproximadamente la mitad de los directores-gerentes de empresas y de agencias centrales no habían recibido formación en escuelas de gestión; la inflación de las nóminas y el gasto excesivo aumentaron los costes de producción y ello produjo incrementos en los precios. *Participación*: la retroalimentación y participación de los escalones más bajos en la elaboración y control del plan eran deficientes, formulistas y relegados a cuestiones marginales. *Prioridades*: las evaluaciones anuales señalaban cientos de defectos, pero no conseguían elaborar un plan de acción concreto ni establecer prioridades para resolverlos.

Las críticas anteriormente resumidas muestran claramente que el fracaso del SDPE era una buena medida atribuible a su propia complejidad e ineficiencia. Pero una causa más fue la resistencia de los líderes políticos y directores de agencias centrales a ceder parte de su poder y permitir que la tan necesitada descentralización se hiciera realidad. Aunque en esta etapa se avanzó mucho más en la planificación que en 1961-63 y en la reforma económica que en 1964-65, ambos procedimientos seguían sin llevarse a la práctica plenamente y persistían muchos de los antiguos vicios y defectos. Pero incluso si la combinación de plan central y leve reforma económica hubiera sido totalmente aplicada en Cuba, probablemente no habría tenido éxito, puesto que su modelo central soviético tampoco habría logrado sus fines (Mesa-Lago, 1982, 1983, 1988a, 1990a).

c. *Financiación*

Desde 1976 se esperaba que la autofinanciación fuera sustituyendo gradualmente a la financiación presupuestaria en la economía cubana, pero la fecha límite para lograr dicho objetivo fue aplazándose sucesivamente de 1980 a 1985. Además, las evaluaciones del SDPE dejaron al descubierto que la autofinanciación —cuando se aplicaba— se superponía formalmente sobre la financiación presupuestaria y que ésta seguía predominando en 1985. La fuente fundamental de financiación seguía siendo el presupuesto del Estado en lugar de los propios recursos de la empresa y los créditos bancarios; el presupuesto promovía el gasto en lugar de reducirlo y los déficit empresariales se cubrían muchas veces mediante subvenciones del Estado. El sistema crediticio era en exceso complejo y engorroso y el reembolso de los préstamos bancarios no se efectuaba debidamente: en 1979 el pago del 20 % de los préstamos tenía un retraso respecto a su vencimiento de 45 a 90 días, y en 1980 esta proporción se elevó al 26 % por un total de 1.400 millones de pesos en

préstamos impagados. Como ocurrió en 1964-66, la autofinanciación estaba adulterada por elementos de financiación presupuesaria.

A comienzos de este período se dio más importancia —al menos retóricamente— a la eficiencia de la inversión que a su volumen. Después se declaró que se habían incrementado tanto la formación de capital como su productividad. Pero muchos de los anteriores defectos inversores —que reducían la eficiencia del capital— seguían detectándose en la evaluación del SDPE de 1980; por ejemplo, el número excesivo de proyectos de inversión, la ausencia de una base de investigación para el plan de inversión, una excesiva centralización de la inversión sin una coordinación adecuada, falta de garantía de los elementos e importaciones necesarios, falta de una política de depreciación y sustitución y una deficiente valoración objetiva de la eficiencia de los proyectos de inversión. Para el plan de 1981-85 parecía existir un compromiso respecto a las siguientes medidas correctivas: evitar el reparto de la inversión entre demasiados proyectos (dado que muchos de ellos habían quedado previamente inconclusos debido a la insuficiencia de fondos), concentrar la inversión en un número reducido de proyectos importantes, terminar los proyectos iniciados en 1976-80 antes de emprender otros nuevos y reducir el período de maduración de la inversión. Pese a esto, en la evaluación del SDPE de 1985 (así como en las críticas de Castro de 1986) se observó que dichos objetivos no habían sido cumplidos; por ejemplo, los gerentes de empresa preferían iniciar nuevos proyectos de inversión con objeto de cumplir los planes más fácilmente, en lugar de terminar los proyectos vigentes; en consecuencia, la conclusión de dichos proyectos se aplazaba hasta once, diecisiete o veintidós años. Más aún, el SDPE incluyó inicialmente un «fondo de desarrollo» (confirmado por el 2.º Congreso del PCC) nutrido por una parte de los beneficios empresariales y a ser utilizado para reinvertir en su expansión, pero dicho fondo fue abandonado y dichos recursos absorbidos por el presupuesto del Estado. Por tanto, la inversión no se hizo de acuerdo con la rentabilidad de la empresa, sino mediante decisiones centrales según necesidades y prioridades nacionales (Mesa-Lago, 1982, 1983, 1988a, 1990a).

d. *Estabilidad y precios*

El presupuesto del Estado fue reintroducido en 1978 tras haber sido abandonado durante casi un decenio, y se realizó un intento de promover el equilibrio fiscal. Con el fin de reducir el exceso de masa monetaria en circulación, desde el comienzo de los años setenta se tomó la decisión de rebajar la demanda de consumo y aumentar la oferta de artículos.

Para reducir la demanda se tomaron varias medidas: se abandonaron o se aplazaron algunas de las promesas hechas a fines de la década de 1960, entre ellas las de anular la abolición de los alquileres de viviendas y elevar el salario mínimo; se recortaron algunas medidas inflacionarias vigentes, como la concesión del 100 % del sueldo a los trabajadores de vanguardia enfermos o jubilados; se fijaron tarifas para algunos servicios sociales, como las llamadas en teléfonos públicos y las guarderías, que eran anteriormente gratuitos; y se elevaron los precios de ciertos bienes y servicios, entre ellos cigarrillos, cerveza, ron, electricidad, agua, las comidas de las cantinas obreras, el transporte a grandes distancias, los restaurantes y los clubs nocturnos. Para aumentar la oferta, el gobierno amplió la producción interior de algunos productos duraderos de consumo —por ejemplo, neveras, cocinas de gas, radios y ollas a presión— o su importación —por ejemplo, coches, aparatos de televisión, acondicionadores de aire y ventiladores— y aumentó sus precios significativamente. Además, se introdujo un mercado oficial paralelo en 1973 en que los productos excedentes se vendían a unos precios fijados por el Estado, que respondían a la oferta y la demanda, de tres a ocho veces superiores al precio de racionamiento de dicho producto. Por último, en 1980 empezaron a venderse excedentes en los mercados libres campesinos a precios de equilibrio, de dos a cuatro veces superiores al correspondiente precio de racionamiento.

En 1972 se declaró que se había reducido el excedente monetario y que el dinero empezaba a tener algún valor. Pero la inflación mundial, acelerada tras 1973 por la crisis del petróleo, tuvo su impacto en Cuba y fue oficialmente reconocido que, desde 1976, había empezado a aumentar nuevamente el exceso de dinero en circulación. Ello obligó a detener una serie de medidas que habrían impulsado aún más las presiones inflacionarias, como las primas al trabajo de alto riesgo, el pago de vacaciones acumuladas no utilizadas y otras. Pero la segunda crisis del petróleo de 1979, unida a políticas expansionistas domésticas, incrementaron el excedente de masa monetaria en circulación en la década de 1980.

Como ya hemos comentado, los precios de la mayoría de los bienes de consumo se congelaron a comienzos de los años sesenta y permanecieron en gran medida inalterados durante casi dos decenios. Cuba, un país pequeño fuertemente dependiente de las importaciones y la inflación mundial, creció considerablemente en aquellos años. Por consiguiente, para 1980 se había acrecentado fuertemente el desfase entre los precios mundiales y los interiores. Estos últimos estaban tan distorsionados que llegaron a ser en buena medida inoperantes para planificadores y gerentes. Por ejemplo, se convirtió en una tarea casi imposible evaluar

la eficiencia en la asignación de inversiones y la elección adecuada de exportaciones e importaciones. Además, las subvenciones públicas a los bienes de consumo (para proteger a los grupos de rentas bajas y evitar la desigualdad en la distribución) eran muy fuertes: 1.887 millones de pesos en 1976-80 u 11 % del PSG medio de aquellos años.

En las décadas de 1970 y 1980 se produjo un intento de aminorar en alguna medida el desfase de los precios: los mercados paralelo y libre-campesino eran instrumentos para restaurar el equilibrio de los precios y proporcionar incentivos a los grupos de renta media y alta. Sin embargo, los grupos de renta baja no podían realmente pagar los precios de estos dos mercados y aún menos los del mercado negro; los buenos restaurantes de La Habana eran prohibitivos para el asalariado medio y el aparato de televisión o la nevera más baratos costaban el equivalente al sueldo medio de cinco meses. En 1981 se efectuaron amplias reformas de los precios al por mayor y al detalle; ello generó aumentos de precio —que iban del 7 al 525 %— en 1.510 artículos de consumo racionados, entre ellos la mayoría de alimentos y productos manufacturados de primera necesidad, así como en muchos servicios (el incremento medio no ponderado de los precios era del 65 % y el incremento medio oficialmente reconocido era del 10 %). Ahora bien, el aumento de los precios no eliminó del todo las subvenciones del Estado, que en 1982-85 se estimaron en 671 millones de pesos.

Los datos disponibles sobre la distribución del comercio minorista de artículos de consumo por oferente son contradictorios. En 1970 aproximadamente el 90 % de estos bienes se distribuía mediante el racionamiento; esta proporción descendió gradualmente mientras se incrementaba la parte del mercado paralelo y se introducían los mercados libres campesinos. Las estimaciones de la parte correspondiente al mercado paralelo a mediados de los años ochenta oscilan entre el 14,4 y el 58,7 % (incluyendo esta última cifra las ventas libres o no racionadas en tiendas del Estado), mientras que las cifras de la parte de racionamiento van del 20 al 40 %; hay acuerdo general en cuanto a que la parte correspondiente a los mercados libres campesinos era reducida, alrededor de 1,3 %. Yo he estimado de modo aproximado las siguientes proporciones en 1985: mercado paralelo, 15 %; mercado campesino, 1 %; racionamiento y otros, 84 % (probablemente desagregado en 60 % racionamiento y 24 % venta libre estatal [Mesa-Lago, 1982, 1983, 1988a]).

e. *Estrategia de desarrollo*

La estrategia económica de esta etapa (y hasta el año 2000) siguió estando fundamentalmente basada en el azúcar, pero con un enfoque más equilibrado. El plan consistía en producir todo el azúcar posible, pero sin que los recursos materiales y humanos asignados a la industria azucarera restaran recursos a otros sectores económicos. Además, la producción de azúcar se basaría en avances tecnológicos —incluidas la mecanización de la zafra y la expansión/modernización de la capacidad de molienda— en lugar de la movilización laboral. En el sector no azucarero se centró el énfasis en la pesca; se realizaron mayores esfuerzos para desarrollar la producción de cítricos, níquel y varias ramas industriales (electricidad, cemento, acero, textiles) y se reanimó el sector turístico.

En el sector azucarero pueden identificarse tres períodos en esta etapa correspondientes a los planes quinquenales de 1971-75, 1976-80 y 1981-85. Durante el primer período se logró el regreso de técnicos gracias a incentivos adecuados, mejoraron la recopilación y fiabilidad en las estadísticas, se amplió el uso de computadoras, se redujo el empleo de cortadores de caña voluntarios (en 1975 había 174.000 cortadores menos) y se redujo significativamente la duración de la zafra y de la molienda. Para resolver los problemas del menor potencial humano y la abreviación de la zafra, los cubanos recurrieron primero, en 1971, al sistema australiano de quemar y cortar la caña, porque la caña quemada no tenía que ser despojada de hojas, pesaba menos y su transporte era más barato. Pero para que este sistema funcionara eficazmente había que nivelar el terreno, plantar una variedad especial de caña, modificar la recogida mecánica y moler rápidamente la caña quemada para evitar la pérdida de azúcar. Las múltiples dificultades para cumplir dichas premisas produjeron un sistema australiano modificado que se aplicó ampliamente en la zafra de 1972 con resultados desastrosos, por lo que los cubanos entonces recurrieron a la mecanización. Después de ensayar sin éxito diversas cosechadoras, en 1972 un grupo de ingenieros soviéticos y cubanos diseñaron una nueva cosechadora (KTP-1) que se probó con éxito en 1973, se modificó en 1974 para producir una versión mejorada (KTP-2) y empezó a ser fabricada en Cuba en 1977 con algunos de sus componentes esenciales traídos de la URSS. La siega mecánica aumentó del 1 al 26 % en 1970-75 (incluso antes de iniciarse la fabricación de las KTP); el arado, del 40 al 53 %; la limpieza, del 25 al 34 %, y la recogida, del 83 al 96 %. Estos avances permitieron (tras un acusado descenso de producción en 1971-72 debido al fracasado experimento de quemar) que aumentaran lentamente la producción y los rendimientos industriales del azúcar en 1973-75.

El plan de 1976-80 contemplaba una zafra de 8,7 millones de toneladas en 1980 sin el quebranto sufrido en 1970. La tarea exigía una inversión de 700 millones de pesos para construir cuatro nuevos molinos de azúcar, reconstruir los 21 molinos existentes y modernizar otros con objeto de añadir una capacidad de molienda de 1,5 millones de toneladas. Además, era necesario expandir el área de tierra cultivada e irrigada, replantar toda la caña de azúcar con semillas de mayor rendimiento, aumentar el uso de abonos y pesticidas y mecanizar al 100 % el cortado de la caña. Finalmente, el plan requería la reparación de 9.500 kilómetros de vía férrea, la plena mecanización del transporte por carretera, la construcción de 15 terminales portuarias (para automatizar la carga a granel para la exportación) y la construcción de 16 refinerías de azúcar. Estas ambiciosas metas no se materializaron: en 1980 sólo se habían terminado dos de los cuatro nuevos molinos de azúcar, pero ninguno de ellos a tiempo para la zafra; la modernización de los molinos existentes no cumplió los plazos y las frecuentes averías de los antiguos molinos se convirtieron en una rémora; se produjeron retrasos en la importación de equipos y la producción de la KTP-2 fue aproximadamente la mitad del objetivo previsto. Aunque todo el trabajo de arado y recogida de la caña estaba prácticamente mecanizado en 1980, sólo lo estaba el 45 % del cortado de la caña y alrededor del 50 % de la limpieza. Para resolver algunos de estos problemas se ampliaron nuevamente los períodos de zafra y de molienda y descendieron los rendimientos industriales. El golpe final al plan fue la rápida propagación de una plaga del azúcar (roya de la caña, un hongo que paraliza el crecimiento de la planta) que generó una pérdida de 1,5 millones de toneladas de azúcar en la cosecha de 1980. La plaga provenía de Angola y se propagó por todo el Caribe; en Cuba atacó a una de las variedades de caña de alto rendimiento plantada en un tercio de la tierra cañera. Aunque la producción media de azúcar aumentó ligeramente durante este período, los retrasos del plan unidos a la epidemia impidieron el cumplimiento de las ambiciosas metas.

En 1980-85 se fijó inicialmente una meta de 10-10,5 millones de toneladas de azúcar para 1985, pero ésta fue después rebajada a 9,5-10 millones de toneladas. Con el fin de alcanzar dicha meta, debían cumplirse varias condiciones: había que extraer toda la semilla de caña infectada de hongos, desinfectar todos los campos y plantar nuevas variedades de caña resistentes a la plaga; había que construir al menos 7 nuevos molinos azucareros, ampliar 23 y modernizar 18 para obtener una nueva capacidad conjunta de 2-2,5 millones de toneladas; y el cortado y limpiado de la caña tenía que quedar plenamente mecanizado. La mayoría de estas premisas no se llegaron a cumplir: además de los cuatro

molinos incluidos en el plan de 1976-80, terminados a comienzos de los años ochenta, solo se construyeron otros tres molinos más en 1985-86, y sólo un 62 % del cortado de la caña estaba mecanizado en 1985 (no se dieron datos sobre la limpieza). Más aún, los nuevos molinos son bastante grandes para estándares cubanos, y se ha demostrado que estos molinos tienden a dar resultados menos satisfactorios (con respecto a utilización de la capacidad y eficiencia técnica) que los molinos menores, debido, al parecer, a una mayor frecuencia de averías y a una programación precipitada de los tiempos inactivos. Pese a no lograrse el objetivo de producción de 1985, la producción media anual de azúcar aumentó en este período, y sin embargo el rendimiento industrial siguió descendiendo debido a la mayor duración de los períodos de zafra y molienda (Mesa-Lago, 1982, 1983, 1988a; Radell, 1987; Pérez-López, 1991).

En la agricultura no azucarera las principales medidas consistían en expandir gradualmente el sector estatal y aplicar técnicas modernas, como la mecanización y los abonos. Hasta el fin de la década de 1970 los agricultores privados tuvieron también que enfrentarse a los bajos precios del acopio. Varias epidemias afectaron gravemente a las cosechas de tabaco y café y a la cría porcina. Los resultados de la colectivización fueron desastrosos en los cultivos de difícil mecanización, tales como el tabaco, el café y los tubérculos autóctonos. Las tierras privadas de tabaco se redujeron de un 92 a un 77 % en 1963-76 y lo mismo ocurrió a la producción; en 1978 el gobierno intentó rectificar el daño causado incrementando los precios del acopio, facilitando más créditos a los agricultores privados y elevando los sueldos de los agricultores estatales. Pero una epidemia de «moho azul» (un hongo endémico en Cuba durante veinte a treinta años, que se propagó rápidamente debido a las altas temperaturas y las fuertes lluvias) destruyó hasta el 27 % de la cosecha de 1978-79 y el 95 % de la de 1979-80. Como consecuencia, en 1980 Cuba tuvo que importar tabaco, cerrar fábricas de puros y endurecer el racionamiento de productos del tabaco. Los incentivos económicos contribuyeron a la recuperación de la producción después que la plaga estuvo controlada, pero no a incrementar sostenidamente la producción en lo sucesivo. En el café la tierra privada descendió del 82 al 45 % en 1967-78, generando un precipitado descenso en la producción; como en el tabaco, los incentivos económicos no fueron lo bastante fuertes para fomentar incrementos significativos de producción. Dos tubérculos importantes en la dieta cubana (malanga y yuca) siguieron la misma pauta. Por el contrario, la producción de arroz y patatas, mayoritariamente cultivados en el sector público y en gran medida mecanizados, aumentó sostenidamente. Una considerable inversión en cítricos generó un impresionante aumento de producción en los años ochenta, pero la selección

y calidad de estos frutos era deficiente y fuerte la competencia mundial, de ahí que prácticamente todas las exportaciones de cítricos cubanos fueran al COMECON.

Tres informes publicados en Cuba en la década de 1970 (realizados por expertos cubanos y extranjeros) señalaron las causas de los malos resultados de la ganadería: los piensos no eran suficientemente baratos y nutritivos, lo cual resultaba en una subalimentación y pérdida de peso de la res, en altos costes de producción y en falta de rentabilidad de la ganadería vacuna; las enfermedades del ganado se propagaban rápidamente (debido a desorganización y negligencia), provocando con ello un incremento de la mortalidad, y el programa de inseminación artificial tenía graves defectos que ocasionaron un descenso en las tasas de fertilidad. Además, el número de reses criadas en granjas privadas disminuyó junto al número de dichas granjas. Finalmente, una plaga de peste porcina o fiebre africana del cerdo eliminó totalmente a los cerdos de una provincia e infectó a los de otras dos. El éxito de la avicultura continuó en este período con ampliación de las instalaciones.

En la primera mitad de la década de 1970 se mantuvo el crecimiento de la flota pesquera cubana: para 1976 se habían importado 262 modernas naves de altura y los astilleros cubanos habían construido 6.000 naves de madera pequeñas y medianas, 400 naves medianas de armadura metálica y 90 naves de grandes de acero. También se ampliaron las instalaciones de conservación frigorífica, enlatado, congelación y elaboración de harina de pescado. De este modo, la flota pesquera de Cuba se convirtió en la séptima de América Latina y las capturas de pescado aumentaron sostenidamente. Pero en la segunda mitad de la década de 1970 hubo contracción y oscilaciones erráticas en la producción, debidas principalmente a la universalización de la zona marítima de 200 millas, que restringió el acceso de la flota cubana a aguas de pesca tradicionales y forzó su traslado a zonas más lejanas, con mayores costes y beneficios menos previsibles. Además, en 1979 Perú anuló un provechoso acuerdo pesquero con Cuba y se suspendió el acuerdo extraoficial de pesca Estados Unidos-Cuba de 1978.

El plan inicial del níquel implicaba cuadruplicar la producción a comienzos de los años ochenta, convirtiendo con ello a Cuba en el cuarto productor y segundo exportador de níquel del mundo. El valor de la producción de níquel sería un 30 % de la producción de azúcar y generaría el equivalente al 50 % de las exportaciones de azúcar en divisas. Las premisas para lograr esta meta eran: la modernización de las dos plantas existentes, de construcción estadounidense (Nicaro y Moa), con ayuda soviética para incrementar la producción conjunta hasta 47.000 toneladas en 1980; la construcción de una tercera planta (Che Guevara)

en Punta Gorda, con ayuda del COMECON, con una producción prevista de 30.000 toneladas en 1980, y la construcción de una cuarta planta en Camariocas, también con ayuda del COMECON, y una previsión de 30.000 toneladas. La producción conjunta prevista de las cuatro plantas a comienzos de los años ochenta iba a ser de 147.000 toneladas, casi cuatro veces más que la producción media de los años setenta. Pero los retrasos y los problemas técnicos en la construcción forzaron sucesivos aplazamientos de esta meta (cuadro 8). Por otra parte, la producción de níquel en Cuba estaba lastrada por la baja calidad del mineral y el alto coste relativo de su extracción: el níquel está mezclado con otros elementos y su variedad es la peor de los 27 minerales de níquel existentes. Además, el mineral hallado en la isla son lateritas que se separan por lixiviación, mientras que en otros países exportadores son sulfitos que se separan por combustión; no sólo contribuye el sulfuro al proceso de combustión, reduciendo gastos, sino que esta tecnología se ha hecho cada vez más competitiva. Cuba utiliza predominantemente la lixiviación con agua y carbonato de amonio, una técnica menos eficiente que otras existentes en Occidente pero que había que adquirir con divisas, de las que Cuba carecía y que la URSS era reacia a gastar. En 1979 Castro reconoció francamente que la industria cubana del níquel estaba arruinada debido a su desfasada tecnología. Por último, la comercialización internacional del níquel está controlada por un oligopolio en el cual tiene Estados Unidos un papel decisivo, haciendo extremadamente difícil la entrada de Cuba (además, la presión norteamericana sobre algunos compradores de níquel cubano resultó en la cancelación de importaciones). En cuanto al petróleo, unos diez nuevos depósitos fueron descubiertos en los años setenta, pero ninguno de ellos permitía la producción a gran escala (Mesa-Lago, 1982, 1990a).

Los planes para la industria establecieron metas de producción igualmente ambiciosas para 1985, basadas en la prometida ayuda soviética y del COMECON. La producción eléctrica iba a alcanzar los 15.000 millones de kilovatios-hora (un incremento del 50 % frente a 1980) con la adición de cuatro nuevas plantas térmicas. Más aún, con ayuda soviética, Cuba iba a construir una planta nuclear en Juraguá-Cienfuegos, con cuatro reactores para que la producción aumentara un 50 %; pero el descubrimiento de que el emplazamiento de la planta estaba en una región sísmica, unido a dificultades técnicas, produjeron considerables retrasos. La producción prevista de cemento era de aproximadamente 5 millones de toneladas (un incremento del 76 % frente a 1980), basada en la construcción de dos nuevas plantas con ayuda de la RDA. Se esperaba que la producción de acero llegara a 1,6 millones de toneladas (un aumento de más de seis veces frente a 1980), con la ampliación de la fábrica exis-

tente y la construcción de una nueva fábrica en Holguín con ayuda soviética. La producción textil se elevaría a 325 millones de metros cuadrados (un incremento de más del doble frente a 1980) con la construcción de dos nuevas plantas con ayuda soviética y la ampliación de la ya existente.

En la década de 1970 Cuba inició un serio esfuerzo para atraer turistas a la isla. A éste contribuyeron: la afluencia de canadienses y europeos occidentales, una breve anulación de las barreras estadounidenses para los turistas de este país (durante la administración Carter), la autorización de Cuba para que los cubano-norteamericanos pudieran visitar la isla (y lo hicieron más de 100.000 en 1979-80) y una modesta afluencia de turistas latinoamericanos cuando fueron restablecidas las relaciones diplomáticas y comerciales de Cuba con países de dicha región. El objetivo para comienzos de los años ochenta era recuperar el número pre-revolucionario de 300.000 turistas, que generarían rentas por el doble del valor de las capturas pesqueras y tres veces el de la producción de níquel. En 1978 Cuba había construido 23 hoteles pequeños; para 1980 estaba programada la inauguración de otros 13 y otros 13 más para 1985. Se sacrificó el turismo interior para proporcionar habitaciones a los turistas extranjeros y obtener beneficios en divisas. En 1982 una ley de inversión extranjera permitió las empresas mixtas, otorgando concesiones especiales en el turismo. Ahora bien, dos sucesos de los años ochenta contrajeron el *boom* turístico de 1979-80. El éxodo masivo de 125.000 cubanos que salieron de Mariel en abril de 1980, parcialmente atribuido al efecto demostrativo de las visitas de los exiliados, generó una acusada reducción de éstas a partir de entonces. Y la administración Reagan promulgó una resolución prohibiendo a los ciudadanos estadounidenses viajar a Cuba en calidad de turistas.

Al mismo tiempo que Cuba se empeñaba en un nuevo y ambicioso esfuerzo en pos del desarrollo y la diversificación, se involucró también —desde 1975— en acciones militares bélicas en África y otros países. Ello ocurrió en un momento de la administración Carter cuando la amenaza militar norteamericana había disminuido significativamente, empezaban a restablecerse las relaciones diplomáticas y se habían firmado varios acuerdos económicos. Y, sin embargo, la proporción de presupuesto del Estado cubano asignado a defensa, que era del 8,4 % en 1965 (y probablemente más bajo en 1975), aumentó a 8,9 en 1979. La administración Reagan volvió a incrementar la amenaza militar contra Cuba, y ésta reaccionó duplicando sus milicianos y acrecentando la parte militar del presupuesto hasta un 11,6 % en 1984 (los gastos de la milicia no se incluyen en el presupuesto). Así pues, unos recursos que podían haberse dedicado al desarrollo se gastaron en guerras exteriores y defensa interior (Mesa-Lago, 1982, 1983, 1988a, 1990a).

f. *Sector exterior*

Durante esta etapa la jefatura cubana aceptó un grado mucho mayor de integración y dependencia de la URSS, a fin de obtener una ayuda desesperadamente necesitada para salvar la economía de la isla del desastre de 1970. El cambio comenzó precisamente aquel año, cuando ambos países establecieron una Comisión Intergubernamental para la Cooperación Económica y Científico-Técnica, y la URSS prometió una ayuda sustancial. En 1972 Cuba pasó a ser miembro de pleno derecho del COMECON, recibiendo categoría de miembro especial en tanto que país en vías de desarrollo, lo cual incluía tratamiento preferente comercial por parte de los miembros desarrollados. En aquel mismo año cuatro acuerdos soviético-cubanos otorgaron concesiones y ayuda significativos a la isla: i) se aplazó hasta 1986, sin intereses, el pago de la deuda cubana con la URSS contraída en 1960-72, deuda que debía pagarse en veinticinco años; ii) se concedió un crédito para cubrir los déficit comerciales cubanos con la URSS de 1973-75, cuyo pago se aplazó también hasta 1986, sin intereses; iii) se aprobó un préstamo de desarrollo (362 millones de dólares a pagar a lo largo de veinticinco años comenzando en 1976) para la mecanización de la zafra, la expansión del níquel, los textiles y la electricidad, prospecciones geológicas, etc., y iv) se fijaron precios subvencionados para el azúcar y el níquel cubanos para 1973-75. En este último período se firmaron varios acuerdos bilaterales y se concedió un nuevo préstamo soviético (387 millones de dólares) para desarrollo de los sectores arriba especificados y para la ampliación y modernización de los molinos azucareros, la construcción de la fábrica de cosechadoras de caña, la producción de aparatos de televisión y demás.

En 1976 se firmó el primero de una serie de acuerdos soviético-cubanos quinquenales económicos y comerciales (1976-80). Éste establecía un aumento del doble en el intercambio comercial y precios fijos subvencionados por el azúcar, el níquel y el petróleo. Otros pactos firmados en aquel año supusieron nuevas ayudas soviéticas para la construcción de una fábrica de acero y de la planta nuclear, así como para otros proyectos industriales y agrícolas (por un total de 1.500 millones de dólares). Además, se ajustó el valor de las importaciones cubanas de la URSS al valor de las principales exportaciones cubanas para reducir el déficit comercial de Cuba. Pasados cuatro años, no obstante, en 1979, este mecanismo de ajuste fue abolido.

En 1981-85 las relaciones económicas soviético-cubanas alcanzaron su cenit con la firma de numerosos acuerdos: i) un plan decenal del COMECON (1981-90) para el desarrollo económico y científico-tecnológico de Cuba (concediéndole préstamos a bajo interés) centrado en el

azúcar, el níquel (870 millones de dólares sólo para éste), los cítricos, la energía nuclear y termoeléctrica y las prospecciones geológicas; ii) tres acuerdos con el COMECON para 1981-90 que incluían nuevos créditos por un total de 1.800 millones de dólares (parte en divisas) a ser reembolsados en catorce años a bajo interés, para construir los nuevos molinos azucareros y modernizar los existentes, expandir la producción de níquel y cítricos y otros (parte del aumento en producción iba a ser enviado a la URSS y otros miembros del COMECON en calidad de pago por las inversiones realizadas); iii) un segundo acuerdo quinquenal económico y comercial (1981-85) con la URSS por el que se incrementaba el volumen de comercio, se concedían nuevos créditos para cubrir déficit comerciales, además de préstamos para el desarrollo, y se fijaban precios subvencionados para dicho período, y iv) un acuerdo soviético-cubano de cooperación a largo plazo (1985-2000), cuya finalidad era fortalecer la integración de Cuba en el COMECON y su independencia de las economías de mercado, la creación de empresas mixtas soviético-cubanas y exportaciones conjuntas a terceros países, la promoción de las exportaciones cubanas, el incremento de la eficiencia de la utilización cubana de la ayuda socialista, así como el ahorro en combustible e insumos y logro de la autosuficiencia de la isla en alimentación. El acuerdo de 1985-2000 se firmó en 1984, cuando la URSS empezaba a enfrentarse a severas limitaciones económicas y los déficit comerciales de Cuba alcanzaron niveles históricos. Hacia finales de aquel año Castro declaró que se iba a conceder absoluta prioridad a las inversiones que incrementarían las exportaciones cubanas a la URSS y el COMECON, y que iba a finalizar la práctica de desviar exportaciones destinadas a países socialistas hacia países de moneda firme (Mesa-Lago y Gil, 1989).

A consecuencia de estos acuerdos, el comercio de Cuba con el COMECON se elevó a más de cuatro quintas partes del total del volumen comercial de la isla en la primera mitad de la década de 1980, pero los déficit comerciales y las deudas siguieron aumentando, no obstante la mayor generosidad de las subvenciones soviéticas a los precios. Los precios del azúcar en el mercado mundial se dispararon —de 3,8 a 29,7 centavos la libra en 1970-74—, en gran medida debido a la fuerte disminución de la producción y las exportaciones cubanas en 1971-73. Puesto que el precio soviético pagado por el azúcar cubano se mantuvo inalterado en 6,1 centavos la libra en 1971-72, en este último año dicho precio cayó por debajo del precio del mercado mundial. La URSS incrementó sostenidamente el precio hasta 19,2 centavos en 1974, pero siguió siendo inferior al precio mundial, que alcanzó un récord histórico en aquel año. Como había ocurrido en 1963-64, Cuba aprovechó los altos precios del azúcar para desviar una parte considerable de su comercio con la URSS

y el COMECON hacia las economías de mercado desarrolladas. Pero un incremento del precio soviético hasta 26,4 centavos en 1975 (en un momento en que empezaba a descender el precio mundial debido a un aumento en las exportaciones de azúcar de Cuba y otros productores) restableció una razón entre precios soviéticos y mundiales de 1,29 a 1 a favor de Cuba. Esta razón llegó a ser de 3,79 a 1 en 1979 cuando los precios soviéticos se elevaron y los precios del mercado mundial descendieron, y por ello Cuba volvió a dirigir su comercio hacia la URSS y el COMECON. Pero en 1980 el precio mundial volvió a alcanzar un auge a causa de la epidemia de roya que afectó a Cuba y a otros productores de azúcar del Caribe, unido a una terrible cosecha de remolacha en la URSS y a un descenso de las exportaciones azucareras de Brasil y Perú. Pese a todo, un nuevo aumento del precio soviético lo mantuvo por encima del nivel del mercado mundial. En 1981-85 los precios soviéticos se elevaron y los precios mundiales decrecieron (a consecuencia de un aumento de la producción y las exportaciones mundiales, unido a la elaboración de un sucedáneo de la caña de azúcar en Estados Unidos y una disminución del consumo de azúcar en los países desarrollados), induciendo con ello una razón favorable de 11,87 a 1 a favor de Cuba, y reforzando su integración en el bloque soviético. Durante toda esta etapa los precios soviéticos del azúcar fueron considerablemente más altos que los precios del mercado mundial salvo en un período de dos años, y lo mismo puede decirse de los precios del níquel: en 1985 los soviéticos lo pagaban a más del doble de su precio mundial. Por último, desde 1971 la URSS vendió petróleo crudo a Cuba a precios considerablemente menores que el precio mundial (en 1974 el precio soviético era un 28 % del precio en fuerte alza del mercado mundial). Sin embargo, a causa de la contracción en la producción soviética de petróleo, en 1983 la URSS empezó a incrementar el precio cobrado a Cuba y esto, junto al descenso en los precios mundiales, prácticamente igualó los dos precios en 1985. Finalmente, la URSS hizo otra importante concesión: pagar a Cuba en divisas por todo el petróleo que ésta lograra ahorrar respecto al abastecimiento acordado; la URSS exportaba dicho petróleo a otros países y pasaba los beneficios a Cuba, que, a su vez, los registraba como «reexportaciones de petróleo». La combinación de todos estos subsidios resultó en un considerable beneficio neto para Cuba durante toda esta etapa.

La fuerte recuperación económica de Cuba en la primera mitad de los años setenta y el breve giro de su comercio hacia las economías de mercado desarrolladas en 1974-75 le dieron acceso a los créditos de Occidente y Japón. De ahí que la deuda (pública y privada) de la isla en divisas creciera rápidamente. Pero la mayoría de los préstamos tenían

un vencimiento corto (un año) y los intereses se dispararon. Esta difícil situación se agravó con la desaceleración económica de la isla en la segunda mitad de la década de 1970, y los préstamos en divisas empezaron a descender durante este período. La bajada de los precios mundiales del azúcar a comienzos de los años ochenta y la falta de préstamos nuevos en cantidad suficiente obligaron a Cuba a solicitar una nueva negociación de los términos de parte de su deuda en divisas en 1982. Aunque en 1983-84 se alcanzó un acuerdo con los acreedores para reprogramar los pagos del principal, dando cierto respiro a la isla, empezaron a escasear aún más los nuevos préstamos y prácticamente desaparecieron en 1986, intensificándose con ello la dependencia cubana del capital soviético. En 1982 Cuba intentó superar dicha dependencia promulgando una ley de inversión extranjera que permitía inversiones de las economías de mercado en forma de empresas mixtas con compañías domésticas, con concesiones especiales en el caso del turismo. Pero la ley no tuvo apenas respuesta en esta etapa debido a los temores extranjeros sobre la seguridad de la inversión, la falta de acceso al mercado interior, unos incentivos fiscales y financieros poco atractivos y la prohibición de Estados Unidos de invertir en Cuba (Mesa-Lago, 1982, 1983; Pérez-López, 1985; Mesa-Lago y Gil, 1989).

g. Trabajo y empleo

Durante esta etapa, pese a algunas esperanzas iniciales de mejora, no hubo cambios significativos en los objetivos sindicales y en el grado de autonomía frente al Estado. Por otra parte, fue oficialmente aceptado que la anterior política de creación de empleo no productivo, estímulos morales y movilización laboral había resultado en una baja productividad laboral y en una carga para la economía. La política laboral del SDPE insistía en el aumento de la productividad, de ahí que se reintrodujeran las normas de trabajo y las escalas salariales, se restablecieran los antiguos incentivos económicos y se crearan otros nuevos, se facilitara una asignación laboral más flexible, quedara prácticamente eliminado el trabajo voluntario y se crearan estímulos y mecanismos para liberar mano de obra sobrante. Pero estas políticas provocaron un descenso en la demanda de mano de obra, mientras los factores demográficos generaban una expansión de la oferta laboral, por lo que creció el desempleo declarado. El gobierno recurrió a diversas medidas para combatir este fenómeno, con resultado desigual.

A comienzos de los años setenta varios líderes políticos criticaron la decadencia de los sindicatos en la década de 1960, su falta de auténtica

democracia y la idea de la identidad de intereses entre los sindicatos y la administración de las empresas estatales. Para invertir esta tendencia, se prometieron elecciones libres y una vuelta a la función del sindicato como defensor de los derechos e intereses de los trabajadores. Sin embargo, el primer debate abierto sobre estas cuestiones desató una ola de críticas, lo cual indujo al gobierno a reconsiderar estas reformas y a tomar medidas para controlar la situación. En las elecciones locales celebradas en 1971 sólo participaron la mitad de los votantes previstos; había solamente 1,5 candidatos por puesto (en lugar de los prometidos dos o tres candidatos); casi la mitad de los dirigentes con cargos de La Habana fueron reelegidos y el gobierno criticó abiertamente a los nuevos elegidos que no satisfacían los criterios de lealtad y militancia revolucionarios. En el congreso nacional de la CTC celebrado en 1973 (después de más de siete años sin haber ninguno), una serie de tesis postuladas por el gobierno establecieron los límites del debate (excluyendo las críticas a la administración) y las resoluciones del congreso se votaron a mano alzada. Estas resoluciones y los estatutos sindicales dejaron inalterada la función y los objetivos del movimiento sindical y ratificaron el poder de la administración del Estado, mientras que las huelgas seguían estando virtualmente prohibidas. En 1975 una encuesta realizada entre líderes sindicales y obreros preguntaba cuál era la función más importante de los sindicatos: un 60 % contestó que la producción, 44 % la educación y sólo un 4 % la defensa de los intereses de los trabajadores.

El SDPE y el renovado énfasis en la productividad laboral indujeron el reforzamiento y endurecimiento de las normas de trabajo y su vinculación a las escalas salariales, así como una vuelta a los incentivos materiales. Se restablecieron los bonos por superar las normas de trabajo con cantidades mayores que en los años sesenta: un 1 % del aumento del salario base por cada porcentaje que excediera la norma. Cuando se restituyeron los pagos por horas extraordinarias, la anterior política de renuncia a este beneficio fue criticada alegándose que las horas extraordinarias no remuneradas eran más costosas que las horas ordinarias remuneradas, porque los obreros trabajaban mal, mientras que los costes de operación eran fijos. Volvieron los pagos extra por trabajos realizados en condiciones de riesgo o esfuerzo extremo, así como las gratificaciones en género y los derechos de autor. Un nuevo sistema de primas recompensaba a los grupos de trabajadores que superaban los estándares de calidad, ahoraban materias primas y energía, elaboraban nuevos productos o incrementaban la producción para la exportación. Para atraer mayor potencial humano y aumentar la productividad del sector azucarero, se creó un sistema especial de incentivos para los trabajadores que incluía: un aumento salarial del 15 %, el pago de un 10 % por superar

las normas laborales, prioridad para comprar bienes de consumo escasos (como motocicletas, aires acondicionados) y mejores ropa de trabajo y viviendas. Se creó otro sistema salarial especial para recompensar a los pilotos de aviones, los capitanes de barcos y los técnicos cualificados. Se estableció un nuevo fondo de incentivos en la empresa (participación en los beneficios); el volumen de dicho fondo se decidía según la productividad laboral, el ahorro de costes, la cantidad de beneficios autofinanciados y la importancia de la producción para la exportación. Alrededor de dos tercios del fondo se abonaban en premios (o pagos en metálico al personal a final de año) y otro tercio se destinaba a actividades socio-culturales (clubs, gimnasios, vacaciones, diversiones, vivienda). Los esfuerzos para contener el antiguo salario histórico y prohibir la creación de un «nuevo» salario histórico (un apéndice no ligado a la productividad) parecieron dar resultado, dado que sólo lo recibió un 25 % de la mano de obra no agrícola en 1973 y un 11 % en 1981. Entre los incentivos a los agricultores privados (particularmente los dedicados a cultivos de primera necesidad) para incrementar la producción y las ventas al Estado figuraban precios más altos para el acopio, más facilidades crediticias, autorización para contratar ayuda asalariada y mercados libres para vender sus productos. Se autorizó el trabajo autónomo para mejorar la cantidad y calidad de los servicios.

El nuevo sistema de incentivos fue un avance significativo frente a la austera «economía moral» de la anterior etapa, pero estaba menoscabado por varios factores: i) el personal administrativo y técnico no podía optar a los bonos de producción y primas; ii) la vinculación entre normas laborales y salarios no comenzó hasta 1974 y procedió muy lentamente, y la revisión de las antiguas normas redujo en realidad el número de trabajadores vinculados de 80 a 20 % en 1973-79, aunque la proporción aumentó a 33 % en 1981; iii) la mayoría de las normas eran tan bajas que en 1979 casi el 96 % de los trabajadores vinculados las cumplían o las superaban; iv) el sistema de primas era muy complejo y se superponía a otros incentivos; v) el fondo de incentivos de la empresa estaba condicionado por factores no relacionados con el esfuerzo laboral, como eran las interrupciones de abastecimiento y los retrasos en la ejecución de la inversión, y sólo la mitad de las empresas inscritas en este programa contaban con un fondo operativo; vi) aunque de un cuarto a un tercio de la fuerza de trabajo recibía pagos extra sobre su sueldo base, en 1985 todos ellos juntos no sumaban más que el 10,6 % del sueldo base (6 % por bonos a la producción, 1,9 % por primas, 1,6 % por premios) y esta era la proporción más baja dentro del COMECON (Zimbalist y Brundénius, 1989).

El fraude y la corrupción fueron también problemas resaltados por

Fidel y Raúl Castro a fines de la década de 1970: capataces y trabajadores hacían pactos para superar la norma laboral en medio día, se aminoraba el trabajo para no exceder las bajas normas con excesiva frecuencia (evitando con ello que fueran aumentadas) y se cumplían dos normas en una jornada para lograr un día libre. Los líderes se lamentaron también de que estaba flaqueando el espíritu de austeridad y surgiendo un proceso de ablandamiento, la disciplina de trabajo había decaído y habían aparecido indicios de corrupción. Había altos funcionarios que se aprovechaban de su posición para obtener privilegios, rentas empresariales que no se depositaban a tiempo —facilitando con ello la apropiación ilegal—, los empleados robaban a sus empresas y las masas adoptaban actitudes delictivas. En 1982 fueron también severamente criticados los mercados libres campesinos y el trabajo autónomo. Estas «desviaciones» se alegarían posteriormente como motivos para la desaparición del SDPE a mediados de los años ochenta.

En la década de 1970 el trabajo voluntario no remunerado fue drásticamente recortado, pues se decidió que sólo podía utilizarse cuando su productividad neta quedara demostrada de antemano. Todavía en 1980 el uso de trabajo voluntario era contrario a la eficiencia empresarial: las empresas que proporcionaban voluntarios tenían que seguir pagando sus sueldos sin aumento alguno de producción pero sí de costes y, por tanto, con menores beneficios. A la inversa, muchas empresas que utilizaban voluntarios no reembolsaban el valor laboral correspondiente a la agencia movilizadora, incrementando con ello su producción sin un gasto salarial correspondiente y favoreciendo con ello sus beneficios. En la primera mitad de la década de 1980 estas características negativas produjeron la práctica eliminación del trabajo voluntario.

En los años setenta la jefatura reconoció oficialmente la existencia de bolsas de desempleo, y en 1980 advirtió que dicho problema se agravaría en esa década. Ello era consecuencia de un descenso en la demanda de mano de obra agravada por un súbito ascenso de la oferta laboral. Esta última era resultado de la entrada en el mercado laboral —a partir de 1977— del *baby boom* de 1959-65 (la tasa de natalidad se elevó de 2,8 a 3,5 % en dicho período) y no se preveía que decreciera la oferta laboral hasta los años noventa. Eran varias las causas de esta reducción en demanda laboral. El énfasis del SDPE en reducir los costes laborales (para incrementar la productividad y los beneficios), unido a las nuevas competencias e incentivos otorgados a los gerentes para despedir a los trabajadores sobrantes, y la ampliación y endurecimiento de las normas de trabajo, produjeron el despido de miles de obreros (55.232 sólo en 1980), que fueron declarados «disponibles», algo similar a los «excedentes» de la década de 1960. La desaceleración del crecimiento económico

en 1976-80 forzó el aplazamiento de los planes de inversión (y la anulación de algunas importaciones), creando una escasez de insumos y de materiales de construcción que generó el despido de miles de obreros de la construcción y de 60.000 a 70.000 obreros industriales de fábricas que hubieron de ser cerradas temporalmente. Además, la plaga de moho azul del tabaco originó un desempleo transitorio de 26.000 trabajadores. Todos estos obreros fueron declarados temporalmente «interruptos» (parados). Por último, las dimensiones de las fuerzas armadas se redujeron en 15.000 hombres en 1970-74 por ser menor el peligro de una invasión de Estados Unidos y por haberse recortado las actividades militares en el exterior.

Se adoptaron varias medidas para resolver el problema del desempleo: i) en 1971 se flexibilizaron las leyes de jubilación, originando un incremento al doble del número de jubilados en los años setenta en comparación con los sesenta, liberando con ello nuevos puestos de trabajo; ii) desde 1973 el empleo en servicios previamente reservados a mujeres se abrió también a los hombres, y en 1976 se amplió el número de puestos de trabajo que no admitían mujeres por motivos de salud o seguridad; iii) se garantizó el pago de un 70 % del sueldo tanto a disponibles como a interruptos, con la expectativa de que los primeros recibieran nueva capacitación y fueran transferidos a trabajos productivos (sin embargo, en 1976 se estableció un límite temporal para dicho pago, y éste quedó condicionado por la obligación de aceptar cualquier oferta de trabajo adecuada); iv) las fuerzas armadas se expandieron considerablemente desde 1975 (al menos en 50.000 hombres) cuando Cuba se involucró en acciones bélicas en África; v) los profesionales liberales y obreros especializados de los cuales había oferta abundante (por ejemplo, médicos u obreros de la construcción) fueron en parte exportados para trabajar en el extranjero bajo contratos gubernamentales pagados en divisas (en 1980 alrededor de 20.000 desempeñaban servicios en Libia, Irak, Argelia y otros países); vi) la URSS, Checoslovaquia, la RDA y Hungría contrataron mano de obra cubana excedente con baja especialización para realizar trabajos que aquellos países precisaban (por ejemplo, 10.000 cubanos fueron a cortar madera a Siberia) a cambio de una parte de los artículos que producían u otros que hicieran falta en Cuba; vii) desde 1976 se permitió la práctica privada de servicios personales, o bien fuera de los horarios de trabajo estatal o incluso con plena dedicación en ciertos casos, siempre que se registraran y pagara un impuesto modesto (ejemplos de éstos eran electricistas, carpinteros, mecánicos de automóvil, peluqueros, sastres, jardineros, taxistas e incluso ciertas profesiones liberales como contables y arquitectos). A este fin, se flexibilizó la ley contra la vagancia; viii) en la primera mitad de la

década de 1980 se permitió a los agricultores privados contratar trabajadores asalariados, y se amplió más el empleo autónomo en servicios y pequeñas manufacturas, además los mercados libres campesinos y los mercados artesanos urbanos suministraron más empleo, y ix) en el enorme éxodo de 1980 desde el puerto de Mariel (más de 100.000 personas) figuraba un promedio del 6 % de desempleados (25 % entre las mujeres), lo cual redujo el excedente laboral. Como se ha explicado ya, algunas de estas medidas, particularmente la expansión de la actividad privada, recibieron un duro golpe en 1982 debido a las críticas y las sanciones adoptadas por el gobierno. Sea como fuere, el porcentaje de empleo civil siguió su descenso durante esta etapa no obstante el breve episodio liberalizador; así, descendió de 13,7 a 4,7 % en 1970-85; pese a ello, se registró un pequeño ascenso del trabajo autónomo y el privado asalariado en 1981 frente a 1979 (0,8 puntos porcentuales conjuntamente) para volver a decaer en 1985. El empleo civil público aumentó de 86,3 a 93,2 % de la fuerza de trabajo civil en 1970-85 (Mesa-Lago, 1978, 1982, 1983, 1988a).

h. Distribución y servicios sociales

El anterior énfasis en el igualitarismo fue objeto de críticas en esta etapa, allanando el camino hacia la ampliación de las diferencias salariales, la vuelta e intensificación de incentivos materiales, el mayor uso de mercados y precios como sustitutivos parciales del racionamiento y la interrupción o recorte de algunos servicios sociales gratuitos, todo lo cual generó una cierta estratificación y desigualdad.

La búsqueda de equidad salarial y el compromiso con el principio de distribución de acuerdo con las necesidades fueron criticados en esta etapa tachándolos de errores idealistas (o igualitarismo pequeño burgués), que no tomaban en consideración el esfuerzo productivo del trabajador; así pues, fueron defendidos los diferenciales salariales como incentivo para aquellos con especialidades laborales, fuertes responsabilidades y trabajos duros o peligrosos. En 1973 la CTC proclamó la vuelta al principio socialista de distribución de acuerdo con el trabajo. La vieja escala salarial se consideró igualitaria en exceso, y por ello una reforma salarial de 1981 aumentó los salarios relativos de la mano de obra altamente especializada. Las pagos adicionales sobre el salario base (aun si no sumaban más del 10,6 % del salario base) probablemente incrementaron las diferencias de rentas. Otras fuentes de desigualdad durante esta etapa fueron el aumento de las rentas de agricultores privados, trabajadores autónomos, pequeños fabricantes e intermediarios.

Se produjo una mejora sostenida en la oferta de bienes de consumo durante esta etapa (salvo en el estancamiento ocurrido durante la recesión de 1979-80), que se reflejó en un incremento de las cuotas de racionamiento de muchos productos. Además de los mercados agrícolas y artesanos, el gobierno introdujo un mercado paralelo donde se vendían (a precios fijados por el Estado) artículos de consumo cuya producción superaba las necesidades del suministro racionado. Dichos precios se aproximaban a los precios de mercado y eran varias veces superiores al precio de racionamiento, por lo que eran inasequibles para los grupos de rentas más bajas. Los nuevos mercados tenían varios objetivos: drenar el exceso de dinero en circulación, suministrar incentivos a la mano de obra para que trabajara más (para ganar más y poder así adquirir más y mejores artículos), reducir o compensar las subvenciones del gobierno a los bienes de consumo, eliminar gradualmente el racionamiento y luchar contra el mercado negro. Desde 1973 quedaron libres del racionamiento algunos artículos manufacturados, como las cámaras fotográficas y los cosméticos, mientras otros se ofrecieron en distribución limitada. Otros artículos duraderos (neveras, aparatos de televisión, máquinas de coser, bicicletas) fueron retirados de las tiendas pero asignados a empresas, fincas agrícolas y agencias estatales. Éstas notificaban a sus trabajadores los artículos disponibles y los interesados llenaban un cuestionario para comprarlos: las solicitudes eran ordenadas por un comité de obreros, tomando en consideración, ante todo, la productividad de los solicitantes. La mayoría de estos artículos quedaba fuera del alcance de los estratos de renta más baja; por ejemplo, una televisión o una nevera costaban de cuatro a cinco meses del salario medio.

Según el Instituto de Demanda Interna, creado en 1971 para estudiar los gustos y preferencias de los consumidores, menos de una tercera parte de todos los productos (medidos en valor) estaba racionado en 1979 y el resto se distribuía gratuitamente o mediante el mercado paralelo o mediante los otros dos mercados y la distribución por cuotas ya mencionados. (Sin desestimar el avance en el uso de precios racionales durante esta etapa, hay que observar que en el tercio de artículos que seguían racionados en 1979 figuraban los alimentos más importantes, bebidas y tabaco, todo lo cual tenía un precio bajo, mientras que la mayoría de los artículos no racionados tenía precios muy altos y por ello sumaba los restantes dos tercios.) Las considerables subidas de precio de bienes de consumo y servicios en 1981 fue un intento más de ajustarlos en alguna medida a los precios reales de mercado y recortar los subsidios del Estado. Ahora bien, para proteger de algún modo a los grupos de renta baja el gobierno incrementó más el precio de los productos de calidad superior y fuera de estación que el de los de baja

calidad y abundancia estacional. Finalmente, fueron eliminadas diversas gratuidades, como las comidas gratis en las cafeterías obreras, los uniformes escolares, las llamadas gratis en teléfonos públicos y la admisión libre en museos, zoológicos, jardines botánicos y algunos actos deportivos. El gobierno elevó después los salarios ínfimos, pero no suficientemente para compensar la pérdida de poder adquisitivo del grupo de rentas más bajas a causa de las subidas de precios y la eliminación de gratuidades. Aunque los estratos de menores ingresos seguían protegidos por un mínimo de productos racionados y las subidas de precios de doble gradación, era evidente que los más ricos podían acceder a la compra de muchos bienes y servicios que no podían permitirse los pobres, así como elegir entre una mayor variedad y mejor calidad de productos.

La expansión de los servicios sociales volvió a cobrar vigoroso impulso durante esta etapa tras el descenso sufrido en el período precedente. El capítulo presupuestario de servicios sociales quedó estancado en un 33 % en 1965, 1978 y 1981 (no hay datos disponibles para 1970), pero subió al 42 % en 1984-85. La inversión en servicios sociales ascendió del 14 % en 1970 al 23 % en 1975, pero fue disminuyendo hasta un 18 % en 1985. Los gastos sociales *per capita* (no ajustados para la inflación), que habían aumentado un 35 % en la etapa anterior, se elevaron en un 60 % en 1971-75, pero la proporción descendió a 42 % en 1976-80 y 32 % en 1981-85. Los gastos sociales con un crecimiento más rápido fueron los de seguridad social y asistencia, seguidos por educación y sanidad, quedando la vivienda bastante rezagada (Mesa-Lago, 1993d).

En esta etapa las pensiones de la seguridad social se extendieron a las cooperativas agrícolas, y en 1979 la totalidad del sistema de seguridad social, excluida sanidad, estaba integrada en el Comité del Estado para Trabajo y Seguridad Social. En los años setenta se duplicó el número de pensiones respecto a los sesenta; ello fue consecuencia de varios factores: una jubilación más flexible para liberar puestos de trabajo para los parados, envejecimiento de la población y maduración del programa de pensiones. En 1985 los costes de la seguridad social (excluida sanidad) se aproximaban a 1.000 millones de pesos, y el número de pensionistas se acercaba a 800.000 con una proporción de un pensionista por cada cinco personas activas en la fuerza de trabajo.

El número de médicos que se graduaban en la facultad de medicina se aceleró en la década de 1970 y para 1975 había recuperado su proporción prerrevolucionaria: en 1985 había 22,5 médicos por cada 10.000 habitantes, frente a los 7,1 por 10.000 de 1970. El número de camas de hospital por 1.000 habitantes, que había disminuido de 5,3 a 4,1 en 1965-77, se había elevado a 4,8 en 1985 (cuadro 21). El gobierno hizo una enorme inversión en sanidad para recuperar los niveles prerrevolu-

cionarios; dicho esfuerzo dio fruto en los años setenta y para la década de 1980 había logrado avances notables. Más aún, la distribución de recursos sanitarios se hizo más igualitaria entre las zonas urbanas y rurales: en 1958 no había más que un solo hospital rural, mientras que en 1978 había 57 y en 1968 el 60 % de los médicos y el 62 % de las camas de hospital estaban en La Habana, mientras que en 1978 estas proporciones habían decrecido a 36 y 29 %, respectivamente, y en la ciudad vivía el 21 % de la población. Después, sin embargo, volvió a incrementarse la parte proporcional de La Habana y, no obstante los avances, pervivieron diferencias significativas entre las provincias.

Así como en la década de 1960 la mayoría de la inversión en educación se destinó a la lucha contra el analfabetismo y a mejorar la infraestructura, los servicios y la matriculación en el nivel elemental, en la década de 1970 este esfuerzo se invirtió en el nivel secundario y también el nivel superior. Ahora bien, el considerable desarrollo en instalaciones físicas y personal de la década de 1970, junto al envejecimiento de la población, resultaron en una significativa disminución en la tasa de crecimiento de servicios educativos en la década de 1980. Se realizó también un esfuerzo notable para reducir las desigualdades entre zonas urbanas y rurales en los años sesenta, pero no tanto en los setenta. Por último, todas las universidades están situadas en grandes ciudades, pero existe un programa especial para campesinos y toda la enseñanza es gratuita; además, se otorgaban becas que cubrían los gastos de vivienda, alimentación, ropa y transporte. En enseñanza media la mayoría de estas becas se concedieron a alumnos de las zonas rurales.

En la primera mitad de los años ochenta la relajación de anteriores restricciones sobre la construcción de viviendas, unido a una mayor proporción del presupuesto dedicada a las mismas, mejor acceso a los materiales de construcción, y la autorización del trabajo autónomo, generaron el mayor auge de la construcción bajo la Revolución. Una ley de 1984 determinó que los inquilinos podían convertir sus contratos de alquiler con el Estado en contratos de compra a largo plazo, con pagos mensuales iguales al alquiler que solían pagar. En 1988 se habían entregado de 200.000 a 500.000 escrituras de propiedad en cumplimiento de esta ley.

Hasta mediados de los años setenta el gobierno había sostenido que la población no constituía un factor limitador en el desarrollo y era, por tanto, contrario al control de la natalidad y la planificación familiar. Pero la entrada del *baby boom* en el mercado laboral y la creciente carga de los servicios sociales indujeron a Castro a reconocer dicho problema en 1975 y pedir al partido que diseñara una política demográfica. Sin embargo, el crecimiento demográfico de Cuba a mediados de la década de

1970 fue el más bajo de América Latina, sin existir una política gubernamental específica: la creciente urbanización, la educación y la incorporación de la mujer a la fuerza de trabajo, unidos a la severa escasez de viviendas, el racionamiento y la emigración eran explicaciones de ese fenómeno. Además, empezaron a comprarse e importarse píldoras, diafragmas y otros anticonceptivos y aumentó fuertemente el número de abortos: en 1978 en el Hospital de La Habana se practicaron 20 abortos diarios, frente a 12 nacimientos (Mesa-Lago, 1982, 1983, 1988a, 1993d; Díaz-Briquets, 1983).

2. Resultados. El auge económico y las limitaciones externas

a. Crecimiento

Para esta etapa existen dos series sobre el crecimiento del PSG a precios constantes, pero no pueden ser conectadas debido a que sus años base y sus metodologías son divergentes. La primera serie, para 1971-75, da una tasa media anual de crecimiento del PSG del 13,6 % (11,9 *per capita*), pero una cifra alternativa oficial es la mitad de ésta (7,5 ó 5,8 % *per capita*) y otras estimaciones son aún más bajas. La segunda serie comienza en 1975; en ella se utiliza una sola metodología y un solo año base y suministra datos abundantes sobre el PSG y la mayoría de sus componentes, de ahí que sea considerablemente mejor que todas las anteriores series. Pese a ello, no hay forma de verificar la fiabilidad de esta serie, puesto que los detalles de sus cálculos, particularmente de los deflatores, nunca se han dado a conocer. Además, hay un debate considerable en torno a la selección de 1981 como año base para la serie: fue éste un año anómalo (registró algunas de las tasas de inflación más altas conocidas bajo la Revolución debido a la fuerte subida de los precios tras diecinueve años de congelación de los mismos); más aún, este año ha sido mantenido como base para más de un decenio. Esta práctica es contraria a un documento metodológico de las Naciones Unidas (citado por Cuba como referencia), el cual recomienda que se utilice como base un período en lugar de un año y que esta base sea cambiada cada cinco años. La tasa del PSG a precios constantes para 1981 fue de 16 %, la más alta registrada bajo la Revolución, casi cuatro veces mayor que la tasa anual media de crecimiento de 1976-89. Según esta serie, el crecimiento anual del PSG en 1976-80 fue del 3,5 % (2,7 *per capita*), mientras que otras estimaciones de crecimiento oscilan entre el -0,3 y el 4 % (-1 a 3,3 % *per capita*). Para 1981-85 la misma serie da una tasa de crecimiento del PSG de 7,3 % (6,4 *per capita*), mientras que otras esti-

maciones de crecimiento van del 3,9 al 7,9 % (3 a 7 % *per capita*). La tasa oficial para el período de 1976-85 es de 5,4 % (4,6 *per capita*), y si la debatida tasa de 1981 se elimina de los cálculos la tasa del período cae a 4,2 % (3,4 *per capita*); las estimaciones van desde el 1,2 al 2 % (0,4 a 1,2 % *per capita* [cuadro 2]; Mesa-Lago y Pérez-López, 1992).

Aunque es imposible ofrecer una tasa fiable del PSG para 1971-85, los datos disponibles indican que el crecimiento fue probablemente mayor que en etapas anteriores. Las tasas de crecimiento fluctuaron en los tres quinquenios de esta etapa debido a razones diversas. En 1971-75 la tasa fue elevada debido en parte a la recuperación del desastre de 1966-70 y también al auge de los precios mundiales del azúcar, el aumento de la ayuda soviética, la afluencia de créditos occidentales y las medidas económicas racionalizadoras internas. En 1976-80 se produjo un descenso en la tasa de crecimiento a causa de la caída de los precios del azúcar en el mercado mundial (aunque atenuada por las subvenciones soviéticas), las epidemias agrícolas, las dificultades de las industrias del níquel y pesquera, la mayor carga del servicio de deuda en divisas y los retrasos y complicaciones en la puesta en práctica del SDPE. En 1981-85 volvió a producirse un crecimiento sustancial influido por el fuerte incremento de los subsidios y préstamos soviéticos, el breve auge de los precios mundiales del azúcar en 1981 y las medidas económicas liberalizadoras.

La producción anual media de azúcar en 1971-75 fue 5.548 miles de toneladas, un descenso del 4 % frente al promedio de 1966-70, debido a la escasa cosecha de azúcar en los cuatro primeros años (con un mínimo en 1972) a causa del fracaso del sistema australiano de quema y la menor cantidad de recursos asignados al sector azucarero. Pero en 1975 la zafra superó los 6 millones de toneladas gracias a la mayor mecanización y mejores organización e incentivos. La producción de azúcar aumentó sostenidamente en los dos siguientes quinquenios a promedios anuales de 6.929 miles de toneladas en 1976-80 y 7.777 miles de toneladas en 1981-85 (la meta de 8 millones fue superada en tres años), en gran medida como resultado de una lograda mecanización de la zafra y alguna modernización de los molinos. Y, sin embargo, la producción real no alcanzó los objetivos previstos: en 1980 la meta era de 8,7 millones de toneladas, pero sólo se produjeron 6,7 millones (debido a la plaga de la roya de la caña), y en 1985 la meta se fijó inicialmente en 10-10,5 millones de toneladas y después se rebajó a 9,5-10 millones, pero la producción fue de 8 millones de toneladas. La razón de que no se cumplieran las metas fue que no se llevaron a la práctica las premisas clave de ambos planes quinquenales, agravado esto por la mayor duración de la zafra (de 99 días en 1975 a 126 en 1984) y por el descenso de los rendi-

mientos industriales (de 12,44 % en 1975 a 10,47 en 1984) (cuadros 6 y 9).

Los resultados en la agricultura no azucarera fueron desiguales, pero mucho mejores que en la etapa precedente. Se produjeron incrementos notables en la producción de cítricos (ocho veces más), leche (144 %) y huevos (67 %). Sin embargo, la producción de café, tabaco y habichuelas quedó estancada o decreció y para 1985 era o inferior al nivel de producción de 1985 o estaba por debajo del máximo alcanzado en los años sesenta. El número de cabezas de ganado fue un 12 % menor en 1985 que en 1970, pero el número de cerdos (sector público) había aumentado casi cuatro veces y el de las aves de corral casi dos. El índice de producción agrícola *per capita* de la FAO muestra un incremento del 21 % en 1985 frente a 1971, pero si el año base hubiera sido 1970 en lugar de 1971 (cuando la producción de azúcar disminuyó acusadamente), dicho incremento habría sido considerablemente menor (aproximadamente 7 u 8 %). Las capturas de pescado y marisco se duplicaron en 1970-85, pero oscilaron a partir de 1974 y en 1985 eran sólo ligeramente superiores a las de 1978 (cuadros 5 y 7; FAO, 1970-86).

No obstante el ambicioso plan del níquel, la producción quedó esencialmente estancada en toda esta etapa; la meta de 1985 de 69.500 toneladas métricas sólo se cumplió en la mitad y la producción de níquel de aquel año fue un 8 % inferior al nivel de 1970. Por el contrario, la producción de petróleo aumentó sostenidamente (particularmente desde 1982) y en 1985 fue 5,5 veces superior a la de 1970 (cuadros 8 y 15). Con la ayuda de equipos importados de la URSS y otros miembros del COMECON, la producción industrial mostró un crecimiento notable en 1970-85 en la mayoría de los ramos: cemento (329 %), acero (186 %), textiles (163 %), electricidad (150 %) y abonos (100 %). La producción de algunos bienes de consumo duraderos (neveras, radios, televisiones) se triplicó en esta etapa. Ahora bien, con la excepción del cemento y la electricidad, estos logros están atenuados por dos hechos: la producción de bienes de consumo duraderos se inició en la década de 1960 y, por tanto, su crecimiento registrado en 1970-85 hacía referencia a una base muy baja; en otros productos (textiles, abonos) la producción disminuyó en la segunda mitad de los años sesenta y la base de 1970 fue también muy baja, por lo que, de emplearse la producción de 1960 ó 1965 como base, el incremento de 1970-85 sería mucho más modesto. Es más, la producción de varios bienes manufacturados tradicionales para consumo interior (zapatos, jabón, detergentes) o para la exportación (cigarros puros) se estancó o descendió en esta etapa. Con todo, los índices de producción industrial estimados en países occidentales muestran un aumento de 2,4 a 3,7 veces en esta etapa (cuadro 5; Pérez-López, 1978b; Zimbalist y Brundenius, 1989).

El número de turistas se elevó desde prácticamente cero en 1971 a 34.000 en 1975 y después saltó a 83.000 en 1979 y 101.000 en 1980. La mayor parte de estos turistas eran cubano-norteamericanos, pero después que sus visitas fueron severamente reducidas, el número de turistas descendió en 1981. Sin embargo, en 1985 se registraron 168.000 turistas, que generaron 100 millones de pesos, diez veces los ingresos de 1975 pero aún solamente el 0,37 % del PSG (cuadro 10).

Otra aproximación a una valoración de los resultados económicos en esta etapa es la que se ofrece en el cuadro 9, en el que se compara la producción real con las metas previstas en los planes de 1976-80 y 1981-85 (las metas para 1971-75 no pudieron obtenerse). La mayoría de las metas macroeconómicas quedaron drásticamente incumplidas en 1980 (por ejemplo, -42 % en PSG), fueron después fijadas en un nivel más bajo para 1985 (por ejemplo, la meta de productividad laboral se redujo de 7 a 3 %) y más adelante rebasadas por grandes márgenes (por ejemplo, 46 % en el PSG). Sumamente revelador es el análisis de las metas de producción física de una selección representativa de productos agrícolas e industriales de primera necesidad, tanto para el consumo interior como para la exportación. En 1980 se superaron las metas de solamente dos productos (huevos y electricidad), pero no se cumplieron los de 14 productos, ocho de ellos en más de un tercio (incluidos níquel, cemento, acero, textiles, pesca y tabaco). Para el plan de 1981-85, aproximadamente la mitad de las metas de producción se fijaron por debajo del nivel correspondiente en el anterior plan, pero en vano, dado que los resultados fueron aún peores en 1985: dos metas se rebasaron (huevos y carne de cerdo), pero 18 no se cumplieron, ocho de ellas por más de un tercio (entre ellas níquel, cemento, acero, textiles) y otras dos por un cuarto o más (pesca, cítricos y electricidad). Si la mayoría de las metas de producción física de 1985 no se cumplieron por márgenes tan amplios, es muy dudoso que la meta de crecimiento del PSG se superara por un margen de 46 % en aquel año.

La proporción de inversión en PSG aumentó de 9,6 % en 1970 a 18,7 en 1977, descendió a 13 % en 1982 y ascendió al 15,9 en 1985. Durante todo este período la dicha proporción alcanzó un promedio de 14,6 %, considerablemente más que en ninguna de las etapas precedentes. Hay escasas estimaciones oficiales de la proporción de inversión sobre PSG en 1971-80 y éstas muestran una tendencia ascendente hasta 1977 y otra descendente a partir de entonces, con un promedio del 20 % para todo el período. No es posible valorar la eficiencia del capital en esta etapa, pero fue probablemente mayor que en 1966-70.

b. *Inflación*

Las estimaciones de inflación anual dan un promedio anual de 6,1 % para 1971-75. Desde 1976 Cuba ha publicado deflatores que nos permiten calcular la inflación anual en 1,2 % para 1976-80 y 1,6 para 1981-85. En este último período la inflación llegó oficialmente al 8,5 % en 1981, pero la deflación o inflación casi nula de los restantes cuatro años redujeron acusadamente el promedio del período. Si las dos series pudieran combinarse (lo cual no es técnicamente posible) la tasa anual de inflación en 1970-85 sería de 3 % (cuadro 2). Los datos sobre el excedente monetario no se ajustan a la tendencia mostrada por los datos de inflación. En 1970-75 el excedente *per capita* fue reducido de 388 a 215 pesos, ya que parte del exceso de masa monetaria fue eliminado de la circulación mediante incrementos de precios y eliminación de gratuidades, restaurando con ello parcialmente el valor del dinero. El excedente *per capita* permaneció virtualmente estancado durante 1980, pero empezó a aumentar otra vez y en 1985 había alcanzado los 305 pesos. Una proporción considerable de dicho excedente fue depositado en bancos que pagaban un tipo de interés del 2 % (Mesa-Lago, 1933d). Con todo, el brusco aumento del excedente en la primera mitad de la década de 1980 era indicio de crecientes presiones inflacionarias.

Los datos sobre el equilibrio presupuestario, disponibles desde 1981, mostraron déficit en tres años que llegaron casi al 1 % del PSG (cuadro 2). En 1976-81 el Estado subvencionó el consumo por un total de 1.887 millones de pesos, pero a causa de los incrementos de precios de 1981 el gobierno estimó que dichas subvenciones se reducirían a 671 millones en 1981-85. Y, sin embargo, los crecientes déficit presupuestarios de este período se achacaron en gran medida a las subvenciones estatales a los bienes de consumo o a empresas deficitarias (Mesa-Lago, 1982).

c. *Diversificación*

La valoración de los cambios en diversificación está oscurecida por tres series diferentes sobre la distribución porcentual del PSG por sector económico (cuadro 4). La serie más larga (disponible desde 1962) muestra que la parte industrial se contrajo de 47,9 % (1970) a 37,6 (1975) y 36,1 (1985); la parte agrícola descendió desde 14,7 % a 11,8 y después ascendió a 13,9; la parte comercial creció sostenidamente de 20,3 a 22 y 33,2 %, y las partes restantes (construcción, transportes y comunicación) mostraron cambios escasos y eran similares a los de las otras dos

series. Éstas comenzaban en 1980 y se remontaban a 1975. Una trasladaba unos 10 puntos porcentuales (de valor fiscal, según información oficial) del sector comercial al sector industrial (dejando los restantes sectores prácticamente inalterados), reordenación que resultaba en: una mayor proporción industrial que en la primera serie, pero también decreciente, de 47,8 % (1975) a 45,8 % (1985); una parte agrícola en aumento (similar a las de la primera y tercera series), y una parte comercial inferior y estancada (23,5 y 23,1 %). Por último, la tercera serie (que también se inicia en 1975) transfería una proporción adicional, en gradual ascenso (de 1 a 10 puntos porcentuales) del sector comercial al sector industrial (mediante otra redistribución no clara del valor fiscal) produciendo un resultado exactamente contrario a la primera serie: una creciente parte industrial, de 48,7 % (1975) a 55,1 % (1985), pero una parte comercial en disminución, de 22,5 a 14 %. Aunque es imposible determinar cuál de las tres series es la más exacta, yo tiendo a inclinarme por la primera fundándome en varias razones: i) la primera serie es la de existencia más larga (las otras dos carecen de datos desde 1962 a 1974) y, de no haber sido exacta, habría sido interrumpida; ii) la tercera serie no explica claramente qué impuestos fueron transferidos que no hubieran sido ya reordenados en la segunda serie; iii) es cuestionable que la reasignación de valor fiscal se haga casi exclusivamente a la industria, sin destinar prácticamente nada a los restantes cuatro sectores; iv) cabría en lo posible que las dos últimas series estén manipuladas para corroborar la declaración oficial de un rápido proceso de industrialización, y v) los datos sobre tendencia del empleo (que se analizarán más adelante) sugieren una proporción descendente de la industria.

Los indicadores sobre la dependencia del azúcar tampoco son concordantes pero indican, en general, estancamiento o mayor dependencia. La parte de la producción azucarera en el PSG bajó de 15,1 a 8,2 % en 1971-80, pero después ascendió otra vez y en 1985 era de 10,2 %, la misma proporción que en 1964. La parte de las exportaciones de azúcar en el PSG subió de 9,7 % en 1970 a 15,8 en 1985, o casi el doble que en 1964 cuando se inició la vuelta al azúcar. Finalmente, podemos comparar la dependencia del azúcar antes de y bajo la Revolución basándonos en series oficiales del producto interno bruto (PIB) disponibles para 1971-80: la parte de la exportación de azúcar en el PIB era de 22,2 % en 1958 y de 10,2 en 1971, pero se elevó a 23,3 en 1980, mostrando un mayor grado de dependencia que en 1958 (cuadro 6).

d. *Balanza comercial y dependencia exterior*

Las comparaciones históricas del comercio exterior cubano son complicadas en 1971-85 porque el valor del peso dejó de estar a la par con el dólar USA, puesto que el gobierno cubano fijó arbitrariamente el primero por encima del segundo, con un máximo de 0,71 pesos por dólar en 1980 (cuadro 2). Este tipo de cambio era artificial y en el mercado negro interior un dólar USA se cambiaba por varios pesos (por ejemplo, 5 a 1 en 1979). Carecemos también de series históricas sobre importaciones, exportaciones y balanzas comerciales en precios constantes, salvo para 1976-80 (Mesa-Lago y Pérez-López, 1992). La dependencia comercial general se incrementó casi dos veces durante esta etapa: el valor del total de transacciones como proporción del PSG se elevó de 27,6 a 52 % en 1970-85.

Los logros positivos en crecimiento económico de esta etapa quedaron contrapesados por un significativo deterioro de los desequilibrios, agravándose con ello la situación padecida en la etapa previa. Con la ayuda de unas exportaciones de azúcar en ascenso y el auge de los precios del mercado mundial en la primera mitad de la década de 1970, así como por unos subsidios soviéticos en rápido aumento, el valor de las exportaciones (salvo en 1971-72 cuando la producción de azúcar y las exportaciones descendieron fuertemente) subió un 470 % en esta etapa. Sin embargo, el valor de las importaciones creció aún más: 513 %; en 1980-85 las importaciones reales superaron la meta prevista en un 80 %. Excepto por un diminuto excedente comercial en 1974, hubo déficit comerciales durante toda esta etapa, con un incremento de 681 % en el valor del déficit (752 % si se emplea la conversión oficial del peso al dólar). Una comparación entre los tres quinquenios de esta etapa muestra que el déficit acumulativo de 1971-75 fue reducido en un 26 % en relación al déficit de 1966-70, pero aumentó en un 43 % en 1976-80 y nuevamente en un 196 % en 1981-85. El déficit comercial superó ampliamente 1.000 millones de dólares en 1981 y los 2.000 millones en 1985, alcanzando a partir de entonces cifras históricas (cuadro 11).

La dependencia de la URSS se aceleró durante esta etapa (reforzada por las subvenciones a los precios y los créditos comerciales soviéticos), por lo cual la parte soviética en el total de transacciones de Cuba creció de 51,7 a 70,5 % en 1970-85 (de 64 a 83 % con el COMECON), frente a las metas previstas (1981-85) de 65 % con la URSS y 69% con el COMECON. Una consecuencia de esta creciente dependencia comercial de la URSS y el COMECON fue que los barcos mercantes tenían que recorrer mayores distancias (que si el comercio se hubiera hecho con América o Europa occidental), por lo que, no obstante el impresionante

desarrollo de la marina mercante cubana, ésta sólo podía cubrir una décima parte del comercio total, que en su mayoría tenía que ser realizado por barcos soviéticos o del COMECON (pagados en moneda blanda o por trueque), así como barcos occidentales alquilados en divisas (Mesa-Lago, 1983). El déficit comercial de Cuba con la URSS aumentó un 767 % (950 % en dólares USA). Pese a ello, en 1975-78 Cuba disfrutó de un superávit debido al ajuste entre el valor de las exportaciones de la isla y el de las importaciones soviéticas, pero en 1979 los soviéticos prescindieron de esta medida alegando que era excesivamente costosa. A partir de entonces el déficit creció sostenidamente, superando 1.000 millones de dólares USA en 1985. La proporción soviética en el total del déficit comercial cubano tuvo un promedio de 68 % en esta etapa (cuadro 12).

En 1971-85 Cuba recibió 11.697 millones de dólares en préstamos soviéticos (6.810 millones para cubrir déficit comerciales y 4.887 millones en ayuda para el desarrollo [cuadro 16]). Hay que recordar que la deuda acumulada hasta 1972 se aplazó a 1986, sin intereses. Vimos que en 1966-70 existían diferencias significativas en la estimación de la subvención soviética al precio del azúcar, dependiendo del precio utilizado para el cálculo. Aunque dicha diferencia se mantuvo en 1971-75, ésta se redujo fuertemente en 1976-85 al cerrarse la brecha entre los precios mundiales y los precios preferenciales. Basándonos en el precio del mercado mundial, la subvención soviética fue de 22.000 millones de dólares en 1971-85 (proporcionalmente 9,5 veces la subvención pagada en 1966-70); basándonos en el precio preferencial de Estados Unidos, la subvención fue de 20.000 millones de dólares; y basándonos en el precio preferencial de importación de Estados Unidos, fue de 17.000 millones de dólares. La enorme subvención soviética al azúcar (así como otros subsidios, si bien menores, pagados por otros miembros del COMECON) impulsó a Cuba a incrementar el porcentaje de sus exportaciones de azúcar a la URSS de 40 % en 1966-70 a 52 % en 1976-85 y 73 % a todos los países socialistas (aunque en 1971-75, debido a los precios en auge del mercado mundial, dicho porcentaje bajó a 36 %). La participación cubana en el mercado libre mundial del azúcar descendió, consecuentemente, de 15 a 9 % durante esta etapa (Pérez-López, 1991).

No obstante el aumento de cinco veces en la producción doméstica de petróleo en esta etapa, las crecientes necesidades cubanas de combustible exigieron un sustancial incremento de las importaciones de petróleo soviético, que en 1985 suponían el 98,2 % de las importaciones petroleras de la isla (comparado con el 94,1 % en 1970). Los acuerdos triangulares con exportadores de petróleo como Venezuela y México tuvieron escasa incidencia y, en todo caso, se cobraron a la URSS. En 1971-83

los precios del petróleo soviético cobrados a Cuba eran considerablemente inferiores al precio mundial, por lo que la isla quedó protegida de los devastadores efectos que tuvo la escalada de los precios en los países en vías de desarrollo importadores de petróleo (aunque la brecha entre el precio soviético y el mundial empezó a acortarse en 1983 y desapareció en 1985). Aún más: las «reexportaciones» de Cuba de los envíos de petróleo soviético no utilizados constituyeron la mayor fuente de divisas de la isla después de las exportaciones de azúcar.

El total de la ayuda soviética a Cuba, incluyendo préstamos y precios subvencionados (para el azúcar, el níquel y el petróleo, todos basados en los precios del mercado mundial) pero excluyendo las rentas de las «reexportaciones», sumó 39.828 millones de dólares en 1971-85. Una comparación por quinquenios muestra que la ayuda soviética aumentó un 100 % en 1971-75, un 300 % en 1976-80 y 55 % en 1981-85. Además, mientras que en 1971-75 dos tercios de la ayuda eran en forma de préstamos reembolsables (deuda) y un tercio en subsidios no reembolsables (donaciones), en 1981-85 la proporción se había invertido a favor de Cuba (cuadro 16).

Tras una breve expansión del comercio con las economías de mercado en 1974-75 (que abarcó hasta el 41 % del total del comercio cubano), estimulada por los precios en auge del azúcar en el mercado mundial, la proporción del intercambio comercial con las economías de mercado fue descendiendo gradualmente hasta 13 % en 1985 (el comercio con China también bajó de 6,6 a 2,7 % durante esta etapa). La realidad contrastaba con el plan de 1981-85 que pronosticó que la proporción del comercio cubano con las economías de mercado aumentaría al 31 %. Hay datos disponibles sobre las reservas de divisas desde 1981; éstos muestran un descenso de 403 a 350 millones de pesos en 1981-85 y que las reducidas reservas fueron componiéndose cada vez más de rublos transferibles. La deuda de Cuba en divisas se elevó (en miles de millones de dólares USA) de 1,3 (1976), a 1,8 (1979), a 2,7 (1982) y a 3,6 (1985), pero desde finales de los años setenta este incremento se debió a la subida de los tipos de interés y a la renegociación y apreciación del principal a partir de 1982, más que a nuevos préstamos. Alrededor de la mitad de la deuda era con gobiernos y el resto con instituciones financieras y otros acreedores (la parte de estos últimos —que tienen los términos más duros— creció gradualmente). En 1984 la deuda cubana en divisas era igual al 11,4 % de su PSG y el servicio de deuda representaba casi el 29 % del valor de las exportaciones de la isla (cuadro 18). El total de la deuda exterior cubana en 1985 se ha calculado en 17.100 millones de dólares, incluidas una estimación conservadora de la deuda soviética en 13.500 millones y la deuda de 3.600 millones en divisas, pero excluyendo la deuda con

otros países socialistas. En aquel momento, la deuda cubana era la quinta más cuantiosa de América Latina y equivalía al 57 % del PSG y el 218 % del total del valor de las exportaciones (Mesa-Lago y Gil, 1989).

La concentración exportadora en el azúcar aumentó de 77 % en 1970 a 90 % en 1975 (en buena medida a causa de los precios en auge del azúcar), y después descendió a 74,5 % en 1985. Pero parte de este descenso fue consecuencia de la ampliación de las «reexportaciones» de petróleo de 0,1 a 9,5 % —que eran en realidad transferencias de divisas de la URSS en lugar de auténticas exportaciones cubanas—. Cuando se hace el ajuste para excluir debidamente el valor del petróleo, la parte del azúcar en el total de exportaciones se eleva a 82 %, una producción similar a la de 1962 y superior a la de 1959 (cuadro 13). La conclusión de una sostenida dependencia del azúcar se refuerza con la creciente proporción del valor de las exportaciones de azúcar en el PSG que ya hemos examinado (cuadro 6). Sin embargo, algunos académicos occidentales simpatizantes han sostenido que la concentración tanto en exportaciones como en socios comerciales son resultado de los precios subvencionados soviéticos y no representan una dependencia continuada en el azúcar ni una mayor dependencia de la URSS (Zimbalist y Brundenius, 1989). Este razonamiento espurio nos llevaría a ajustar a la baja el PSG y el valor del comercio cubano con objeto de eliminar el valor de las subvenciones soviéticas, o reducir el valor de las exportaciones de azúcar y el grado de dependencia del mercado estadounidense antes de la Revolución para eliminar los precios preferenciales entonces pagados.

Ciertos cambios en la composición de las importaciones cubanas durante esta etapa parecen ser positivos, como son la disminución de la cuantía de productos alimenticios (de 22 a 12 % en 1970-85) y manufacturas (de 25 a 16 % en 1975-85); ello podría indicar una creciente autosuficiencia, pero también podría ser consecuencia de restricciones en el consumo, particularmente de artículos manufacturados. El descenso igualmente acusado del capítulo de maquinaria y transporte en las importaciones (de 42 a 30 % en 1977-85) podría ser indicio de una aminoración en el proceso de industrialización. La única partida de las importaciones que se incrementó en esta etapa fue la de los combustibles (de 9 a 33 %) y ello no obstante las generosas subvenciones soviéticas a los precios. Por consiguiente, Cuba tuvo que reducir relativamente todas las restantes importaciones para seguir importando petróleo y mantener la economía en funcionamiento (cuadro 14).

e. *Desempleo*

No hay datos oficiales disponibles sobre desempleo declarado entre 1970 y 1979. Pese a ello, un estudioso extranjero ha calculado que la tasa de desempleo creció de 1,3 % en 1970 a 4,5 en 1975. Del estudio demográfico de 1979 se desprendía que el desempleo había aumentado hasta el 5,4 %, y el censo de 1981 registró un ligero ascenso a 5,5 % (cuadro 19). Según datos oficiales, la tasa de crecimiento del empleo civil público se redujo de 6,2 % en 1977 a 1,3 en 1979 y bajó a 1,2 en 1980; sin embargo, la tasa volvió a elevarse (de 2 a 4 %) en 1981-84. La expansión del sector privado debió influir en esta tendencia (Mesa-Lago, 1988a). Una comparación entre la distribución de la fuerza de trabajo por sectores económicos de 1970, 1979 y 1981 (no hay datos disponibles a partir de ese momento) muestra que: el sector primario disminuyó de 30 a 21,9 % y después aumentó a 22,3; el sector secundario se expandió de 26,3 a 27,8 % y después se estancó (la parte de la minería industrial en realidad se redujo de 20,3 a 18,9 %); y el sector terciario creció sostenidamente de 41,3 a 42,9 y 46,3 %. Estas cifras ratifican una vez más que el sector de servicios ha sido el más dinámico en el empleo, mientras que el sector industrial se ha estancado o se ha contraído. La participación femenina en la fuerza de trabajo se elevó de 18,3 a 31,4 % en 1970-81. Las mujeres encontraron trabajo sobre todo en el sector terciario (aunque en porcentaje descendente, particularmente el comercio) y en menor medida en el sector secundario (aunque en porcentaje creciente). El grado más alto de participación femenina (que muestra una tendencia ascendente) fue en la administración y en los servicios; un grado muy pequeño de participación se registró entre puestos ejecutivos y de cuello azul (Mesa-Lago, 1993d).

Según cifras oficiales, la productividad laboral en precios constantes creció a un promedio anual de 4,2 % en 1976-80 (frente a la meta prevista de 7 % y probablemente a una tasa menor que en 1971-75), pero se declaró que la tasa media se había incrementado a 5,1 % en 1981-85 (por encima de la meta prevista del 3 %). Este último promedio incluía, sin embargo, un asombroso salto del 13,6 % en 1981, sin paralelo en la historia socialista de Cuba (frente a una tasa media del 2 % en 1976-89, excluido 1981). Ninguna explicación se ha dado de esta hazaña, otro indicio del carácter hinchado de los datos de 1981. A partir de 1981 la productividad promedió el 3 % (1982-85), una contracción si se compara con el promedio del quinquenio precedente. Por consiguiente, si se excluye el año 1981, la tasa promedio anual de productividad sufrió un descenso en los tres quinquenios de esta etapa. En 1976-80 el aumento anual neto en productividad (contrastado con el incremento de los sala-

rios reales) fue de 3,7 %, pero descendió a 0,6 en 1982-85 (cuadro 30). Algunos de los líderes cubanos hablaron en múltiples ocasiones de la infrautilización de la mano de obra en todos los sectores: la agricultura (en los campos de caña y las cooperativas de producción sólo se trabajaba de cuatro a cinco horas diarias), la construcción (de 25 a 30 % de la jornada laboral no se utilizaba), la industria (la maquinaria sólo era utilizada en un 50 a 60 %, pero se había introducido un segundo turno de trabajo) y los servicios (las oficinas estaban llenas de personas que no hacían nada). Las olas de «excedentes» aparecidas durante esta etapa son otro indicio de subempleo (Mesa-Lago, 1988a, 1993d).

f. *Igualdad*

Un estudioso extranjero ha elaborado estimaciones de la distribución de la renta para 1973, 1978 y 1986, pero, problemas metodológicos aparte, estas distribuciones no son comparables (por ejemplo, el sector privado está incluido en algunos años y excluido en otros) y para 1978 hay dos estimaciones considerablemente diferentes (Brundenius, 1979, 1984; Zimbalist y Brundenius, 1989). La distribución de 1973 y la primera variante de 1978 son bastante similares, salvo por la transferencia de poco más de un punto porcentual del quintil más rico a los dos quintiles medios, mientras que los dos quintiles más pobres permanecieron prácticamente inalterados. Por el contrario, si se compara 1973 con la segunda variante de 1978, entonces los dos quintiles medios pierden 6 puntos porcentuales, tres cuartos de los cuales van a los dos quintiles más pobres ¡y un cuarto al más rico! Por último, la distribución de 1986 se asemeja a la primera variante de 1978 en términos del quintil más rico, pero a la segunda variante de 1978 en los restantes quintiles. Por consiguiente, estos datos tienen un valor escaso.

Los exiguos y confusos datos disponibles sobre escalas salariales muestran que entre 1979 y 1981 la razón entre los índices salariales máximo y mínimo se elevó de 4,9:1 a 5,5:1, al aumentar el nivel mínimo mensual de 71 a 82 pesos (o 75 a 85 pesos, según Zimbalist y Brundenius, 1989) y subir el nivel máximo de 350 a 450 pesos. Sin embargo, en 1979 el director del Instituto de Demanda Interna me dijo en La Habana que el nivel salarial máximo era de 700 pesos, sueldo que, se decía con frecuencia, recibían los ministros del gabinete. Además, había sistemas salariales especiales para los trabajadores del azúcar, los pilotos y otros grupos (entre ellos probablemente las fuerzas armadas y de seguridad). Y hay que añadir las diferencias resultantes de los pagos complementarios (bonos, primas, horas extra, condiciones duras de trabajo, premios),

así como del salario histórico. Aun antes de la reforma de 1981, yo encontré salarios en Cuba de 500 a 750 pesos mensuales pagados a médicos de prestigio, profesores de universidad y técnicos altamente especializados. En último lugar, aunque no en importancia, estaba el aumento de los ingresos del sector privado, en el que, a decir de Castro, había rentas de hasta 30.000 a 150.000 pesos anuales, si bien probablemente serían pocas (Mesa-Lago, 1983, 1990a, 1994). No hay duda, por tanto, de que se produjo un incremento en la desigualdad de las rentas durante esta etapa.

El salario real promedio también permaneció estancado en 1975-80, pero con las reformas de la segunda mitad de la década de 1980 aumentó un 18 %. El racionamiento mejoró entre 1969 y 1971-72 al incrementarse las cuotas de nueve productos o distribuirse éstos gratuitamente. Sin embargo, la recesión de 1979 generó una disminución de las cuotas de cuatro productos, aunque dos mejoraron (cuadro 20). La sustitución gradual del racionamiento por los mercados paralelo y libre (con precios mucho más altos), así como las considerables subidas de precios en 1981, debieron contribuir a la desigualdad durante esta etapa.

g. Indicadores sociales

En 1979 se informó que la tasa nacional de analfabetismo era del 4 % (2,3 % en zonas urbanas y 7,1 en zonas rurales) y el censo de 1981 registró una nueva reducción a 1,9. Estos descensos eran impresionantes frente a la tasa nacional de 12,9 % (7,1 % en zonas urbanas y 21,5 en rurales) que dio el censo de 1970. Pero estas cifras no son comparables porque en 1970 hacían referencia a la población de diez años o mayor, mientras que en 1979-81 se excluyó la población de más de cuarenta y nueve años (donde estaban concentrados los reductos de analfabetismo). La matriculación en enseñanza media se elevó del 25 al 85 %, un logro extraordinario en quince años, mientras la matriculación en enseñanza superior aumentó de 5 a 21 %, de modo también muy impresionante (cuadro 23). Pero la meta de 1985 era incluso más ambiciosa (39 %) y no se cumplió (cuadro 9). También se redujeron las desigualdades en la distribución de servicios educativos entre las zonas urbanas y rurales.

La mortalidad infantil (‰) decreció de 38,7 a 16,5, uno de los más importantes avances logrados bajo la Revolución. En realidad, esta es una de las pocas metas planificadas que se ha superado sistemáticamente; así, para 1980 la meta de mortalidad infantil era de 24, pero se redujo realmente a 19,6 (cuadro 9). La tasa general de mortalidad descendió de 6,3 a 5,4 ‰ en 1970-75, y después se elevó a 6,4 en 1985, sobre todo a

causa del envejecimiento de la población. Las tasas de seis enfermedades contagiosas decrecieron o no se registró ningún caso (en enfermedades controlables mediante vacunación), pero crecieron las tasas de siete enfermedades, en su mayoría no prevenibles, como diarrea aguda, enfermedades respiratorias, hepatitis, sífilis y gonorrea, pero también malaria (cuadro 22). La seguridad social amplió su cobertura de la fuerza de trabajo en cuanto a pensiones, de 88,7 a 93 % en 1970-81 (cuadro 24).

El número medio anual de casas construidas por el Estado para la población civil ascendió sostenidamente durante esta etapa: de 6.361 (1966-70) a 15.937 (1971-75), 16.485 (1976-80) y 22.114 (1981-85). No obstante este notable avance, las metas planificadas para la construcción de viviendas del Estado en 1980 y 1985 se cumplieron sólo en algo más de la mitad (cuadro 9). Sin embargo, en 1981-85 la población construyó un promedio anual de 41.445 casas (una cuarta parte con certificado de habitabilidad) y 4.858 más fueron construidas por el Estado para el ejército y por cooperativas. Este auge de la vivienda debió reducir algo el déficit de 877.000 casas declarado en 1981 (cuadro 25). En 1972 el 75 % de todas las familias eran propietarias de su casa, un 10 % estaban en proceso de comprarla, 8 % pagaban alquileres y 6 % estaban exentas de pagar alquiler debido a sus bajas rentas (Mesa-Lago, 1983). Desafortunadamente, no hay datos similares disponibles para mediados de los años ochenta, pero la proporción de propiedad debió incrementarse por entonces debido al gran número de casas construidas por la población, los efectos positivos de la ley de la vivienda de 1984 y el gradual proceso de conversión de las casas alquiladas en casas en propiedad.

La tasa de crecimiento demográfico siguió su tendencia descendente durante esta etapa: de 1,5 a 1,1 % en 1970-85. Esto fue parcialmente consecuencia de una reducción sostenida de la tasa de natalidad, de 27,7 a 18 %. La emigración fluctuó mucho: descendió desde casi 50.000 en 1971 (cuando finalizó un acuerdo Estados Unidos-Cuba de puente aéreo para emigrantes) a menos de 1.000 en 1977. Sin embargo, el éxodo de Mariel originó un incremento de 141.742 emigrantes en 1980 (la cifra más alta de la historia cubana, 1,5 % de la población, que produjo una tasa negativa de crecimiento demográfico de 0,6 %), pero en 1982-85 la tasa promedio anual decreció a 8.700 (cuadro 21). Se ha dicho que la visita de 125.000 cubano-norteamericanos en 1979-80, con su efecto demostrativo, tuvo una parte importante en el éxodo de 1980.

h. *Resumen*

Durante esta etapa se produjo una vigorosa recuperación económica, y las tasas de crecimiento (excepto en 1976-80) fueron posiblemente las mayores de la Revolución, incluso si es cuestionable la cuantía de dichas tasas. Este crecimiento estuvo apoyado en sostenidos incrementos en la producción de azúcar (a partir de 1975), resultantes de la mecanización y modernización de este sector, y, sin embargo, las metas vistas de producción azucarera, excesivamente ambiciosas, no se cumplieron por un cuarto. Los resultados de la agricultura no azucarera fueron desiguales, aunque mucho mejores que en la etapa precedente, mientras que la producción de níquel se estancó. La mayoría de las líneas industriales, así como el petróleo, ampliaron significativamente su producción, y el número de turistas ascendió de modo impresionante. La inversión creció a ritmo mucho más rápido que en 1966-70, y ello sin los recortes de consumo sufridos durante aquella etapa; en efecto, las cuotas de racionamiento y la oferta de bienes de consumo se incrementaron. Esto podría haber sido consecuencia de una mayor productividad laboral y quizá de una mayor eficiencia del capital (al menos comparados con los lamentables resultados de 1966-70). El exceso de masa monetaria en circulación se redujo fuertemente, devolviendo con ello valor al dinero, aunque hubo un nuevo aumento en la década de 1980. Los déficit presupuestarios hicieron su aparición en este período, no obstante las supuestas reducciones en los subsidios del Estado. Las realizaciones sociales son aún más impresionantes: el aumento de matriculación en las enseñanzas media y superior, el fuerte descenso en la mortalidad infantil, el logro de cobertura cuasiuniversal en pensiones y el mayor número de casas construidas bajo la Revolución. Estos notables resultados tuvieron, no obstante, un precio. Se triplicó el porcentaje de desempleo declarado (aunque seguía siendo muy bajo por criterios regionales) y se ampliaron las desigualdades en rentas, así como las diferencias en acceso a los bienes de consumo. Pero el problema más serio fue el deterioro de los desequilibrios exteriores. El déficit comercial general se incrementó casi ocho veces (alrededor de nueve veces con la URSS), pese al enorme aumento de las subvenciones soviéticas a los precios y otras concesiones. La concentración en la exportación de azúcar se mantuvo igual, mientras que la dependencia del comercio, el capital y el petróleo soviéticos se acrecentó notablemente. La deuda exterior en divisas alcanzó niveles altos y tuvo que ser renegociada, mientras la deuda con la URSS crecía rápidamente; la deuda total se convirtió en la quinta más cuantiosa de la región hacia finales de esta etapa. Durante toda la década de 1980, Cuba estuvo en gran medida protegida de la severa crisis económica

sufrida por América Latina gracias a los créditos y préstamos soviéticos, que tenían condiciones extraordinariamente generosas, así como por las subvenciones a los precios de las dos principales exportaciones cubanas y a las importaciones de petróleo soviético. Pero la creciente carga de dicha ayuda para la URSS, que empezaba a sufrir serias dificultades económicas interiores, unido al enorme y rápidamente ascendente déficit comercial de Cuba, plantearon un grave reto al estilo de desarrollo de la isla y su modelo de organización económica. El cambio en la jefatura soviética de 1985 agravó aún más la situación. Una vez más, Cuba se encontró en una encrucijada y la opción de su líder, al menos en un inicio, no sería en la dirección del mercado.

7. El proceso de rectificación antimercado, la caída del bloque soviético y la reforma económica: 1986-93

Este capítulo analiza dos políticas en buena medida opuestas: 1) el Proceso de Rectificación (PR) antimercado, que comenzó en 1986 y se extendió hasta 1991, aunque no puede precisarse el momento preciso de su final, y 2) la introducción de reformas moderadas orientadas hacia el mercado, comenzando con la apertura hacia el exterior (desde fines de 1991) y luego la introducción de reformas internas (a partir del verano de 1993). El colapso del bloque soviético en gran medida determinó el destino del PR —pero también influyó su irracionalidad económica— y el fracaso de éste, así como de la apertura al exterior, para detener el proceso de deterioro económico y promover la recuperación, precipitaron las reformas internas como una medida desesperada.

En 1986 Castro lanzó el PR, que situó a Cuba en contra de la tendencia hacia la reforma orientada al mercado surgida en el campo socialista y en otras partes. En teoría, la expectativa era que el PR encontrara un punto medio óptimo entre los «errores idealistas» del modelo guevarista-castrista de 1966-70 y los «errores economicistas» del SDPE en 1976-85. En la práctica, muchas de las políticas del PR se asemejan a las aplicadas en la etapa de 1966-70: virtual eliminación del macroplan central y recentralización de las decisiones en Castro; reducción de los incentivos materiales y ampliación de los estímulos morales; reintroducción del trabajo voluntario y brigadas de construcción de estilo militar, unido a un masivo recurso a la movilización laboral en la agricultura; programas excesivamente optimistas y metas decididas esencialmente por

Castro, y aplicación de técnicas de gestión militar a la producción civil. El SDPE fue objeto de fuertes críticas por parte de Castro, que cesó al director de la JUCEPLAN y acusó a los reformistas moderados del pecado de copiar mecánicamente de los países socialistas un modelo no apto para Cuba.

Las causas del PR son objeto de debate. Castro y los cubanos han imputado la responsabilidad principalmente a factores internos: corrupción, delincuencia y derroche generalizados bajo el SDPE, un declinar del espíritu revolucionario y mayores desigualdades (Rodríguez, 1990). Algunos estudiosos extranjeros justifican el PR y añaden causas externas. Entre éstas figuran: el creciente déficit en la balanza comercial y otras limitaciones externas, así como desequilibrios fiscales internos y la necesidad del Estado de afirmar su control para corregir dichos problemas (Zimbalist y Eckstein, 1987; Zimbalist y Brundenius, 1989; Eckstein, 1990, 1991). Sin desestimar algunas de estas causas, yo he detectado también variables ideologicopolíticas: la descentralización económica bajo el SDPE implicaba delegación política del poder, algo que Castro se resistía a ceder, y —en su opinión— los incentivos materiales y la corrupción habían producido un debilitamiento de la defensa revolucionaria contra el imperialismo (Mesa-Lago, 1990a, 1990d, 1991b).

Un defecto importante del PR y de las subsiguientes reformas económicas moderadas es que no han producido un modelo integrado de organización económica para sustituir al SDPE, algo fundamental para una economía socialista de mandato, especialmente una que, al menos hasta 1993, ha prescindido del mercado. Como consecuencia, han surgido confusión y contradicciones en torno a la función de los instrumentos económicos, por ejemplo, el carácter del plan central, el papel de los beneficios como indicadores de la calidad de la gestión, la reforma de los precios, las formas de medir la eficiencia y otros similares. La quiebra del bloque soviético ha agravado la situación económica y aumentado la confusión en los años noventa; también provocó la adopción de un programa nacional de emergencia (eufemísticamente denominado «el Período Especial en Tiempo de Paz») que ha aplicado duras medidas de ajuste. Además, se ha producido una apertura a la inversión exterior y el turismo, unida a una relativa descentralización en el sector exportador, y la introducción de reformas internas como la autorización de la tenencia de divisas, el trabajo por cuenta propia y la transformación de las fincas estatales en cooperativas. En 1990 los científicos sociales cubanos empezaron a pedir definición y un programa de acción, y algunos incluso comentaron que «la falta de definición» había provocado pérdidas en la estructura económica y en la concienciación (como en 1966-70). El Comité Central del Partido Comunista reconoció al fin la importancia del

problema, pero aplazó la solución hasta su 4.º Congreso. Éste, celebrado en octubre de 1991, no cumplió dicha promesa y simplemente reiteró la necesidad de buscar nuevas formas de organización y gestión económica, mientras ratificaba plenamente las políticas de Castro aplicadas desde 1986. A fines de 1993 todavía estaba en debate la necesidad de un programa global de reforma.

No obstante los problemas y conflictos más arriba comentados, es posible resumir las características y políticas económicas de esta etapa (cuadro 1) como sigue: i) continuación de la colectivización y virtual eliminación de las actividades del sector privado (salvo en los enclaves extranjeros o las compañías mixtas), debiendo llenarse el vacío resultante con mayor producción pública y servicios de comercialización (pero estas políticas cambiaron drásticamente en 1993, con la expansión del sector privado en los servicios y de las cooperativas en la agricultura estatal); ii) recentralización de la toma de decisiones y énfasis en la asignación física, pero práctica desaparición del macroplan, que en los años noventa fue sustituido por medidas de emergencia; iii) un sistema impreciso de financiación empresarial pese a la aprobación de la autofinanciación (aunque ésta crece en el sector de empresas mixtas); iv) aumento del déficit presupuestario y de la distorsión de los precios; v) intentos de diversificar los socios comerciales y atraer inversiones capitalistas extranjeras, forzados por la desaparición del COMECON, la desintegración del comercio y la ayuda de Europa oriental, el cese de la ayuda soviética y el fuerte descenso del comercio con la URSS y su sucesora, la Comunidad de Estados Independientes (CEI); vi) fomento de exportaciones no tradicionales (como la biotecnología) y del turismo extranjero, unido, en el interior, a un programa alimentario para conseguir autosuficiencia (este programa fracasó en 1992 y le sucedieron las reformas internas); vii) control más estrecho del mercado laboral, mayor movilización de mano de obra y utilización de brigadas y contingentes de trabajo (pero informalización o privatización del mercado laboral a partir de 1993), y viii) mayor igualitarismo mediante el racionamiento, la reducción de incentivos materiales y la ampliación de los estímulos morales (pero giro hacia la desigualdad desde 1993). Este capítulo se basa, si no se especifica lo contrario, en Mesa-Lago, 1988a, 1990a, 1990d, 1991b, 1992, 1993a, 1993b, 1994).

1. *Políticas. La reforma antimercado, la pérdida de la ayuda y mercados socialistas y la reforma hacia el mercado*

a *Propiedad*

El PR limitó aún más la propiedad privada y el mercado mediante: la abolición de los mercados libres campesinos y la aceleración del proceso de integración de las pequeñas fincas privadas en las cooperativas bajo control estatal; la eliminación de actividades de los pequeños fabricantes privados, propietarios de camiones y vendedores ambulantes y reducción del empleo autónomo; y restricción de la construcción, las ventas y los alquileres de las viviendas privadas y de la herencia de viviendas.

En la primavera de 1986 Castro lanzó un nuevo y más duro ataque contra los mercados libres campesinos y las fincas privadas: i) alegó que los agricultores estaban obteniendo enormes beneficios mediante la venta a dichos mercados (dio dos ejemplos, rentas de 50.000 y 150.000 pesos anuales, pero no proporcionó cifras agregadas); ii) los agricultores se resistían a la integración en las cooperativas y tentaban a éstas al hacer evidente que gozaban de mejores situación y rentas, convirtiéndose con ello en un obstáculo para el éxito de las cooperativas (éstas eran presionadas por el gobierno para vender su producción excedente al Estado en lugar del mercado donde podían conseguir mejores precios); iii) «algunos» agricultores (sin especificar cifras) sólo entregaban al Estado el 10 % de sus cosechas e incluso nada, y iv) sólo «doce o trece agricultores», de un total de 98.000, pagaban impuestos. Con objeto de terminar con dichos «abusos», se abolieron los mercados libres campesinos y se anunciaron nuevas y estrictas medidas contra los agricultores privados.

Castro afirmó que trabajar con decenas de miles de agricultores privados era «terrible, virtualmente insoluble», porque el gobierno tenía que hablar y negociar acuerdos con ellos, mientras que era mucho más fácil tratar con las poco más de mil cooperativas. Pasó después a pronosticar que, pronto, todos los agricultores privados quedarían integrados en cooperativas. (Anteriormente se había sostenido teóricamente que el Estado cubano estaba ya capacitado para una verdadera socialización de las fincas privadas en «formas superiores de producción agrícola», como la cooperativa y la finca estatal.) Castro anunció que se estaban estudiando algunas medidas contra los agricultores privados, entre ellas: confiscación de la tierra de aquellos que la explotasen indebidamente, o incurrieran en aparcería o arrendamiento; eliminación de toda forma de propiedad absentista en el campo; creación de un impuesto del 5 % sobre las rentas brutas (se habló también de un impuesto

progresivo sobre la renta con una tasa máxima del 20 %); incremento de los precios de insumos y servicios suministrados por el Estado; prohibición de comprar coches y motocicletas, así como concesión de menor prioridad en el acceso a restaurantes, a los agricultores privados (frente a los trabajadores de las fincas estatales y los miembros de cooperativas). Se advirtió también a los agricultores que no debían vender sus excedentes en el mercado negro. Algunas de las anteriores medidas se aplicaron y otras no, pero se han mantenido como ominosa amenaza contra los agricultores privados. En 1988 el sector agrícola no privado (incluidas las cooperativas) se había extendido al 92 % de toda la tierra agrícola.

Muchos cubanos esperaban que el 4.º Congreso del partido (celebrado a fines de 1991) reintrodujera los mercados libres campesinos, pero Castro se opuso enérgicamente a esta acción y el congreso votó en contra de ella. En 1992 Castro reconoció que la gente seguía pidiendo el restablecimiento de dichos mercados, pero los criticó una vez más y añadió nuevas razones para reducir el número de agricultores privados. Estos —dijo— desviaban recursos públicos que habían recibido (fertilizantes, semillas), con objeto de producir para el mercado negro o regalar a parientes o amigos, por lo cual el valor de los insumos del Estado eran superiores al valor del producto vendido al Estado por los agricultores. Además, los agricultores privados ofrecían salarios tres veces superiores a los pagados por el Estado (sustrayendo potencial humano a las fincas estatales y las cooperativas) dado que el gobierno no podía subir los salarios debido a otros costes sociales. Castro dijo que los agricultores obtenían precios muy altos en el mercado negro debido a la demanda insatisfecha de productos agrícolas, y pidió un congreso de la ANAP en que fueran denunciadas aquellas «actitudes contrarrevolucionarias» y se debatieran soluciones apropiadas, como ajustar los suministros del Estado a los agricultores privados en relación a la cantidad y calidad de los productos entregados por ellos, así como por el rendimiento de sus cosechas (Castro, 1992a).

Las políticas anteriormente descritas contra los agricultores privados tuvieron un efecto nefasto en la producción agrícola, mientras que las políticas gubernamentales alternativas no fueron capaces de aumentar la producción. Habría sido más sensato controlar las verdaderas infracciones legales de los agricultores y aplicar la ley (en el acopio, los impuestos), en lugar de eliminar el incentivo de los mercados libres y fomentar la integración de los agricultores. Ciertamente es que no habría sido fácil aplicar aquellas medidas de control, pero, de hecho, el gobierno tiró el niño junto con el agua sucia del baño. Una encuesta realizada entre los agricultores privados de la provincia de La Habana reveló que muchos de ellos no cultivaban ya algunos productos porque habían dejado de ser

rentables. En general, el acopio no ha aumentado y el mercado negro es floreciente. Además, la integración en cooperativas no es realmente una solución, puesto que muchas de ellas no son rentables por los siguientes motivos: i) en 1983-87 se jubilaron 35.000 cooperativistas, creando un déficit de 32 millones de pesos en el fondo de pensiones; ii) los cooperativistas tienen conocimientos de gestión deficientes o nulos; iii) en las cooperativas el esfuerzo laboral es bajo, puesto que al parecer en algunas se trabaja sólo cuatro horas al día o 15 días al mes; iv) las cooperativas compraron maquinaria y equipos a crédito, pero, sin personal adecuado y con un mantenimiento deficiente, parte de dicho equipamiento se perdió o no se utilizó y las cooperativas no pudieron reembolsar los préstamos, y v) se hacían gastos excesivos en vivienda y pagos injustificados a los cooperativistas. A fines de los años ochenta el gobierno procuró corregir algunos de estos problemas, pero, con todo, el número de cooperativistas siguió disminuyendo: de 69.896 a 63.000 en 1985-90 (Añé y Pérez, 1989; Lugo, 1989).

Bajo el PR, los pequeños fabricantes privados, transportistas, vendedores ambulantes y otros trabajadores autónomos también fueron objeto de ataque. Según Castro, los pequeños empresarios (que, por ejemplo, producían escobas) vendían sus productos a un número creciente de cooperativas y empresas públicas que se convertían en agentes de ventas de dichos empresarios. Algunos de ellos abrían sus propias tiendas, empezaban a utilizar maquinaria, obtenían materias primas (en ocasiones en las empresas públicas y las cooperativas) y contrataban algunos trabajadores para expandir la producción y distribución. Los vendedores ambulantes que vendían cerveza y otros productos habían proliferado en las ciudades y las playas. Castro reconoció que estas actividades florecían porque el Estado no producía dichos artículos. Unos 10.000 propietarios privados de camiones (un grupo también criticado en 1982) transportaban productos agrícolas de las fincas privadas, mercancías de los fabricantes y personas (por ejemplo, a las playas los domingos), con beneficios de 50.000 a 100.000 pesos anuales. Los profesores trabajaban privadamente por dinero, y esto, presuntamente, permitía a los niños de familias con rentas altas prepararse mejor para los exámenes de entrada, lo cual producía privilegio y desigualdad. Finalmente, pintores y otros artistas de artes visuales estaban vendiendo parte de sus trabajos a las agencias y empresas estatales, que les pagaban sustanciosas sumas por ellos. Una vez más, como en 1982, algunas de estas actividades denunciadas eran ilegales, pero otras eran perfectamente legales. A partir de 1986 todas estas actividades o bien desaparecieron o disminuyeron fuertemente, pero algunas renacieron en 1993. En 1985-89 la proporción de autónomos en la fuerza de trabajo descendió del 1,2 al 0,7 %. El vacío

resultante en producción y servicios debía ser llenado por las agencias estatales, que en 1988 —según Castro— producirían diez veces más y venderían a precios diez veces inferiores que el sector privado, y además de eso contribuirían de 250 a 300 millones de pesos al tesoro público. Por último, Castro denunció la mayor flexibilidad de las normas sobre construcción de viviendas introducidas en 1980, afirmando que se habían convertido en un mecanismo más para enriquecerse: la gente compraba solares y materiales de construcción (muchas veces de forma ilegal, dijo) para construir viviendas y venderlas con jugosas ganancias, o simplemente compraban y vendían casas por lucro. Castro citó precios de viviendas de hasta 80.000 pesos, una fortuna para niveles cubanos. Una nueva ley prohibió estas prácticas e incrementó el control gubernamental sobre las transacciones de viviendas.

El 4.^a Congreso del partido aprobó la reintroducción del empleo autónomo en actividades privadas, pero con restricciones considerables: debe realizarse después del horario de trabajo en el sector público, ser complementario a la acción del Estado, estar limitado a actividades de servicios menores y estrictamente regulado para garantizar que no sea conflictivo con el socialismo. Además, los autónomos no pueden contratar a nadie fuera de la familia inmediata (además de Mesa-Lago, véase Ritter, 1990; Pérez-López, 1992).

Se prometió que el vacío creado por la eliminación/reducción de la actividad privada sería llenado por el Estado mediante la expansión del acopio, las agencias de comercialización, el mercado paralelo y la producción de las empresas públicas, así como el restablecimiento de minibrigadas de construcción y nuevos contingentes de construcción. Sin embargo, estos mecanismos no funcionaron: i) el sistema de acopio siguió siendo ineficiente y las empresas y fincas estatales, así como las cooperativas, no consiguieron incrementar la producción; ii) el mercado paralelo desapareció y continuó aumentando el racionamiento de todos los bienes de consumo, y iii) las minibrigadas y los contingentes de construcción fueron criticados por su ineficiencia. Estos aspectos serán analizados más adelante.

Los resultados negativos resumidos forzaron cambios en el régimen de propiedad. La Constitución se reformó en julio de 1992 eliminado el monopolio estatal sobre la propiedad de los medios de producción, reconociendo la propiedad de empresas mixtas y asociaciones económicas, facultando al Estado para transferir propiedades a empresas privadas e individuos (por autorización del Consejo de Ministros y con el objeto de promover el desarrollo) y permitiendo la creación de empresas de comercio exterior (de carácter semipúblico o semiprivado) que pueden directamente importar y exportar. El presidente de la Asamblea Nacional

declaró retóricamente que estos cambios de ninguna forma implicaban una transición al capitalismo («Constitución...», 1992).

En septiembre de 1993 se aprobaron las regulaciones al trabajo autónomo, que permitieron el ejercicio de 134 ocupaciones (primordialmente en servicios) y reprodujeron las restricciones adoptadas en el 4.º Congreso. Además: se prohibió ejercer el empleo autónomo a los dirigentes y profesionales universitarios, así como a todos los empleados del Estado durante la jornada laboral; se estableció la obligación de registrarse y pagar un impuesto, y se dijo que los precios y beneficios serían libremente determinados por el mercado pero que el Estado podría fijarlos si eran «excesivos». A fines de 1993 sólo 125.000 trabajadores se habían registrado, cuando probablemente diez veces ese número estaba desempeñando trabajo autónomo clandestinamente. El éxito de algunas de estas actividades privadas y su fuerte competencia contra sus homólogas estatales (por ejemplo, taxis y restaurantes) motivó a Castro a suprimir la autorización para ejercer varias de ellas a finales de 1993.

Por último, en octubre de 1993 se dictaron «principios» para la transformación de las fincas estatales en un nuevo tipo de cooperativas. El Estado se reserva la propiedad de la tierra, pero transfiere el usufructo a los trabajadores de la finca estatal que deciden incorporarse en cooperativas; el gobierno influye en la selección de las cosechas a sembrar y compra toda la producción a precios fijados por el Estado por debajo del precio de mercado; el equipo y aperos de labranza se traspasan a los cooperativistas mediante un préstamo (que debe reembolsarse con interés) y aquéllos pierden su salario y ganan de acuerdo con el beneficio de la cooperativa. Existe el peligro de que los cooperativistas dediquen sus esfuerzos a la parte de tierra que se les adjudica para autoconsumo, motivados a producir lo más posible para el mercado negro (donde se les pagan precios mucho más altos y frecuentemente en dólares) en menoscabo de la producción para el Estado (que se les paga mal y en pesos devaluados). A finales de 1993 no existía información sobre estos aspectos, ni tampoco sobre la producción total de fincas estatales convertidas en cooperativas.

b. *Planificación*

A mediados de los años ochenta el SDPE se convirtió en blanco de las siguientes críticas de Castro: i) había sido copiado de otros países socialistas sin adaptarlo a las condiciones cubanas; ii) en lugar de un medio auxiliar, se convirtió en una panacea, de la cual se esperaba que prácticamente construyera el socialismo por sí solo, al margen de la con-

ciencia obrera; iii) había alentado a los directores de empresas públicas a actuar como capitalistas pero sin la eficiencia capitalista, y iv) había generado gran cantidad de corrupción y derroche. El presidente de la JUCEPLAN fue destituido de su cargo, expulsado del Comité Central del partido y posteriormente sometido a proceso criminal por sus «desviaciones» en la administración de la economía. En 1986 se creó un nuevo Sistema de Dirección de la Economía (SDE; adviértase que la palabra planificación desapareció del SDPE) con la misión de transformar el antiguo sistema. Declarando que su trabajo estaba guiado por las ideas de Castro, el nuevo presidente del SDE advirtió que el mejoramiento del sistema no podía convertirse en un obstáculo para el PR: «No vamos a adaptar el PR al SDE, sino todo lo contrario. Nuestro criterio fundamental es que los mecanismos económicos no pueden sustituir el papel de la política, la ideología y la conciencia.»

Castro, a su vez, afirmó que mediante la toma de decisiones centralizada se iban a controlar totalmente algunos instrumentos económicos clave, como la inversión, las divisas y demás. El 4.º Congreso del partido ratificó esta declaración (añadiendo el control centralizado de las empresas) y otorgó poderes extraordinarios al Comité Central del partido, presidido por Castro, para tomar decisiones económicas, promulgar leyes (en lugar de la Asamblea Nacional) y emprender las acciones necesarias durante la vigente crisis económica. A mediados de 1992 la Asamblea Nacional reformó dos tercios de los artículos de la Constitución de 1976 (sin celebrar el obligado referéndum constitucional previo), para conceder nuevos poderes a Castro, entre ellos el derecho a declarar el estado de emergencia y suspender la Constitución. Castro asumió en seguida la dirección del recientemente creado Consejo de Defensa Nacional, cuya misión es administrar la nación en caso de un estado de emergencia.

Paralelamente a la recentralización macroeconómica de las decisiones, el PR impulsó la fusión vertical de empresas públicas en «uniones lineales». En los años setenta se produjo un movimiento para desagregar empresas, cuyo número aumentó de 700 a 3.000. En los años ochenta ocurrió lo contrario, primero con la agregación de empresas agrícolas (como el azúcar, el arroz y los cítricos) y, a partir de mediados de los ochenta, con la organización de uniones más grandes y el entrelazamiento de brigadas agrícolas y de construcción con fábricas y servicios de transporte. En 1989 había 61 uniones que generaban el 60 % de la producción agrícola, industrial, de construcción y de transporte, y que empleaban a un tercio de la fuerza de trabajo. La tendencia, al menos hasta 1993, era la continuación del proceso de fusión (parecido al emprendido en la década de 1960) con la excepción del turismo y las exportaciones, donde se está produciendo una descentralización.

Aunque ha habido una creciente centralización en la toma de decisiones, se ha producido un desmantelamiento de la planificación central. Desde 1986-90 no ha habido ningún plan quinquenal y desde 1991 no se ha publicado el plan anual (el presupuesto nacional prácticamente desapareció en 1991-93 —como en 1967-77— pero reapareció en 1994). En 1990 la Asamblea Nacional extendió el plan de 1990 al año 1991, y autorizó al Ejecutivo (es decir, Castro) a adaptar dicha ley al cambio de situación de cada año. Bajo el Período Especial en Tiempo de Paz, se ha forjado una estrategia general para hacer frente a la crisis, maximizar recursos y establecer prioridades, pero no es realmente equivalente a un plan convencional.

Un experimento de «planificación continua» se inició en 1988 con los objetivos de evitar la planificación teórica y promover la participación activa de gerentes y trabajadores, que no debían esperar directrices de más arriba sino ejercer su propia iniciativa en la elaboración del plan. No obstante la carencia de datos sobre futuros suministros, se alentó al personal de empresa a utilizar cifras anteriores, a trabajar con proyecciones y a maximizar los recursos disponibles. Además, debían corregir aquellos problemas (de escasez, por ejemplo) que surgieran durante la puesta en práctica del plan e incorporar las soluciones en el siguiente período del plan. Un alto funcionario del SDE reconoció francamente que la planificación continua era «simplemente un nombre, casi un pretexto», porque las características más arriba enumeradas son inherentes al proceso planificador. El 4.º Congreso del partido ratificó la planificación como instrumento económico decisivo, pero no definió su carácter y ni siquiera mencionó la «planificación continua», probablemente porque no había tenido éxito.

El nuevo sistema de indicadores directrices, decisivos para un proceso de planificación central, no se ha aclarado todavía. En 1986 Castro dijo que los beneficios no podían ser el objetivo más importante de una empresa, sino que debían subordinarse al «interés nacional». Pero éste no se ha traducido en indicadores prácticos sustitutivos de los beneficios. En 1989 los 500 indicadores utilizados anteriormente (entre los cuales predominaban los beneficios) han sido reducidos a 90, pero el presidente del SDE ha dicho que hace falta un nuevo sistema integrado de indicadores. En 1990 otro funcionario del SDE reiteró que seguían buscando mejores indicadores que los beneficios. El 4.º Congreso del partido insistió en que «el interés privado» no podía sustituir al «interés nacional», pero, una vez más, no dio carácter operativo a éste.

En la fábrica de armas de las fuerzas armadas (MINFAR) se aplicó un nuevo «sistema integral de mejora empresarial», y desde allí se extendió a otras empresas militares y después a un grupo de empresas

civiles. Bajo este sistema, el gerente es el «sargento de producción», el cual tiene plena autoridad en la empresa y toma todas las decisiones. Los trabajadores tienen que cumplir los deberes estipulados en sus contratos de trabajo, y su remuneración está estrechamente ligada a su rendimiento; los que repetidamente incumplen su norma productiva son degradados o despedidos (véase la sección g). Todas las empresas nacionales debían quedar bajo este sistema en 1993. Ahora bien, las dificultades en su aplicación a las empresas civiles, las preocupaciones sobre el desempleo y los atrasos en la revisión de las normas de producción han obstruido al parecer la prevista universalización del sistema. El 4.º Congreso del partido alabó los experimentos de MINFAR, pero no ofreció una valoración general de los resultados del sistema «integral».

Una característica del SDE parece ser su falta de evaluaciones. La comprobación de todos los elementos del SDE debían realizarse mensualmente pero, en la medida de mis conocimientos, no se ha publicado un solo informe en los seis años transcurridos desde su creación. A comienzos de 1990 el Comité Central del partido declaró la necesidad de corregir mecanismos que se habían burocratizado. Esta declaración fue seguida de importantes cambios en la dirección del Buró Político del partido, la Asamblea Nacional, las organizaciones de masas y, por último, aunque no en orden de importancia, de la destitución del presidente del SDE. Siguió a esto una reestructuración del mismo, pero el 4.º Congreso del partido no ofreció información sobre estos cambios y sus consecuencias.

No obstante las medidas más arriba expuestas, algunos economistas cubanos y unos cuantos expertos extranjeros sostienen que el PR no invirtió el proceso de descentralización iniciado a mediados de los años setenta bajo el SDPE (Zimbalist y Brundenius, 1989; Eckstein, 1990; Rodríguez, 1992). Pero un periodista cubano se ha preguntado cómo puede haber descentralización en Cuba si hasta las cuestiones más triviales pueden acabar en el Consejo Ejecutivo de Ministros; por ejemplo, la aprobación de cada contingente de construcción y la discusión sobre pequeños hurtos en los autobuses (Mesa-Lago, 1992).

El proceso de recentralización de la toma de decisiones y el declinar de la planificación central se han visto agravados por la inseguridad interior y exterior: la ausencia de un modelo de organización económica y la caída del bloque soviético. Como en 1966-70, Castro ha tomado el control pleno de las riendas de la economía y toma decisiones cruciales en una situación de guerra sin un conjunto objetivo de mecanismos de planificación. Pero ahora se enfrenta a una creciente inseguridad y no puede recurrir a la URSS para que le saquen de la crisis, dado que su antigua aliada y protectora no existe ya.

Las reformas introducidas en 1993 han creado aún mayor confusión en este campo, y a finales de ese año era aún más desconcertante la incógnita de cuál debía ser la naturaleza y el papel del plan (si alguno) en la cambiante economía cubana.

c. *Financiación*

Bajo el antiguo SDPE la financiación de todas las empresas iba a pasar totalmente de presupuestaria a autofinanciada. Pero los dos métodos a menudo se mezclaban y hacia 1985 predominaba la financiación presupuestaria. Una vez lanzado el PR, Castro afirmó que no era contrario a la autofinanciación siempre que se tuviera claro que «el trabajo político es lo que hace posible la eficiencia». Después de dos años de debate secreto, el Buró Político del partido aprobó la ampliación de la autofinanciación en 1988, pese a que la publicación de dicha resolución en la gaceta oficial se aplazó un año. Además, es éste un mandato que no se ha aplicado, porque el grupo que lo ha promovido carece de fuerza política, y también porque la situación de emergencia ha suministrado un pretexto útil para seguir centralizando la financiación. En 1990 yo pregunté al vicepresidente cubano, Carlos Rafael Rodríguez, qué proporción de las empresas se autofinanciaba; contestó que era imposible determinarlo, pero que había graves ineficiencias que impedían el progreso. Añadió que en la mayor parte de la economía no existía la financiación presupuestaria, sino algo intermedio entre ésta y la autofinanciación; no quiso hablar más sobre ésta, ni dar cifras concretas sobre el alcance de ambos métodos (Mesa-Lago, 1993a). El 4.º Congreso del partido ratificó el principio de autofinanciación, particularmente en empresas que operan en divisas (una minoría), pero permitió la continuación de la financiación presupuestaria centralizada (en una mayoría de empresas).

Las decisiones de inversión probablemente están más centralizadas que nunca, incluido el período 1966-70. En los comienzos del PR se dijo que las inversiones no estarían distribuidas entre un número excesivo de proyectos, y se daría prioridad a la terminación de los ya emprendidos (particularmente los destinados a promocionar las exportaciones y reducir las importaciones) antes de iniciar otros nuevos. Esto era, no obstante, también una de las metas del plan de 1981-85 que no se cumplió. Desde 1986 Castro ha iniciado demasiados proyectos, varios de los cuales tuvieron que ser suspendidos debido a la crisis y a la falta de recursos (véase más adelante). La eficiencia de la inversión debe ser tan baja o más que en 1966-70, debido a la completa centralización de las decisiones

inversoras, arbitrariamente tomadas por la jefatura política sin ningún mecanismo objetivo para seleccionar los proyectos más productivos. A partir de la década de 1980 estos problemas se agravaron con el descenso y cese final del flujo de capitales del COMECON. La apertura a las inversiones del mundo capitalista se ve como una solución tanto en términos de unos recursos muy necesitados como de la eficiencia en la asignación y uso del capital. Pero, con la excepción del turismo, la afluencia de capitales es obviamente insuficiente hasta la fecha y, en todo caso, es una fracción de la que anteriormente fluía desde el campo socialista.

d. *Estabilidad y precios*

En 1990 uno de los principales economistas cubanos dijo que el desequilibrio financiero interior figuraba entre los problemas más graves que acosaban a Cuba. El déficit presupuestario ascendió sostenidamente en la segunda mitad de los años ochenta, y probablemente continuó ascendiendo a principios de los años noventa, aunque no ha sido publicado el presupuesto del Estado después de 1990. Desde el punto de vista de los ingresos, las rentas del Estado son insuficientes. Más de la mitad provienen del impuesto de circulación, pero éste ha disminuido debido al descenso en la producción interior y las importaciones. Una cuarta parte de las rentas proviene de excedentes empresariales, pero ha ido aumentando las pérdidas; para superar esta situación habría que mejorar la eficiencia, pero está ocurriendo lo contrario. Desde el punto de vista del gasto, las subvenciones públicas a las empresas y a los bienes de consumo racionados (vendidos por debajo de los costes) casi se duplicaron en 1987-88 (de 362 a 678 millones de pesos) y fueron los principales culpables del déficit presupuestario de aquellos años. (El total podría ser aún mayor: en 1988 sólo la provincia de Pinar del Río recibió un subsidio de 280 millones de pesos, más de la mitad debido a pérdidas empresariales.) El volumen del subsidio a partir de 1988 no ha sido revelado, pero parece ir en aumento. En 1991 las subvenciones fueron de 447 millones de pesos sólo para productos agrícolas no azucareros y excluyendo costes de transporte (el 84 % de los productos agrícolas fue subvencionado en aquel año). Antes de la crisis de los años noventa, más de 44 % del presupuesto era consumido por los servicios sociales —orgullo de la Revolución— y el gobierno se resistía a reducir los gastos en educación, sanidad y pensiones. La financiación de la producción absorbía casi el 38 % del presupuesto, pero el gobierno quería incrementar la producción. Defensa y seguridad se llevaban alrededor del 10 % del presupuesto y los recortes en este sector eran aún más difíciles.

En 1989 un economista cubano explicó que los déficit presupuestarios de los países socialistas (como en los países capitalistas) podían financiarse con recursos interiores (ahorros de la población en cuentas a plazo fijo), deuda exterior o impresión de moneda. El gobierno cubano está alentando a la gente a ahorrar incrementando los tipos de interés de las cuentas bancarias del 2 % hasta incluso el 5 %, pero carecemos de estadísticas sobre el volumen del ahorro a partir de 1987. Cuba no ha recibido préstamos en divisas desde 1986 cuando suspendió el pago del servicio de deuda. Los préstamos soviéticos cesaron en 1992. Aunque dicho economista cubano no mencionó a Cuba específicamente, su conclusión era que en los países socialistas la financiación del déficit se hacía cada vez más mediante mayor impresión de moneda. Esta debe haber sido superior al crecimiento de la economía y de las cuentas de ahorro en Cuba, propiciando con ello la inflación.

Al final del año 1990 Castro afirmó que había demasiado dinero en manos de la población, lo cual tenía muchos inconvenientes, y después preguntó qué podría hacerse al respecto. El 4.º Congreso del partido declaró en 1991 la urgencia de reducir el excedente monetario debido a su efecto negativo sobre la productividad laboral y el absentismo (éste alcanzó el 20 % de la fuerza laboral en 1970).

Las medidas de ajuste empezaron a introducirse al finalizar agosto de 1990, cuando fue lanzado el «Período Especial en Tiempo de Paz». El programa se ha centrado en la reducción del consumo de combustible y alimentos. Desde 1990 a comienzos de 1992 se impusieron tres rondas de medidas de ajuste. Muchas fábricas se han cerrado o se ha reducido drásticamente su producción: la planta de níquel Che Guevara; una refinería de petróleo; una fábrica de autobuses; fábricas textiles, de cemento y de materiales de construcción; 347 fábricas del ministerio de industria ligera, y la producción de libros, revistas y periódicos. Los recortes en el uso de energía han sido: 50 % en el suministro de gasolina y combustibles al sector público y 30 % al sector privado; 10 % en el consumo de electricidad (un 40 % de consumidores privados que exceden sus cuotas están siendo desprovistos de energía eléctrica de 3 a 10 días, los infractores públicos son obligados a cerrar sus empresas); el 80 % en el número de autobuses; 50 % en el número total de taxis (los taxis del Estado están limitados a los servicios más esenciales, como urgencias médicas y funerales, mientras que se ha desprovisto totalmente de gasolina a los taxis privados); 70 % en el suministro de gasolina a los coches pertenecientes a profesionales, y un 30 % más a vehículos privados y públicos. Se hace un uso masivo de bicicletas para el transporte urbano (se han importado cerca de un millón de China) y los animales de tiro están sustituyendo a la maquinaria que funciona con combustible

en la agricultura. Además, se ha reducido o suprimido la iluminación de las calles, se han cerrado acondicionadores de aire y se ha racionado el gas de cocina. La semana laboral se ha recortado de cinco días y medio a cinco y se habla de una nueva reducción a cuatro días; la burocracia del partido ha quedado en la mitad y los trabajadores administrativos están siendo reasignados a la agricultura. Ha vuelto a introducirse el racionamiento de 20 productos alimenticios y 180 artículos de consumo, y el consumo social de alimentos (en las empresas públicas, las escuelas, etc.) ha sido rebajado. Las retransmisiones de televisión se han reducido de 129 a 48 horas semanales; se han cerrado muchos cines y teatros, y las actividades deportivas sólo se programan en horas de luz. En 1992 Castro advirtió: «... debemos prepararnos para mayores dificultades... incluso para la "Opción de cero combustible" en el caso más extremo...». A finales de 1991 y comienzos de 1992 Castro añadió que Cuba no había entrado en «la fase más crítica del Período Especial..., lo peor no ha llegado todavía» (Mesa-Lago, 1993a).

En 1992 empezaron a subir gradualmente los precios agrícolas; la primera ronda de incrementos abarcó 25 productos. Se dieron oficialmente tres razones para estas subidas: i) los precios se habían mantenido muy bajos durante muchos años, no obstante los aumentos en el coste de insumos e importaciones (abonos, semillas, pesticidas, herbicidas), por lo que están muy por debajo de los costes reales; ii) las subvenciones del Estado para cubrir el desfase de los precios, aunque se redujeron en 1980-81, han aumentado sostenidamente desde entonces, y iii) parte de los productos agrícolas subvencionados se utilizan para alimentar animales en el sector privado.

Aunque dichos aumentos de precios constituyen medidas positivas para reducir el déficit presupuestario (aunque negativas en términos del consumo de los grupos de renta más baja), no pueden resolver el problema general de las enormes distorsiones de los precios en Cuba. Se esperaba que el SDPE lograra una plena reforma de los precios en 1986, pero no fue así. Las declaraciones de Castro sobre la reforma de los precios son confusas y contradictorias, pero en un momento dado anunció una reforma general de los precios para 1990 que no se produjo. Muchos economistas cubanos creen que esta reforma se necesita con urgencia, pero no ha habido prácticamente debate público sobre esta importante cuestión. El 4.º Congreso del partido aplazó la reforma de los precios hasta haber superado la vigente crisis económica; entretanto, se ha extendido prácticamente a toda la economía la asignación física central.

Algunos economistas cubanos han dicho que las presiones inflacionarias se derivan de la insuficiencia de la producción de bienes de consumo

y de la imposibilidad de cubrir este desfase con importaciones. Se alega la ineficiencia de la gestión interior como causa principal de la insuficiencia de la producción: el incremento de los precios no puede utilizarse para fomentar el equilibrio después de un cierto punto (porque reduciría el consumo en el estrato de renta más baja), de ahí la necesidad de aumentar la oferta. Pero, como veremos más adelante, en Cuba han descendido tanto la producción como la eficiencia desde 1986.

Sorpresivamente, en agosto de 1993 se aprobó la despenalización de las divisas, de forma que se autorizó a los ciudadanos a recibir dólares del extranjero, se legalizó la circulación de divisas e incluso la apertura de cuentas bancarias en dólares. En realidad esta medida legalizó lo que venía ocurriendo de hecho desde hacía tiempo, ya que había un proceso creciente e incontrolable de dolarización de la economía. El mercado negro ya realizaba más transacciones en bienes de consumo que el sistema estatal de racionamiento. El objetivo estatal de la referida medida es capturar los dólares que se necesitan desesperadamente y, a ese efecto, se ha desarrollado una nueva red de tiendas estatales que venden sólo en divisas. Pero los precios en dichas tiendas se han fijado en un 50 % por encima de los precios del mercado negro, por lo que aquéllos no son competitivos. A medida que se ha dolarizado la economía se ha devaluado el peso y se ha disparado la inflación.

e. Estrategia de desarrollo

La estrategia de desarrollo sigue dependiendo del azúcar pero con una producción más equilibrada (como en 1971-85), aunque en esta etapa se está dando mucha mayor importancia al sector exterior y a las exportaciones no tradicionales. La caída del bloque soviético, y subsiguiente descenso/cese de ayuda y comercio, han obligado a Cuba a diversificar sus socios comerciales, reinsertarse en el mercado del mundo capitalista y abrirse a la inversión extranjera (políticas que se analizarán en la siguiente sección). Con objeto de lograr estas metas, sin embargo, es esencial diversificar otras exportaciones al margen del azúcar. Interiormente, el proyecto más importante de Cuba bajo el PR era el Programa Alimentario (PA), que aspiraba principalmente a conseguir la autosuficiencia de alimentos en las dos provincias mayores, pero también a incrementar la producción de azúcar y cítricos para la exportación.

En el sector azucarero, como hemos visto, y no obstante el aumento de producción desde mediados de los años setenta, las metas de producción para 1985 tuvieron que ser rebajados de 10,5 a 9,5 millones de toneladas y, con todo, no se cumplieron. La meta de 1990 era 9,5 mi-

llones de toneladas y para 1995 el Programa Alimentario fijó una meta de 11 millones de toneladas, lo cual supuso un aumento del 45 % sobre la producción media de 1986-90. Una cuestión clave es si Cuba tiene capacidad para cumplir dicha meta, otra es lo que haría con tal cantidad de azúcar en vista de la fuerte reducción en las exportaciones al desaparecido COMECON (y el efecto potencialmente negativo sobre los precios mundiales, que permanecieron bajos a comienzos de la década de 1990).

Existen varias limitaciones crónicas a un aumento de la producción azucarera muy por encima de los 8 millones de toneladas: i) hay ya muy poca tierra arable disponible sin desalojar cultivos alimenticios y otros de exportación; ii) la pauta de precipitaciones impide la extensión del período de zafra y el riego sólo cubre una quinta parte del total del área cultivada con caña de azúcar; iii) los rendimientos de la caña en Cuba son inferiores a los de otros competidores y el incremento de dichos rendimientos exige nuevas variedades de caña y mejoras en el cultivo y el abonado; iv) en torno al 70 % de la cosecha es recolectada por más de 4.000 cosechadoras que dejan cantidades considerables de caña en los campos, y la escasez de piezas de recambio, junto a un deficiente mantenimiento, reducen la eficiencia de las cosechadoras y amplían el período de la zafra; v) los centros de limpieza sólo elaboran la mitad de la caña, no funcionan bien y siguen dejando una buena cantidad de residuos, lo cual aumenta el consumo de combustible en el transporte y la molienda; vi) dos tercios de los molinos de azúcar son pequeños y más del 85 % fueron construidos antes de 1913; unos equipos viejos, un mantenimiento insuficiente y la falta de piezas de recambio (sólo adquiribles en Estados Unidos) causan constantes paradas en la molienda, y vii) las deficiencias de organización y transporte provocan retrasos y pérdidas en sacarosa recuperable. Debido a los últimos tres fallos, los rendimientos industriales cubanos son muy inferiores a los de otros productores. La caída del bloque soviético ha añadido nuevas limitaciones: i) la escasez de combustible que afecta a la zafra, la molienda, la limpieza y el transporte de la caña (se ha concedido máxima prioridad en el sector azucarero en la asignación de combustible, se están empleando de 100.000 a 200.000 buyes para el transporte y el cortado manual de la caña está sustituyendo parcialmente al trabajo de las cosechadoras); ii) falta de piezas de recambio para el nuevo equipamiento suministrado por la antigua URSS y varios países de Europa oriental, y iii) una reducción drástica de las importaciones de abonos, herbicidas y pesticidas.

La meta del PA de incrementar en dos veces el área de caña de azúcar irrigada en 1990-95 también se vio obstaculizada por la imposibilidad de importar los necesarios equipos del desaparecido COMECON.

No está claro qué impacto tuvo el PA en la producción de caña de azúcar. En 1990 se anunció que más de 100.000 hectáreas de caña de azúcar (en torno al 6 % del total) se iban a dedicar a la producción de tubérculos y verduras, pero que la producción de azúcar no se vería afectada debido a las mejoras en irrigación. Dos años después, sin embargo, Castro dijo que se iba a plantar caña en miles de hectáreas anteriormente dedicadas a la ganadería. A fines de 1993 también se anunció que se extendería (para 1994-95) el área sembrada de caña en 86.000 hectáreas, una superficie similar a la que se había recortado en 1990. Probablemente la suspensión de los planes de irrigación cañera en 1992 impidió el efecto compensatorio previsto, contribuyó a la caída de producción en 1993 y forzó la inversión de la política de siembra de caña.

En la agricultura no azucarera el PA constituyó probablemente el programa más ambicioso jamás iniciado por la Revolución; sus metas para 1995 eran: i) aumentar la producción de cultivos de exportación (el azúcar un 38 % y los cítricos en 100 %); ii) elevar la producción doméstica de alimentos para el consumo interior (de 13 a 121 % en arroz, tubérculos, verduras, plátanos, guineos, vacuno, leche, cerdo, pollos, huevos y pescados), y iii) hacer autosuficientes las provincias de La Habana y Santiago en tubérculos y verduras y, además, productoras de excedentes para otras provincias. Los requisitos para la consecución del PA eran igualmente colosales. Por ejemplo, la ampliación del riego a un millón de hectáreas de tierra cultivada, a conseguir en cinco años (1991-95), cuando se tardó treinta y un años (1959-89) en desarrollar un área irrigada de aproximadamente 900.000 hectáreas. Otros objetivos optimistas eran: nuevos sistemas de riego/drenado a ser aplicados a cerca de un millón de hectáreas de azúcar/arroz, 114 nuevos centros de desarrollo ganadero (utilizando trasplantes de embriones, inseminación artificial y técnicas genéticas), más 32 centros de cría y 325 granjas lecheras, 50 centros de cría porcina, 1.950 gallineros y así sucesivamente.

Las constricciones existentes para lograr los objetivos del PA eran enormes: tierra insuficiente; la movilización de cientos de miles de trabajadores urbanos al campo (que necesitarían vivienda, alimentación y transporte); el desarrollo de tecnologías nuevas y complejas; la construcción simultánea de cientos de proyectos; la limitación en la importación de los necesarios equipos, abonos y otros insumos indispensables, y la necesidad de mejorar tanto el acopio (para recolectar el aumento en producción) como la distribución (para llevarlo a los consumidores). Todas estas dificultades se agravaron con la severa escasez de combustibles. Las posibilidades de que el PA cumpliera sus objetivos eran, por consiguiente, escasas; por ejemplo, los proyectados incrementos de produc-

ción del 13 al 121 % en 1991-92 contrastaban con los descensos reales en producción de 1 a 15 % en 1984-89 en los mismos productos.

En abril de 1992 Castro reconoció que las limitaciones en combustible y cemento habían forzado la suspensión de varios elementos decisivos del PA: i) la construcción de nuevas presas y diques, así como de sistemas de irrigación; ii) el nuevo sistema de riego/drenado en el azúcar y el arroz (en éste, 15 de las 17 brigadas de trabajo proyectadas no eran operativas debido a que cada una necesitaba 1.000 toneladas de combustible anuales), y iii) la construcción de 44 campos de trabajo permanentes en la provincia de La Habana, esenciales para resolver el problema de escasez de mano de obra en la agricultura. No obstante estos problemas (que él achacó a la caída del socialismo en Europa), Castro pronosticó que la producción de tubérculos, frutas y verduras de la provincia de La Habana sería dos veces mayor en 1990-92 y se duplicaría nuevamente en 1994, y concluyó: «Estos son hechos y realidades que nos ayudan a discutir con los que están confusos, que no entienden, que se oponen [a nosotros]» (Castro, 1992a).

Debido al descenso en piensos importados de la URSS y Occidente, los cubanos recurrieron cada vez más a sucedáneos para el ganado —como melaza, sacarina, productos de la mandioca, etc.— y un pienso líquido para los cerdos compuesto de subproductos de la caña de azúcar y restos de alimentos (los pollos no pueden ser alimentados con dichos sucedáneos y no se encontraron alternativas viables). Los expertos advirtieron que era vital mezclar adecuadamente los nuevos productos con los piensos tradicionales para evitar la pérdida de peso y una mayor mortalidad de reses y cerdos. En 1991, debido al fuerte descenso de las importaciones de piensos y a que la producción interior de piensos tenía un desfase de dos tercios respecto a la meta planificada, se introdujo un cambio radical en la alimentación del ganado: el método racional de pastos Voisin. Inventado por un científico francés relativamente desconocido que trabajó y murió en Cuba, el método fue ensayado en la isla en 1964, pero abandonado porque exigía la instalación de cercados eléctricos para la división de la tierra, riegos y personal especializado. En su segunda versión del método Voisin, el pienso sucedáneo para el ganado vacuno mezclaba pastos, sacarina y plantas leguminosas, una fórmula similar a la probada, sin éxito, en la segunda mitad de los años sesenta (en la que se mezclaban pastos y melaza). Castro ordenó a todos los ranchos ganaderos de que aplicaran el nuevo método durante un período de diez meses (marzo-diciembre de 1991); sin embargo, en abril de 1992 Castro dijo que el cambio no estaría completo hasta mediados de 1993. Este considerable retraso fue obviamente causado por dificultades para importar los insumos para los cercados electrificados, que una vez instala-

dos también incrementarían el consumo de combustible. A mediados de 1993 nadie hablaba del método Voisin.

Junto al azúcar, otras exportaciones tradicionales cubanas son el tabaco, los cítricos, la pesca y el níquel. Además del descenso en producción de tabaco en rama, las exportaciones de cigarros puros se han visto perjudicadas por el cese de negocios con Cuba de la compañía internacional Davidoff et Cie, supuestamente a causa del deterioro en la calidad de los productos del tabaco cubano. Hasta comienzos de los años noventa prácticamente todas las exportaciones de cítricos se hacían a los países del COMECON debido a la baja calidad de la fruta y a la fuerte competencia del mercado mundial. La interrupción del comercio con dichos países obliga a Cuba a vender sus excedentes de cítricos en el mercado mundial, lo cual resulta una tarea de suma dificultad hasta que mejore la calidad de la fruta. Las exportaciones de pescado y marisco están cada vez más limitadas por la universalización de la zona marítima de 200 millas, la escasez de combustible y el envejecimiento de la flota cubana. En torno a dos tercios de las capturas se hacen fuera de aguas de la isla, y los barcos cubanos se ven forzados a pescar en áreas más alejadas de las costas, para lo cual es menester mayor cantidad del escaso combustible. La flota cubana está envejeciendo rápidamente y no hay recursos para renovarla, mientras que es imposible o extremadamente difícil obtener piezas de recambio en la CEI y la antigua RDA (ahora parte de Alemania Federal). A consecuencia de estos problemas, ha sido disuelta la Flota Atunera cubana, la Flota del Golfo de México se ha integrado con otras dos flotas y muchos barcos de FLOCUBA están inmovilizados (Marris, 1992). A fines de 1993 Cuba estaba ofreciendo vender parte de la flota pesquera en el mercado capitalista. Finalmente, las exportaciones de níquel se vieron perjudicadas por el cierre, en 1991, de la planta Che Guevara que se acababa de inaugurar, debido a dificultades técnicas, escasez de combustible y falta de demanda. La planta de Camariocas ha sufrido atrasos en su terminación y no ha entrado en funcionamiento; además tiene una tecnología anticuada y, por ello, un alto coste del mineral extraído. Por otra parte, la planta Che Guevara se reabrió en 1992 o 1993 y una corporación canadiense ha invertido para modernizar la producción de níquel, especialmente en las antiguas plantas estadounidenses, y Rusia a otorgado un crédito modesto para concluir la planta de Camariocas. Estas mejoras se han visto contrapesadas por una caída drástica de los precios del níquel en años recientes.

Las exportaciones no tradicionales más importantes de Cuba son el petróleo, la biotecnología y productos medicinales. Las llamadas «reexportaciones de petróleo» (en realidad nunca reexportadas físicamente por Cuba, sino exportadas por la Unión Soviética a otros países, y así

la URSS otorgaba créditos en divisas a la isla) eran la segunda fuente de ingresos en divisas en los años ochenta, pero fueron suspendidas por la URSS en 1990. La producción doméstica de petróleo ha sufrido dificultades debido a la deficiente tecnología para perforar los depósitos a mayor profundidad, pero inversionistas canadienses están resolviendo ese problema. La planta de energía nuclear de Cuba en Juraguá está paralizada, por lo que es dudoso que la primera unidad empiece a funcionar en los próximos años. (En 1992 el hijo de Castro, que dirigía el instituto de energía nuclear, fue cesado por razones de ineficiencia y de incapacidad para terminar la planta.) Cuba está atrayendo tecnología occidental para extraer petróleo, especialmente mar adentro, y busca capital extranjero para completar la planta nuclear.

En 1986 se construyó un impresionante Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología que en teoría produce 136 productos, entre ellos interferón, instrumental para el diagnóstico del SIDA, vacunas contra la meningitis y la hepatitis B, factor de crecimiento epidérmico, enzimas, etc. En 1990 se dijo que la URSS había comprado más de 500 millones de dólares en estos productos, así como artículos médicos de alta tecnología y servicios de rehabilitación para las víctimas del accidente de Chernobyl; se declaró que el valor de estos bienes y servicios habían aumentado hasta casi 900 millones de dólares con el pacto comercial de 1991. Se ha vendido cierta cantidad de productos biotecnológicos a Brasil y unos cuantos países más en vías de desarrollo. Aunque son logros extraordinarios, las exportaciones biotecnológicas se enfrentan a diversas dificultades: i) dudas sobre la calidad y eficacia de estos medicamentos a consecuencia de los métodos inadecuados de prueba de efectividad; ii) rentabilidad de dichas exportaciones; iii) impedimentos para desarrollar nueva tecnología; iv) Cuba no paga patentes extranjeras y, por tanto, no puede vender legalmente sus productos a países que respetan dichas patentes, y v) las dificultades para penetrar el mercado internacional, un oligopolio fuertemente controlado por unos pocos países industrializados.

El turismo tiene potencial a largo plazo para convertirse en una fuente importante de moneda firme. Las monumentales metas para 1995 son 1,5 a 2 millones de turistas y 1 a 1,2 billones de dólares en rentas brutas. Éstos son de tres a cuatro veces superiores al número de turistas y rentas generados en 1993. El capital (una inversión de 200 millones de dólares proyectada para 1989-2000) y la experiencia españoles en empresas conjuntas con Cuba son la gran esperanza para alcanzar estos ambiciosos objetivos. Pero Cuba tendrá que mejorar sustancialmente la calidad de los servicios para aumentar el índice de regreso de los turistas, seguir atrayendo a los inversores extranjeros y ampliar su comercialización mundial para hacer aquel sueño realidad. Existe un problema adicional: a

los cubanos no se les permite el acceso a los servicios turísticos, lo cual ha causado considerable irritación y oposición entre la población. Castro se refirió recientemente a este problema: «Algunas personas tienen dificultad para entender [la importancia del turismo]. Cuando se construye un nuevo hotel o centro turístico reaccionan como si estuvieran perdiendo algo» (Castro, 1992a). Mientras siga ampliándose este «apartheid turístico» en medio de las crecientes privaciones, el malestar de la población irá en aumento.

Por último, la caída brusca en las importaciones de combustible, insumos y piezas de repuesto ha tenido un impacto nefasto en la producción industrial. Estimaciones de dentro y fuera de Cuba consideran que alrededor del 70 % de la capacidad instalada está paralizada y los cubanos están ofertando muchas de dichas fábricas para la venta a capital extranjero.

La proporción de gastos en defensa y seguridad, que alcanzó un máximo de 11,6 % en 1984, descendió a un promedio de 10,4 % en 1985-89 (se dijo que había bajado a 9,6 % en 1990, pero esta era una cifra preliminar). Algunos factores que contribuyeron a este descenso fueron la retirada de África de tropas cubanas y la crisis económica doméstica. Pero la caída del socialismo en Europa oriental, y especialmente en la URSS, que dejó a Estados Unidos como única superpotencia, ha originado nuevas preocupaciones en Cuba, así como presiones para aumentar las defensas frente a una potencial intervención estadounidense. En abril de 1992, tras dar la desalentadora noticia del cese de muchos proyectos del PA, Castro dijo que la defensa no será abandonada y afirmó que, al estilo iraquí, se estaban construyendo ciento de túneles en la isla con fines defensivos, desviando combustible y cemento de esenciales proyectos de desarrollo (Castro, 1992a).

f. *Sector exterior*

La fuerte relación económica de Cuba con la URSS y el COMECON se mantuvo en 1986-88, pero a partir de entonces empezó a declinar gradualmente debido a: la caída del socialismo en Europa oriental, el deterioro económico de la URSS, el abortado golpe militar en este país (que prácticamente eliminó a todos los aliados cubanos en el partido, la KGB y la burocracia central rusa) y la desintegración de la URSS y sustitución por la CEI. A consecuencia de la caída del bloque soviético, así como del cese de nuevos créditos por parte del Club de París desde 1986, Cuba está intentando desesperadamente diversificar sus socios comerciales y atraer inversiones extranjeras directas.

El último acuerdo quinquenal soviético-cubano de cooperación comercial y económica fue el de 1986-90, el cual debía incrementar los créditos a Cuba en un 50 % por encima del quinquenio precedente. Tanto el volumen como la parte proporcional del comercio con la URSS alcanzaron máximos en 1987, mientras que el déficit comercial siguió aumentando hasta que alcanzó su cenit en 1989. El comercio cubano con el COMECON ascendió a un máximo en 1988 cuando casi el 84 % del total del comercio de la isla se realizó con este grupo de naciones.

A partir de 1989 empezó a descender el comercio con la URSS, y en 1990 los líderes soviéticos decidieron eliminar dos costosas concesiones a Cuba: las «reexportaciones» de petróleo pagadas en divisas y una garantía de la deuda cubana con una compañía francesa que suministraba créditos para comprar azúcar en el mercado mundial con objeto de cumplir los compromisos de exportación cubanos de dicho producto. No se firmó ningún acuerdo quinquenal con la URSS para 1991-95, sino solamente un pacto comercial y económico de un año para 1991. En éste se estipulaba una disminución del volumen total de comercio entre ambos países a causa de los recortes tanto en las exportaciones de níquel cubano como en las importaciones rusas de equipo y artículos manufacturados no esenciales. El volumen de las exportaciones de azúcar permaneció inalterado pero el precio era más bajo, por lo que también descendió el valor de las exportaciones de azúcar. El COMECON fue disuelto a comienzos de 1991 y ello generó un giro radical de las transacciones entre sus antiguos miembros: desde unos precios subvencionados mutuamente acordados y pagos en rublos transferibles se pasó a precios mundiales y pagos en divisas. Dado que más de cuatro quintas partes del comercio cubano se hacía en moneda no convertible o trueque, este giro ha tenido un efecto devastador en la economía de la isla. Bajo el pacto comercial de 1991 con la URSS, todos los productos (salvo el azúcar) se fijaron a precios mundiales y dólares USA. Desde 1992 el precio del azúcar se ha fijado también a nivel mundial y en dólares.

Los cambios arriba expuestos han provocado un deterioro en los términos de intercambio, adversos a Cuba, respecto a los tres productos más importantes en el comercio con la URSS: el azúcar, el petróleo y el níquel. El precio mundial del azúcar subió de 4,1 a 12,8 centavos de dólar la libra en 1985-89 y luego descendió a unos 8 centavos (en 1993 el precio estaba muy por debajo de los niveles de 1980-81 de 16 a 28 centavos). El precio promedio soviético pagado por el azúcar cubano permaneció prácticamente estancado en 1981-90 (alrededor de 42 centavos de dólar), pero la razón máxima entre precios soviéticos y mundiales del azúcar descendió de 12:1 en 1985 a 3:1 en 1990. Por el contrario, el precio que Cuba pagaba por las importaciones de petróleo soviético,

que era inferior al precio mundial en 1981-85, superó a éste en 1986-90. Se produjo también un deterioro a la mitad de la razón entre precio soviético y precio mundial del níquel: de 2,41:1 en 1985 a 1,23:1 en 1990. Aunque el saldo conjunto neto de los precios soviéticos de los tres productos seguía siendo muy favorable para Cuba (comparado con los precios mundiales), la subvención disminuyó en 1986-90. Ahora bien, en 1991 el precio soviético para el azúcar cubano se rebajó de 42 a 24 centavos la libra, y en 1992 fue nuevamente reducido a 12 centavos (igual al precio mundial). Así pues, en 1992 la subvención al precio del azúcar era la cuarta parte de la de 1990. Los subsidios soviéticos al níquel fueron eliminados en 1991, pero Cuba está pagando el petróleo soviético al precio del mercado mundial. El resultado neto general de los precios soviéticos de 1991-92 fue bastante adverso para Cuba.

A causa de la desintegración de la antigua URSS y la creación de la CEI, desde 1992 Cuba tiene que negociar individualmente con quince Estados. En la primavera de ese año Cuba había firmado sólo un pacto comercial con Rusia, pero era exclusivamente para el primer cuatrimestre (con opción a renovación en los restantes cuatrimestres) y pactos con otros siete estados por períodos que iban de uno a cinco años. En julio de 1992 los rusos anunciaron que no iban a renovar el pacto para lo que restaba de año, pero en noviembre de ese año firmaron un convenio de un año para 1993; a fines de éste se firmó un protocolo de intercambio para 1994, pero con condiciones muy confusas. Las centralizadas empresas cubanas tienen que tratar con empresas rusas/CEI, cada vez más descentralizadas, competitivas y maximizadoras de sus beneficios. Todavía en 1991 las exportaciones cubanas de azúcar se coordinaron mediante una institución soviética central que, a su vez, contrató suministros esenciales para la isla con numerosas empresas dentro de la URSS; el resto del comercio exterior se realizó con miles de empresas descentralizadas. Desde 1992 han desaparecido prácticamente los mecanismos de compra/venta centrales. Estos problemas, unidos a la complejidad de los nuevos contratos (que se establecen a precios de mercado en divisas), requieren una negociación considerablemente más prolongada y han sido una de las causas del retraso de los suministros soviéticos. Otras limitaciones del comercio cubano con la URSS son: un fuerte descenso en el número de barcos mercantes soviéticos para realizar dicho comercio (desde 1992 prácticamente ninguno) e insuficiente capacidad de los muelles cubanos.

En 1989-91 Cuba anunció retrasos y recortes en numerosos suministros soviéticos; en 1991 casi la mitad de las importaciones proyectadas no fueron enviadas. El recorte más importante fue el de petróleo crudo y productos derivados, que descendieron un 28 % en 1987-92. En 1992

Cuba proyectaba la exportación de un máximo de dos millones de toneladas de azúcar a la CEI, la mitad de lo que solía exportar anteriormente (a un cuarto del precio de 1991) e importar un máximo de tres millones de toneladas de petróleo y productos derivados, poco más de un cuarto de lo que se importó en 1987. Se preveía que Cuba vendería menos níquel y cítricos que antes, y la dudosa expansión de las exportaciones de biotecnología no podría compensar las enormes pérdidas en otras exportaciones. En septiembre de 1991 Gorbachov anunció que la ayuda económica a Cuba (incluidos créditos comerciales, préstamos para el desarrollo y precios subvencionados) cesaría en el «futuro inmediato» y las relaciones comerciales se limitarían estrictamente a un comercio mutuamente provechoso. Al parecer, toda ayuda finalizó a comienzos de 1992. Se dice que la CEI está pidiendo a Cuba un acuerdo sobre el tipo de cambio para la devolución de la deuda acumulada en 1960-91. Las relaciones comerciales de Cuba con la CEI probablemente continuarán en el futuro inmediato, pero a niveles drásticamente reducidos, concentradas en un intercambio de azúcar por petróleo, sin los antiguos y generosos términos, y enfrentadas a crecientes dificultades y retos.

El comercio cubano con la antigua RDA y Checoslovaquia (los dos principales socios comerciales en la Europa oriental), así como con Hungría y Polonia, o bien ha cesado o ha sido reducido a un volumen insignificante. Continúa el comercio con Bulgaria y Rumania, pero en un nivel muy bajo. Las estimaciones indican que para 1992 Cuba podría haber perdido el 95 % del volumen comercial con Europa oriental. Éste incluye la pérdida de la exportación de un millón de toneladas de azúcar a dos veces el precio del mercado mundial. Cuba ha perdido también decisivas importaciones de Europa oriental, vitales para la economía. La financiación del déficit comercial con Europa oriental se ha interrumpido totalmente. El acuerdo para pagar la deuda cubana con los europeos orientales se ha fijado como condición previa para reanudar el comercio con algunos de estos países.

Las perspectivas de que Cuba sustituya su antiguo comercio con la URSS y Europa oriental mediante la expansión de su comercio con China, así como con economías de mercado desarrolladas y en vías de desarrollo, no son prometedoras, al menos a medio plazo. China no puede exportar a Cuba la mayoría de los bienes de capital, manufacturas y piezas de recambio que Europa oriental y la URSS le enviaban. El incremento en las adquisiciones chinas de azúcar es relativamente pequeño, limitado por la creciente autosuficiencia de este país y por otros factores, y sólo ha cubierto una fracción muy pequeña del excedente de azúcar que han dejado los antiguos compradores de Cuba del desaparecido COMECON. El comercio con Europa occidental, Canadá y Japón

descendió sostenidamente a lo largo de la década de 1980, y particularmente en 1986, a causa de la falta de exportaciones vendibles de Cuba y de nuevos créditos; además, la Comunidad Europea está creciendo como exportador neto de azúcar. En Asia la competencia de Australia, Tailandia y otros productores de azúcar más eficientes, que también ofrecen transportes baratos, está planteando un serio reto a Cuba. El comercio con Latinoamérica es muy reducido y ha resultado en un déficit de difícil financiación, dado que muchos socios potenciales son exportadores de azúcar o autosuficientes. La expansión del comercio de Cuba en esta región está también obstruida por el dominio de Estados Unidos (y un endurecimiento del embargo), la escasa competitividad de las exportaciones cubanas y los acuerdos de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México.

En 1986 Cuba suspendió el pago del servicio de su deuda en divisas. El Club de París suspendió de inmediato todo nuevo crédito, una situación que aún prevalecía a fines de 1993. La postura oficial de la isla es que se necesitan nuevos créditos para reanudar el pago del servicio de deuda; pero los acreedores exigen que el servicio de deuda preceda a la concesión de nuevos créditos, por lo que la situación está en punto muerto. Desde fines de los años ochenta Cuba empezó a aplicar, de modo flexible, la ley de 1982 de inversión extranjera. En 1991 el 4.º Congreso del partido aprobó una resolución que legitimaba lo que se hacía ya extraoficialmente y permitía diversos tipos de inversión extranjera, tales como empresas mixtas, asociaciones económicas, producción en cooperativa y acuerdos de comercialización. Los socios extranjeros disfrutaban hoy de una serie de ventajas como: una mayoría de acciones en áreas que el gobierno ha fijado como prioritarias (por ejemplo, el turismo), exención total o parcial del impuesto de beneficios (hasta diez años en el caso del turismo) y de derechos de aduana, libertad para contratar ejecutivos extranjeros, libre repatriación de beneficios y de los sueldos de los extranjeros, intervención estatal para el despido de trabajadores indisciplinados o improductivos, ausencia de huelgas y pago de salarios bajos, servicios gubernamentales especiales (legales, arquitectónicos), contabilidad y control administrativo propios de cada parte, etc. La reforma constitucional aprobada en 1992 (discutida anteriormente) ofrece garantías a la inversión extranjera y las empresas mixtas y da mayor flexibilidad a los mecanismos de comercio exterior, eliminando legalmente el obstáculo de la antigua centralización estatal en este área. Aproximadamente la mitad de toda la inversión extranjera (gruesamente calculada en 500 millones de dólares en 1993) está en el turismo, y otros sectores (ya en funcionamiento o potenciales) son las prospecciones petrolíferas, la extracción de níquel, las comunicaciones, etc. Pero no es

posible evaluar la importancia y el impacto reales de la inversión extranjera debido a la falta de información precisa y consolidada sobre la identidad de los inversores, la índole de actividad a que se dedican y las cantidades invertidas. Se dice, sin embargo, que muchas de estas empresas mixtas no aportan capital financiero, sino acceso a mercados, conocimientos, etc., y que Castro participa directamente en la decisión de autorizar cada acuerdo de inversión extranjera. Y los riesgos de invertir en Cuba son altos: en 1991 *Business International* situó a la isla en el lugar 116, entre 129 países, en términos de seguridad de la inversión.

g. Trabajo y empleo

Los objetivos del PR eran aumentar la productividad laboral, fortalecer la disciplina en el lugar de trabajo y luchar contra la corrupción. Las medidas específicas iban encaminadas a: reducir el excedente de mano de obra; endurecer las normas de producción (generalmente incrementándolas); revisar los salarios, los bonos a la producción, las primas, los fondos para premios y los pagos de horas extra (generalmente reduciéndolos); reiniciar el trabajo voluntario no remunerado, la movilización laboral y las brigadas de construcción y crear nuevos contingentes de construcción; aumentar el uso de estímulos morales (aunque utilizando incentivos materiales selectivamente en contingentes, turismo, etc.), e imponer medidas más severas contra la corrupción y la delincuencia.

No obstante los llamamientos retóricos a una mayor participación obrera en las funciones económicas (por ejemplo, en la «planificación continua»), se ha producido un endurecimiento del control administrativo sobre los trabajadores. En su Congreso de 1989, la CTC señaló la insuficiencia de los mecanismos establecidos para la participación obrera en la elaboración, el seguimiento y la aplicación de planes; la CTC se lamentó también de que los gerentes no concedan importancia a esta cuestión y consideran las asambleas de producción como una simple formalidad. Bajo el «sistema integral de mejora empresarial» (en que el director de empresa es un «sargento de producción»), el trabajador que repetidamente incumple la norma de trabajo es degradado o despedido. Al coronel que dirige las empresas militares le preguntaron si éstas no tenían ventajas sobre sus equivalentes civiles, puesto que aquéllas podían burlar cientos de regulaciones laborales restrictivas. El coronel contestó que la vigente legislación laboral protege en exceso al mal trabajador y desmoraliza al bueno, por tanto, habría que cambiar la ley, pues debía concederse la seguridad en el trabajo sólo a aquellos obreros que cum-

plieran con su deber. Una posterior pregunta fue si la eficiencia empresarial debía incrementarse al precio de despedir a los trabajadores sobrantes. El coronel replicó afirmativamente diciendo que 258 trabajadores habían sido despedidos de la empresa Che Guevara y asignados a otras fábricas o a brigadas de trabajo en la agricultura, que ahora producen alimentos para los obreros de dicha empresa y que, por tanto, todos salían ganando.

Se ha producido una creciente movilización laboral militarizada, sobre todo en la construcción y la agricultura. Las microbrigadas de construcción, eliminadas bajo el SDPE debido a su ineficiencia, fueron restablecidas por Castro en 1987 como pieza clave para resolver el déficit en la construcción (en viviendas, presas, carreteras, etc.). Castro mantuvo que el anterior problema de ineficiencia estaba resuelto porque: las microbrigadas se componen ahora de mano de obra sobrante liberada por las empresas; los restantes trabajadores mantienen la producción en la empresa y cumplen las metas productivas sin cobrar horas extra, y el Estado reembolsa a la empresa los sueldos pagados a los miembros de las brigadas y les proporciona los suministros necesarios. En 1988 Castro alabó las brigadas porque, habiendo creado un nuevo espíritu de trabajo, eran milagros vivientes, pero al finalizar 1989 invirtió totalmente su anterior juicio optimista: las brigadas estaban desorganizadas, se descomponían, eran anárquicas, hacían mal uso de los equipos y carecían de control de costes (gastaban 2,40 pesos por cada uno producido, en parte debido a que la mayoría de sus miembros no eran trabajadores profesionales de la construcción).

En vista de la ineficiencia de las brigadas, Castro decidió que la solución estaba en los contingentes de construcción. En lugar de reclutar obreros sobrantes de las empresas, los miembros de los contingentes eran cuidadosamente seleccionados, estaban muy bien pagados, alimentados y alojados y recibían otros privilegios especiales. A cambio ellos debían laborar duramente y producir «milagros de trabajo». La meta para 1990 era de 100 contingentes con 50.000 trabajadores, pero en aquel año sólo operaban 72 contingentes con 37.852 trabajadores. Al principio los contingentes se organizaron rápidamente, después se hizo obligatorio que fueran autorizados por el Consejo de Ministros. Más adelante dejaron de crearse nuevos contingentes (debido a la falta de combustibles y suministros y para evitar el descrédito de recaer en los «viejos vicios») y, por último, algunos trabajadores fueron enviados a sus casas o a trabajar en otros proyectos. Castro declaró primeramente que los contingentes eran muy productivos (un coste de 0,70 por cada peso producido), pero pronto surgieron dificultades. A los miembros de los contingentes se les pagaban sueldos más altos que a la mayoría de los trabajadores,

y de ahí que también sus costes de producción fueran mayores. (Castro sostenía que esto no constituía un problema, porque los costes seguían siendo inferiores a un peso.) La alimentación especial, los alojamientos con aire acondicionado y otros emolumentos, muchos de ellos importados, aumentaban los costes salariales. La escasez de materiales de construcción originaba cuellos de botella, un obstáculo inicialmente señalado por los técnicos cubanos pero desestimado por Castro. Y había costes ocultos impuestos a otros sectores de la economía. Castro ha descalificado las críticas a este proyecto diciendo que las hacen «gusanos» que sólo ven «el lado negativo» de las cosas. Cuando el nuevo secretario general de la CTC observó en 1990 que los integrantes de los contingentes ganaban más que el ministro de la Construcción, Castro respondió que «los ministros no tienen que picar piedra ni conducir apisonadoras» y su trabajo no puede compararse con el de los contingentes.

La escasez de mano de obra en la agricultura está aumentando la presión sobre los trabajadores movilizados. En 1992 la cosecha de la patata coincidió con otros cultivos, y unas lluvias más abundantes de lo normal exigieron una enorme movilización de mano de obra de todas las edades y actividades. Castro supervisó personalmente los trabajos en varias fincas del Estado y criticó públicamente: i) a burócratas de la enseñanza y gerentes agrícolas débiles que eran indulgentes con los escolares, porque los burócratas se oponían «con una mentalidad académica» a las suspensiones de clases de tres a siete días y los gerentes no les asignaban tareas suficientemente duras; ii) a las mujeres que solicitaban una reducción de trabajo, lo cual les negó porque aquella era una actitud «mental», dado que estaban físicamente capacitadas para cumplir la tarea, y iii) a los estudiantes universitarios que tenían obligaciones de trabajo reducidas (2.000 libras de patatas, que él pidió fueran incrementadas a 5.000 libras) y salían de los campos dos horas antes de la hora oficial (7,30 p.m. en días laborables y medio día los domingos). Denunció la conducta impropia de la Federación de Estudiantes Universitarios y pidió que fueran identificados los responsables como ejemplo para los demás. Los retrasos en la siembra de la batata, el maíz y los pastos generaron nuevas movilizaciones de trabajadores. Castro pidió que no se perdiera un minuto y exigió que los movilizados trabajaran incluso el Día del Trabajo (Castro, 1992*b*).

Como un eco de sus discursos de la etapa idealista de 1966-70, Castro dijo en 1986 que era un error creer que se podía construir el socialismo con incentivos materiales, porque sólo el capitalismo podía desarrollarse de ese modo: «El socialismo tiene que construirse con conciencia e incentivos morales.» Después criticó las siguientes distorsiones de los incentivos materiales: i) se pagaban sueldos desproporcionados al trabajo

realizado, los pagos se fijaban según seis normas diferentes de producción en lugar de una, a los trabajadores se les pagaba dos o tres veces el índice legal y los diferenciales salariales eran excesivos (una proporción de 10 a 1); ii) sólo el 25 % de las normas laborales estaba técnicamente justificado, las normas no se ajustaban durante tres años y se hacían de fácil cumplimiento; iii) los bonos de producción eran fácilmente obtenibles, muchas veces se introducía nueva tecnología y, dado que la norma no se ajustaba al alza, todo el mundo recibía bonos; iv) las empresas utilizaban los bonos para arrebatarse trabajadores a agencias públicas fundamentales (por ejemplo, el Consejo del Estado); v) los derechos de autor se pagaban por página en lugar de por calidad, y vi) los gerentes no controlaban las ausencias de los obreros, los médicos concedían bajas por enfermedad ilegalmente y el absentismo laboral había aumentado (25 % en la planta textil de Santiago).

Varias fueron las medidas promulgadas para corregir algunos de los anteriores problemas. Se prefirió la recentralización a la hora de fijar normas laborales y salarios porque —según Castro— estas decisiones «no deben dejarse a miles de personas». Se impuso la tendencia hacia un ajuste al alza de las normas y una reducción de los salarios, salvo los más bajos. Premios, primas y bonos a la producción fueron revisados para determinar cuáles eran adecuados y cuáles no. En la segunda mitad de la década de 1980 los trabajadores empezaron a rechazar «espontáneamente» los bonos y, en asambleas nacionales, Castro y los líderes sindicales exaltaron esta clase de acción como ejemplar. Pero todavía en 1990 Castro se lamentaba de que semejante «basura» (los bonos) no hubiera sido aún legalmente modificada. En 1987 las primas se habían reducido a la mitad, descendiendo de 1,9 a 0,9 % del salario base. Pero el proceso de revisión de las normas nacionales de producción topaba con dificultades: en 1989 (tres años después del comienzo del PR), un 81 % de las 2,5 a 3 millones de normas no habían sido revisadas, sin lo cual no era posible establecer los sistemas de costes programados por el SDE para 1990. También se buscaron nuevos incentivos, pero las fórmulas de pago (utilizadas en el «sistema integral») sólo se aplicaban al 1 % de la fuerza de trabajo. El 4.º Congreso del partido no ofreció datos específicos sobre ninguno de estos temas, puesto que la severa crisis interrumpió todos estos experimentos.

El gobierno ha iniciado una lucha contra la corrupción y la delincuencia. Se han introducido en el código penal nuevas formas de delincuencia económica y administrativa y se han hecho más rigurosas las sanciones. Pero Castro reconoce que dichas medidas no han sido totalmente eficaces. La policía económica ha comunicado continuas infracciones del código penal, fraudes y robos: en 1990 se descubrieron 25

millones de pesos no contabilizados en las auditorías a 91 empresas. Según Castro, la escasez de mercancías no sólo se debe a factores externos (disminución de importaciones), sino también a la falta de control y los desfalcos internos, «un mal que no hemos conquistado»: «Hay algunos que estarían dispuestos a morir en la batalla y, sin embargo, cuando se les asigna la dirección de una tienda, roban dinero de la caja.» Castro ha dicho que los malos resultados financieros en el transporte están causados por los pasajeros que evaden el pago del billete, lo cual achacó a deficiencias ideológicas. Una encuesta pública realizada en 1990 sobre el Poder Popular, reveló que sus delegados estaban utilizando su autoridad para obtener artículos o servicios esenciales de los que carecía la población. A finales de 1990 la Agencia Estatal de Noticias de Cuba afirmaba que la delincuencia y la corrupción (que crecían en terreno abonado debido a las vigentes dificultades económicas) eran más peligrosas que la CIA. Los ciudadanos fueron exhortados a ayudar al gobierno en la lucha contra la corrupción mediante la vigilancia constante, incluso de los líderes y miembros del Ministerio del Interior (MININ). Las personas que muestren gastos o niveles de vida superiores a sus posiciones e ingresos normales (que, por ejemplo, adquieren un coche o una motocicleta, amplían sus viviendas o las proveen de aparatos eléctricos) han de ser denunciadas: no sólo el carnicero o el dependiente de la tienda de comestibles, sino también administradores y líderes que incurran en gastos desorbitados poco después de haber sido nombrados en un puesto.

En 1991 Castro se lamentó de que hubiera obstáculos para encarcelar a los infractores: «Tienen que acabar la debilidad, la trapacería y los procedimientos burocráticos... Si las leyes no son suficientemente duras, entonces promulguen leyes nuevas...» El 4.º Congreso del partido exigió una política más severa para luchar contra el aumento de la delincuencia. A finales de 1991 la Asamblea Nacional respondió promulgando nuevas leyes para: la integración de todas las «fuerzas de orden» en un Sistema Unido de Vigilancia y Protección, la modificación de los procedimientos criminales para acelerar los procesos a delincuentes y la selección de jueces que adopten posiciones más duras con los delincuentes.

Inicialmente el PR estableció como objetivo la eliminación del excedente de mano de obra, pero esta política pronto se convirtió en un quebradero de cabeza a causa de la reducción del empleo privado y los efectos negativos de la crisis sobre el empleo público (por ejemplo, el cierre de fábricas por falta de combustible y otros insumos). En 1985-89 el empleo en el sector público aumentó un punto porcentual (a 94 %), mientras el empleo privado descendía proporcionalmente; esto fue antes de que se desatara la crisis. En 1987-88 se estimó un excedente de trabajadores de unos 50.000 sólo en las fábricas y cientos de miles en toda

la economía. La cuestión era dónde enviar a todas estas personas. Castro sugirió primero que fueran trasladadas a otras fábricas y otras actividades, un viejo truco utilizado en los años sesenta y setenta. Pero la crisis hacía imposible esta solución. A comienzos de la década de 1990 los trabajadores «sobrantes» tienen dos opciones: recibir nueva capacitación o ser trasladados (temporal o permanentemente) a otros trabajos «útiles», particularmente en la agricultura. En el primer caso el trabajador recibe el 70 % del sueldo correspondiente con un mínimo de 100 pesos mensuales (pero hay una repulsa pública de los que reciben remuneración sin trabajar). Si el trabajador no puede ser transferido debido a falta de empleo, recibe el 100 % del sueldo en el primer mes y el 60 % en meses sucesivos, hasta que encuentra trabajo (los pagos se interrumpen si el trabajador rehúsa una oferta de trabajo digno). El gobierno está fomentando también el intercambio de puestos para llevar a los obreros más cerca de sus lugares de trabajo y reducir con ello los costes de transporte y el tiempo perdido en viajes. Los jóvenes graduados que no encuentran trabajo son incluidos en una «reserva de trabajo especializado»: a los técnicos de nivel medio se les pagan 75 pesos mensuales y asisten a cursos de nueva capacitación; los graduados universitarios pueden optar entre continuar con sus estudios, recibir nueva formación profesional y percibir 130 pesos mensuales, o esperar a una oferta de trabajo y percibir 100 pesos mensuales.

La autorización del trabajo por cuenta propia en 1993 tiene como objetivos: la creación de empleo en el sector privado para reducir la carga de los trabajadores sobrantes en el sector estatal (a los que se suspende la prestación de desempleo cuando ganan lo suficiente como autónomos); el aumento en la cantidad y calidad de los servicios, y la generación de una renta para el Estado mediante el impuesto a dicha actividad. Pero la expansión veloz del autoempleo (especialmente del clandestino) acarrea también desventajas para el Estado: i) disminución del sector estatal y aumento del sector privado, lo que crea un descenso del poder económico del gobierno y una expansión del grupo independiente que puede acumular capital, presionar por una mayor liberalización y, eventualmente, presentar un reto al gobierno; ii) generación de desigualdades, ya que los intelectuales, burócratas, profesionales y militares se ven impedidos de desempeñar trabajo autónomo (y por tanto ganar más y tener acceso a los preciados dólares), mientras que los que tienen oficios que antes eran de bajo *status* (como carpinteros, plomeros, mecánicos, etc.), así como los que trafican en la bolsa negra y desempeñan ocupaciones prohibidas (como restaurantes), ahora ganan mucho más y pueden comprar artículos con dólares en tiendas del Estado y en el mercado negro, y iii) el gobierno confronta serios problemas para

ejecutar las regulaciones de trabajo autónomo y sancionar a los violadores.

h. *Distribución y servicios sociales*

Bajo el PR Castro aceptó a regañadientes la necesidad de continuar con la fórmula de distribución socialista (a cada cual según su trabajo), pero bajo un control estricto para evitar infracciones y criticando su desigualdad. Sin embargo, hay elementos del PR que tenían claros matices igualitarios, como el énfasis en los incentivos morales, la crítica de los diferenciales salariales extremos y las ganancias de los agricultores privados y trabajadores autónomos, y la reducción de los incentivos materiales. Además, la crisis y la severa escasez subsiguiente forzaron la ampliación del sistema de racionamiento a casi todos los bienes de consumo, lo cual funcionó como otro mecanismo más de equidad. Por el contrario, las reformas de mercado de 1992-93 claramente fomentan la desigualdad.

En 1987 se incrementaron los índices salariales más bajos de la escala salarial: de 75 y 85 pesos mensuales a 100, de 82 y 93 a 107 y de 95 y 107 a 118. Todos los restantes índices permanecieron congelados y se redujeron los pagos complementarios, con lo cual iba a reducirse la desigualdad. La eliminación de los mercados libres campesinos y otras políticas antimercado del PR contribuirían también a dicho objetivo.

En un principio el PR se propuso expandir los servicios sociales, pero la crisis templó dicha política. La parte dedicada a servicios sociales en el presupuesto del Estado se incrementó de 41,8 % en 1985 a una cifra récord de 45,5 en 1988, pero se redujo a 43,7 en el presupuesto preliminar de 1990. La inversión en servicios sociales se elevó de 17,7 % de la inversión total en 1985 a 21,5 en 1988, pero descendió al 20 en 1989. El gasto social *per capita* (basado en cifras preliminares para 1990) tenía un crecimiento previsto del 13 % en 1986-90, frente al 32 % de 1980-85 y el 50 en 1976-80. La crisis de los noventa ha afectado gravemente a la provisión y calidad de los servicios sociales.

La seguridad social estableció nuevos récords: sus costes (excluida la sanidad) superaron el 8 % del PSG en 1989 y alcanzaron un 10 % en 1990 (una de las cargas más altas en América Latina); los gastos llegaron a 1.463 millones en 1992. El gobierno liberalizó las regulaciones de retiro permitiendo jubilaciones más tempranas. En 1989 había 32,8 médicos por cada 10.000 habitantes, frente a 22,5 en 1985; contribuía a la expansión de este índice el nuevo programa de médicos de familia y el número en rápido crecimiento de médicos graduados en universidades cubanas.

El número de camas de hospital por 1.000 habitantes siguió en aumento: de 4,8 a 5,5 en 1985-89. Se mantuvo el énfasis en el incremento de la matriculación estudiantil en enseñanza media y superior, al menos hasta 1986-89. Como analizábamos anteriormente (sección a), una nueva ley de la vivienda impuso una regulación más dura para la construcción de viviendas privadas, así como para las transacciones de viviendas. Se preveía que el Estado, mediante las brigadas y contingentes de construcción, cubriera el vacío creado por el descenso en construcción privada. Hasta el momento, no se han producido cambios en términos de política demográfica en esta etapa, salvo que el enorme éxodo de 1980 no se ha repetido, no obstante la progresiva escasez de bienes de consumo (Mesa-Lago, 1993d, 1994).

2. *Resultados. La tercera doble crisis*

a. *Crecimiento*

La posibilidad de calibrar el impacto del PR y las políticas de reforma a partir de 1986 se ve obstruida por la carencia de datos desde comienzos de los años noventa. El último anuario estadístico cubano, disponible al finalizar 1993, fue el de 1989 (CCE, AEC, 1989). A partir de ese momento sólo existen cifras dispersas, la mayoría reveladas en los discursos de Castro y algunas publicadas por académicos y dirigentes cubanos.

Pese a las escasas estadísticas, no hay duda de que en 1986-93 la economía cubana entró en la peor crisis de la Revolución. Desde 1990 este deterioro ha sido principalmente consecuencia de la caída del bloque soviético. Sin embargo, los malos resultados económicos comenzaron en 1986 cuando se inició el PR y mucho antes de la quiebra del campo socialista. Se ha debatido si el agravamiento económico de 1986-90 estaba causado por el PR o por factores externos, o por una mezcla de ambos. Además, es posible que las características antimercado del PR hayan tenido un papel negativo en la crisis de 1991-92.

Las publicaciones oficiales y los economistas cubanos han hecho responsables a variables exógenas y coyunturales como causas exclusivas del deterioro de 1986-90 —las condiciones climáticas adversas (sequía), un descenso de los precios mundiales del azúcar, el deterioro desfavorable a Cuba de los términos de intercambio con la URSS y la falta de nuevos créditos en divisas procedentes de la economías de mercado—, mientras han sostenido que el PR tuvo un efecto positivo y compensatorio. La mayoría de los estudiosos norteamericanos, entre ellos yo mismo, sin desestimar las variables externas, han advertido graves incongruencias

en los argumentos oficiales, y han señalado la importancia de los efectos negativos del PR, tales como el descenso en la producción y servicios privados, la incapacidad del Estado para reemplazar los mecanismos de mercado eliminados y la ausencia de un modelo económico coherente. Recientemente unos cuantos economistas cubanos han reconocido que la crisis de 1986-90 no puede explicarse por causas externas solamente; por ejemplo, admiten que el Estado —sobrecargado con un exceso de funciones— fue incapaz de llenar plenamente el vacío dejado por la erradicación de los mercados libres campesinos y la disminución del empleo autónomo. Por otra parte, Carlos Aldana (que, hasta ser destituido en el otoño de 1992, era la tercera figura política más importante de Cuba) declaró en 1991 que la crisis (particularmente el racionamiento) no era «consecuencia de ineficiencia o incompetencia por nuestra parte, sino que nos ha sido impuesta por factores externos ajenos a nuestro control».

Según las estadísticas cubanas, la tasa media de crecimiento anual del PSG en 1986-89 fue de 0,2 % para un descenso del 0,8 % *per capita*. Pero mis estimaciones para 1986-87 indican unas reducciones de las tasas absolutas que oscilan entre el 1,5 y el 6,2 % (Mesa-Lago y Pérez-López, 1992). Los datos sobre el PSG para los años noventa son especulativos. Yo he estimado de modo aproximado que el PSG de 1990-92 decreció a un ritmo anual del 8 % (9 % *per capita*), basándome en la pérdida de ayuda soviético-europea-oriental solamente, sin tener en cuenta ni la reducción del comercio con dichos países ni su incidencia en la producción doméstica. Otras estimaciones cubanas y extranjeras del descenso acumulativo del PSG en 1989-93 varían entre el 39 y el 58 % (en términos absolutos y entre 45 y 64 % *per capita*; véase cuadro 2). Es indudable que son los peores resultados bajo la Revolución.

La producción media anual de azúcar en 1986-90 fue de 7.582.000 toneladas, 195.000 toneladas menos que en 1981-85. La meta de producción para 1990 era de 9,5 millones de toneladas, pero sólo se produjeron 8 millones, un 16 % por debajo de lo previsto. La producción en años sucesivos descendió catastróficamente (en miles de toneladas): 7.623 en 1991, 7.030 en 1992 y 4.280 en 1993; esta última fue la cosecha más baja en treinta años; el promedio de producción en 1991-93 fue de 6.311 millones de toneladas, el más bajo en tres quinquenios. El promedio anual de rendimiento industrial de 1986-90 continuó su anterior tendencia descendente, siendo de 10,8 frente al 11 de 1981-85 (cuadro 6). Los motivos oficialmente aducidos por estos problemas eran similares a los enunciados en la sección precedente: carencia de combustibles, abonos, herbicidas y piezas de recambio que perjudicaban a la cosecha, el limpiado, la molienda y el transporte de la caña de azúcar. Pero, además,

surgieron problemas con los 100.000 a 200.000 bueyes supuestamente domesticados que iban a utilizarse para el transporte, parte del área plantada con caña se dedicó al cultivo de otros productos y la movilización de mano de obra no fue muy eficaz.

Los resultados en la agricultura no azucarera fueron muy pobres. En 1989 la producción de tabaco, leche y huevos fue inferior al nivel de 1985 y la producción de cítricos, habichuelas y café fue inferior o similar a la de 1988. La producción de arroz de 1989 estuvo por debajo del nivel de 1984. Sólo la producción de carne de cerdo mostró un sistemático aumento en 1986-89. El número de cabezas de ganado disminuyó un 2 % en 1986-89; las cabezas de ganado *per capita* de la población era 0,49 en 1985 y 0,46 en 1989. Por otra parte, el número de cerdos se elevó un 24 % en 1986-89 y el de aves de corral un 8. A comienzos de los años noventa el fuerte descenso de las importaciones de piensos, unido a la insuficiencia de los sucedáneos de producción nacional (y la experimentación con el método Voisin), afectaron negativamente a la producción de ganado y aves de corral. Las capturas de pescado y marisco bajaron un 13 % en 1986-89; las capturas por cada 100 habitantes descendieron de 2,39 toneladas en 1986 a 1,82 en 1989 (cuadros 5 y 7). Hemos analizado, en anteriores secciones, el fracaso del programa alimentario de 1991-95 y su aceptación por Castro en abril de 1992 (Castro, 1992a).

La producción de níquel ascendió un 35 % en 1986-89, debido principalmente a la apertura de la nueva planta Che Guevara en 1987, pero ésta fue cerrada en 1990 y, aunque se volvió a abrir en 1992 o 1993, la producción disminuyó en 1990-92. El objetivo de producción previsto para 1990 era de 106.500 toneladas, pero sólo se produjeron 42.000, un 61 % por debajo de lo previsto (cuadro 8). La producción de petróleo alcanzó un máximo de 938.000 toneladas métricas en 1986 y descendió sostenidamente a partir de entonces: la producción de 1991 fue de 650.000, un 31 % menor que la de 1986 (cuadro 15), pero se reportaron incrementos de producción en 1992-93 y en este último año se dice que sobrepasó el millón de toneladas. La producción industrial de 1989 estuvo por debajo del nivel de 1985 en la mayoría de los ramos: acero y abonos (-22 %), cigarros puros (-16 %), neveras (-65 %), radios (-27 %), zapatos (-19 %) y jabón (-5 %). Por el contrario, la producción de energía eléctrica, cemento y textiles de 1989 superó a la de 1985 en 25, 18 y 7 %, respectivamente, pero la producción textil se redujo un 15 % en 1989 (cuadro 5). El cierre de muchas plantas industriales en 1990-93, debido a las políticas de ajuste, debilitó la producción de manufacturas; por ejemplo, la producción de energía eléctrica descendió debido al fuerte recorte en importaciones de petróleo, originando constantes apagones; la producción de abonos y textiles también se vio

perjudicada por la disminución en la importación de insumos esenciales. En 1993 se estimaba que un 70 % de la planta industrial estaba paralizada.

En contraste con los desoladores resultados en la industria y la agricultura, el sector turístico experimentó un auge. El número de turistas se triplicó (de 168.000 en 1985 a 567.000 en 1993), mientras que las rentas brutas crecían 5,6 veces (de 100 a 560 millones de pesos). Pero los beneficios *netos* del turismo fueron sólo de 150 millones en 1990 y representaron el 0,59 % del PSG (0,98 % si utilizamos las rentas *brutas*). Por tanto, no obstante los resultados positivos, el turismo sigue siendo un pequeño generador tanto de ingresos en divisa firme como de renta nacional. Los incrementos previstos a 1,5-2 millones de turistas y 1.000-1.200 millones de dólares en ingresos brutos para 1995 son excesivamente optimistas, incluso si sigue aumentando la inversión extranjera, ya que requieren aumentos de tres a cuatro veces en turistas y renta en menos de tres años (cuadro 10).

La diferencia entre la producción real y las metas previstas bajo el plan de 1986-90 (cuadro 9) indica claramente un fracaso generalizado peor que el de los dos anteriores quinquenios. Todas las metas de producción de las que tenemos datos (17 en total) fueron incumplidas, la mayoría por un amplio margen; por ejemplo, de 20 a 64 % en petróleo, níquel, acero, abonos, zapatos, cítricos, tabaco, textiles, leche, pescado y cerveza. La meta de crecimiento del PSG se incumplió ¡por un 84 %! Estos resultados tan desastrosos, unidos a la crisis, explican por qué se abandonaron los planes económicos a partir de 1990.

La parte de inversión en el PSG tuvo un promedio del 15,9 % en 1986-89, un importante incremento respecto al promedio de 14,7 % del quinquenio precedente (cuadro 3). A principios de los años noventa, sin embargo, la inversión disminuyó a causa del recorte en ayuda del COMECON (posiblemente a menos de la tercera parte en 1989-92), mientras que la eficiencia en la asignación y uso del capital ha sido muy baja (salvo por la inversión extranjera) debido a la excesiva centralización y la ausencia de criterios de eficiencia.

b. Inflación

Según cifras oficiales, en 1986-88 hubo una tasa media anual de deflación de 0,7 %, probablemente la menor tasa quinquenal bajo la Revolución (cuadro 2). El anuario estadístico de 1989 no publicó datos de inflación y no hay información alguna disponible desde entonces. Las cifras de inflación no concuerdan con los datos sobre el excedente monetario, que siguió expandiéndose en esta etapa: el excedente monetario

de 1989 fue de 3.564 millones de pesos (334 pesos *per capita*), similar al del año 1970; y en 1993 llegó a 10.000 millones de pesos (908 pesos *per capita*), casi el triple que cuatro años antes. En 1993 el excedente monetario era similar al total de la renta de la población (lo que equivaldría a algo parecido a un 100 % de inflación). El peso se devaluó con rapidez en el mercado negro; en relación con un dólar cayó de 8 a mediados de 1990 a 20 a mediados de 1992, 60 a mediados de 1993 (100 en agosto de ese año) y 80 a fines de 1993 (en 1986-93 la tasa de cambio del peso por el dólar era a la par [cuadro 2]). En los primeros años noventa, cuando la escasez de bienes de consumo se agravó mucho, desapareció el mercado paralelo y había pocas cosas al margen del racionamiento en que gastar el dinero. Estimulados por unos tipos de interés más altos, se dijo que los depósitos bancarios habían crecido significativamente (aunque no hay estadísticas disponibles), no obstante lo cual, probablemente no absorbieron más del 15 % del excedente monetario. La subida de precios de los productos agrícolas iniciada en 1992 debió impulsar la inflación; por ejemplo, un salto del 150 % en el precio de las patatas, 125 % en los tomates, 75 % los plátanos. La severa escasez de bienes de consumo ha producido una expansión fenomenal del mercado negro, donde se han disparado los precios; por ejemplo, el precio oficial de una libra de pollo es 0,70 centavos, pero a mediados de 1993 un pollo de dos libras se vendía en el mercado negro a 200 pesos, unos pantalones *blue jeans* en 500 pesos y un par de zapatos de plástico en 1.000 pesos. El salario medio mensual es de 190 pesos y el salario mínimo de 100 pesos, mientras que la pensión mínima es de 90 pesos. Por consiguiente, los grupos de rentas más bajas no pueden complementar sus exiguas raciones (que apenas cubren las necesidades alimenticias de dos semanas) comprando en el mercado negro, y son los más afectados por los incrementos de precios oficiales en los productos agrícolas.

Contrariamente a los objetivos del PR, el déficit del presupuesto del Estado se agravó sostenidamente en 1986-90, alcanzando casi los 2.000 millones de pesos en el presupuesto provisional de 1990. Como porcentaje del PSG, el déficit se elevó de 0,7 a 6 % en 1986-89 (cuadro 2). Puesto que no ha sido publicado el presupuesto desde 1990, ignoramos lo que haya podido ocurrir al déficit. Sin embargo, el descenso de las rentas del Estado (a causa de la crisis), unido a las continuas subvenciones estatales a empresas y bienes de consumo, más las prestaciones por desempleo, tienen que haber producido una escalada del déficit en los primeros años noventa. En 1993 se informó que el déficit era de 4.200 millones de pesos, más del doble que en 1990.

c. *Diversificación*

Las tres series disponibles sobre la distribución porcentual del PSG por sectores económicos en 1986-89 muestran tendencias similares, aunque magnitudes divergentes (cuadro 4). La serie más larga indica: un descenso en la parte industrial de 37,1 % (1986) a 35,9 (1988, no hay datos disponibles para 1989); un incremento de la parte agrícola de 13,9 % (1985) a 15,7 (1988); una disminución de la parte comercial de 33,2 % (1985) a 31,3 (1988), y no hay diferencias significativas en los restantes sectores. La segunda serie muestra: una parte industrial con un descenso del 47,2 % (1986) a 46,6 (1989); una parte agrícola con un aumento de 14,2 % (1985) a 16,1 (1989); una parte comercial que disminuye de 23,1 % (1985) a 19,7 (1989), y ningún cambio significativo en los restantes sectores. Por último, la tercera serie describe: una parte industrial que baja de 56,3 % (1986) a 55,3 % (1989); una parte agrícola que crece de 14,1 % (1985) a 15,9 (1989); una parte comercial que se contrae del 14 % (1985) a 11,3 (1989), y ningún cambio importante en lo restante. A comienzos de la década de 1990 el énfasis en la agricultura, el deterioro de la producción industrial y la quiebra del comercio con el COMECON han reforzado probablemente las tendencias de 1986-89, resultando en una nueva merma de los porcentajes industrial y comercial.

La dependencia del azúcar continuó en esta etapa (cuadro 5): la contribución de la producción azucarera en el PSG permaneció inalterada en un 10,2 % en 1986-89; mientras que la proporción correspondiente a las exportaciones de azúcar en el PSG se redujo ligeramente de 15,5 a 14,9 % en el mismo período (la proporción de 1989 seguía siendo casi el doble que la de 1962). La dependencia comercial general se mantuvo sin merma: el valor del total de transacciones como proporción del PSG se elevó de 48,7 a 50,7 % en 1986-89.

d. *Desequilibrios externos y dependencia*

Los desequilibrios externos se agravaron considerablemente en esta etapa: el valor de las exportaciones descendió un 10 % en 1986-89 (debido principalmente a la disminución del volumen de las cosechas y las exportaciones de azúcar y a que no se incrementaron significativamente los subsidios soviéticos), mientras que el valor de las importaciones subía un 1 %. Las metas planificadas fueron incumplidas por amplios márgenes: -148 % en las exportaciones y -80 % en las importaciones (cuadro 9). El déficit comercial aumentó casi un 34 % en 1986-89 y alcanzó

los 2.700 millones de dólares, un nuevo récord histórico. El déficit acumulativo de 1986-89 (sólo cuatro años) fue un 55 % superior al del anterior quinquenio, y equivalía al 43 % del déficit acumulativo total desde 1959 (cuadro 11).

La dependencia comercial de la URSS y el COMECON alcanzó un máximo en 1987 cuando los volúmenes de intercambio comercial con éstos llegaron, respectivamente, al 72 y el 86,6 % (comparado con 70,5 y 83 % en 1985). Pero dichas proporciones disminuyeron a 64,7 y 78,9 % al reducirse el comercio con los países de Europa oriental y la URSS. En 1991 se había interrumpido prácticamente todo el intercambio comercial con Europa oriental salvo pequeñas sumas con Bulgaria y Rumania. Las importaciones de la URSS/CEI descendieron un 90 % en 1989-92, mientras que las exportaciones se redujeron en 93 %. El déficit comercial de Cuba con la URSS aumentó un 144 % en 1985-89 (124 % en dólares USA) y sobrepasó los 2.000 millones de dólares en 1989; pero con la caída drástica del comercio el déficit casi desapareció en 1992. La porción soviética en el total del déficit comercial cubano cuando se elevó de 45,9 a 83,8 % en 1985-89 (cuadro 12). Estos datos demuestran claramente que no se materializó la aspiración del PR de reducir los desequilibrios externos, al menos en la segunda mitad de la década de 1980.

En 1986-90 Cuba recibió 11.600 millones de dólares en préstamos soviéticos (8.200 millones para cubrir los déficit comerciales y 3.400 millones en ayuda para el desarrollo), una suma similar al total recibido por Cuba en los quince años anteriores. Además, Cuba se benefició de los 10.000 millones de dólares no reembolsables en subvenciones a los precios, pero esta suma era aproximadamente un tercio de la cantidad recibida en 1971-85 (cuadro 16). La razón era que la URSS había modificado radicalmente la composición de su ayuda —en contra de Cuba— al pasar de subsidios no reembolsables a préstamos reembolsables: mientras que en 1976-80 la distribución fue de 21 % (préstamos) y 79 % (subsidios), en 1986-90 cambió, respectivamente, a 53,4 y 46,6 %. Toda la ayuda soviética a Cuba cesó a finales de 1991. Aunque la brecha entre los precios soviético y mundial del azúcar se cerró rápidamente (una razón decreciente de 11,8 a 3,3 en 1985-90), Cuba siguió beneficiándose de unos precios soviéticos que eran tres veces superiores. Por consiguiente, el porcentaje de exportaciones de azúcar cubano destinado a la URSS siguió creciendo y alcanzó un máximo de 76,7 % en 1987, aunque bajó a 67 % en 1989 (CEE, AEC, 1989). Los términos de intercambio con la URSS siguieron deteriorándose en perjuicio de Cuba en 1986-90, al menos respecto a los tres principales productos comerciales: azúcar, níquel y petróleo. No obstante este deterioro, Cuba siguió disfrutando de un beneficio neto estimado de 10.000 millones de dólares en dicho período,

pero éste era un 36 % inferior al de 1981-85. Este empeoramiento de los términos comerciales en perjuicio de Cuba debió agravarse en 1991-93, particularmente debido a que el precio ruso pagado por el azúcar se redujo a menos de un cuarto del nivel de 1990.

La deuda cubana con la URSS fue dada a conocer primeramente por los soviéticos a fines de 1989: 15.500 millones de rublos o 24.500 millones de dólares al cambio oficial del momento (cuadro 18). Además, Cuba debía no menos de 2.200 millones de dólares a cuatro países de Europa oriental. Los tipos de cambio oficiales soviéticos son, claro está, excesivamente altos cuando se comparan con los tipos comerciales o turísticos, pero Cuba tiene que llegar a algún acuerdo sensato sobre el tipo de cambio y sobre la forma de devolución si quiere que continúe o se reanude su comercio con estos países.

La producción interior de petróleo de Cuba alcanzó un máximo en 1986 y decreció a partir de entonces hasta 1992; así, la producción en 1986 era un 31 % inferior que en 1991. Por consiguiente, la dependencia del petróleo soviético se intensificó y en 1989 la URSS suministraba el 100 % de las importaciones cubanas de petróleo. Pero los suministros soviéticos de petróleo y productos derivados descendieron sostenidamente de 13,5 millones de toneladas en 1987 a 10,2 en 1990, a 8,6 en 1991, a 1,8 en 1992 y 2,3 en 1993 (la suma prevista para 1994 era de 2,5 a 4 millones de toneladas (cuadro 15). Si restamos el 1,5 a 2 millones de toneladas que Cuba «reexportó» en 1984-89 y se tiene en cuenta la producción interna, se necesitan de 10 a 11 millones de toneladas de combustible para volver al nivel de fines de los ochenta, y Rusia suministró en 1992-93 menos de la tercera parte. Las probabilidades de cubrir una parte de este desfase, a corto o medio plazo, con una expansión de la producción interna de petróleo o energía nuclear son prácticamente nulas. No obstante los diversos contratos de prospección/producción con corporaciones petrolíferas internacionales, los resultados son decepcionantes hasta el momento: en abril de 1992 el petróleo hallado por la compañía francesa Total en la playa de Varadero era, al parecer, de muy baja calidad y sólo reportaría 6 dólares por barril (menos de un tercio del precio mundial del momento). Incluso si se descubriera petróleo de buena calidad en grandes cantidades, se tardaría de cuatro a seis años en iniciar la producción. La importación de petróleo de otros países es extremadamente difícil, porque Cuba carece tanto de divisas como de productos intercambiables. Y los jefes de los tres grandes países exportadores de Latinoamérica declararon en 1992 que —pese a la solicitud de Castro— no tenían intención de exportar petróleo a Cuba a precios subvencionados.

El volumen del comercio cubano con las economías de mercado se

fue reduciendo hasta llegar a un mínimo de 12,9 % en 1988, pero subió a 16,8 % en 1989. Como hemos explicado (en la anterior sección f), en los años noventa Cuba está procurando desesperadamente diversificar sus socios comerciales (sobre todo con las economías de mercado) y reinsertarse en el mercado mundial capitalista. Pero las perspectivas realistas de dicha política son malas debido a la concentración continuada en la exportación de azúcar y la falta de crédito comercial por parte de Occidente y Japón. Las reservas de divisas descendieron en un tercio en 1985-88, de 350 a 234 millones de pesos; además, la proporción de reservas en depósitos de moneda firme en bancos extranjeros bajó del 61 al 33,5 %, mientras la parte de rublos transferibles se elevó de 35 a 58,4 % (CEPAL, *Estudio*, 1989).

La deuda cubana en divisas casi se duplicó en 1985-89, de 3.600 a 6.200 millones de dólares, sobre todo a consecuencia de la suspensión cubana del servicio de deuda desde 1986. La proporción de esta deuda contraída con acreedores cuyos términos son más duros se disparó de 12 a 22,8 % en 1985-89 (cuadro 18). Yo he estimado que la deuda exterior total de Cuba en 1990 (incluida tanto la parte en divisas como la no convertible) era de 37.600 millones de dólares, la deuda *per capita* más elevada de América Latina y el Caribe (Mesa-Lago, 1993a).

La concentración de las exportaciones en el azúcar disminuyó levemente de 74,5 a 73,2 % en 1985-89. Cuando se ajusta debidamente para excluir el valor de las «reexportaciones» de petróleo, la parte del azúcar aumentaba, pero exhibía una tendencia decreciente: de 82,3 a 76,2 % en el mismo período. Tres motivos importantes de este descenso son: la caída en producción y exportaciones azucareras en 1986-88; el crecimiento de las exportaciones de níquel en 1987-89 (que incrementó la proporción de éste en las exportaciones en 3,1 puntos porcentuales), y el aumento de la proporción de exportaciones no petrolíferas, excluida el azúcar, en 2,7 puntos porcentuales. No obstante algunos avances menores, la concentración —ajustada— en exportación de azúcar de 1989 (76 %) era similar a la de 1959 (75 % [cuadro 13]). Con objeto de diversificar los socios comerciales y penetrar en el mercado mundial, Cuba tiene que diversificar sus exportaciones, una tarea claramente difícil, dado que la producción para la exportación —como el níquel, la pesca y los cítricos— está en descenso. La fuerte reducción o desaparición de los precios subvencionados a las exportaciones cubanas a comienzos de los años noventa pudo haber tenido el efecto aparentemente benéfico de reducir la concentración exportadora en el azúcar (el cuadro 13 indica una caída de la proporción de azúcar en el total de exportaciones de 76,2 a 74,7 % en 1989-91). Pero el efecto negativo de perder esta ayuda es enorme y no podrá ser contrarrestado hasta que la isla amplíe significativamente

el volumen de las exportaciones no azucareras (la biotecnología es la que parece tener mayores posibilidades, pero se enfrenta a potentes obstáculos).

No hubo grandes cambios en la composición de las importaciones cubanas, al menos en el período de 1986-89: las proporciones de combustibles y manufacturas decrecieron ligeramente (en uno y dos puntos porcentuales, respectivamente), mientras que las partes de alimentos y maquinaria aumentaron un punto porcentual cada uno (cuadro 14). Pero los fuertes recortes en importaciones de maquinaria-transporte de comienzos de los años noventa alteraron la composición de las importaciones. Así, en 1992 se había duplicado la proporción de alimentos, aumentando en 7 puntos porcentuales la de combustible y disminuido en 22 puntos la de maquinaria y transporte (cuadro 14).

e. *Desempleo*

No se han publicado estadísticas oficiales sobre desempleo declarado desde 1981. Ahora bien, un economista cubano citó una tasa del 6 % en 1988, un aumento frente a la tasa de 5,5 % de 1981 y la más alta desde mediados de los años sesenta (cuadro 19). La reducción de la actividad del sector privado probablemente haya contribuido a este incremento. Como se exponía en la anterior sección g, la crisis ha agravado este problema en los años noventa al reducir la demanda de mano de obra debido al cierre de empresas, la disminución en el número de trabajadores sobrantes, etc. Además, los aproximadamente 40.000 soldados cubanos que han regresado de África, así como decenas de miles de trabajadores repatriados de Europa oriental y la URSS, han ampliado la oferta laboral. Por último, la participación de la mujer en la fuerza de trabajo civil aumentó del 33,8 al 38,2 % en 1981-88, elevando con ello aún más la oferta de mano de obra. Las prestaciones por desempleo son socialmente encomiables, pero al expandirse el número de parados, la carga que soporta la economía se va haciendo cada vez más onerosa. He calculado que en 1992 entre 10 y 18 % de la fuerza de trabajo estaba afectada por desempleo declarado o cierre de empresas por la crisis (cuadro 19).

Según las estadísticas oficiales, la productividad laboral descendió a una tasa media anual de 2,5 % en 1986-89, en contraste con el incremento previsto de 3,5 % en este período (CCE, AEC, 1989). El promedio del aumento real anual neto en productividad (relacionado con los incrementos en salarios reales) decreció a un ritmo del 3 % en 1986-88. La crisis de comienzos de los noventa ha debido provocar mayores des-

censos en productividad. Es obvio que los objetivos del PR de mejorar la productividad laboral no se realizaron.

f. *Igualdad*

Las estimaciones occidentales sobre la distribución de la renta no ofrecen datos a partir de 1986. Sin embargo, la información analizada en las secciones 1.g y 1.h de este capítulo indica que se redujo la desigualdad hasta principios de los años noventa. Por ejemplo, la razón entre el índice salarial máximo y mínimo descendió de 5,5:1 a 4,5:1 en 1981-87, cuando los salarios más bajos se incrementaron y el resto permanecieron congelados (Mesa-Lago, 1994). El salario medio nominal de 1989 estaba en el mismo nivel que en 1985, frente a un considerable aumento en el quinquenio precedente. Las reducciones en otros pagos (bonos, primas, premios, horas extra), la eliminación de los mercados libres campesinos y la disminución del empleo autónomo también debieron contribuir a rebajar las diferencias en rentas en la segunda mitad de la década de los ochenta. Por lo contrario, los cambios introducidos en 1991-93 deben haber aumentado la desigualdad: 1) los trabajadores empleados en empresas mixtas y el sector de turismo, los autónomos y los que especulan en el mercado negro, así como los que tienen familiares en el exterior, tienen acceso a divisas, mientras a los empleados estatales, profesionales universitarios y militares les está vedado ese acceso, ya sea legalmente o en la práctica, y 2) los negros reciben poquísimas divisas del exterior, porque sólo un 3 % de los exiliados que viven en Estados Unidos son de color.

La disponibilidad de bienes de consumo ha empeorado sistemáticamente desde 1986, primero, porque el Estado no ha podido cubrir el desfase creado por la disminución de la producción privada y, después, a causa del fuerte recorte en las importaciones. Para finales de 1991 no sólo se añadieron unos 200 artículos de consumo a la lista de racionamiento (y, por tanto, ninguno se vendía libremente en el mercado), sino que se han rebajado las cuotas de racionamiento de dos tercios de estos productos (apenas garantizan el nivel de subsistencia) y el mercado paralelo ha desaparecido (cuadro 20). La oferta de medicamentos era, asimismo, extremadamente reducida. También se había deteriorado la calidad de los productos, por ejemplo, el café estaba mezclado con guisantes. Las cuotas de racionamiento no están garantizadas, por lo cual se forman largas colas en las primeras horas de la mañana (reduciendo el tiempo libre de la población) y muchos productos desaparecen de los establecimientos del Estado durante meses enteros. La situación se agra-

vó más en 1992-93; en este último año las cuotas mensuales apenas satisfacían las necesidades alimenticias de dos semanas. Con objeto de proteger a los grupos de renta baja, el gobierno decidió ampliar el racionamiento, en lugar de permitir la subida de los precios. Pero al ir escaseando los bienes de consumo y florecer el mercado negro, los pobres se encuentran cada vez menos protegidos, dado que no pueden pagar los elevados precios del mercado negro. Por otra parte, la distancia con la élite se ha agrandado, puesto que ésta ha conservado un acceso privilegiado a bienes y servicios mediante tiendas especiales, hospitales propios, villas de recreo y viajes al extranjero (Mesa-Lago, 1992, 1994).

g. Indicadores sociales

En 1989 la tasa de analfabetismo era de 3,8 %, incluida al parecer la población de cuarenta y nueve años en adelante. Esta tasa es mucho más elevada que el 1,9 % que daba el censo de 1981 y que excluía a la población de tercera edad. Adviértase que la tasa de 1990 es igual a la tasa de analfabetismo erróneamente declarada treinta años antes, a fines de la campaña de alfabetización de 1961. La matriculación en enseñanza media y superior siguió en aumento en esta etapa, llegando a 88 y 23 % de sus respectivos grupos de edad en 1988 (cuadro 23). Pero la meta de 1990 para la educación superior fue una matriculación del 35 % que, evidentemente, no se logró (cuadros 9 y 23).

La mortalidad infantil (por 1.000 niños nacidos vivos) siguió su impresionante tendencia descendente en 1985-91: de 16,5 a 10,7. La meta prevista para 1989 era una tasa de 15, por lo que los resultados reales fueron un 29 % superiores, uno de los raros casos en que la meta se superó en este período. Por el contrario, la tasa de mortalidad general aumentó de 6,4 a 6,7 y probablemente aumentará en el resto de los años noventa, en buena medida a consecuencia del envejecimiento de la población (cuadros 9 y 21). Las tasas de seis enfermedades contagiosas descendieron o no se registró ningún caso (en enfermedades controlables mediante vacunación), pero las tasas de otras cuatro enfermedades aumentaron o permanecieron estables (en su mayoría enfermedades no prevenibles como la sífilis y la gonorrea). Finalmente, las tasas de diarrea aguda y enfermedades respiratorias alcanzaron un cenit en 1987-88 y después disminuyeron (cuadro 22). La tasa de crecimiento demográfico permaneció estancada en un 1 % en 1986-89: la tasa de natalidad decreció ligeramente, mientras las tasas de mortalidad y migración permanecieron esencialmente inalteradas (cuadro 21). La terrible escasez de alimentos, medicinas (incluyendo antibióticos, anestesia) y artículos de

higiene (jabón, detergente) había creado graves problemas sanitarios en 1993: 1) una epidemia de neuritis óptica atacó a más de 50.000 personas, probablemente causada por desnutrición, y sólo pudo ser controlada con distribución masiva de vitaminas; 2) la falta de higiene y de medicinas, así como insecticidas, ha provocado el regreso de plagas como piojos y sarna, y 3) la población ha experimentado una pérdida visible de peso. Es obvio que estos problemas han deteriorado los niveles de salud que antes existían, pero no hay cifras globales disponibles (Barret, 1993).

El número de jubilados y pensionados casi se duplicó en 1985-90 y ya se ha dicho que la carga del financiamiento alcanzó 10 % del PSG. La adición y crecimiento de la compensación por desempleo añadió probablemente un 2 % más en relación al PSG. La devaluación del peso perjudicó especialmente a los pensionados, ya que sus pensiones son totalmente insuficientes para comprar en el mercado negro; por ejemplo, la pensión promedio mensual de 90 pesos en 1993 apenas sobrepasaba el valor de un dólar y sólo podía comprar una libra de carne de pollo en el mercado negro. La edad de los jubilados les impedía hacer las largas y prolongadas colas para adquirir alimentos racionados y las dificultades crecientes en el transporte, así como la escasez de medicinas, perjudicaba especialmente al grupo de la tercera edad.

En los comienzos del PR, Castro declaró incorrectamente que el número de viviendas construidas en 1981-85 era el más bajo de la Revolución, cuando era en realidad el más alto: un promedio anual de 22.114. Después afirmó que las brigadas de construcción por sí solas iban a construir 100.000 unidades de vivienda anuales. Posteriormente fueron alteradas las series estadísticas y no hay datos disponibles totales comparables a partir de 1987. Sin embargo, la construcción total de viviendas (incluidas las públicas y las privadas) en 1985 fue de 74.437, pero de sólo 69.107 en 1987: la construcción pública de viviendas descendió de 27.265 a 23.770 en 1985-87 (aunque aumentó a 26.380 en 1989) y la construcción privada de viviendas disminuyó de 45.119 a 40.535 en 1985-87 (cuadro 25). Las brigadas construyeron sólo 18.315 unidades en 1986-89. En resumen, todas las estadísticas comparables muestran una caída en la construcción residencial después de 1985 y los ambiciosos planes de Castro han fracasado.

El PR se proponía corregir la corrupción y la delincuencia que, se decía, habían aumentado con el SDPE. Los escasos y contradictorios datos indican, no obstante, un aumento de la criminalidad en 1987-91. La creciente escasez de bienes de consumo se ha convertido en terreno abonado para el robo, las transacciones de productos en el mercado negro y el cambio de pesos por moneda extranjera, e incluso la prostitución. Pese a la introducción de duras sanciones penales a fines de los

años ochenta y principios de los noventa, se conocen muchos casos de personas que roban alimentos en las fincas estatales y cooperativas, asaltan almacenes y cafeterías, atracan camiones e incluso han hurtado un enorme contenedor de los muelles. El propio Castro ha denunciado algunos de estos delitos y pedido que el ejército, la policía, las fuerzas de seguridad y grupos de obreros y campesinos armados protejan los alimentos. Hemos observado que a fines de 1991 se aplicaron nuevas y más severas medidas contra la delincuencia, pero carecemos de información sobre sus efectos en 1992.

h. Resumen

En esta etapa se ha producido una severa crisis económica, la peor bajo la Revolución, y el PSG ha descendido a la mitad. Una mezcla de causas externas e internas ha originado dicho deterioro, principalmente el PR y su sesgo antimercado y la caída del bloque soviético. La producción media de azúcar en la segunda mitad de la década de 1980 fue inferior al nivel logrado en la primera mitad de este período, y muy inferior a la meta prevista; el descenso en producción continuó en los primeros años noventa debido a la carencia de combustible, piezas de recambio, abono y otras causas. La cosecha de 1993 fue la más baja en los treinta años anteriores. La agricultura no azucarera ha mostrado también resultados deficientes. La producción de níquel y petróleo alcanzó un máximo y después descendió, más fuertemente el segundo, afectados ambos por dificultades tecnológicas y por la crisis, aunque hubo una recuperación en la producción de petróleo en 1993. La producción de la mayoría de las manufacturas estuvo en 1989 por debajo del nivel de 1985 y la situación se agravó a comienzos de los años noventa. La biotecnología y el turismo tienen buen potencial, pero la primera choca con considerables obstáculos para penetrar en el mercado mundial, mientras que el segundo sólo genera una fracción diminuta del PSG. El volumen de inversión de 1986-89 fue superior al del anterior quinquenio, pero disminuyó fuertemente en los años noventa y la eficiencia del capital ha sido muy baja en todo el período. El exceso de masa monetaria en circulación aumentó muy rápidamente y en 1993 triplicó el peligroso nivel de 1970. Los déficit presupuestarios han crecido enormemente debido a los subsidios del Estado a empresas, bienes de consumo y servicios sociales. El proceso de industrialización se ha invertido al contraerse fuertemente la parte de la industria en el PSG. Los desequilibrios externos empeoraron considerablemente, dado que el déficit comercial de 1986-89 equivalía a casi la mitad del déficit total acumulativo desde 1959.

La dependencia comercial de la URSS alcanzó un máximo en 1987 y descendió desde entonces a causa del virtual cese de intercambio comercial con Europa oriental y el descenso de un 90 % del comercio con la URSS. Ésta interrumpió toda la ayuda económica (incluidos préstamos y precios subvencionados) al finalizar 1991, por lo que desapareció el paraguas protector de que había disfrutado Cuba en la década de 1980. El suministro soviético de petróleo se redujo hasta en un 76 % en 1987-93 y son escasas las probabilidades de que Cuba obtenga fuentes alternativas de abastecimiento, interiores o exteriores, para cubrir este desfase. El desesperado intento de la isla de diversificar sus socios comerciales (con China y las economías de mercado) está seriamente limitado por su continuada dependencia del azúcar (que hoy se vende a precios del mercado mundial), el descenso en producción de otras exportaciones tradicionales, unas exportaciones no tradicionales relativamente escasas, la ineficiencia interior y el endurecimiento del embargo de Estados Unidos. En 1990 la deuda exterior total de Cuba superaba los 37.000 millones de dólares y era la mayor *per capita* de toda la región. Careciendo tanto de ayuda soviética como de nuevos créditos de las economías de mercado (desde 1986), Cuba ha flexibilizado las condiciones para la inversión extranjera, pero ésta es reducida y está concentrada en el turismo. La crisis económica ha forzado la imposición de un duro programa de ajuste y está deteriorando los importantes logros sociales de la Revolución. Está incrementándose el desempleo declarado, aunque hasta 1993 estaba mitigado por un enorme y costoso programa de prestaciones. El racionamiento se ha ampliado a todos los bienes de consumo y se ha recortado el tamaño de las cuotas mensuales de racionamiento, que apenas alcanzan para satisfacer las necesidades alimenticias de dos semanas. El gobierno primero adoptó una actitud igualitarista para hacer frente a los costes sociales, pero al ir agravándose la escasez y dispararse los precios del mercado negro, los grupos de renta más baja se han convertido en los más perjudicados por la crisis. La introducción de medidas orientadas al mercado en 1993, como la despenalización del dólar y el trabajo autónomo, han creado serias desigualdades. Los servicios sociales, como atención sanitaria y seguridad social, están siendo afectados también debido a la escasez de alimentos y medicamentos y la devaluación acelerada de los salarios y pensiones. El enorme coste de éstas y de las prestaciones de desempleo son cargas enormes para el gobierno, que sufre una caída en picado del PSG. Las políticas vigentes no parecen tener capacidad para hacer frente a la crisis, al menos a corto y medio plazo, y la dirigencia revolucionaria no ha logrado diseñar un programa de reforma profunda para hacer frente a la crisis.

8. Factores de cambio y escenarios politicoeconómicos futuros *

Este capítulo mira hacia el pasado y hacia el futuro. En primer lugar indaga si los factores que produjeron la caída del socialismo real en Europa oriental —incluida la URSS— están presentes en Cuba; después explora los posibles escenarios politicoeconómicos de Cuba, que van desde la continuidad del *statu quo* hasta la quiebra del régimen.

A. Características comunes y diferentes en los regímenes de Europa oriental y Cuba

El socialismo de Europa oriental y de Cuba tenía características comunes, tanto internas como externas, políticas como económicas. Pero existen algunas peculiaridades cubanas que merecen mención. Los regí-

* Son autores conjuntos de este capítulo Carmelo Mesa-Lago y Horst Fabian. La primera sección del capítulo fue escrita por Mesa-Lago movido por un análisis de Ronald H. Linden (1993) sobre factores de cambio en Europa oriental y parcialmente basado en Mesa-Lago (1990c). La segunda sección está basada en Fabian (1992) con datos e interpretaciones adicionales de Mesa-Lago. Los autores no siempre han estado de acuerdo en sus juicios; de ser este el caso, se especifican sus opiniones divergentes. Este trabajo apareció primeramente con el título «Analogies Between East European Socialist Regimes and Cuba: Scenarios for the Future» por Carmelo Mesa-Lago y Horst Fabian en *Cuba after the cold war*, editor, Carmelo Mesa-Lago, publicado en 1993 por la University of Pittsburgh Press, 127 N. Bellefield Avenue, Pittsburgh, PA 15260, USA. Traducido y publicado con permiso de la University of Pittsburgh Press. Mesa-Lago ha revisado este capítulo para ponerlo al día con los sucesos de 1993.

menes políticos nacionales de la Europa oriental se caracterizaban por un monopolio del partido comunista, quedando todos los poderes del Estado subordinados al liderazgo del partido, y estando prácticamente prohibidos los partidos de oposición, las ideologías discrepantes y los grupos organizados. En Cuba Castro ha sido un líder carismático que ha ejercido dominio absoluto durante treinta y cinco años; una jefatura tan prolongada ha sido rara en Europa oriental, con las excepciones de Tito en Yugoslavia y Stalin en la URSS. Castro ha tenido más fuerza que el partido comunista; de hecho, en la década de 1960 atrasó su reorganización y denunció su intromisión en los asuntos administrativos. Castro ha amasado probablemente más poder que ningún otro dirigente socialista del mundo salvo Stalin, Mao y Kim Il Sung.

Las economías de todos estos países se caracterizaban por la propiedad colectiva de los medios de producción, una actividad de mercado mínima y estrictamente controlada, una gestión ineficiente y baja productividad del capital y la mano de obra, desaceleración del crecimiento económico y un proceso de industrialización con prioridad sobre la agricultura. Cuba diverge en este último rasgo: siguió una industrialización de estilo soviético en 1959-64, pero volvió a dar máxima prioridad a la producción azucarera en 1965-70, pasó después a una economía más equilibrada en 1971-85 y ha favorecido la agricultura (junto a algunos sectores de servicios e industriales) desde 1989. En parte debido a estos zigzag en estrategias de desarrollo, Cuba está menos desarrollada económicamente que la mayoría de los países de Europa oriental. Además, la tasa de crecimiento económico de Cuba en las décadas de 1960 y 1970 fue inferior a las de los países de Europa oriental (pero superior en 1981-85), mientras que los bienes de consumo han sido invariablemente más escasos en la isla. Por el contrario, el historial cubano en distribución y servicios sociales (particularmente en sanidad y educación) ha sido favorablemente comparable a los de Europa oriental.

Los componentes del socialismo, inducidos externamente, fueron decisivos en la configuración de sus regímenes. Los Estados de la Europa oriental reprodujeron el modelo soviético y se adaptaron a los intereses de seguridad y económicos de la URSS, que por lo general controlaba sus partidos comunistas interiores. El Pacto de Varsovia —dominado por Moscú— suministraba un paraguas protector militar frente a Occidente, pero se utilizaba también para aplastar cualquier intento de cambiar los regímenes comunistas de los países miembros. Cuba ensayó brevemente el modelo soviético de organización económica en 1961-65 y más prolongadamente en 1976-85, pero experimentó con variantes opuestas radical-idealistas en 1966-70 (guevarismo-castrismo) y en 1986-91 (Proceso de Rectificación). El modelo soviético de organización política ortodoxa

siguió en gran medida los mismos ciclos en Cuba. Por ejemplo, el partido tuvo verdadera importancia desde comienzos de los años setenta hasta mediados de los ochenta, pero desde entonces su papel ha decaído junto al proceso general de desinstitucionalización. La isla no pertenecía al Pacto de Varsovia y estaba excesivamente alejada de la URSS para estar amenazada por la ocupación o el control militar. Cuba votaba por lo general junto a la URSS-Europa oriental en las Naciones Unidas y otros foros internacionales, apoyó las invasiones soviéticas de Checoslovaquia y Afganistán (esta última con un considerable coste político) y colaboró con la URSS en acciones militares y en algunas actividades subversivas en América Latina, África y otros lugares. Pero Castro tuvo un papel decisivo en el Movimiento de Países No Alineados y se enfrentó a la URSS en varias cuestiones y ocasiones, por ejemplo: en la retirada de misiles soviéticos en Cuba en 1962; en la lucha con los partidos comunistas pro soviéticos de Latinoamérica a fines de los años sesenta; en la purga de comunistas cubanos pro soviéticos en 1968; en la declaración, a fines de la década de 1960, de que Cuba había avanzado más en el proceso de construcción del socialismo que la URSS, y en la aplicación de modelos de organización económica más similares a los de la China de Mao que a los de la URSS.

Los países europeoorientales y Cuba estaban integrados con la economía soviética a través del Consejo de Asistencia Económica Mutua (COMECON) y mediante acuerdos de comercio bilateral y ayuda firmados con la URSS. Estos mecanismos forjaron un mercado socialista internacional que aislaba de forma efectiva a sus miembros del mercado mundial capitalista y de la competencia, con consecuencias negativas en eficiencia y productividad. Los precios subvencionados y los préstamos soviéticos evitaban o retrasaban los dolorosos ajustes que la mayoría de estos países requerían cuando la crisis energética estalló en los años setenta. Pero algunos países de Europa oriental (Polonia, Hungría, Rumania) habían expandido significativamente sus lazos económicos con Occidente (la RDA con la RFA) y el mercado capitalista mundial. Por el contrario, las relaciones económicas de Cuba con las economías de mercado estaban considerablemente menos desarrolladas, particularmente en la década de 1980. Finalmente, la dependencia cubana del comercio y la ayuda soviéticos era la más intensa de todos los países del COMECON en virtud de la alta concentración exportadora de la isla en un solo producto. En resumen, hacia finales de los años ochenta Cuba era el país del campo soviético más independiente políticamente de la URSS (con la excepción de Rumania), pero el más dependiente económicamente de la URSS y el COMECON. Además, Cuba era uno de los países menos desarrollados e industrializados de este grupo de naciones y figu-

raba entre los que contaban con menos vínculos económicos con el mercado capitalista mundial.

B. *¿Están presentes en Cuba los factores que determinaron la caída del «socialismo real» en Europa oriental?*

Como ha mostrado Ronald Linden (1993), una mezcla singular de factores «subyacentes» y «próximos» originó la caída del socialismo en Europa oriental. Algunos de estos factores están presentes en Cuba, pero otros países están ausentes o son débiles.

1. *Falta de legitimidad política*

Los regímenes de Europa oriental (excluida la antigua Yugoslavia) fueron impuestos y sostenidos por la Unión Soviética sirviéndose de partidos comunistas que tenían una membresía reducida antes de dicha imposición y estuvieron en gran medida dominados por Moscú desde entonces. La población de la mayoría de estos países abrigaba recelos y temores hacia la Unión Soviética a causa de anteriores experiencias, apropiaciones territoriales, amenazas de intervención o intervención real, o porque la gente responsabilizaba a la URSS de las políticas de los regímenes comunistas. Por consiguiente, estos regímenes carecían de legitimidad política, sufrían —junto a su jefatura— una crisis moral y recurrían a la represión —conjuntamente con la URSS— para mantener el control. Los líderes carismáticos que surgieron fueron por lo general los que defendían la eliminación de algún grado de control soviético, como Imre Nagy en Hungría, Alexander Dubcek en Checoslovaquia e incluso Nicolae Ceaucescu en Rumania, cuando denunció la invasión de Checoslovaquia (Linden, 1993).

El régimen cubano, por su parte, era producto de una auténtica Revolución popular que gozó de apoyo casi universal, al menos en sus primeros años. Y el carisma y estilo de gobierno de Castro —constantemente en contacto con las masas— suministraron la amalgama que dio consistencia al régimen. En este sentido, Cuba tiene más en común con la URSS bajo Lenin, China bajo Mao y Yugoslavia bajo Tito que con otros regímenes europeos orientales. Más aún, no obstante su enorme poder y privilegios, Castro no ha llegado a los extremos de culto a la personalidad que alcanzó Mao, ni al despilfarro del estilo de vida de Ceaucescu (pero a comienzos de los años noventa, el culto a Castro llegó a niveles sin precedentes). Aunque el carisma de Castro y el masivo

apoyo a su Revolución se han erosionado considerablemente, sigue contando con una porción significativa de la población (actualmente, quizá ya una minoría, pero es difícil saberlo debido a la falta de estudios libres de opinión pública y elecciones). La ejecución del general Arnaldo Ochoa y el encarcelamiento de varios altos funcionarios cubanos en 1989, así como la denuncia pública de una corrupción muy extendida desde 1986, son síntomas de una creciente crisis moral del régimen cubano y su jefatura; ésta ha experimentado escasos cambios en tres decenios. Al menos hasta fines de 1991, el pueblo cubano no veía a la URSS como enemigo, sino como aliado político y amigo generoso; esta opinión estaba constantemente reforzada por Castro y los medios de información, particularmente en los años setenta y la mayor parte de los ochenta. La URSS no dominaba a Cuba políticamente (hemos comentado que ésta era la nación políticamente más independiente dentro del campo soviético), pero sí ejercía una considerable influencia debido a la dependencia económica de la isla. Dicha dependencia era, no obstante, negada por la jefatura cubana, que presentaba las ventajosas condiciones comerciales y de ayuda con la Unión Soviética como algo justo y prueba de solidaridad socialista entre Estados iguales. Por último, el archienemigo de la Revolución ha sido Estados Unidos: durante más de tres decenios el embargo estadounidense y otras medidas hostiles han sido constantemente utilizados por el liderazgo cubano como cabezas de turco para ocultar sus propios errores y forzar la lealtad de la población a la Revolución y a Castro como única vía para ser leales a su nación.

2. *Grupos alienados: antiguos y nuevos*

En la URSS y la Europa oriental una rápida —y generalmente violenta— colectivización de la tierra generó un profundo resentimiento entre los campesinos, muchos de los cuales murieron o escaparon a las ciudades y lucharon por sobrevivir. La represión de la Iglesia también creó enemigos. Pero el grupo alienado más importante —y en proceso de aumento— ha sido, sin embargo, el de la nueva y joven generación urbana (más agresivos y menos temerosos que sus padres) que —conscientes de la progresiva distancia que separaba las promesas del gobierno y la desalentadora realidad— exigía más y mejores bienes y servicios. Fue principalmente este grupo el que se manifestó en las calles y desafió abiertamente al régimen no sólo en Europa oriental, sino también en China (Linden, 1993).

Desde 1989 Castro ha reiterado en varios discursos que en Cuba no se había producido un proceso violento y cruento de colectivización de

la tierra, sino que, por el contrario, se habían concedido parcelas a más de 200.000 campesinos al principio de la Revolución y éstos habían disfrutado de muchos servicios gubernamentales. No sorprende que Castro omitiera hablar de la sangrienta represión de la insurrección campesina de los montes de Escambray y de la llanura meridional de Matanzas en los años sesenta (aunque se produjeron comparativamente pocas muertes en estos levantamientos), de la gradual eliminación de las pequeñas fincas privadas en Cuba (que bajaron del 30 al 8 % del total de la tierra agrícola en 1963-88) y de la firme resistencia pasiva de los pequeños agricultores restantes. Pero es cierto que el proceso de colectivización de la tierra ha sido en Cuba más gradual y relativamente pacífico, por lo cual ha generado menos hostilidad que en la URSS y Europa oriental. La lucha contra la Iglesia católica ha sido también más sutil y menos violenta en Cuba. Por último, el socialismo se proclamó antes en la URSS y en Europa oriental, de ahí que el fenómeno de una juventud cada vez más alienada del régimen no esté tan desarrollado en Cuba, aunque empieza a ser muy serio (para acometer el problema, la Unión de Jóvenes Comunistas ha organizado recientemente una serie de actividades de esparcimiento para jóvenes).

3. *Deterioro económico*

La tasa media anual de crecimiento del PNB en Europa oriental fue de 4,6 % en 1971-75 y después fue desacelerándose/descendiendo en sucesivos quinquenios a 2, 1 y -1 % (Linden, 1993). Un similar deterioro se produjo en la calidad de vida. Algunas razones de esta decadencia socioeconómica fueron la crisis del petróleo (unida a la reducción de los precios subvencionados soviéticos para la exportaciones de petróleo), la concesión de menos créditos por parte de Occidente y un empeoramiento de la productividad interior. Los líderes abordaron estos problemas con la represión de disidentes y el control de las posibles fuentes de oposición, con compensaciones económicas a grupos clave de la sociedad (así como reformas orientadas al mercado en algunos países) y, en algunos casos, recurriendo a la amenaza de una intervención soviética para mantenerse en el poder. Salvo por esta última medida, Cuba siguió por lo general la pauta de la Europa oriental, aunque la trayectoria en tiempo de la decadencia económica ha sido diferente.

Mientras las economías de Europa oriental se estancaban en 1981-85, la economía cubana (al menos oficialmente) registraba su crecimiento más elevado bajo la Revolución: un promedio anual de 7,3 %, aproximadamente siete veces el promedio de Europa oriental. Los subsidios y

la ayuda soviéticos a Cuba en dicho quinquenio fueron los más altos desde que se iniciaron las relaciones económicas entre ambos países en 1960. Por consiguiente, Cuba estuvo más tiempo y más fuertemente protegida por el paraguas económico soviético frente a la necesidad de un reajuste que sus equivalentes de Europa oriental, y tampoco tuvo que incrementar las medidas de control-represión hasta más tarde. Sin embargo, en 1986-90, a consecuencia del Proceso de Rectificación y a factores negativos externos, la economía cubana descendió un 1,3 % anual, ligeramente más que la media europea oriental (-1 %). Aunque no hay datos exactos comparables para comienzos de los años noventa, parece ser que el deterioro económico de Cuba en 1991-93 fue peor que el de Europa oriental, no obstante las negativas consecuencias de la transición al mercado de esta última (cuadro 2; Mesa-Lago, 1993*d*). Debido a que Cuba estaba menos desarrollada y era mucho más dependiente de la ayuda y el comercio soviéticos que sus aliados socialistas, la desaparición del COMECON y la ayuda soviética, unidos a una fuerte reducción del comercio socialista, han tenido efectos más severos en Cuba. La posibilidad de una nueva entrada de la isla en el mercado capitalista mundial es también menor que la de sus antiguos socios a causa de las limitadas relaciones comerciales que Cuba mantenía con las economías de mercado. El rápido y acusado deterioro de la economía cubana ha provocado una decadencia paralela en la calidad de vida y ha generado considerable descontento entre la población (debido al clima tropical de la isla, no obstante, la población cubana tiene comparativamente menos necesidades que sus equivalentes de Europa oriental: no hay invierno, y por tanto las necesidades de combustible y ropa y las exigencias nutritivas son más reducidas). Hasta 1993 las medidas gubernamentales para enfrentarse a los problemas económicos eran mixtas: inversión extranjera, distribución igualitaria y prestaciones de desempleo, por una parte, y mayor control y represión, por la otra. En 1993 las limitadas reformas de mercado internas crearon incentivos para grupos desafectos y perjuicios para grupos leales. La actual estrategia económica probablemente no conseguirá mejorar la situación a corto y medio plazo, por lo que es probable que continúe el deterioro socioeconómico y aumente el descontento.

4. *Un contramodelo capitalista cercano y exitoso*

El éxito de la Comunidad Europea ofrecía un atractivo contramodelo frente a la URSS y su estilo de socialismo en los países de Europa oriental. Los contactos con Occidente (particularmente de la RDA, Polonia y Hungría) y la información transmitida por Radio Europa Libre

dieron a conocer la sociedad de consumo a los europeos orientales, espoleando su deseo de «volver a Europa» (Linden, 1993).

Con el paso del tiempo, sin embargo, se ha pervertido el efecto positivo de dicho contramodelo. Las dificultades de llevar a cabo la transición a la economía de mercado —entre las que figuran descensos en la producción nacional, subidas de precios, la aparición del paro por primera vez y las expectativas no plenamente cumplidas de ayuda e inversiones occidentales— han recibido amplia publicidad en Cuba. Éstas se exponen en los discursos de Castro y los medios de comunicación nacionales, aunque, como hemos observado, el deterioro económico de Cuba de comienzos de los años noventa parece ser igual o peor que el de Europa oriental. Los exiliados cubanos tampoco ayudan; por ejemplo, en 1990 se abrió en Miami un llamado «registro de la propiedad inmobiliaria» y cientos de exiliados se precipitaron a registrar sus propiedades nacionalizadas, pagando cada uno 150 dólares. Aunque este procedimiento carecía de toda base legal, los medios de comunicación cubanos le dieron publicidad inmediatamente y Castro advirtió que los exiliados recuperarían todas las viviendas y las fábricas si el capitalismo volvía a la isla.

Además, Cuba no está en Europa, y es más propio compararla con sus vecinos latinoamericanos, que en los años ochenta sufrieron su peor crisis desde la Gran Depresión. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 1986-91) reprodujo acriticamente las altas tasas de crecimiento oficiales de Cuba en 1981-85, contrastándolas con la general contracción económica de prácticamente la totalidad de la región. Los niveles cubanos en sanidad, educación y seguridad social son mejores que los de virtualmente todos los países de América Latina. Castro cita a menudo estas estadísticas en sus discursos para demostrar que, pese a la crisis, Cuba ha obtenido resultados buenos en comparación con sus vecinos. Como puede suponerse, no se han dado a conocer en la isla los buenos resultados económicos de Chile, los sostenidos resultados económicos de Colombia, la recuperación de otros países como México y Argentina y los logros sociales comparables de Costa Rica, que en 1960 estaba en posición inferior a Cuba en indicadores sociales y ahora iguala las realizaciones cubanas. Finalmente, Radio Martí, el equivalente cubano de Radio Europa Libre, ha estado funcionando durante un período de tiempo relativamente breve y recientemente se ha visto afectada por la injerencia política de los exiliados cubanos. La imagen percibida por muchos cubanos es: «Estamos en mala situación, pero Latinoamérica y Europa oriental están peor»; por tanto, el deseo de giro hacia el mercado está atemperado por el temor a sus consecuencias negativas.

5. *Existencia de una alternativa política interna*

Según Linden (1993), los factores subyacentes anteriormente examinados no tenían por qué haber producido cambios en Europa oriental (o la transformación habría sido mucho más prolongada) de no haberse materializado una serie de «factores próximos» decisivos.

La existencia de una alternativa política interna fue determinante en Polonia, pero no tanto en otros países. La Iglesia católica y el movimiento de Solidaridad fueron coadyuvantes en Polonia para dar expresión a las aspiraciones de la oposición y posteriormente organizarla para derrocar al régimen. En Checoslovaquia la Carta 77 y la personalidad de Havel tuvieron importancia, pero en Hungría y Bulgaria no había más que disidentes individuales y ninguna figura pública de oposición en Rumania. En algunos de estos países eran importantes los movimientos clandestinos; también las manifestaciones masivas y el éxodo a Occidente (en el caso de la RDA) precipitaron los cambios. Los movimientos etnonacionalistas contribuyeron a la erosión de los regímenes de Yugoslavia y la URSS. El proceso de reforma económica (particularmente en Hungría y Polonia) también sirvió para socavar al régimen en lugar de mejorarlo y salvarlo. Las anteriores rebeliones populares (Hungría en 1956, Checoslovaquia en 1958, Polonia en 1981) crearon símbolos y héroes que actuaron como catalizadores y puntos de encuentro para la oposición. Pero, con la excepción de Polonia, los grandes frentes de oposición se organizaron realmente en medio de la rebelión y no antes de la misma. Por último, las fuerzas militares y paramilitares se mantuvieron al margen cuando se produjo el enfrentamiento final, salvo brevemente en Checoslovaquia y en Rumania, donde la Securitate se alineó con el régimen mientras el ejército se unía a la revuelta. Las escisiones de las jefaturas políticas, la presión mundial unida a la amplia cobertura informativa y la convicción de que la Unión Soviética no iba a intervenir y que la represión interior pudiera resultar ineficaz son posibles explicaciones de la inercia del ejército (Linden, 1993). Por otra parte, unas circunstancias similares no impidieron a los chinos aplastar con éxito el movimiento estudiantil en la plaza de Tiananmen. Pero la falta de apoyo soviético y la descomposición simultánea de otros regímenes socialistas no tuvieron incidencia en el caso de China.

En cuanto al carácter de las alternativas políticas internas, Cuba se asemeja a Rumania más que a otros países. La Iglesia católica de Cuba no tiene la fuerza de la polaca y, hasta recientemente, los obispos cubanos tuvieron mucho cuidado de no criticar al régimen. Pero la Iglesia está ganando afiliados y, en cartas pastorales recientes, los obispos han hablado del problema del desempleo entre los jóvenes, han condenado

la represión de disidentes pacíficos y han exhortado al régimen al diálogo político con toda la oposición. El movimiento sindical cubano ha estado estrechamente controlado por el gobierno desde 1961 y ha servido lealmente como «correa de transmisión». No existe en Cuba ningún movimiento importante étnico o nacionalista (cuestión también destacada por Castro), la isla es lingüística y culturalmente homogénea y no existe posibilidad realista alguna de que los negros puedan organizarse con criterios raciales frente a la jefatura abrumadoramente blanca.

Una gran parte de la oposición de Cuba está en el exilio (10 % de la actual población cubana). Castro, juiciosamente, les dejó salir y, en un par de ocasiones, abrió los puertos cubanos a un éxodo masivo (por ejemplo, 125.000 desde Mariel en 1980). A diferencia de Europa oriental, esta política de puertas relativamente abiertas sirvió como válvula de seguridad para el descontento y atemperó los impulsos de sublevación. En los dos últimos años la práctica imposibilidad de emigración legal —en parte debida a Cuba, en parte por decisión de Estados Unidos— han producido un fuerte aumento de los que salen ilegalmente rumbo a Florida, arriesgando sus vidas en balsas y botes rudimentarios. El cierre de puertas en el momento de mayor privación bajo la Revolución tiene que haber incrementado las tensiones internas y los incentivos para una revuelta a la desesperada. Una cuestión intrigante es por qué no ha abierto Castro algún puerto para un nuevo éxodo masivo. La explicación podría ser el temor de que semejante movimiento de emigración pueda paralizar al régimen y precipitar la rebelión, como ocurrió en la RDA. La oposición cubana en el exterior ha sido débil, fragmentada, en su mayoría conservadora y representada en gran medida por antiguas figuras. (La poderosa Fundación Nacional Cubano-Americana ha sido, no obstante, muy eficaz como grupo de presión y cabildeo contrario a todo acercamiento a Castro.) En años recientes han surgido en la isla varios grupos disidentes pequeños y han recibido amplia publicidad en el exterior, pero a finales de 1991 la mayoría de sus activistas habían sido encarcelados por el régimen. Aunque es aún muy débil numérica y organizativamente, la oposición interior está cobrando gradualmente relieve, confianza en sí misma, credibilidad y fuerza. Existe también un gran segmento silencioso (quizá mayoritario) de la población que no se opone activamente al régimen por temor, pero que se siente insatisfecho y quiere algún tipo de cambio que produzca mejoría. Desde 1990 algunas organizaciones políticas del exilio han creado lazos con el movimiento disidente interior y han desafiado al régimen a mantener un diálogo público, un plebiscito y elecciones libres. Cuba ha carecido tanto de revueltas populares como de movimientos económicos reformistas fuertes; la tímida reforma de 1976-85 fue frustrada por Castro en 1986

y su dirigente (Humberto Pérez, director de la Junta Central de Planificación) cesado, expulsado del Comité Central y sometido a juicio criminal como ejemplo para otros burócratas de inclinaciones reformistas. Las fuerzas armadas y el aparato de seguridad fueron purgados en 1989: un héroe popular de muchas guerras, el general Ochoa, y algunos de sus compañeros fueron ejecutados, y el jefe del Ministerio del Interior (MININT) fue encarcelado y murió poco después de un fallo cardíaco, según informes oficiales. Raúl Castro ha sido jefe de las fuerzas armadas durante la mayor parte de la Revolución y totalmente leal a su hermano Fidel; después de la purga de 1989, Raúl tomó el control del MININT mediante el nombramiento de uno de sus peones. La posibilidad de una escisión entre ambas fuerzas parece ser nula o mínima. El gobierno ha intensificado la represión recientemente, lanzando brigadas de acción rápida que atacan a disidentes y descontentos, criticando y advirtiendo a la Iglesia católica que no incurra en actitudes contrarrevolucionarias, unificando a las «fuerzas de orden» que luchan contra los delitos económicos. Finalmente, se mantiene ocupado al pueblo cubano, en una lucha por sobrevivir, en colas para adquirir artículos de consumo, en trabajos «voluntarios» en la agricultura y en manifestaciones públicas y actividades políticas para las que son movilizados periódicamente; por tanto, es poco el tiempo que les queda (y muy fuertes los disuasores) para organizarse en contra del régimen.

6. *El derrumbamiento simultáneo de regímenes y el «beneplácito» soviético*

Antes de finales de los años ochenta las revueltas o desafíos aislados en los regímenes comunistas del Este europeo eran eficazmente aplastados por fuerzas militares soviéticas (en la RDA, Hungría, Checoslovaquia) o contenidas interiormente por presión soviética (Polonia). La doctrina Breznev fue, no obstante, teóricamente enterrada por Gorbachov en la Declaración de Principios Soviético-Yugoslava de 1988, y éste dio posteriores muestras a Europa oriental de que la URSS no intervendría en caso de llevarse a cabo reformas orientadas hacia el mercado y la democracia. La aceptación por parte de Gorbachov de un gobierno no comunista en Polonia y su visita a la RDA, que contribuyó a deslegitimar a Honecker, fueron nuevos indicios de que era auténtica la luz verde dada al cambio. Gorbachov apeló también a la vieja guardia de Polonia, la RDA y Checoslovaquia para persuadirles de evitar la represión y ceder al poder. En menos de un año cayeron los regímenes comunistas de Polonia, Hungría, la RDA y Checoslovaquia. En Rumania (el país

más independiente de Moscú), Ceaucescu rechazó las reformas de Gorbachov y recurrió a la represión para mantener su régimen, pero fue derrocado por la fuerza. El régimen albanés, ferozmente ortodoxo, fue el último en caer. Al fin, desaparecieron también el régimen comunista soviético y la propia URSS. El «factor infección» o el «factor dominó», en gran medida impulsado por el beneplácito soviético, fue decisivo en el desmoronamiento simultáneo del comunismo en esta región. La caída de piezas de dominó se detuvo en los límites de Europa oriental, aunque sus repercusiones para los regímenes comunistas y la izquierda de otros lugares han sido notables y siguen aún desenvolviéndose (Linden, 1993).

Sin embargo, el régimen cubano (así como el de Corea del Norte) no sólo se resistió a cualquier cambio, sino que, además (contrariamente a Corea del Norte), avanzó contracorriente y mantuvo esta posición durante unos seis años. (Las reformas de mercado introducidas desde mediados de 1993 son aisladas y excesivamente reguladas; además es muy pronto para juzgar su eficacia.) Una primera explicación evidente del fenómeno cubano es que la luz verde dada por Gorbachov a la reforma era irrelevante en Cuba (como lo era en China y en Corea del Norte), porque el socialismo no estaba allí impuesto por Moscú. Hemos comentado ya que Cuba era el país políticamente más independiente dentro del campo soviético, y Castro se había mostrado desafiante con Moscú en varias ocasiones.

Una segunda, y más sutil, explicación es que Cuba estaba en cierto modo protegida contra el «factor infección» o colapso simultáneo de los regímenes. (Suponemos que habiendo sobrevivido más de tres años a la caída del último régimen comunista de Europa oriental —dos años después que la URSS—, dicha «infección» no es ya operativa.) A diferencia de Rumania, donde la jefatura también se opuso al cambio y era relativamente independiente de Moscú, Cuba no está en esa región y, siendo una isla a miles de millas de distancia de Europa oriental, quedó relativamente inmune al virus. El hecho de que varios de los factores de cambio subyacentes y próximos no estén presentes en Cuba o aparezcan de modo más amortiguado forma parte de la explicación. Por último, pero no en orden de importancia, el lanzamiento del Proceso de Rectificación (PR) por parte de Castro en 1986, en el momento en que Gorbachov iniciaba el movimiento de *glasnost* y *perestroika*, pudo haber actuado como vacuna para proteger, al menos temporalmente, a su régimen frente a la reforma. De hecho, Castro ha ofrecido ésta como una de las diversas explicaciones de por qué el efecto dominó no ha funcionado en Cuba: el PR, dice, corrigió el rumbo de la Revolución, alejándola de la vía equivocada (la débil reforma orientada al mercado de 1976-85). Pero otras características del PR han sin duda jugado un papel

en evitar, al menos temporalmente, el cambio profundo en Cuba: la recentralización de la toma de decisiones, la ampliación de los poderes de Castro desde 1986 y en virtud de una enmienda constitucional de mediados de 1992 (véase más adelante), las purgas de dirigentes reformistas y de jefes de los servicios de inteligencia militar, la reducción del pequeño espacio permitido al comedido debate sobre la reforma socialista, y el incremento del control, movilización y represión de la población. Hemos comentado también que la difusión de información sobre los efectos negativos de la transición en Europa oriental ha contribuido a sostener el régimen cubano.

Si bien Castro ha logrado evitar —al menos de momento— la caída del socialismo en Cuba, ha sido incapaz de impedir las enormes consecuencias negativas para la isla del derrumbamiento comunista en Europa oriental y la URSS. Políticamente, la «pérdida de comunidad» o del campo socialista significa que Castro no cuenta ya con poderosos aliados ni con un foro internacional para dar publicidad a sus opiniones, alabar sus logros o atacar a sus enemigos. No sólo han desaparecido sus más firmes compañeros en la defensa de la ortodoxia comunista, sino que virtualmente toda la Europa oriental ha pasado a mirar críticamente al régimen cubano por su falta de democracia, su ineficiente gestión y su oposición al cambio real. La capacidad de Cuba para involucrarse militarmente en el exterior se ha visto seriamente debilitada, tanto por su grave crisis económica interna como por la falta de apoyo logístico y armamentístico de la URSS, la RDA y Checoslovaquia. La invasión estadounidense de Granada, la derrota de los sandinistas en Nicaragua, la salida de Noriega de Panamá promovida por Estados Unidos (acciones conseguidas con la cooperación, o al menos sin oposición significativa, de los antiguos aliados socialistas de Cuba), la retirada cubana de Etiopía y Angola, el acuerdo sobre Namibia con Suráfrica, así como el acuerdo de paz firmado por el gobierno y la guerrilla de El Salvador (todos ellos con la colaboración de la URSS y Estados Unidos) y la desorganización de la izquierda latinoamericana han eliminado fuentes de apoyo a (e involucración de) Cuba y han aislado progresivamente a la isla del resto del mundo. Por último, aunque ha mejorado el comercio de Cuba con China, este país es fuerte partidario de una reforma profunda orientada al mercado, algo con que Castro no comulga. Económicamente las pérdidas para Cuba son incluso más desoladoras: ha desaparecido el COMECON, ha cesado toda ayuda económica soviética y el comercio ha descendido aproximadamente a una décima parte, el suministro de petróleo a la isla se ha recortado en un 80 %, mientras que la ayuda de Europa oriental también ha finalizado y el comercio con esta región se ha reducido a una insignificancia. Debido a la enorme dependencia eco-

nómica de Cuba del campo soviético, esta pérdida adquiere una significación aún mayor. Puede que el Proceso de Rectificación ayudara a evitar temporalmente la caída del socialismo en Cuba, pero sus características antimercado fueron factores gravemente negativos. Actualmente se carece de un modelo económico cohesivo y de una estrategia viable para sacar a Cuba de la crisis.

En resumen, algunos de los factores que contribuyeron a la caída del socialismo real en Europa no se han dado en Cuba, pero otros factores sí se han materializado. Entre las características que diferencian a Cuba figuran: un régimen producto de una revolución popular en lugar de una imposición soviética (así como una relativa independencia política de Moscú); la falta de un contramodelo capitalista exitoso (y los efectos negativos de la transición en la antigua URSS y la Europa oriental); la irrelevancia del beneplácito soviético a la reforma y del efecto infección y la ausencia de instituciones de oposición fuertes, aunque la actual disidencia pequeña va en aumento (este último factor, sin embargo, no fue significativo en Europa oriental salvo en Polonia). Por otra parte, el régimen cubano comparte la mayoría de las características politicoeconómicas de los regímenes europeoorientales, así como el factor de deterioro económico. Este último tardó más en llegar a Cuba, pero es más grave que en Europa oriental debido a la anterior abrumadora dependencia de la isla de la URSS y el COMECON y a las enormes pérdidas en comercio y ayuda económica. Los vínculos de Cuba con el mercado capitalista mundial eran escasos y débiles y, por ello, el proceso de reintegración en este mercado será más difícil y estará agravado por la falta de diversificación de las exportaciones y por el embargo de los Estados Unidos. Por último, pero no en orden de importancia, la actual estrategia de tímida reforma difícilmente podrá promover una recuperación fuerte, a corto y mediano plazo, de la economía cubana. Parece ser que, con el paso del tiempo y el agravamiento de la crisis económica, la capacidad del régimen cubano para satisfacer las necesidades básicas de la población ha decaído rápidamente y se han erosionado sus fuentes interiores de apoyo. Las posibilidades de que el régimen mantenga su actual dirección o la modifique para evitar su derrumbamiento constituye el tema de nuestra siguiente sección.

C. *Escenarios politicoeconómicos*

Debido a la falta de encuestas libres en Cuba, no se puede saber cuál es la opinión pública respecto a cuestiones de continuidad y cambio en la isla. Basándonos en nuestras conversaciones en Cuba y con otros ex-

pertos del extranjero, hemos elaborado no obstante una lista de hipótesis informadas de lo que, a nuestro juicio, querrían ver en el futuro la mayoría de los cubanos que viven en Cuba:

- una solución a la vigente crisis politicoeconómica acordada por los propios cubanos; algunos aceptarían una solución internacional negociada (por ejemplo, a través de Latinoamérica o la Comunidad Europea), pero la mayoría rechazaría una intervención directa de Estados Unidos;
- una transición pacífica más que un enfrentamiento cruento o una guerra civil;
- un aumento del grado de libertad política y democracia participativa; la mayoría no querría una dictadura;
- la conservación de los logros positivos obtenidos a lo largo de la Revolución, tales como los servicios sociales; es probable, no obstante, que la mayoría comprenda que algunos de estos logros quedarían afectados en alguna medida en un proceso de reestructuración; la mayoría no querría volver a la situación prerrevolucionaria, y
- la necesidad de aumentar la eficiencia económica y mejorar la producción; una mayoría aceptaría algún tipo de reforma económica para conseguir este fin.

Esta formulación especulativa sobre un potencial consenso nacional es indefinida, particularmente en cuatro aspectos:

- la índole de la reforma económica que hay que introducir: planificada, socialismo de mercado, economía mixta, economía de mercado predominantemente;
- cómo lograr una solución pacífica a la crisis y mayores libertad política y participación democrática;
- cómo conservar los logros sociales de la Revolución en medio de una severa crisis económica, y
- cuál ha de ser el papel de Castro, si es que lo tiene.

Fidel Castro es el factor más importante a la hora de determinar el futuro económico de Cuba, pero en los posibles escenarios influirán otra serie de factores en interacción:

- las reservas de apoyo popular que le quedan al régimen y la magnitud y velocidad de la crisis de legitimidad política, así como la incidencia de todo ello en la correlación de fuerzas dentro del régimen (los ortodoxos, los reformistas y Castro);
- el potencial desarrollo de instituciones y grupos semiautónomos de la sociedad civil (iglesias, disidentes, la juventud) y la correla-

ción de fuerzas y estrategias de la oposición en Cuba y en el exterior;

- la política de los principales actores internacionales: Estados Unidos, la Comunidad Europea, la CEI y América Latina;
- la evolución de las economías latinoamericanas y la transición a la economía de mercado de los antiguos Estados socialistas (contra-modelo exitoso o fracasado), y
- la magnitud y velocidad de la crisis económica en Cuba.

En las páginas que siguen se examinan brevemente cinco escenarios politicoeconómicos, los cuatro primeros con Castro y el quinto sin él: 1) continuación del *statu quo* politicoeconómico; 2) creciente militarización y represión sin cambio económico profundo; 3) giro hacia el modelo chino-vietnamita de autoritarismo político y socialismo de mercado; 4) democratización y reforma económica orientada al mercado, y 5) quiebra del régimen por una derrota política en elecciones, un golpe militar o una acción/insurrección de masas. En cada uno de estos escenarios se analizarán diversos aspectos: características políticas y económicas, partidarios, ventajas e inconvenientes (o posibilidades y obstáculos) y viabilidad.

1. *Continuación del statu quo*

Este escenario ha sido virtualmente modificado, en el plano económico, por los cambios que comenzaron a mediados de 1993, y en el plano político, por una intensificación de la represión desde 1991. El escenario original combinaba: una apertura económica del sector externo, algunas concesiones políticas muy limitadas (por ejemplo, voto directo para elegir a los miembros de la asamblea nacional, admisión de cristianos en el partido) y una represión dosificada. El marco esencial permanece inalterado: una economía socialista centralizada (carente de la planificación central tradicional, pero con un programa para el estado de emergencia), un sistema de partido único y la hegemonía de Castro. Este modelo era el inicialmente favorecido por Castro para evitar nuevas reformas y por los ortodoxos y radicales de la burocracia central y el partido; eran contrarios a él —aunque no abiertamente— los reformadores y el creciente grupo silencioso de descontentos y, públicamente, una pequeña oposición disidente.

En la inviabilidad a largo plazo de este modelo incidieron varios obstáculos: 1) la estrategia no tenía audacia suficiente para dar la vuelta a la economía, mientras que la apertura al sector exterior (con ortodoxia

económica en el interior) no podía lograr el soporte financiero internacional necesario para promover un crecimiento vigoroso; 2) la reforma política era (es) en exceso tímida para impulsar un avance significativo hacia la democratización, reducir la presión interior y responder a las expectativas internacionales, y 3) el empeoramiento de la economía produjo mayor descontento y nuevas exigencias de cambio. Este modelo no tenía viabilidad y cedió el paso, a principios de los años noventa, a otras alternativas en los planos político y económico.

2. *Militarización y represión crecientes sin cambio económico profundo*

Este escenario se ha estado configurando desde el fin de 1991 en el plano político, aunque ha habido cambios en el plano económico que se discuten en la sección siguiente. Sus características son: una tendencia hacia un mayor control central, el cese de todo debate, la militarización y la represión de cualquier forma de oposición. Un antecedente de esta política se encuentra a fines de los años sesenta, cuando el gobierno comprendió que su estrategia politicoeconómica (estímulos morales, la zafra de los diez millones de toneladas) estaba fallando y era inminente la crisis. Pero la actual crisis es más severa: está en juego la supervivencia de la Revolución (de ahí la consigna: «¡Socialismo o muerte!»). Por consiguiente, las medidas son hoy más duras que en la década de 1960.

Algunas medidas ya comentadas son las purgas en el ejército y la seguridad interior, la organización de brigadas de acción rápida para atacar físicamente a los contrarios, la reducción del espacio para los activistas en pro de los derechos humanos, el encarcelamiento de disidentes, las admoniciones, críticas y amenazas a los dirigentes de la Iglesia y a la oposición, la unificación bajo un solo mando de todas las fuerzas de orden, la designación de jueces más duros y sanciones más severas contra los delitos económicos. Se percibieron indicios de militarización en los últimos congresos de los sindicatos (donde todos los delegados iban vestidos con traje de faena verde) y de las juventudes socialistas, donde Castro anunció la construcción de «cientos de túneles» para la defensa de la isla y la participación de los jóvenes en esta tarea. El ejército ha recibido órdenes de proteger los centros de almacenamiento de alimentos en el campo, y el «sistema integral de mejora empresarial», ensayado y aplicado a empresas militares, se ha presentado como modelo para la economía civil. Hay también mayor movilización —de corte militar— de obreros, estudiantes, mujeres y de las fuerzas armadas para trabajar en la agricultura. Recientemente Castro ha denunciado

públicamente la violación de las «normas» de producción asignadas a estos grupos y ha exigido mejores resultados. Además, ha pedido una «guerra sin cuartel» contra los que «ignoran los hechos», «las personas que no entienden» las estrategias gubernamentales, los que «creen que nuestros problemas son resultado de actos estúpidos cometidos por nuestros cuadros». Ha criticado también a los que son «alérgicos a la repetición de los mismos argumentos», afirmando que, como en el caso de la religión en que los «dogmas» son constantemente reforzados, la jefatura revolucionaria «no debe cansarse de repetir los argumentos diez veces, cien veces... un millón de veces» (Castro, 1992a).

El proceso de centralización del poder político llegó a su punto álgido en julio de 1992, cuando la asamblea nacional enmendó dos tercios de los artículos de la constitución de 1976, sin celebrar con anterioridad el referéndum que exige la constitución. Estas modificaciones constitucionales aumentaron los poderes que Castro detentaba ya (presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, primer secretario del partido, comandante en jefe de las fuerzas armadas): se le otorgó autoridad para declarar el estado de emergencia y suspender la constitución en caso de guerra, de un ataque inminente, un desastre natural o acontecimientos capaces de afectar al orden interior y la seguridad del Estado. También asumió la dirección del Consejo Nacional de Defensa, de reciente creación, encargado de la dirección de la nación en estado de guerra, de movilización nacional o de emergencia.

Existen varias posibles causas de este progresivo giro hacia la represión en Cuba: el colapso de la URSS, que ha dejado a Estados Unidos como única superpotencia y «gendarme mundial», unido al endurecimiento del embargo contra Cuba de este país; la creciente combatividad de la Iglesia católica y los grupos disidentes interiores (que han establecido vínculos con grupos exiliados que comparten una común estrategia de diálogo); los peligros ideologicoeconómicos implícitos en la apertura a la inversión extranjera, el reingreso en el mercado capitalista mundial y las reformas de mercado internas, y la severa crisis económica y sus omnipresentes efectos sociales: más robos en propiedades públicas, decadencia de la disciplina laboral, incremento en el desempleo encubierto y declarado, mercado negro en auge, resurgir de la prostitución y delincuencia generalizada.

El papel de Estados Unidos exige un tratamiento especial. La administración Bush no sólo presionó a la URSS para que interrumpiera su ayuda económica a Cuba, sino que también endureció el embargo: influyendo en sus aliados para que no comerciasen con Cuba, suspendiendo o recortando las visitas de cubanos a sus familiares en Estados Unidos, reduciendo el número de paquetes de alimentos que pueden enviarse a

la isla y pasando la Ley Torricelli (en octubre de 1992), que prohíbe comerciar con Cuba a las filiales de Estados Unidos en el extranjero. La opinión del gobierno Bush (apoyada por la Fundación Nacional Cubano-Americana) era que dichas medidas contribuirían a desestabilizar al régimen cubano y provocarían su posterior caída. La administración de Clinton, en su primer año, no se distinguió básicamente de la política anterior; cuando era un candidato, Clinton apoyó la Ley Torricelli; ya como presidente, aprobó la continuación del embargo y su secretario de Estado asistente de Asuntos Interamericanos ha ratificado la Ley Torricelli y prometido que continuará el embargo. Sin embargo, Clinton ha autorizado un incremento de viajes de exiliados a Cuba.

Además de intensificar las privaciones de la población cubana (muchas de la cual es contraria a Castro), las medidas hostiles de Estados Unidos han reforzado la mentalidad de sitio del régimen y contribuido a racionalizar una mayor represión de la oposición. Hay que señalar que tanto los obispos católicos como conocidos disidentes cubanos (por ejemplo, Elizardo Sánchez) han pedido que cese el embargo norteamericano. Otra posición, defendida por varios líderes latinoamericanos y europeos (así como una minoría de exiliados cubanos), es alentar la democratización interna mediante una política de *detente*, negociación-diálogo y apertura al comercio y las comunicaciones. Frente a la postura hostil (ineficaz en Cuba durante más de tres decenios), el segundo grupo sostiene que la política de *detente* contribuyó a la transformación de Europa oriental y podría tener éxito también en Cuba.

La alternativa represiva probablemente tiene el apoyo de los militares y las fuerzas de seguridad, así como de Castro. El Ejército es la institución más fuerte de Cuba (el mayor de Latinoamérica en soldados por habitante) y cosechó grandes éxitos en las guerras de África, lo cual procuró prestigio y privilegios a sus miembros. Pero a fines de los años ochenta, la retirada de tropas cubanas de África y el *affair* Ochoa mermaron el papel y el prestigio de las fuerzas armadas. La partida de defensa y seguridad del presupuesto nacional ascendió de 5,4 a 10,7 % en 1980-86, pero descendió a 9,6 % en 1990. Un incremento de la militarización y la seguridad interiores podría devolver su anterior *status* a estas instituciones y salvar algunos de sus privilegios frente a un entorno de nivel de vida en rápido deterioro. Además, la experiencia de Europa oriental ha enseñado a los militares y personal de seguridad cubanos que ellos serían los grandes perdedores si cayera el régimen. Hay rumores de que el antiguo personal de seguridad de Europa oriental está ahora asesorando al gobierno cubano.

Esta alternativa podría surtir efecto a corto o medio plazo, porque los hermanos Castro mantienen un firme control del ejército y la segu-

ridad interior, y a estas fuerzas, a su vez, les conviene claramente apoyar a sus líderes. Pero mantener el régimen recurriendo principalmente a la represión eliminaría la reserva que aún queda de legitimidad política y aumentaría el aislamiento de Cuba en el mundo. La Comunidad Europea redujo su ayuda económica a Cuba a principios de los años noventa por la falta de democracia del régimen, mientras que los dirigentes latinoamericanos y españoles han estado presionando a Castro para que permita partidos múltiples y elecciones libres. (Sin embargo, tras la vuelta de Castro a Cuba después de la cumbre iberoamericana celebrada en Madrid en el verano de 1992, Felipe González reconoció la futilidad de sus esfuerzos y recibió a representantes de los grupos políticos de exiliados cubanos; estas acciones fueron rápidamente denunciadas en los medios de comunicación cubanos, que criticaron a la cumbre calificándola de trampa y humillación para Castro.) Un mayor endurecimiento de la situación política de la isla cerraría las pocas puertas que aún siguen abiertas y crearía disuasores para la inversión extranjera. Con una economía declinante y mayor descontento aumentarían las protestas y la oposición, lo cual podría provocar una reacción en cadena de mayor represión y así sucesivamente. A la larga, por tanto, esta alternativa no parece viable.

3. *Movimiento hacia el modelo chino de socialismo de mercado con autoritarismo político*

La reforma económica china de orientación al mercado es virtualmente un éxito dentro del mundo socialista y está inspirando reestructuraciones de índole similar en otros países como Vietnam. En 1978-90 el PNB real de China creció a un ritmo anual de 8,5 % (11,2 en 1984-88), el valor real de las exportaciones se cuadruplicó, el capital extranjero utilizado se triplicó y los depósitos de ahorro se elevaron casi veintiséis veces. Este «milagro socialista» se logró gracias a la expansión de la actividad privada de aldeas, grupos y familias. La gran mayoría de la agricultura se realiza actualmente mediante contratos con aldeas y familias. En la industria la parte correspondiente a aldeas/grupos/sector privado en la producción bruta se incrementó de 22,4 % en 1978 a 53,7 en 1991. La inversión extranjera directa se expandió en tres «zonas económicas especiales» en torno a Hong Kong (que ha desempeñado un papel decisivo en este modelo) y el vigoroso *boom* de estas zonas se extendió rápidamente a otras ciudades. El nivel de vida se ha elevado en concordancia. Vietnam, que tiene más en común con Cuba que con China (por ejemplo, la fuerte pérdida de comercio con, y ayuda de, el COMECON),

también ha aplicado la reforma económica de estilo chino con buenos resultados: las exportaciones vietnamitas se triplicaron en 1986-90 y Hanoi, una ciudad muerta antes de la reforma, es hoy un centro floreciente (Perkins, 1992). Hasta 1989 la reforma económica indujo una modesta apertura política en China, pero las manifestaciones estudiantiles de aquel año terminaron con una dura represión en la plaza de Tiananmen. Desde entonces, la jefatura china ha mantenido un estrecho control sobre la política. El modelo de reforma chino y vietnamita es, sin duda, atractivo a los reformadores económicos cubanos.

En 1990 unos cuantos economistas cubanos empezaron a considerar la reforma económica como el menor de dos males. Se estaba produciendo un debate a puerta cerrada sobre la posibilidad de combinar un marco socialista con los mecanismos de mercado —que, se apresuraron a aclarar los cubanos, no son exclusivos del capitalismo—. En un viaje realizado a La Habana en 1990, Mesa-Lago (1993*b*) mantuvo conversaciones con un pequeño grupo de economistas universitarios y otros científicos sociales. En aquel momento su impresión fue que el debate no estaba centrado en la posibilidad de utilizar o no los instrumentos de mercado, sino hasta qué punto debían utilizarse y cómo evitar sus consecuencias negativas. Dos cubanos mantuvieron que si se prescindía de dichos mecanismos o eran reprimidos, surgirían de todos modos, como ha demostrado el mercado negro. Otro argumento utilizado fue que la satisfacción de necesidades urgentes de la población debía tener más importancia que el deseo de impedir el lucro de pequeños grupos que podían contribuir a responder a dichas necesidades. Por último, algunos cubanos sostuvieron que si el Estado no era capaz de satisfacer una necesidad imperiosa e importante, se debía permitir que lo hiciera un mercado regulado o la actividad privada.

En el otoño de 1990 los técnicos de nivel medio estaban pidiendo la privatización de aquellos servicios sociales que el Estado no podía ofrecer y el restablecimiento de los mercados libres campesinos, los bonos a la producción y otros mecanismos abolidos o muy recortados bajo el Proceso de Rectificación. Estos técnicos no querían, sin embargo, una reforma radical del mercado, sino pequeños cambios graduales para evitar un mayor deterioro económico y para promover alguna mejoría. Un conocido economista cubano dijo a un periodista norteamericano: «¿Por qué ha de ocuparse el Estado de gestionar cosas como los puestos de helados y las barberías?» Afirmó después que los taxistas del Estado ofrecían un mal servicio, no cuidaban los taxis y se embolsaban parte de las ganancias, pero si el Estado vendía los coches a los conductores, ofrecerían un servicio excelente y cuidarían bien de los coches.

Los economistas y técnicos cubanos reformistas abrigaban, no obs-

tante, muchas reservas y temores respecto al uso de los mecanismos de mercado, preocupaciones en gran medida resultantes de su observación de las consecuencias negativas de las reformas de mercado en Europa oriental y la URSS. Por ejemplo, consideraban al sector privado capaz de desempeñar funciones positivas: eliminación del monopolio del Estado y saludable competencia para mejorar la eficiencia pública. Pero podría producirse un efecto de bola de nieve si el sector privado exigiese cada vez más insumos, acumulase riquezas y presentase un reto frontal al Estado. La desaparición o fuerte reducción de la red de seguridad constituía una gran preocupación: i) desempleo elevado; ii) desigualdades considerables (un argumento decía que la igualdad es la amalgama que aglutina al pueblo cubano, pero cuando Mesa-Lago replicó que había desigualdades con el socialismo —en vivienda, acceso a tiendas especiales, automóviles— no hubo respuesta); iii) aumento de los precios, lo cual reduciría acusadamente el consumo de los grupos de renta baja (pero esto ya está ocurriendo de todos modos), y iv) reducción de prestaciones sociales gratuitas como educación, sanidad y seguridad social. La propiedad privada de los medios de producción parecía ser un tabú, pues en ningún momento se discutió directamente.

Por otra parte, los oasis de mercado dentro del desierto estatal, las empresas mixtas, han comenzado a generar tensiones con la mayor parte de la economía interior, que sigue en gran medida centralizada. Por ejemplo, las empresas mixtas se ven presionadas a adquirir insumos de las empresas de propiedad pública en lugar de insumos baratos del exterior; un doble sistema de precios, salarios y tipos de cambio crea complicaciones, y así sucesivamente (Cardoso y Helwege, 1992). Los directores-gerentes de estos enclaves procuran la difusión de sus prácticas y criterios económicos a otros sectores de la economía y apoyan reformas de precios y otros cambios orientados al mercado. Los trabajadores quieren sueldos y condiciones de trabajo similares a los de los enclaves privilegiados. Los agricultores privados y potenciales empresarios presionan por la aplicación de las mismas prácticas a la economía interior. La masa de la población, excluida de los enclaves turísticos extranjeros, desea acceso a estos servicios. La unión de estas presiones fortalece el poder de los reformadores económicos frente a Castro.

Pero el obstáculo más importante a la reforma de orientación al mercado en Cuba es precisamente la oposición de Castro incluso al tipo de reforma aplicado en países que siguen siendo socialistas, como China. En numerosos discursos, hasta mediados de 1993, Castro rechazó sistemáticamente: la privatización incluso de las pequeñas empresas familiares, la propiedad por parte de grupos de trabajadores, los contratos de las fincas y fábricas del Estado con familias, los mercados libres campe-

sinos, los vendedores ambulantes y productores pequeños. Por el contrario, prometió que la Revolución iría aumentando la socialización progresivamente, lucharía contra los agricultores privados que aún quedan y resolvería todos los problemas económicos a través del Estado, un planteamiento que ha fracasado hasta la fecha.

Entre 1990 y mediados de 1993 los discursos de Castro contenían ataques a individuos y grupos de personas dentro de Cuba que eran calificados de «escépticos», «desafectos», «desmoralizados», «críticos», «derrotistas» y «cobardes». Los reformadores económicos se convirtieron en blanco del presidente, que les acusó de ser «marionetas imperialistas», «francotiradores políticos», «pseudorrevolucionarios», «quintacolumnistas» y «traidores», y les amenazó con duras represalias.

Algunos observadores extranjeros, así como estudiosos y tecnócratas cubanos, esperaban que el 4.º Congreso del Partido Comunista de Cuba ratificaría una reforma económica de estilo chino. Existía un amplio respaldo entre la población para el restablecimiento de los mercados libres campesinos y medidas similares. En el Congreso ni siquiera se mencionó el modelo chino, y Castro se opuso enérgicamente a las reformas orientadas al mercado en general y a los mercados campesinos en particular. Al fin, el Congreso votó junto a su Líder Máximo: apoyó la apertura a la inversión extranjera, pero mantuvo la economía socialista centralizada. Seis meses después de clausurado el Congreso, Castro (1992*b*) reconoció que algunas personas todavía querían que volvieran los mercados libres campesinos, pero nuevamente volvió a rechazarlos, junto a toda forma de contrato de grupo o privado en la agricultura, e insistió en que el sector público incrementaría la producción, algo que no ha ocurrido todavía. Castro se ha opuesto a la reforma orientada al mercado (incluso a su variedad china, que mantiene controles frente a una posible caída del socialismo) por motivos tanto ideológicos como sociales (desigualdad, corrupción, erosión del fervor revolucionario), así como por la descentralización de la toma de decisiones —y delegación del poder político— que tal reforma implica. Algunos dirigentes que anteriormente defendieron la reforma económica pronto cambiaron de opinión. Carlos Aldana, la tercera figura política más importante de Cuba, que al comenzar la década de 1990 mostró una cauta simpatía hacia la reforma, confesó su error públicamente (después de hablar con Castro, dijo) y exhortó a otros partidarios de la reforma a retractarse también. Pero dicha confesión no impidió su destitución en el otoño de 1992 (Mesa-Lago, 1993*b*, 1993*c*).

A contrapelo de todas sus declaraciones anteriores, en la segunda mitad de 1993 Castro aprobó tres reformas de mercado importantes: la autorización de la tenencia y libre circulación de las divisas en Cuba, el

permiso para ejercer 134 ocupaciones mediante trabajo autónomo y la transformación de las fincas del Estado en cooperativas de producción. Otras medidas estaban en estudio a fines de 1993. El campo de los reformistas pareció fortalecerse con el nombramiento de al menos uno de ellos en un cargo crucial. La causa de este viraje sorprendente de Castro se encuentra en el fracaso de la alternativa primera para detener el proceso de deterioro económico y promover la necesaria recuperación. Aunque estas medidas indican un giro positivo hacia el mercado, las mismas están seriamente constreñidas por varias limitantes: i) son pasos aislados que no están coordinados ni han sido bien planeados, en vez de ser parte de un programa comprehensivo e integrado de reforma hacia el mercado; ii) las concesiones están sujetas a una regulación excesiva que conspira contra el objetivo de desarrollar el mercado y sugiere que el Estado quiere controlar fuertemente el proceso de cambio; iii) a fines de 1993 Castro logró revertir algunos de los pasos dados, prohibiendo ciertas actividades antes aprobadas, como los taxis privados y los restaurantes, y iv) las medidas acarrearán consecuencias políticas negativas, ya que perjudican a los partidarios del gobierno y favorecen a oponentes (por ejemplo, los primeros tienen escaso acceso a dólares remitidos por exiliados, mientras que los segundos reciben remesas abundantes), además promueven la desigualdad y debilitan el poder económico del Estado. Por último, tanto Fidel Castro como Carlos Lage (el arquitecto de la política económica cubana) han declarado recientemente que el modelo chino no es replicable en Cuba (Mesa-Lago, 1994).

Fabian sostiene que si persiste o se agrava la crisis económica de Cuba, lo cual es probable, aumentará la presión a favor de la reforma económica de corte chino-vietnamita, una opción preferible para Castro a la democratización, porque las nuevas concesiones en el ámbito de la economía no debilitarían *de modo inmediato* su control político. A juicio de Mesa-Lago, sin embargo, un elemento clave del modelo chino no se da en Cuba: Hong Kong. La alternativa para Cuba es Miami, pero ésta no es viable en las vigentes condiciones. Más aún, si Castro se viera forzado a adoptar el modelo chino, éste correría peligro en cuanto amenazara su control político. Mesa-Lago concluye que las posibilidades de aceptar este modelo en Cuba son escasas y que, de aplicarse, no duraría mucho tiempo, a menos que quede significativamente recortado el poder de Castro, una contingencia difícilmente imaginable en las presentes circunstancias.

4. *Democratización y reforma económica de mercado*

En esta sección se analizan estos posibles cambios politicoeconómicos bajo un régimen controlado por Castro, mientras que en la siguiente sección son examinados bajo un régimen post-Castro. El número potencial de combinaciones de reformas en ambos frentes es alto y es imposible repasarlos todos aquí. En teoría sería posible una democratización con una economía socialista centralizada, pero, en la práctica, esa combinación no ha ocurrido en ninguna parte. Por lo tanto, una apertura política debería estar acompañada también de una apertura hacia el mercado. La variedad de reformas económicas es enorme e incluye, entre otros, el socialismo de mercado chino y los diversos estilos de economías en transición al mercado de Europa oriental. Se supone que cuanto más amplio el proceso de democratización más tenderá a avanzarse hacia la economía de mercado. Aquí se examinan dos estilos de apertura política: una limitada bajo un Estado de partido único y una variedad más abierta de pluralismo democrático.

Fabian cree que bajo una combinación favorable de condiciones internas y externas Castro podría aceptar y desarrollar una estrategia de democratización «débil» (limitada) dentro de los límites de un Estado de partido único. Este proceso se caracterizaría por una mayor diferenciación institucional dentro del sistema estatal vigente (por ejemplo, entre el partido y la administración), en sustitución de la tradicional separación de poderes; mayor autonomía de algunas instituciones del Estado y la sociedad civil (por ejemplo, de la asamblea nacional, los sindicatos, las organizaciones juveniles y femeninas); respeto al imperio de la ley y, en especial, a los derechos civiles; aceptación de una oposición semi-oficial dentro del partido y de la sociedad, y afirmación de mayor grado de responsabilidad pública y receptividad por parte del gobierno. Este movimiento exigiría un entorno favorable: creciente influencia de los reformadores dentro del partido y el gobierno, fuertes presiones de la sociedad civil, autocontención por parte de la oposición interior y la disposición de Estados Unidos a iniciar un diálogo. Fabian mantiene que la jefatura cubana sigue un curso zigzagueante y ambivalente, más que un movimiento lineal de aumento de la represión. Castro está pilotando el barco en medio del temporal y, aunque quisiera seguir un rumbo determinado, se ve forzado a hacer rectificaciones: por ejemplo, ha hecho algunas concesiones políticas, pero son menores y constreñidas a los límites del gobierno monopartido; ha abierto la economía a la inversión extranjera e introducido algunas medidas de mercado interno, pero se ha opuesto a una auténtica reforma de mercado. Dentro del partido y la administración existen opiniones diferentes sobre cuestiones decisivas. La política oficial está, por consiguiente —según Fabian—, llena de am-

bigüedades y contradicciones: entre el fundamentalismo ideológico y el pragmatismo político, entre el estímulo de la participación democrática y el centralismo autoritario, entre institucionalización y personalismo castroista con concentración de poder, entre la tolerancia hacia un espectro más amplio de opiniones políticas y la represión de las voces críticas, y así sucesivamente. Fabian concluye que esta política de democratización débil podría dar una moratoria al régimen a corto plazo, pero las cuestiones en torno a la legitimidad de un gobierno de partido único y la transición a una democracia auténticamente pluralista tendrían que abordarse a fin de cuentas. A corto plazo, los riesgos políticos para Castro de esta alternativa son mínimos y podría procurarse cierta cantidad de tiempo y espacio político, pero esta apertura podría desatar un proceso incontrolable de demandas de mayor democratización, y es escasa la probabilidad de que surja esta difícil combinación de condiciones coadyuvantes. De ahí que la viabilidad de esta solución sea reducida.

Fabian especula que si las restantes alternativas de Castro no funcionan o son autodestructivas (haciendo enormes los riesgos de perder su poder) podría, bajo un conjunto de circunstancias más propicias, abrir el sistema político a ciertos partidos reformistas nacionalistas o socialdemócratas. Esta segunda variante del escenario podría seguir a la precedente, con algunos cambios menores e incrementales, poniendo en movimiento un proceso de auténtica reforma democrática. Esta opción presupone una creciente presión interior de la protesta pública y de la oposición política moderada, convergente con una derrota de los ortodoxos por parte de los reformadores dentro del partido y el gobierno. Un peligro inminente de sublevación popular o guerra civil podría precipitar esta vía. Los actores internacionales (Estados Unidos, la Comunidad Europea, la CEI, América Latina) deben respaldar la transición pacífica y ofrecer incentivos a Castro para que actúe en esta dirección. Las reformas democráticas tendrían que negociarse con él y el precio podría ser el cese del embargo estadounidense y la aportación de alguna ayuda económica. La mayoría de la oposición interior de Cuba se inclina por una estrategia de diálogo público, negociación y reconciliación nacional, y algunos grupos de oposición del exilio están también adoptando esta posición. Hay algunos beneficios para Castro en la elección de esta alternativa: la estabilización política del régimen, el fin del aislamiento internacional de Cuba (y probablemente del embargo) y la plena reintegración de la isla en la región de Latinoamérica-Caribe; inversiones extranjeras, incluyendo posiblemente a un grupo de cubano-norteamericanos que aceptan la solución negociada, y control sobre el proceso de transición democrática y reajuste económico para evitar la eliminación de los logros sociales de la Revolución. Pero también hay riesgos para

Castro. Podría ser derrotado en unas elecciones libres; Estados Unidos podría utilizar la apertura para apoyar a la oposición cubana y desestabilizar el régimen, y los cubano-norteamericanos podrían no invertir en una economía mixta todavía dominada por Castro. A corto plazo esta opción es improbable. Hasta el momento, la crisis política no ha llegado al punto en que son inevitables las reformas estructurales democráticas —la jefatura parece estar unida, en firme control de las fuerzas armadas y disfrutando todavía de algunas reservas de legitimidad política—. Además, Castro ha aprendido la lección de Nicaragua y Europa oriental/URSS (y del cono sur de América Latina también) de que la aplicación de un sistema multipartido y la democratización suelen desembocar en derrota política. Por tanto, con objeto de tomar esta vía, Castro tiene que estar seguro de que puede ganar las elecciones limpiamente (recorrir al fraude sólo empeoraría las cosas) y sus probabilidades de ganarlas disminuyen con el deterioro económico de la isla. Además, Castro teme a Estados Unidos y éstos, por su parte, probablemente no están dispuestos a levantar el embargo.

Mesa-Lago cree que desde fines de 1991 ha surgido una tendencia clara de concentración de poder, militarización y represión crecientes en Cuba. Más aún, él duda de que, incluso en una situación de peligro para el régimen, Castro estuviera dispuesto a aceptar una democracia pluralista y abrir su flanco a la influencia de Estados Unidos. Una constante de la actuación de Castro a lo largo de toda la Revolución ha sido su lucha por el predominio político y su aversión a compartir el poder incluso con aliados que disientían sobre cuestiones fundamentales. Cuando quiera que el Líder Máximo percibía que su poder estaba amenazado o podía ser desafiado, eliminaba inmediata y resueltamente el obstáculo que hallaba en su camino; por ejemplo, a los miembros del Movimiento del 26 de Julio y otros grupos de la coalición revolucionaria en 1959 y principios de los años sesenta, a Guevara a mediados de esa década, a los comunistas prerrevolucionarios entre mediados y fines de los años sesenta, a los reformadores del SDPE a mediados de la década de 1980 y, posiblemente, a Ochoa y su grupo a fines de los ochenta. A la luz de semejante historia, resulta difícil concebir que Castro vaya a arriesgar su poder en unas elecciones libres o a compartirlo con una oposición cuya meta última sería derribarlo. Quizá sea simple retórica, pero en numerosos discursos de años y meses recientes Castro se ha negado vehementemente a toda posibilidad de un sistema multipartido e incluso a concesiones menores que —según él— conducirían a mayores concesiones y el colapso final del régimen. Ha reiterado también que él, el partido, el gobierno y la nación toda están dispuestos a morir antes que abrir el sistema a esta índole de cambios. A juicio de Mesa-Lago, por consiguiente, Castro tiene un control político virtualmente total y va a recurrir

a una mezcla de militarización, movilización y represión, por una parte, y a los «enclaves económicos extranjeros» y algunos cambios económicos internos, por otra, para ganar tiempo, abordar la crisis y salvar su régimen. Pero, como ya se ha dicho anteriormente, esta estrategia probablemente no va a funcionar y la crisis continuará o se agravará. Ante una situación crítica y explosiva, Castro podría decidirse por luchar hasta el fin o intentar una «democratización débil» o un socialismo de mercado de corte chino. Lo primero le procuraría tiempo, pero no resolvería ni la crisis económica ni la cuestión fundamental de la legitimidad política y podría poner en movimiento un peligroso (para Castro) proceso de democratización. Lo segundo podría mejorar la economía considerablemente (siempre que el modelo chino funcionase en Cuba), pero desataría fuerzas que Castro detesta, como son pérdida de su poder por una mayor descentralización de las decisiones económicas, desigualdad y corrupción. Una combinación de ambos modelos podría ser fatal para la supervivencia de su régimen.

5. *Colapso violento del sistema*

Es tarea difícil pronosticar el futuro de Cuba con Castro y es casi imposible prever la caída de su régimen y sus secuelas. En esta última sección, por tanto, sólo se esbozan unas cuantas perspectivas posibles, particularmente en el ámbito político. Podría ser que se derrumbara el régimen socialista de Cuba tras la muerte de Castro, o en virtud de unas elecciones (analizado en la sección anterior), un golpe militar o una acción/insurrección de masas mientras sigue vivo. Una invasión estadounidense es muy improbable a menos que haya guerra civil en Cuba.

En 1993 Castro cumplió los sesenta y siete años; algunos líderes socialistas, como Tito o Mao, o fascistas, como Franco, vivieron hasta más de ochenta años y murieron de muerte natural. Aunque Castro ha envejecido visiblemente, tiene aún un aspecto saludable y podría vivir otro decenio o más. Ahora bien, la crisis cubana es tan virulenta que sin un cambio radical de política no es muy probable que el régimen dure tanto tiempo.

Si no se produce una transición pacífica a la democracia (viable aunque difícil con Castro, según Fabian, prácticamente imposible en opinión de Mesa-Lago), el socialismo sufrirá un final violento en Cuba. Además, dado que la legitimidad y el respaldo al régimen de Castro parecen ser más fuertes que en Europa oriental y más pronunciada la polarización de la población (incluida una comunidad exiliada mucho más hostil), existe una probabilidad de que se produzca una guerra civil, con grandes pérdidas humanas, políticas y económicas. También es probable que se produzca un éxodo masivo a Estados Unidos, semejante al flujo de re-

fugiados llegados a los países europeos a causa de la guerra civil en la antigua Yugoslavia. En caso de guerra civil, los exiliados cubanos y otros grupos presionarían a Estados Unidos para que interviniera. Si, en efecto, Estados Unidos invade la isla, habrá pérdidas considerables en vidas y propiedad, y la ocupación norteamericana sería costosa y haría retroceder a la isla un siglo de su historia. Todo ello haría extremadamente difícil el proceso de reconstrucción (véase González y Ronfeldt, 1992).

Con frecuencia se habla del golpe militar como la forma más posible de derrocar a Castro. Pero la purga de Ochoa y sus compañeros (así como el golpe de gracia de Castro, al obligar a oficiales militares de alta graduación a condenar públicamente a Ochoa) no ha dejado ninguna figura visible con fuerza suficiente para orquestar un golpe militar. Y, sin embargo, los militares cubanos han tenido un alto grado de autonomía operativa en el pasado y han entrado en contacto con ideas foráneas en muchas ocasiones, incluidos *perestroika* y *glasnost*. Es posible que existan líderes desconocidos capaces y dispuestos a entrar en acción, particularmente si la situación de Cuba llega a ser intolerable, si hay un peligro inminente de guerra civil (y potencial intervención de Estados Unidos), si se deteriora aún más la calidad de vida de los militares y o bien los conspiradores creen que pueden controlar la situación después del golpe o reciben garantías de que sus puestos quedarán protegidos en caso de la caída del régimen.

Unos cuantos expertos sobre Cuba mantienen que las privaciones socioeconómicas no bastan para provocar una sublevación popular, particularmente en una sociedad fuertemente controlada como la de Cuba. Una opinión diferente dice que con el deterioro económico y la desesperación podrían estallar manifestaciones masivas en Cuba, disparadas por hechos aparentemente inocuos, como un tumulto en una cola de alimentos agravado por un ataque de una brigada de acción rápida, una asamblea estudiantil, una procesión religiosa o una protesta pacífica de un grupo de disidentes. Es sintomático que, después de considerar seriamente la visita del Papa a Cuba, Castro decidiera en contra de la misma: la congregación de cientos de miles de cubanos descontentos para escuchar al Papa carismático podría haberse convertido fácilmente en una manifestación masiva contra el régimen. Otro indicio de la preocupación de Castro ante las grandes concentraciones de personas desafectas es el hecho de que no haya abierto un nuevo éxodo en masa, como los anteriores de Camariocas y Mariel. No obstante su utilidad como válvula de escape y recurso para ahorrar alimentos, este éxodo podría encender la chispa de la revuelta. La enmienda constitucional de 1992 —que autoriza a Castro a declarar el estado de emergencia y suspender la constitución en caso de acontecimientos capaces de afectar al orden interno y a la seguridad del Estado— es otro indicio más de que

el líder cubano está previendo la posibilidad de manifestaciones multitudinarias y preparándose para confrontarlas. Una cuestión crucial es lo que harían las fuerzas armadas cubanas si recibieran la orden de disparar contra sus conciudadanos. Con contadas excepciones, las fuerzas armadas de Europa oriental y la Unión Soviética se negaron a ejecutar esta clase de orden, pero el ejército chino lo hizo y Castro aplaudió su acción, aunque apostillando que carecía del equipamiento adecuado para controlar tumultos. Si las manifestaciones no pueden ser controladas con técnicas no mortales, y los soldados cubanos disparan en efecto y matan manifestantes, el aislamiento de Cuba se intensificaría y la inversión extranjera y el turismo se interrumpirían. En el caso de China, Estados Unidos y otros países intentaron algunas sanciones menores tras la masacre de Tiananmen, pero las relaciones han vuelto a la normalidad prácticamente. Ahora bien, Cuba no es China, ni política ni económicamente, y la reacción de Estados Unidos e internacional sería probablemente más fuerte y más duradera. Con unas condiciones políticas y económicas en constante declive, las probabilidades de un golpe militar y/o revuelta en Cuba aumentan.

El pronóstico del tipo de sistema político y económico que pudiera seguir a la caída del socialismo en Cuba es como «mirar en una bola de cristal». Si se produce la ideal, pero improbable, transición pacífica y el cambio sobreviene en virtud de unas elecciones libres, habría buenas perspectivas de democracia a la larga. La experiencia de Europa oriental/CEI demuestra, con la excepción de Yugoslavia, que las nuevas naciones han ido avanzando hasta el momento hacia sistemas más democráticos. Dado que no existen en Cuba divisiones étnicas o de nacionalidad, serían mayores las posibilidades de unidad y estabilidad. Por el contrario, un golpe militar y una guerra civil prolongada podrían desembocar en algún tipo de dictadura o régimen de hombre fuerte, ambos predominantes en la historia cubana. Ahora bien, las fuerzas interiores y exteriores harían presión a favor de la democracia, particularmente si América Latina conserva un sistema democrático. El papel de los exiliados cubanos sería importante a este efecto. Podría ser positivo si respaldan la democracia, aceptan que la nueva jefatura surja del interior, reducen sus exigencias de indemnización, controlan su ansia de revancha e influyen en Estados Unidos a favor de la ayuda económica a Cuba. De otro modo, el papel de los exiliados podría ser divisivo y perjudicial para las posibilidades de democratización y estabilidad en la isla.

Después de la caída socialista, Cuba evolucionaría sin duda hacia la economía de mercado, mucho más que con el modelo chino de socialismo de mercado. Es inútil especular aquí sobre cuál sería la mezcla exacta de mercado y Estado. Hay varios trabajos que han perfilado diversas estrategias para la transición (Cardoso y Helwege, 1992; CRI, 1993; Svejnár y Pérez-López, 1993).

Para resumir, la historia ya ha probado que el continuismo económico de Cuba no era viable a la larga y ha ido evolucionando, aunque lentamente. Pero, según Mesa-Lago, sólo ha habido cambios cosméticos en el plano político y, desde 1991, un giro hacia una mayor militarización y represión. Fabian no elimina esta visión, pero cree que hay posibilidades de democratización, bien dentro de un Estado monopartido (pero con bajo nivel de probabilidad), bien abriendo el sistema a ciertos partidos nacionalistas-reformistas o socialdemócratas (aún menos probable, al menos a corto plazo). Mesa-Lago rechaza casi totalmente la posibilidad de una auténtica democratización (particularmente la segunda versión de Fabian) bajo mandato de Castro. Ambos coincidimos en que el modelo chino de socialismo del mercado y represión política sería mucho más preferible para Castro que la alternativa democratizadora. Mesa-Lago sostiene, sin embargo, que la factibilidad y las posibilidades de que Castro acepte el modelo chino son pocas y que, de aplicarse, no duraría mucho tiempo, a menos que el poder de aquél sea significativamente reducido, algo con pocas probabilidades de ocurrir. Las reformas económicas introducidas en la segunda mitad de 1993, aunque positivas, son aisladas, no integradas, excesivamente reguladas y algunas han sido revertidas por Castro. Ciertamente estas reformas no constituyen un programa global, coherente y profundo de reforma de mercado, y probablemente no lograrán sacar a Cuba del marasmo en que se encuentra. Estamos de acuerdo en que, si no se produce una transición pacífica a la democracia, habrá un final violento del socialismo en Cuba y bastantes probabilidades de una guerra civil. Estas eventualidades no sólo ocasionarían graves sufrimientos a Cuba, sino que serían perjudiciales para las perspectivas de democratización en este país. El golpe militar se configura (al menos para Mesa-Lago) como el agente más probable de cambio, mientras que la posibilidad de una rebelión popular parece remota. En caso de una caída del socialismo en la isla, habría un movimiento hacia el mercado probablemente más fuerte que si se adoptase el modelo chino. Las perspectivas para la democracia variarán en relación a muchos factores que son imposibles de predecir. Tenemos la esperanza de que cualquiera que sea el nuevo sistema económico, éste sea diseñado teniendo en cuenta las experiencias positivas y negativas de ajuste-reestructuración en América Latina y Europa oriental. Sobre todo, dicho sistema tendría que procurar salvar, en la medida de lo posible, los logros sociales positivos de la Revolución y sentar las bases para una economía más eficiente y más productiva. La estabilidad y democracia futuras de la nueva Cuba dependerán, en gran medida, del éxito de una combinación óptima de crecimiento y equidad, una tarea difícil pero no imposible para el pueblo cubano, experimentado durante más de un siglo en la lucha por la libertad y por una vida mejor.

9. Cuadros estadísticos

CUA

RESUMEN DE LAS POLITICAS ECONÓM

	<i>Liquidación del capitalismo y erosión del mercado (1959-60)</i>	<i>Modelo ortodoxo (estalinista) de Planificación Central (1961-63)</i>	<i>Debate y ensayo de modelos socialistas alternativos (1964-66)</i>	
			<i>Prosoviético</i>	<i>Guevarista</i>
Propiedad	Mayoritariamente privada, pero creciente colectivización que cobra impulso a fines de 1960	Colectivización de los servicios sociales (1961), las cooperativas pasan a ser fincas del Estado (1962), nueva reducción de la agricultura privada (1963)	Sin cambios significativos, pero este grupo es prudente en cuanto a mayor colectivización	Sin cambio significativo, pero este grupo es favorable a mayor colectivización
Planificación	Indicativa (no aplicada), creación de JUCEPLAN y agencias centrales	Se introduce la planificación central (modelo estalinista); plan de 1962-65	Al fracasar la planificación central, surge un debate sobre las alternativas Aplicado a 1/3 de economía	Aplicado a 2/3 de economía
Grado de centralización	Bajo, pero en aumento	Alto, pero ineficaz	Apoya descentralización e instrumentos de mercado	Apoya centralización total
Asignación	Mercado	Física, comienza el racionamiento	Mixta	Física
Indicadores directrices	Beneficios	Producción bruta	Mixtos, incluidos beneficios	Producción bruta
Incentivos	Mayoritariamente individuales y materiales	Introducción de incentivos morales y colectivos	Predominantemente materiales e individuales	Preferencia por los morales y colectivos a largo plazo
Financiación	Mezcla de privada (en descenso) y presupuestaria en el sector público (en aumento) Énfasis en el consumo, desatención a la inversión	Presupuestaria, salvo en pequeño sector privado Restricción del consumo para incrementar la inversión	Autofinanciación, pero adulterada Mayor énfasis en eficiencia del capital	Presupuestaria Mayor énfasis en acumulación de capital
Estabilidad y precios	La demanda crece más deprisa que la oferta agotando las existencias; aumento de gastos del Estado sólo en parte contrapeado por mayores rentas fiscales; crece rápidamente el dinero en circulación. Precios mayoritariamente determinados por el mercado, pero cada vez más fijados por el Estado	Para evitar la espiral inflacionaria, son congelados los precios —mayoritariamente fijados por el Estado—, empiezan las subvenciones del Estado, se inicia el racionamiento, aparecen el mercado negro y las colas	Favorable al uso de precios, impuesto sobre el volumen de ventas e instrumentos selectos de mercado para lograr equilibrio No explícito Aumentan las subvenciones del Estado a bienes de consumo y empresas, siguen ampliándose los servicios gratuitos, los precios se distorsionan progresivamente, se incrementa el exceso de masa monetaria en circulación	

DRO 1

ICAS DE CUBA POR ETAPAS: 1959-93

<i>Adopción y radicalización del modelo guevarista (1966-70)</i>	<i>Modelo soviético (pre-Gorbachov) de reforma económica (1971-85)</i>	<i>Proceso de rectificación y aleja- miento del mercado (1986-90) y reforma económica (1991-93)</i>
Eliminación de parcelas privadas en las fincas del Estado (1967), colectivización de pequeñas empresas (1968), propiedad del Estado casi total	Reducción de fincas privadas y expansión de las cooperativas, pero hay mercados libres campesinos y pequeña expansión de servicios privados por trabajadores autónomos. Se autoriza la inversión extranjera	Aceleración en la eliminación de fincas privadas, abolición de los mercados campesinos y de prácticamente toda la actividad del sector privado. Pero desde 1991 se expande la inversión extranjera y en 1993 se autoriza el trabajo autónomo y la transformación de las fincas estatales en cooperativas.
Macroplan central a largo plazo sustituido por planes sectoriales a corto plazo y minixtraplanes	Reintroducción del plan central con algunos instrumentos de mercado (SDPE)	Cesan la descentralización y los instrumentos de mercado (salvo por pequeño sector exterior). Pero se expanden de nuevo en 1992-93
Fuerte, pero personalista más que en virtud de un plan central	Cierta descentralización respecto a los gerentes de empresa	Recentralización pero con menor papel del plan, prácticamente desaparecido en 1991.
Prácticamente física	Física y, parcialmente, por los mercados	Énfasis renovado en asignación física y en el racionamiento. Pero dolarización de la economía en 1993
Producción bruta Gradual sustitución de incentivos materiales por incentivos morales	Beneficios, producción bruta y otros Reintroducción de incentivos materiales, decadencia de estímulos morales	Producción bruta Énfasis renovado en incentivos morales y decadencia de los materiales. Pero expansión de éstos en 1993
Presupuestaria en toda la economía	Mayoritariamente presupuestaria pero con creciente autofinanciación, aunque adulterada	Estancamiento en expansión de la autofinanciación (salvo en el sector exterior)
Prioridad al incremento de la acumulación de capital, pero sin atender a su eficiencia	Énfasis renovado en la eficiencia del capital, al menos en teoría	Algunas prioridades en inversión para mejorar su eficiencia, pero se personalizan las decisiones sobre asignaciones
Interrupción de presupuesto del Estado, los precios se mantienen congelados y llegan a ser inútiles, aumento de las subvenciones del Estado, aumenta el exceso de dinero en circulación y el dinero tiene cada vez menos valor	Restablecimiento del presupuesto del Estado; intento de lograr equilibrio fiscal y reducir el exceso de dinero en circulación mediante subidas de los precios, reducción de gratificaciones y subvenciones públicas; el dinero recupera parte de su valor	Enormes déficits presupuestarios que van en aumento, el excedente monetario asciende de modo significativo otra vez y alcanza unas cifras récord en 1990-93, los precios son aún más distorsionados. Pero el mercado negro florece y determina precios de mercado

RESUMEN DE LAS POLÍTICAS ECONÓM

Estrategia de desarrollo	Industrialización por sustitución de importaciones y diversificación agrícola; se reducen las tierras cañeras; los pedidos de maquinaria y bienes de equipo se hacen a los países del ámbito socialista		Vuelta al azúcar como principal (1965-70) fija crecientes metas (1970); nuevos planes para quel, pesquero y otros.	
Sector exterior	Mayor control estatal sobre comercio exterior; pacto quinquenal soviético-cubano; a fines de 1960 la URSS concede créditos, adquiere parte de la cuota de azúcar de EE.UU. y suministra la mayoría del petróleo	Monopolio estatal del comercio exterior; giro comercial: de EE.UU. a la URSS y países socialistas; se amplía la ayuda soviética; embargo de EE.UU. y comienzo del aislamiento de Cuba en el hemisferio occidental	Mayor libertad de las empresas para comerciar con socios del exterior	Monopolio del Estado sobre el comercio exterior
			Acuerdo comercial soviético-cubano (1965-70); la URSS aumenta sus compras de azúcar a precios más elevados y (junto al COMECON) concede ayuda para modernizar la industria azucarera; la OEA impone embargo comercial	
Trabajo	Comienza la injerencia y control del Estado	Control pleno de los sindicatos y modificación de sus objetivos, prohibidas las huelgas	Endurecimiento de la disciplina de trabajo y mayor poder a los gerentes de empresa	
Empleo	Expansión del sector público, la migración rural reduce el paro estacional	Empleo estable en fincas del Estado, crecimiento del sector militar y de servicios (pero no el industrial), los excedentes laborales son mantenidos en nómina	Continuación de anterior política de empleo; transferencia de excedentes laborales urbanos a la agricultura	
Productividad	Descuidado	Mayor énfasis	A incrementarse mediante normas de trabajo y escalas salariales	A incrementarse sobre todo con mayor concienciación del trabajador
Normas laborales y escalas salariales	Los salarios comienzan a estar controlados por el Estado	Introducción de normas y escalas	El sistema queda prácticamente completo, pero con débil aplicación en la agricultura	
Distribución y servicios sociales	Las rentas de los más pobres se elevan mediante reformas agraria y urbana, reducción en precios de servicios públicos, expansión de servicios sociales gratuitos (sobre todo en el campo) y subida del salario y las pensiones mínimos	Los más ricos emigran o pierden su capital, eliminados los agricultores medios, recortadas las rentas de la «aristocracia laboral», el racionamiento es también un nivelador	Distribución según trabajo; prudencia sobre nueva expansión de servicios sociales gratuitos; defensa de diferencias salariales	La meta es la distribución según necesidad; igualitarismo. Hombre Nuevo, expansión de servicios sociales gratuitos y reducción de salario monetario

DRO 1

ICAS DE CUBA POR ETAPAS: 1959-93 (*Continuación*)

motor de desarrollo; el Plan Azúcar de producción (10 millones de toneladas expandir los sectores ganadero, del ní-

El azúcar mantiene su predominio, pero con más equilibrio entre sectores; la producción de azúcar aumenta por la modernización y mecanización (hasta 1993), otros planes para desarrollo de níquel, cítricos, turismo, biotecnología, producción alimentaria (1990), etcétera...

<p>Monopolio estatal sobre comercio exterior. La URSS mantiene ayuda y comercio pese a conflictos con Cuba, pero en 1967 reduce el suministro de petróleo; Castro toma represalias, pero apoya después la invasión soviética de Checoslovaquia; la disputa cubana con China causa reducción en el comercio</p>	<p>Cuba ingresa en el COMECON y firma numerosos acuerdos económicos y comerciales con la URSS que aumentan acusadamente la ayuda y el comercio, pero el déficit comercial se intensifica. Cuba se endeuda con Occidente y obtiene nuevos plazos, pero no nuevos préstamos (desde 1986) y descien-</p>	<p>Desaparecen el comercio con/y la ayuda de Europa oriental; bajan fuertemente la ayuda, subvenciones, comercio y suministro de petróleo de la URSS (la ayuda cesa en 1992); disuelto el COMECON en 1991; Cuba intenta redirigir su comercio hacia China y las economías de mercado</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Sindicatos gradualmente sustituidos por trabajadores de vanguardia</p>	<p>Renovación de los sindicatos, pero intento fallido de democratización</p>	<p>Endurecimiento de la disciplina de trabajo y refuerzo del poder de gerentes de empresa.</p>
<p>Se logra pleno empleo al precio de subempleo, intento de recortar la burocracia</p>	<p>La aparición del desempleo induce nueva política para exportar o jubilar excedentes, o emplearlos en el sector privado</p>	<p>El desempleo declarado aumenta, pese a los escasos despidos; se pagan prestaciones de desempleo a menos que se rehúse una oferta de trabajo.</p>
<p>La enorme movilización laboral y el cenit en el absentismo, perjudican a la productividad</p>	<p>Eliminación de trabajo voluntario; medidas para aumentar la productividad</p>	<p>Fuerte descenso de la productividad</p>
<p>La aplicación y conexión entre normas y escalas se debilita</p>	<p>Refuerzo de normas y escalas</p>	<p>Endurecimiento de normas laborales, reducción salarial menos a los grupos de renta más baja</p>

<p>Eliminación de los bonos de producción y pagos de horas extra, reducción de diferencias salariales, ampliación de servicios sociales gratuitos, racionamiento e igualitarismo</p>	<p>Se definen los diferenciales salariales; vuelven los bonos, horas extra y mercados campesinos, se crea un nuevo fondo de incentivo a la empresa, se reducen los servicios sociales gratuitos</p>	<p>Eliminación o reducción de bonos, horas extra, mercados campesinos, construcción privada, autónomos; enorme aumento del racionamiento y reducción de las cuotas de este. Pero desde 1993 aumento del sector informal, autoempleo y mercado negro expande la desigualdad</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CUADRO 2
INDICADORES MACROECONÓMICOS BÁSICOS: 1959-1993

Año	Tasas del PSG^a		Inversión interior bruta (% del PSG)	Tasas de inflación ^b	Equilibrio de presupuesto del Estado (% del PSG) ^c	Tipo de cambio oficial (pesos por dólar USA) ^d
	Absolutas	Per capita				
1959						1,00
1960						1,00
1961						1,00
1962			11,1			1,00
1963	-1,1	-3,7	12,4	10,2		1,00
1964	7,3	4,7	11,0	8,5		1,00
1965	4,0	1,5	12,4	-1,7		1,00
1966	-0,0	-2,0	13,6	1,7	n.d.	1,00
1967			14,3		n.d.	1,00
1968	1,6	-0,1	12,5		n.d.	1,00
1969	-1,3	-2,9	12,4		n.d.	1,00
1970			9,6		n.d.	1,00
1971	6,9	5,1	10,8		n.d.	1,00
1972	15,8	13,7	10,6		n.d.	0,92
1973	15,0	13,1	12,4		n.d.	0,84
1974	12,7	11,4	12,8		n.d.	0,83
1975	17,6	16,1	16,3		n.d.	0,83
1976	3,3	1,9	17,9	-0,5	n.d.	0,82
1977	5,8	4,6	18,7	-3,4	n.d.	0,79
1978	7,3	6,4	15,9	3,8	n.d.	0,75
1979	1,5	0,8	15,4	1,7	n.d.	0,72
1980	-0,5	0,1 ^e	15,6	4,2	n.d.	0,71

1981	16,0	15,4	15,3	8,5	0,0	0,78
1982	3,9	2,9	13,0	0,4	-0,7	0,83
1983	4,9	3,9	14,0	0,4	3,2	0,86
1984	7,2	6,2	15,3	-0,1	-0,3	0,92
1985	4,6	3,5	15,9	-1,0	-0,9	0,83
1986	1,2	0,1	16,3	-2,8	-0,7	1,00
1987	-3,8	-4,7	14,8	0,2	-2,4	1,00
1988	2,2	1,1	15,7	0,5	-4,4	1,00
1989	1,1	0,1	16,9	n.d.	-6,0	1,00
1990	-5 a -7	-6 a -8	n.d.	n.d.	-7,7	1,00
1991	-15 a -40	-16 a -41	n.d.	n.d.	n.d.	1,00
1992	-9 a -20	-10 a -21	n.d.	n.d.	n.d.	1,00
1993	-7 a -15	-8 a -16	n.d.	n.d.	n.d.	1,00

^a Hay cinco series que no pueden ser conectadas y sólo 1959-61 es PIB, las otras cuatro están en Producto Social Global (PSG): 1962-66 en precios constantes con método de estimación desconocido; 1967-69 sólo está disponible en precios corrientes, también con método desconocido; 1970-76 está en precios corrientes con método de «circulación completa», y 1975-89 está en precios constantes con método de «salida de empresa».

^b 1963-66 en precios de 1965; 1976-89 en precios de 1981.

^c El presupuesto no se publicó en 1966-77.

^d Fijado unilateralmente por el gobierno cubano.

^e Debido a una tasa negativa de crecimiento demográfico (el éxodo de más de 100 000 personas).

FUENTES: basado en JUCEPLAN, *Boletín* 1966 a 1971 y AEC 1972 a 1976; CEE, AEC 1972 a 1989 y CeC 1989, y BNC, *Informe* 1982 a 1989 y COER 1982 a 1989.

N. del T. n.d. = no disponible.

CUADRO 3
ESTIMACIONES DE LA INVERSIÓN: 1962-1989
(en millones de pesos a precios corrientes)

Año	PSG	Inversión bruta ^a	Inversión sobre PSG		Inversión sobre PSG	
			Anual	Quinquenal	Anual	Quinquenal
1962	5.169	572	11,1			
1963	5.634	696	12,4			
1964	6.564	772	11,0	11,7		
1965	6.771	842	12,4			
1966	6.823	930	13,6			
1967	7.212	1.032	14,3			
1968	7.331	918	12,5	12,5		
1969	7.236	896	12,4			
1970	8.356	800	9,6			
1971	8.936	964	10,8		15,1	
1972	10.349	1.094	10,6		15,0	
1973	11.910	1.475	12,4	12,6	17,4	17,7
1974	13.424	1.712	12,8		18,5	
1975	14.063	2.304	16,3		22,6	
1976	14.458	2.588	17,9		25,0	
1977	14.773	2.766	18,7		22,5	
1978	16.458	2.624	15,9		21,5	25,5
1979	16.987	2.606	15,4	16,7	21,3	
1980	17.606	2.739	15,6		19,3	
1981	22.173	3.386	15,3			
1982	23.113	2.996	13,0			
1983	24.337	3.409	14,0	14,7		
1984	26.053	3.989	15,3			
1985	26.957	4.289	15,9			
1986	26.516	4.333	16,3			
1987	25.576	3.807	14,8			
1988	26.334	4.097	15,7	15,9		
1989	26.653	4.511	16,9			

^a Sector público civil.

FUENTES: Inversión/PSG basado en JUCEPLAN, *Boletín*, 1966 a 1971, y AEC, 1972 a 1976; CEE, AEC, 1977 a 1989. Inversión/PIB tomado de Mesa-Lago y Pérez-López, 1985 c.

CUADRO 4

DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL PSG POR ACTIVIDADES ECONOMICAS: 1962-1989
(precios corrientes)

1. Serie antigua: precios de empresa. Excluye impuestos indirectos. ^a																	
	1962	1970	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989
PSG	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	n.d.
Agricultura	17,8	14,7	11,8	12,1	12,3	11,7	11,7	11,6	16,0	14,8	13,9	13,9	13,9	14,8	15,6	15,7	n.d.
Industria	48,2	47,9	37,6	37,7	37,3	36,5	36,0	35,6	34,9	34,8	34,8	35,9	36,1	37,1	36,1	35,9	n.d.
Construcción	7,2	5,2	8,9	9,1	9,8	9,5	9,2	8,9	8,1	7,8	8,2	8,9	8,8	8,8	8,1	8,6	n.d.
Transporte	5,6	9,4	7,1	7,2	7,4	7,1	7,2	8,1	7,3	7,0	6,9	6,7	6,6	6,6	6,8	6,8	n.d.
Comunicaciones	0,9	0,8	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	n.d.
Comercio	20,3	22,0	33,8	33,2	32,4	34,3	34,7	33,6	32,6	34,4	34,9	33,2	33,2	30,9	31,5	31,3	n.d.
Otros			0,2	0,1	0,2	0,2	0,5	0,4	0,3	0,4	0,5	0,5	0,5	0,9	0,9	0,7	n.d.
2. Serie nueva: precios de productor. Incluye impuestos indirectos. ^b																	
	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989		
PSG	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		
Agricultura	11,8	12,1	12,3	11,7	12,0	12,7	16,2	15,1	14,2	14,1	14,2	15,1	15,9	16,1	16,1		
Industria	47,8	48,5	47,3	45,9	44,6	44,0	42,9	43,7	43,5	45,0	45,8	47,2	46,7	46,7	46,6		
Construcción	8,9	9,1	9,9	9,5	9,2	8,9	8,1	7,8	8,2	8,9	8,8	8,9	8,2	8,6	9,0		
Transporte	7,2	7,2	7,4	7,1	7,2	8,1	7,3	7,0	6,9	6,7	6,7	6,7	7,0	6,9	6,9		
Comunicaciones	0,6	0,6	0,6	0,7	0,8	0,9	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	1,0	1,0	1,1	1,0		
Comercio	23,5	22,3	22,3	24,8	23,8	24,9	24,3	25,1	25,9	23,8	23,1	20,2	20,3	19,9	19,7		
Otros	0,2	0,2	0,2	0,3	0,4	0,5	0,4	0,5	0,5	0,6	0,5	0,9	0,9	0,7	0,7		
3. Serie nueva: distribución de impuestos entre los diversos sectores. ^c																	
	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989		
PSG	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		
Agricultura	12,0	12,2	12,4	11,9	11,9	12,8	16,2	15,0	14,1	14,1	14,1	15,0	15,8	15,8	15,9		
Industria	48,7	49,3	48,2	49,8	51,3	50,7	50,5	53,5	53,7	54,3	55,1	56,3	55,5	55,3	55,3		
Construcción	8,9	9,1	9,9	9,5	9,2	8,9	8,1	7,8	8,2	8,8	8,8	8,8	8,1	8,5	9,1		
Transporte	7,1	7,2	7,4	7,1	7,2	8,1	7,3	7,0	6,9	6,7	6,6	6,7	6,8	6,8	6,7		
Comunicaciones	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0		
Comercio	22,5	21,4	21,3	20,8	18,3	18,3	16,7	15,4	15,8	14,6	14,0	11,4	11,9	11,8	11,3		
Otros	0,2	0,2	0,2	0,3	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	0,5	0,9	0,9	0,7	0,7		

^a La distribución original se publicó en CEC 1986, AEC 1973, 1978 y 1979. Quedó suspendida hasta AEC 1985 que la reintrodujo con modificaciones menores.

^b Esta serie comenzó en 4LC 1980 en sustitución de la antigua. Se continúan en números sucesivos de AEC. En AEC 1985 fue revisada aumentando algo la parte agrícola y reduciendo la parte industrial proporcionalmente.

^c Esta serie empezó a publicarse en 4LC 1980 y, según anualmente incluyendo AEC 1985 cuando se dio por primera vez la explicación de la relación entre las tres series. Una explicación más elaborada fue publicada en AEC 1987.

FUENTES: basado en JUCEPLAN, CEE 1968, AEC 1973 a 1976 y CEE, AEC 1977 a 1989

CUADRO 5

PRODUCCIÓN FÍSICA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS: 1958-1989
(en miles de toneladas métricas si no se especifica otra cosa)

Productos	Producción real																		
	1958	1960	1965	1970	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989
Azúcar	5.862	5.943	6.156	8.353	6.314	6.155	6.485	7.350	7.992	6.665	7.359	8.210	7.109	8.207	8.004	7.255	7.117	7.415	8.121
Tabaco	51	45	32	42	52	43	41	33	8	55	45	30	45	45	45	46	39	39	42
Cítricos	111	73	160 ^c	93	170	186	226	282	285	444	471	530	631	600	747	786	886	981	825
Café	30	42	24	20	20	27	17	15	26	24	22	29	18	23	24	23	26	29	29
Huevos (MU)	315	430	920	1.509	1.851	1.829	1.846	1.924	2.018	2.326	2.360	2.247	2.492	2.557	2.524	2.518	2.495	2.460	2.523
Arroz	253	323	50	366	447	451	456	457	425	478	461	520	518	555	524	576	466	489	532
Habichuelas	23	37	11	2	3	2	3	4	4	10	8	12	13	12	11	14	12	15	14
Carne de cerdo	37	38	48	15	43	52	58	61	60	58	68	71	73	86	95	100	106	105	110
Leche	765	767	575	380	591	682	722	783	791	889	926	929	948	943	929	926	940	918	924
Pescado	22	31	40	106	143	193	184	211	155	186	164	195	198	200	220	244	214	232	192
Níquel	18	13	28	37	37	37	37	35	32	38	40	38	39	33	34	35	36	44	46
Sal	68	59	106	89	157	151	129	130	122	131	161	198	180	184	221	266	230	200	206
Electricidad	2.589	2.981	3.387	4.888	6.583	7.192	7.707	8.481	9.403	9.895	10.559	11.069	11.551	12.292	12.199	13.167	13.593	14.542	15.240
(Mkwh)																			
Acero	63	36	140	298	250	330	324	324	313	292	317	290	352	325	401	412	402	320	314
Cemento	736	813	801	742	2.083	2.501	2.656	2.711	2.613	2.840	3.292	3.163	3.231	3.347	3.182	3.305	3.535	3.566	3.759
Abonos	438 ^b	860 ^d	577	749	798	863	946	873	1.059	1.067	1.026	1.082	1.036	1.160	1.045	996	840	898	840
Textiles (m ²)	116 ^a	96	78	144	139	152	156	151	159	172	153	170	172	205	221	258	260	220	220
Zapatos (M)	20	14	16	16	23	21	15	18	16	15	19	16	17	15	16	16	17	16	13
Jabón	34 ^b	37	33	41	43	35	38	34	38	41	32	42	45	39	44	36	32	37	37
Neveras (MsU)	0	0	12	6	50	44	46	45	55	25	41	18	16	24	26	17	5	7	9
Radios (MsU)	0	0	82	19	113	92	120	121	143	200	256	239	273	253	236	237	227	153	173
Cigarrillos puros																			
(MU)	628	591 ^a	657	364	383	359	352	354	295	166	230	358	333	302	366	340	279	270	308

^a, 1959; ^b, 1963; ^c, 1966; ^d, 1969; M—millones, Ms—miles, U—unidades, m²—metros cuadrados, kwh—kilovatios/hora.
FUENTES: basado en JUCEPLAN, *Boletín* 1966 a 1971 y AEC 1972 a 1976; CEE, AEC 1977 a 1989.

CUADRO 6

DEPENDENCIA, PRODUCCIÓN INDUSTRIAL Y RENDIMIENTOS DEL AZÚCAR: 1952-1993

Año	Dependencia del azúcar			Producción de azúcar (miles de toneladas)		Rendimientos industriales ^b		Días efectivos de molienda
	Produc- ción ^a /PSG	Exportacio- nes/PSG	Exportacio- nes/PIB	Quinquenal		Anual	Quinquenal	
				Anual	Quinquenal			
1952				7.298,0		12,26		120
1958			22,2	5.862,6		12,82		84
1959				6.038,6}		12,57}		89
1960				5.942,9}	5.991	12,51}	12,5	88
1961				6.875,5}		12,66}		104
1962	11,4	8,4		4.882,1}		13,31}		76
1963	9,8	8,4		3.882,5}	5.254	12,36}	12,5	68
1964	10,4	9,3		4.474,5}		12,03}		82
1965	13,8	8,8		6.156,2}		12,15}		105
1966	10,1	7,4		4.537,4}		12,32}		76
1967	12,9	8,3		6.236,1}		12,26}		101
1968	11,9	6,8		5.164,5}	5.787	12,19}	11,7	87
1969	12,8	7,0		4.459,4}		11,02}		86
1970	15,1	9,7		8.537,6}		10,71}		143
1971	12,5	7,4	10,2	5.924,8}		11,49}		101
1972	9,4	5,5	7,8	4.324,8}		9,93}		91
1973	8,9	7,3	10,2	5.252,7}	5.548	11,07}	11,4	92
1974	8,2	14,4	21,1	5.924,9}		11,95}		95
1975	8,5	19,1	26,1	6.314,4}		12,44}		99

CUADRO 6

DEPENDENCIA, PRODUCCIÓN INDUSTRIAL Y RENDIMIENTOS DEL AZÚCAR: 1952-1993 (Continuación)

1976	8,3	16,6	22,6	6.155,7	11,84	99
1977	9,0	16,6	22,5	6.484,9	11,55	104
1978	9,0	18,3	24,4	7.350,5	10,96	119
1979	9,0	17,8	24,6	7.991,8	10,94	128
1980	8,2	18,9	23,3	6.665,2	10,82	109
1981	11,5	15,0		7.358,9	11,08	114
1982	11,0	16,5		8.210,1	11,17	124
1983	9,9	16,8		7.108,6	10,35	113
1984	10,4	15,8		8.206,6	10,47	126
1985	10,2	16,6		8.003,9	11,99	103
1986	10,1	15,5		7.254,6	10,62	104
1987	10,1	15,7		7.116,8	10,64	99
1988	10,5	15,7		7.415,4	10,85	100
1989	10,2	14,9		8.121,0	10,83	109
1990	n.d.	n.d.		8.004,0	11,40	n.d.
1991	n.d.	n.d.		7.623,0	11,30	n.d.
1992	n.d.	n.d.		7.030,0	n.d.	n.d.
1993	n.d.	n.d.		4.280,0	n.d.	n.d.

^a Valor de la producción en los sectores industrial y agrícola.

^b Proporción de azúcar obtenida en relación al peso de la caña cortada. Así, en 1952 se obtuvieron 12,26 toneladas de azúcar de 100 toneladas de caña de azúcar a 96 grados de polarización.

FUENTES: la dependencia procede de Mesa-Lago y Pérez-López, 1985c actualizado con CEE, AEC 1982 a 1989. El resto procede de Mesa-Lago, 1981 actualizado con CEE, AEC 1979 a 1989.

CUADRO 7

PRODUCCIÓN GANADERA, AVÍCOLA Y PESQUERA: 1958-1989
(reses y aves de corral en miles de cabezas, pesca en miles de toneladas)

Año	Reses		Cerdos ^a	Aves ^a	Pesca	
	Total	Per capita			Total	Por 100 habitantes
1958	5.700	0,84	1.780		22,0	0,32
1961	5.776	0,80	827	15.380	30,4	0,43
1962	5.975	0,82	1.358	18.600	35,4	0,48
1963	6.378	0,85	1.539	19.500	35,6	0,47
1964	6.611	0,86	1.746	21.900	36,4	0,47
1965	6.700	0,85	1.810	21.400	40,4	0,51
1966	6.774	0,84	298	11.016	43,5	0,54
1967	6.800 ^b	0,83	343	12.468	63,4	0,77
1968			276	12.436	65,2	0,78
1969			318	13.526	79,8	0,94
1970	5.738 ^c	0,67	280	13.581	106,4	1,23
1971			320	13.346	126,1	1,44
1972			377	16.435	139,7	1,56
1973	5.486	0,60	382	15.873	150,2	1,65
1974			489	18.328	165,2	1,79
1975	5.622	0,60	599	18.130	143,5	1,53
1976			673	19.946	194,0	2,04
1977			662	19.686	184,4	1,92
1978	5.274	0,54	698	22.376	211,1	2,18
1979			715	24.866	153,8	1,57
1980	5.057	0,52	765	24.616	186,4	1,92
1981	5.096	0,52	840	23.989	164,5	1,69
1982	5.108	0,52	853	23.052	195,2	1,98
1983	5.099	0,51	911	25.744	198,4	1,99
1984	5.115	0,51	1.009	26.734	199,6	1,98
1985	5.020	0,49	1.038	25.859	219,9	2,16
1986	5.007	0,49	1.100	25.678	244,6	2,39
1987	4.984	0,48	1.093	25.959	214,4	2,07
1988	4.926	0,47	1.168	27.308	231,6	2,21
1989	4.920	0,46	1.292	27.904	192,0	1,82

^a 1961-65 todos; a partir de 1966 sólo sector estatal y privado conectado con el Estado.

^b Otra cifra, más elevada, es 7.112.000.

^c La meta era 8 millones de cabezas.

FUENTES: Mesa-Lago, 1981 actualizado con CEE, AEC 1979 a 1989.

CUADRO 8

PRODUCCIÓN DE NÍQUEL PLANIFICADA Y REAL: 1981-1990
(en miles de toneladas)

Año	Capacidad instalada planificada					Producción real		
	Remodelación		Construcción de nuevas plantas			Total		Total
	Nicaró ^a (René Ramos Latour)	Mod ^a (Pedro Soto Alba)	Punta Gorda ^b (Che Guevara)	Camariocas-Mod ^b (COMECON I)		Nicaró + Moa	Punta Gorda	
1981	20,0	19	0	0		31,0	0	39
1982	22,5	19	0	0		41,5	0	36
1983	22,5	24	0	0		46,5	0	39
1984	22,5	24	23	0		69,5	0	33
1985	22,5	24	23	0		69,5	0	34
1986	22,5	24	30	30		106,5	0	35
1987	22,5	24	30	30		106,5	1	36
1988	22,5	24	30	30		106,5	8	44
1989	22,5	24	30	30		106,5	10	46
1990	22,5	24	30	30		106,5	6	39 ^d

^a Modernización y expansión de plantas existentes (Nicaró, 1943; Moa, 1958); acordadas con la URSS en 1973 por un coste de 160 millones de rublos. La extracción del mineral se realiza mediante lixiviación con agua más ácido: carbonato de amonio en Nicaró y ácido sulfúrico en Moa. En 1983 la producción conjunta prevista de ambas plantas era de 46.500 toneladas, pero fue de 39.000 y después descendió a 35.000-36.000 debido a problemas técnicos.

^b La construcción de la nueva planta se inició en 1976 con una ayuda de 600 millones de rublos de la URSS, Checoslovaquia, Bulgaria y Polonia. En ella se utiliza la misma tecnología que Nicaró. La etapa primera (11.000 toneladas) iba a empezar a funcionar en 1984 y la etapa segunda (12.000) en 1985; los planes se aplazaron con una nueva meta de 15.000 para 1989, pero se produjeron 10.000 como máximo. Dos tercios de la producción estaban destinados a la URSS. Esta planta fue clausurada en agosto de 1990 debido a la escasez de petróleo y a problemas técnicos, pero fue reabierta en 1991 ó 1992.

^c La construcción de la nueva planta se inició en 1984 con una ayuda de 400 millones de rublos de la URSS, Checoslovaquia, la RDA, Bulgaria, Rumania y Hungría. En ella se utiliza la misma tecnología que en Nicaró. Aproximadamente, la mitad de la producción estaba destinada a la URSS y un cuarto a otros socios del COMECON. Su entrada en funcionamiento estaba programada para 1990 y después fue aplazada a 1994 ó 1995.

^d Estimación; la producción de 1991 fue de 33.349 toneladas y en 1992 estimada en 35.000.

CUADRO 9

COMPARACIÓN ENTRE METAS PLANIFICADAS Y RESULTADOS REALES EN LOS PLANES QUINQUENALES:
1980, 1985 y 1990

	1980				1985				1990			
	P	R	%		P	R	%		P	R ^a	%	
<i>Macroindicadores (% anual x)</i>												
PSG	6,0	3,5	-42		5,0	7,3	46		5,0	0,8	-84	
Inversión (BPA)	15,0	13,3	-11		15,5	18,1	17		23,1	16,8	-27	
Productividad laboral	7,0	4,2	-40		3,0	5,1	70		3,5	-2,5	-171	
Exportaciones	n.d.	6,5	n.d.		7,0	8,7	24		5,0	-2,4	-148	
Importaciones	n.d.	8,5	n.d.		6,5	11,7	80		1,5	0,3	-80	
<i>Producción (MsTM)</i>												
Azúcar	8-8.700	6.665	-20		9,5-10.000	8.004	-18		9.560	8.121	-15	
Tabaco	60	8	-87		50	45	-10		70	42	-40	
Cítricos	550	444	-19		1.000	747	-25		1.400	825	-41	
Café	n.d.	24	n.d.		29	24	-17		36	29	-19	
Huevos (MU)	2.000	2.326	16		2.300	2.524	10		2.610	2.523	-3	
Arroz	600	478	-20		635	524	-17		620	532	-14	
Habichuelas	n.d.	10	n.d.		35	11	-68		n.d.	14	n.d.	
Carne de cerdo	80	58	-28		80	95	18		120	110	-8	
Leche	1.000	889	-11		1.005	929	-8		1.250	924	-24	
Pescado	350	186	-47		320	220	-31		248	192	-22	
Petróleo	n.d.	274	n.d.		n.d.	868	n.d.		2.000	718	-64	
Níquel	100	38	-62		70	34	-50		106	46	-56	
Sal	n.d.	131	n.d.		600	221	-63		n.d.	206	n.d.	
Electricidad (Mkwh)	9.000	9.895	10		15.840	12.199	-23		15.660	15.240	-3	
Acero	440	292	-34		1.900	401	-78		600	314	-48	

CUADRO 9

COMPARACIÓN ENTRE METAS PLANIFICADAS Y RESULTADOS REALES EN LOS PLANES QUINQUENALES:
1980, 1985 y 1990 (Continuación)

Cemento	5,000	2,840	-43	4,900	3,182	-35	n.d.	3,759	n.d.
Abonos	n.d.	1,059	n.d.	1,300	1,160	-11	1,530	898	-41
Textiles (Mm ²)	270	159	-41	325	205	-37	335	220	-34
Zapatos (M)	35	15	-57	29	16	-45	25	13	-48
Cerveza (MsH)	n.d.	1,002	n.d.	3,675	2,736	-25	4,150	3,333	-20
Neveras (MsU)	100	25	-75	n.d.	26	n.d.	n.d.	9	n.d.
Radios (MsU)	300	200	-33	500	236	-53	n.d.	173	n.d.
<i>Indicadores sociales</i>									
Mortalidad infantil	24	19,6	-18	n.d.	16,5	n.d.	15	11,1	-26
Matriculados en enseñanza superior	n.d.	20	n.d.	39	21	-46	35	23 ^b	-34
Vivienda (MsU) ^d	150	82	-45	200	110	-45	185	100 ^c	-46

P=planificado; R=real; %=porcentaje de cumplimiento; BPA=miles de millones de pesos acumulativos; M=millones; Ms=miles; TM=toneladas métricas; U=unidades; kwh=kilovatios/hora; m²=metros cuadrados; H=hectolitros.

^a 1989.

^b 1987.

^c Estimación.

^d Sólo casas construidas por el Estado para la población civil.

FUENTES: metas planificadas proceden de Mesa-Lago, 1982, y Pérez-López, 1986; resultados reales a partir de los cuadros 3, 7, 11, 14, 16, 21, 27, 31 y 35, y CEE, AEC, 1989.

CUADRO 10

TURISMO INTERNACIONAL: 1957-1995

Año	Visitantes extranjeros (miles)		Habitaciones de <u>polos</u> turísticos ^c	Rentas del turismo (millones de pesos) ^d		Rentas como porcentaje del PSG	
	Todos ^a	Turistas ^b		Brutas	Netas	Bruto	Neto
1957	272			62,1			
1960	86						
1971	2						
1975	40	34					
1979	191	83		87,6		0,11	
1980	130	101		39,6		0,10	
1981	106	94	14.303	43,6		0,80	
1985	172	168	16.003	100,4	60,2	0,37	0,22
1988	247	242	16.946	152,9	91,7	0,58	0,34
1989	276	270	17.600	168,0	100,8	0,62	0,37
1990	n.d.	341	n.d.	250,4	150,0	0,98	0,59
1991	n.d.	366	n.d.	400,0 ^e	240,0	n.d.	n.d.
1992 ^e	n.d.	467	n.d.	500,0	300,0	n.d.	n.d.
1993 ^e	n.d.	510	20.000	567,0	340,0	n.d.	n.d.
1995 (metas) ^f	n.d.	1.500-2.000	50.000	1.000-1.200	n.d.	n.d.	n.d.

^a Otra serie («todos los visitantes») disponible para 1982-86 da cifras ligeramente más altas. Todos los visitantes son los que están en tránsito o pasando sólo uno o dos días, mientras que los turistas son los que permanecen más tiempo.

^b Otra serie («turistas INTUR») disponible para 1974-86 da cifras inferiores. Hay cifras dispersas más elevadas que las de la serie del cuadro, por ejemplo, 309.200 en 1988.

^c «Lugares con máxima demanda del turismo extranjero»; otra serie que da cifras dos veces más altas podría incluir todas las habitaciones.

^d La serie de 1979-81 podría ser de rentas netas. Otras series dan cifras más altas y más bajas que las del cuadro.

^e Estimación.

^f Las metas para 1995 fueron reducidas en 1993 a un millón de turistas, 30.000 habitaciones y 900 millones de pesos en renta bruta.

FUENTES: Mesa-Lago, 1993b, 1994.

CUADRO 11
BALANZA COMERCIAL DE MERCANCÍAS Y DEPENDENCIA: 1959-1993

Años	Total del comercio de mercancías (en millones de pesos cubanos)				Dependencia comercial (% del PSG)		
	Exportaciones (f.o.b.)	Importaciones (c.i.f.)	Total de transacciones	Balanza comercial	Balanza comercial (millones \$ USA) ^a	Total de transacciones	Exportaciones
1959	636,0	674,8	1.310,8	-38,8	-38,8	n.d.	n.d.
1960	608,3	579,9	1.188,2	28,4	28,4	n.d.	n.d.
1961	626,4	638,7	1.265,1	-12,3	-12,3	n.d.	n.d.
1962	522,3	579,3	1.281,6	-237,0	-237,0	24,8	10,1
1963	545,1	867,3	1.412,4	-322,2	-322,2	25,1	9,7
1964	714,3	1.018,8	1.733,1	-304,5	-304,5	26,4	10,9
1965	690,6	866,2	1.556,8	-175,6	-175,6	23,0	10,2
1966	597,8	925,5	1.523,3	-327,7	-327,7	22,3	8,8
1967	705,0	999,1	1.704,1	-294,1	-294,1	23,6	9,8
1968	651,4	1.102,3	1.753,7	-450,9	-450,9	23,7	8,9
1969	666,7	1.221,7	1.188,4	-555,0	-555,0	26,1	9,2
1970	1.049,5	1.311,0	2.360,5	-261,5	-261,5	27,6	12,3
1971	861,2	1.386,6	2.248,7	-526,3	-571,4	25,2	9,6
1972	770,9	1.189,8	1.960,7	-418,9	-454,8	18,9	7,4
1973	1.153,0	1.462,4	2.615,6	-309,6	-379,9	22,0	9,7
1974	2.236,5	2.225,9	4.462,4	10,6	12,8	33,2	16,7
1975	2.952,2	3.113,1	6.065,3	-160,9	-194,1	38,3-43,6	18,7-21,2
1976	2.692,3	3.179,7	5.872,0	-487,4	-595,4	37,0-41,7	17,0-19,1
1977	2.918,4	3.461,6	6.380,0	-543,1	-684,1	43,5	19,9
1978	3.440,1	3.573,8	7.013,9	-133,7	-177,8	43,0	21,1

1979	3.499,2	3.687,5	7.186,7	-188,3	-259,7	42,3	20,6
1980	3.966,7	4.627,0	8.593,7	-660,3	-931,3	48,8	22,5
1981	4.223,8	5.114,0	9.337,8	-890,2	-1.139,8	42,1	19,0
1982	4.933,2	5.530,6	10.463,8	-597,4	-717,2	45,3	21,3
1983	5.534,9	6.222,1	11.757,0	-687,2	-797,2	48,3	22,7
1984	5.476,5	7.227,5	12.704,0	-1.715,0	-1.949,8	48,8	21,0
1985	5.991,5	8.035,0	14.026,5	-2.043,5	-2.227,4	52,0	22,2
1986	5.321,5	7.596,1	12.917,6	-2.274,6	-2.715,2	48,7	20,1
1987	5.401,0	7.611,5	13.012,5	-2.210,5	-2.210,5	50,9	21,1
1988	5.518,3	7.579,4	13.097,7	-2.061,1	-2.061,1	49,9	21,0
1989	5.392,0	8.124,2	13.516,2	-2.732,2	-2.732,2	50,7	20,2
1990	4.910,0	6.745,0	11.655,0	-1.835,0	-1.835,0	n.d.	n.d.
1991	3.549,0	3.690,0	7.239,0	-141,0	-141,0	n.d.	n.d.
1992	2.097,0	2.236,0	4.333,0	-139,0	-139,0	n.d.	n.d.
1993	1.675,0	1.719,0	3.394,0	-44,0	-44,0	n.d.	n.d.

Déficit comercial acumulativo (1959-89): -21.576,6 y -24.009,4

^a Basado en el tipo oficial de cambio de Cuba fijado unilateralmente desde 1971.

FUENTES: basado en CEE, AEC, 1989; CIA, 1992, y Mesa-Lago, 1994.

CUADRO 12
CONCENTRACIÓN COMERCIAL CON PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES (URSS): 1959-1992
(en millones de pesos cubanos)

Año	Comercio soviético-cubano			% del total de transacciones cubanas con		Balanza comercial soviético-cubana			% del déficit comercial soviético sobre total del déficit co-mercial de Cuba
	Exportaciones (f.o.b.)	Importaciones (c.i.f.)	Total de transacciones	transacciones		Millones pesos	Millones dólares USA	Sin subsidios comerciales soviéticos	
				URSS	COMECON				
1959	12,9	0,1	12,9	1,0	1,0	12,9	12,9	12,9 ^c	0 ^a
1960	103,5	80,2	183,7	15,5	17,1	23,3	23,3	23,3 ^c	0 ^b
1961	303,7	262,6	566,3	44,8	57,0	41,1	41,1	37,3 ^c	0 ^a
1962	221,9	411,4	633,3	49,4	67,0	-189,5	-189,5	-191,9 ^c	80,0
1963	163,9	460,9	624,8	44,2	63,3	-297,0	-297,0	-294,8 ^c	92,2
1964	275,0	410,0	685,0	39,5	51,8	-135,0	-135,0	-135,3 ^c	44,3
1965	322,5	428,4	750,9	48,2	61,5	-105,9	-105,9	-115,2 ^c	60,3
1966	274,0	521,2	795,2	52,2	67,3	-247,2	-247,2	-255,0 ^c	75,4
1967	366,1	582,0	948,1	55,6	68,4	-215,9	-215,9	-432,9	73,4
1968	289,6	671,8	961,4	54,8	68,3	-382,2	-382,2	-538,2	84,8
1969	233,0	657,9	890,9	47,2	62,0	-424,9	-424,9	-491,9	76,6
1970	529,0	690,6	1.219,6	51,7	64,0	-161,6	-161,6	-371,6	61,8
1971	303,7	730,8	1.034,5	46,0	59,5	-427,1	-439,9	-538,9	81,2
1972	224,1	714,4	938,5	47,9	60,2	-479,3	-523,4	-536,4	117,0
1973	476,7	811,0	1.287,7	49,2	61,7	-334,3	-410,2	-605,2	108,0
1974	811,2	1.024,9	1.836,1	41,1	52,9	-213,7	-275,8	-341,8	213,7 ^b
1975	1.661,9	1.250,2	2.912,1	48,0	56,0	411,7	496,6	-273,4	0 ^a
1976	1.638,3	1.490,2	3.128,5	53,3	63,5	148,1	180,6	-1.246,4	0 ^a

1977	2.065,8	1.858,3	3.924,1	61,5	71,6	207,5	261,3	-1.719,7	0 ^a
1978	2.495,5	2.327,7	4.823,2	68,8	79,2	167,8	223,1	-2.457,9	0 ^a
1979	2.370,0	2.513,4	4.883,4	68,0	79,1	-143,4	-197,8	-2.898,8	76,2
1980	2.253,5	2.903,7	5.157,2	60,0	71,7	-650,2	-916,8	-3.354,6	98,5
1981	2.357,5	3.234,0	5.591,5	59,9	74,0	-876,5	-1.121,9	-3.839,9	98,5
1982	3.289,6	3.744,4	7.034,4	67,2	81,5	-454,8	-545,8	-4.327,8	76,1
1983	3.881,8	4.245,3	8.127,1	69,1	83,1	-363,5	-421,7	-4.412,7	52,9
1984	3.952,2	4.782,4	8.734,6	68,8	82,6	-830,2	-935,1	-5.156,1	48,0
1985	4.481,6	5.418,9	9.900,5	70,5	83,0	-937,3	-1.021,6	n.d.	45,9
1986	3.935,8	5.337,6	9.273,7	71,7	84,4	-1.401,8	-1.696,2	n.d.	61,6
1987	3.867,5	5.495,5	9.363,0	72,0	86,6	-1.628,0	-1.628,0	n.d.	73,6
1988	3.683,1	5.364,4	9.407,5	69,1	83,7	-1.681,3	-1.681,3	n.d.	81,6
1989	3.231,2	5.522,4	8.753,6	64,7	78,9	-2.291,2	-2.291,2	n.d.	83,8
1990	3.576,0	4.894,0	8.470,0	72,7	n.d.	-1.318,0	-1.318,0	n.d.	71,8
1991	1.740,0	2.762,0	4.502,0	61,9	n.d.	-1.022,0	-1.022,0	n.d.	973,3
1992	300-350	350-400	650-750	15-17	n.d.	-50,0	-50,0	n.d.	39,7

^a Había déficit en la balanza comercial total.^b Había excedente en la balanza total.^c Sólo subvenciones al azúcar.FUENTE: basado en JUCEPLAN. *Boletín* 1970 y AEC 1972-76; AEC 1977 a 1989; Mesa-Lago y Gil, 1989, y Mesa-Lago, 1994.

CUADRO 13
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE EXPORTACIONES POR PRINCIPALES PRODUCTOS: 1959-1991

Año	Azúcar	Minerales	Tabaco	Otros		Azúcar sobre exportaciones excluyendo combustibles
				«Reexportaciones de petróleo»	Otros aparte del petróleo ^a	
Total						
1959	75	3	9			13
1960	78	4	10			8
1961	85	6	6			3
1962	83	7	5			5
1963	87	6	4			3
1964	88	5	4			3
1965	86	6	5			3
1966	85	7	4			4
1967	86	8	4			2
1968	77	12	6			5
1969	76	13	6			5
1970	77	17	3			3
1971	76	16	4			4
1972	74	15	5			6
1973	75	14	5			6
1974	87	6	3			4
1975	89,9	5	2	0,1	2,9	90,1
1976	87,0	6	2	n.d.	n.d.	n.d.
1977	83,6	7	2	2,3	5,7	85,5
1978	86,7	5	2	1,3	0,7	87,8
1979	86,1	4	2	1,6	6,4	87,5
1980	83,7	4,9	0,9	4,2	6,3	87,6
1981	79,1	7,9	1,3	4,2	7,5	82,7
1982	77,2	6,1	2,1	5,5	9,1	81,7
1983	74,0	5,4	1,9	9,3	9,4	81,5
1984	75,2	5,5	1,0	10,0	8,3	83,4
1985	74,5	5,1	1,5	9,5	9,4	82,3
1986	77,0	5,9	1,5	4,6	11,0	80,7
1987	74,3	6,1	1,7	6,5	11,4	79,4
1988	74,6	8,2	1,8	3,4	12,0	77,2
1989	73,2	9,2	1,6	3,9	12,1	76,2
1990	75,2	8,6	1,9	1,0	13,3	74,4
1991	75,2	7,6	2,8	0,7	13,7	74,7

^a Principalmente cítricos y productos de la pesca, así como productos farmacéuticos/médicos desde 1989.

FUENTES: basado en JUCEPLAN, *Boletín* 1966 a 1971 y AEC, 1972 a 1976; CEE, AEC, 1977 a 1989; CEPAL, *Estudio*, 1989, y Mesa-Lago, 1994.

CUADRO 14
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS IMPORTACIONES POR PRINCIPALES PRODUCTOS: 1958-1992

Año	Alimentos y grasas	Materias primas	Combustibles y minerales	Productos químicos	Manufacturas	Maquinaria y transporte	Total
1958	21	7	11	6	24	31	100
1970	22	6	9	9	18	36	100
1975	29	6	10	8	25	31	100
1977	18	4	15	5	16	42	100
1978	18	4	19	6	17	36	100
1979	17	4	21	6	18	31	100
1980	17	4	20	6	17	36	100
1981	16	4	23	6	17	34	100
1982	16	3	27	6	17	31	100
1983	13	3	30	7	16	31	100
1984	12	3	31	6	17	31	100
1985	12	4	33	5	16	30	100
1986	10	4	33	6	16	31	100
1987	11	4	35	6	14	31	100
1988	11	4	34	6	14	32	100
1989	13	4	32	6	14	31	100
1990	13	4	29	6	14	34	100
1991	20	4	34	7	13	22	100
1992	26	3	39	7	16	9	100

FUENTES: basado en CEE, AEC, 1982 a 1989.

CUADRO 15
DEPENDENCIA DE IMPORTACIONES DE PETRÓLEO CRUDO EN CUBA: 1963-1991
(en miles de toneladas métricas)

Año	Producción nacional	Importaciones	Suministro total	Petróleo crudo				Suministro soviético de petróleo crudo y productos derivados del petróleo		
				Distribución porcentual de suministros			Importado de otros países ^c			
				Consumo	Diferencia ^a	«Reexportaciones» ^b			Producción nacional	Importado de URSS
1963	31	3.709	3.740	n.d.	n.d.	0	0.8	n.d.	n.d.	4.078 ^c
1964	37	3.469	3.506	n.d.	n.d.	0	1.0	n.d.	n.d.	4.562 ^c
1965	57	3.480	3.537	n.d.	n.d.	0	1.6	n.d.	n.d.	4.588 ^c
1966	69	3.826	3.895	n.d.	n.d.	0	1.8	n.d.	n.d.	5.048 ^c
1967	116	3.713	3.829	n.d.	n.d.	0	3.0	96.3	0.7	5.097 ^c
1968	197	3.851	4.048	n.d.	n.d.	0	4.9	93.8	1.3	5.225
1969	206	4.156	4.362	n.d.	n.d.	0	4.7	92.3	3.0	5.681
1970	159	4.261	4.420	4.308	112	0	3.6	94.1	2.3	6.016
1971	120	4.757	4.877	4.350	527	0	2.5	95.6	1.9	6.817
1972	112	4.749	4.861	4.746	115	0	2.1	95.5	2.4	6.671
1973	138	5.243	5.381	5.345	36	0	3.6	96.7	0.7	7.154
1974	168	5.875	6.043	5.561	482	0	2.8	94.9	2.3	7.766
1975	226	5.797	6.023	5.976	47	0	3.7	94.7	1.6	7.748
1976	235	5.783	6.018	6.129	-111	0	3.9	95.5	0.6	8.231
1977	256	6.201	6.457	6.324	133	162	4.0	95.6	0.4	9.236
1978	288	6.359	6.647	6.359	288	85	4.3	95.2	0.5	9.623
1979	288	6.131	6.419	6.376	43	0	4.5	95.2	0.3	9.875
1980	274	6.025	6.298	6.344	-46	0	4.3	93.7	2.0	10.564
1981	259	6.355	6.608	6.473	135	0	3.8	95.6	0.6	11.089
1982	541	6.247	6.788	6.710	78	0	8.0	91.2	0.8	11.668
1983	742	6.861	7.603	6.784	819	781	9.8	89.3	0.9	12.410
1984	770	7.235	8.005	6.781	1.224	1.298	9.6	100.0	0.0	12.485
1985	868	8.046	8.914	6.847	2.067	1.891	9.7	98.2	1.8	13.093
1986	938	7.366	8.034	6.925	1.109	1.390	11.6	100.0	0.0	13.069
1987	894	7.894	8.788	7.290	1.498	1.220	10.2	99.4	0.6	13.467
1988	717	n.d.	n.d.	7.991	n.d.	n.d.	n.d.	100.0	0.0	13.248
1989	718	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	13.300
1990	671	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	10.150
1991	650 ^d	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	8.600 ^e

^a Diferencia entre total suministrado y consumo.

^b Entre otras exportaciones figura el *fuel oil*, que podría haberse fabricado a partir del crudo importado.

^c No especificado.

^d Otro fuente oficial da 527 000.

^e En 1992 fue de 1.800 millones de toneladas, en 1993 de 3.200 y en 1994 se proyectaba de 2.500 a 4.000 millones de toneladas.
FUENTES: Mesa-Lago y Gil, 1989, actualizado con CEE, AEC, 1984 a 1989; *Compendio...* Energía, 1989, BEC, 6, 1990, y Mesa-Lago, 1994.

CUADRO 16
AYUDA ECONÓMICA SOVIÉTICA: 1960-1990^a
(en millones de dólares USA)

Período	Préstamos reembolsables (deuda)			Subvenciones a precios; no reembolsables ^b	Total ayuda	Distribución porcentual			% de crecimiento
	Deficit comercial	Desa- rrollo	Sub- total			Préstamos (deuda)	Subsidios (donaciones)	Préstamos (deuda)	
1960-70	2.083	344	2.427	1.131	3.558	68,2	31,8	—	—
1971-75	1.649	749	2.398	1.143	3.541	67,8	32,2	97 ^e	101 ^e
1976-80	1.115	1.872	2.987	11.228	14.215	21,0	79,0	24	882
1981-85	4.046	2.266	6.3127	15.760	22.072	28,6	71,4	111	40
1986-90	8.205 ^c	3.400	11.605	10.128	21.733	53,4	46,6	83	-36
TOTAL	17.098 ^d	8.631 ^d	25.729	39.390	65.119	39,5	60,5	—	—

^a Excluye la ayuda militar, que se calcula en 13.400 millones de dólares en 1960-85.

^b Las subvenciones a las exportaciones de azúcar y níquel y las importaciones de petróleo se han estimado todas en comparación con los precios del mercado mundial. En 1960-85 se ha incluido en el cuadro una subvención insignificante negativa a los granos. Se han excluido las rentas adicionales en divisas obtenidas por Cuba en los años ochenta mediante la «reexportación» de petróleo soviético.

^c Incluye estimaciones para 1989-90. Según un antiguo funcionario de comercio cubano, el crédito inicial para este período se fijó en 2.500 millones de rublos (4.000 millones de dólares) como en 1981-85, pero fue insuficiente y fue posteriormente aumentado en una cantidad igual.

^d Según una fuente cubana, en 1990 la distribución de la deuda por origen era: 62% déficit comerciales desde 1972, 35% préstamos para desarrollo desde 1972 y 3% deuda acumulada hasta 1972. Esta distribución está próxima a la distribución de la deuda que aparece en el cuadro: 66% déficit comerciales y 34% préstamos para el desarrollo.

^e Sobre el promedio estimado para 1966-70.

FUENTE: Mesa-Lago, 1993a.

CUADRO 17

ESTIMACIONES BRUTAS DE LAS GANANCIAS/PÉRDIDAS DE CUBA EN EL COMERCIO CON LA URSS: 1986-1990
(en millones de dólares USA)

Año	Exportaciones de azúcar			Exportaciones de níquel			Exportaciones de petróleo		
	Precios soviéticos	Precios mundiales ^b	Ganancial pérdida	Precios soviéticos	Precios mundiales	Ganancial pérdida	Precios soviéticos	Precios mundiales	Ganancial pérdida
1986	4.081	523	3.558	236	70	166	1.763	763	-1.000
1987	3.240	570	2.670	200	90	110	1.561	1.045	-516
1988	3.138	765	2.373	200 ^c	254	-54	1.496	796	-700
1989	3.138 ^c	960	2.178	200 ^c	245	-45	1.476	977	-499
1990	3.138 ^c	938	2.200	200 ^c	163	37	1.476	1.126	-350
TOTAL	16.735	3.756	12.979	1.036	822	214	7.772	4.707	-3.065
									10.128

^a En 1987-90 el tipo de cambio cubano del peso y el dólar estaba a la par; en 1986 era de 1,21 dólares un peso, aumentando con ello en 1 millón los totales en dólares para este período.

^b En el caso del azúcar, la comparación del precio soviético con los precios preferenciales fijados en acuerdos bilaterales resultaría en menores subvenciones que si se hace la comparación con los precios mundiales.

^c Se ha puesto un valor inalterado de las exportaciones y los precios soviéticos.

FUENTE: Mesa-Lago, 1993a.

CUADRO 18

DEUDA EXTERIOR DESEMBOLSADA: DÉCADA DE 1980

1. DEUDA EN DIVISAS (millones de pesos)	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989
<i>Total de deuda desembolsada</i>	2.669	2.790	2.989	3.621	4.985	5.657	6.606	6.165
<i>Distribución porcentual</i>								
Oficial bilateral	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Oficial multilateral	47,8	47,8	52,8	50,2	41,8	44,3	44,4	45,7
Acreedores (proveedores)	0,7	0,9	0,6	0,6	0,5	0,7	0,4	1,0
Instituciones financieras	1,8	3,5	7,7	12,0	22,6	21,7	22,7	22,8
Otros créditos	49,7	47,8	38,9	37,2	35,1	33,3	31,9	29,8
Otros	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7
<i>Servicio de deuda</i>		319	403					
<i>Relaciones (porcentaje)</i>								
Total deuda/PSG	11,6	11,5	11,4	13,4	18,8	22,1	25,1	22,9
Servicio de deuda/exportaciones		20,2	28,8					

CUADRO 18

DEUDA EXTERIOR DESEMBOLSADA: DÉCADA DE 1980 (Continuación)

2. DEUDA EN MONEDA NO CONVERTIBLE Y DEUDA TOTAL: 1989-90

	Rublos (millones)	Tipos de tasas de cambio del dólar USA (millones)		
		Oficial nov. 1989=1,58	Oficial nov. 1990=1,78	Comercial 1990=0,56
<i>Unión Soviética</i> (nov. 1989)	15.490	24.474	27.572	8.674
<i>Europa del Este</i> (junio 1990)		2.277	2.464	1.329
Checoslovaquia	460	727	819	258
Bulgaria	300	474	534	168
Hungria	170	268	303	96
Alemania	2.000	808	808	808
Subtotal		26.751	30.036	10.003
Divisas (diciembre 1989)		6.687	6.687	6.687
TOTAL		33.438	36.723	16.690

FUENTES: segmento 1 procede de CEPAL, *Estudio*, 1989; segmento 2 procede de Mesa-Lago, 1993 a.

CUADRO 19
TASA DE DESEMPLEO DECLARADO
(en miles)

<i>Año</i>	<i>Fuerza de trabajo</i>	<i>Desempleados</i>	<i>Tasa de desempleo (%)</i>
1959	2.251	307	13,6 ^a
1960	2.276	269	11,8
1963	2.431	198	8,1
1965	2.490	163	6,5
1970	2.638	35	1,3
1975	3.031	135	4,5
1979	3.458	187 ^b	5,4
1981	3.618	199 ^c	5,5
1988	4.621	277 ^d	6,0
1992 ^e	5.053	500-900	10-18

^a La encuesta de un año realizada en 1956-57 dio una tasa de 16,4%.

^b Se ha calculado restando la población empleada (3.270.341) de la fuerza de trabajo.

^c Suma de los 121.700 desempleados y los que buscaban trabajo por primera vez (76.900).

^d Rodríguez da el porcentaje de desempleo y la CEE el de la fuerza de trabajo; el número de desempleados se ha derivado de ambas cifras. La OIT hace una proyección de la fuerza de trabajo de 4.265.000 en 1988 que resultará en 255.000 desempleados con la tasa del 6%.

^e Estimación del autor.

FUENTES: Gutiérrez, 1958; ONCDE, 1959-61; JUCEPLAN, *Censo*, 1970; Mesa-Lago, 1983; Brundenius, 1984; CEE, *Encuesta*, 1981; ONC, 1983; Rodríguez, 1989; OIT, 1986; CEE, *AEC*, 1988; Mesa-Lago, 1993d.

CUADRO 20

CUOTAS DE RACIONAMIENTO PER CAPITA DE ARTÍCULOS DE CONSUMO SELECCIONADOS EN LA HABANA
(CUBA): 1962-1992 (en libras)

Producto	1962	1969	1971-72	1979 ^a	1991-92 ^b
Carne ^a	3	3	3	2,5	0,75
Pescado	1	2	4	gratuito ^d	0,67 ^d
Arroz	6	4		5	5 ⁱ
Habichuelas	1,5	1,5	3-6	1,25	0,62 ^f
Tubérculos	14	9	n.d.	n.d.	n.d.
Grasas	14	9	n.d.	n.d.	n.d.
Grasas	2	1	2	1,5	1,5
Huevos (unidades)	5	15	15-24	gratuitos	20 ^g
Mantequilla	0,125	0,125	gratuita	gratuita	— ^g
Café	1	0,375	0,375	0,375	0,25
Leche (enlatada) ^e	6	2	3	3	3
Azúcar	gratuita	6	6-4	4	4 ⁱ
Pan	gratuito	15	n.d.	gratuito	5
Cigarrillos (paquete)	gratuito	4	4	4	4
Gasolina (galón)	gratuito	n.d.	n.d.	10	7 ^k
Detergente (paquete mediano)	1	1	n.d.	0,5	0,25
Jabón (pastilla)	2	2,5	n.d.	1,5	1 ^h
Papel higiénico (rollo)	gratuito	1	n.d.	1	1
Pasta de dientes (tubo pequeño)	1	1	n.d.	0,33	1
Cigarros puros (unidades)	gratuito	2	4	4	4 ⁱ
Cerveza (botellas)	gratuita	1	gratuita	gratuita	24 ⁱ

^a En 1979 también eran gratuitos los macarrones, espagueti, mantequilla y yogur; bizcochos y verduras (según temporada), y el pan (a partir de las 4 p.m.).

^b Junio; desde septiembre de 1990, 28 productos alimenticios y 180 artículos de consumo han vuelto a introducirse en la lista de productos racionados.

^c Vacuno; si no hay, se proporcionaba pollo — sólo por esta vía—. En 1991 la ración de carne de pollo era 1,5 libras y en 1992 era 0,75; 0,5 desde diciembre de 1992; al finalizar ese año no se disponía de carne de pollo.

^d No se puede obtener durante más de dos decenios.

^e Los niños menores de siete años reciben una ración diaria de dos tercios de litro de leche fresca; y los adultos de más de sesenta y cinco años reciben 6 latas de leche condensada o evaporada mensuales, pero no siempre.

^f Habichuelas rojas más habichuelas blancas; las primeras pocas veces se consiguen; reducido a 0,5 a mediados de 1992.

^g No se puede encontrar en el mercado en modo alguno.

^h Jabón de baño; no se ha entregado jabón de lavar por meses. A fines de 1992 se había reducido la cuota a la mitad.

ⁱ Por familia.

^j Reducido subsiguientemente a 16, 8 y 4 (1993).

^k Reducido a 5 en 1992 y del todo a final de 1992.

^l Justo 2,5 a mediados 1992.

FUENTE: Mesa-Lago, 1983 y 1993a.

CUADRO 21
INDICADORES DEMOGRÁFICOS Y DE SANIDAD: 1958-1991

Año	Población (miles)	Tasas por 100			Migración	Porcentaje de crecimiento demográfico	Médicos por 10.000 habitantes	Camas de de hospital por 1.000
		Natalidad	Mortalidad	Mortalidad infantil				
1958	6.824	26,1	6,3	33,4	-4.449	1,8	9,2	4,2
1959	6.977	27,7	6,4	34,7	-12.345	2,2	n.d.	n.d.
1960	7.077	30,1	6,1	35,9	-62.379	1,4	n.d.	n.d.
1961	7.191	32,5	6,4	37,6	-67.468	1,6	n.d.	n.d.
1962	7.318	34,3	7,1	41,5	-66.264	1,6	5,4	n.d.
1963	7.512	35,1	6,7	37,1	-12.201	2,6	8,9	n.d.
1964	7.713	35,0	6,3	37,4	-12.791	2,6	8,6	n.d.
1965	7.907	34,3	6,4	37,8	-18.003	2,5	7,9	5,3
1966	8.064	33,1	6,4	37,2	-53.409	2,0	8,7	n.d.
1967	8.215	31,7	6,3	36,4	-51.972	1,9	8,0	n.d.
1968	8.353	30,4	6,5	38,2	-56.755	1,7	7,5	n.d.
1969	8.489	29,2	6,6	46,7	-49.776	1,6	7,1	n.d.
1970	8.613	27,7	6,3	38,7	-56.404	1,5	7,1	5,0
1971	8.768	29,5	6,2	37,3	-49.631	1,8	7,1	n.d.
1972	8.951	28,0	5,5	27,4	-16.856	2,1	7,3	4,6
1973	9.118	25,0	5,7	28,9	-7.073	1,9	7,7	4,4
1974	9.232	21,9	5,6	29,0	-3.893	1,3	8,8	4,3
1975	9.366	20,7	5,4	27,3	-2.891	1,5	10,0	4,2
1976	9.493	19,8	5,5	22,9	-2.891	1,4	11,2	4,2
1977	9.601	17,5	5,8	24,8	-968	1,1	14,5	4,1
1978	9.686	15,4	5,7	22,4	-3.462	0,9	14,8	4,1
1979	9.754	14,8	5,6	19,4	-16.270	0,7	15,4	4,2
1980	9.694	14,1	5,7	19,6	-141.742	-0,6	15,7	4,3
1981	9.753	14,0	5,9	18,5	-18.928	0,6	16,6	4,4
1982	9.848	16,3	5,8	17,3	-8.234	1,0	17,1	4,5
1983	9.946	16,7	5,9	16,8	-9.533	1,0	18,9	4,6
1984	10.043	16,6	6,0	15,0	-9.007	1,0	20,4	4,7 ^a
1985	10.153	18,0	6,4	16,5	-8.164	1,1	22,5	4,7 ^a
1986	10.246	16,3	6,2	13,6	-9.635	1,0	24,9	4,7 ^a
1987	10.356	17,4	6,3	13,3	-4.114	1,0	27,1	4,8 ^a
1988	10.469	18,0	6,5	11,9	-7.521	1,1	29,8	5,0 ^a
1989	10.577	17,6	6,4	11,1	-9.279	1,0	32,8	5,1 ^a
1990-91	10.603	n.d.	6,7	10,7	-n.d.	1,0	36,4	5,3 ^a

^a Camas reales.

FUENTES: basado en JUCEPLAN, AEC, 1974 a 1976; CEE, AEC, 1977 a 1989, y Mesa-Lago, 1993d.

CUADRO 22
TASA DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS: 1958-1989
(por 100.000 habitantes)

Año	Diarrea aguda	Respirato- ria aguda	Vari- cela	Difteria	Hepa- titis	Malaria	Escarla- lina	Polio	Sifilis	Gono- rrea	Tétanos	Tubercu- losis	Tifoidea
1958	n.d.	n.d.	n.d.	2,4	n.d.	2,0	2,9	1,6	0,7	n.d.	n.d.	18,0	5,1
1959	n.d.	n.d.	n.d.	4,7	n.d.	2,1	10,3	4,3	0,7	n.d.	4,1	27,6	13,0
1960	n.d.	n.d.	n.d.	8,1	n.d.	19,0	10,7	4,3	8,3	n.d.	4,6	27,1	17,5
1961	n.d.	n.d.	n.d.	19,1	5,0	46,6	0,4	4,9	6,9	n.d.	n.d.	37,8	13,7
1962	n.d.	n.d.	n.d.	19,4	51,1	49,8	22,5	0,7	11,4	n.d.	9,0	38,6	14,2
1963	n.d.	n.d.	n.d.	12,8	64,4	11,5	94,0	...	23,4	n.d.	6,0	38,3	5,8
1964	n.d.	n.d.	n.d.	8,6	70,6	8,4	28,9	...	25,1	n.d.	5,5	52,6	15,6
1965	5,707	n.d.	118,6	8,2	115,8	1,7	121,6	...	30,4	8,9	6,7	65,0	3,1
1966	5,876	n.d.	138,3	4,6	115,1	0,5	136,4	...	26,3	n.d.	6,1	36,5	2,2
1967	6,165	n.d.	208,2	5,5	139,6	0,6	165,9	...	13,1	n.d.	5,4	37,2	2,4
1968	6,319	n.d.	n.d.	1,6	208,6	...	145,5	...	6,7	n.d.	3,9	41,0	12,0
1969	6,417	n.d.	104,6	0,6	85,3	...	132,2	...	7,1	n.d.	3,5	43,3	5,5
1970	7,694	10,162	150,1	0,1	102,6	...	105,2	...	7,8	2,9	2,6	30,8	5301
1971	7,879	n.d.	76,3	...	151,9	0,1	129,7	...	11,1	n.d.	2,0	17,9	4,8
1972	8,038	12,549	65,4	...	114,5	0,4	59,9	...	24,3	8,4	1,7	14,3	5,1
1973	8,286	14,219	93,0	...	133,6	0,1	78,3	...	48,9	9,7	1,1	15,4	3,5
1974	7,317	15,596	178,4	...	205,9	0,4	150,9	...	50,6	35,3	1,0	15,4	3,7
1975	6,876	15,520	161,7	...	217,0	0,9	113,4	...	47,6	47,2	0,7	14,2	4,0
1976	6,346	17,267	261,4	...	145,8	1,9	157,2	...	41,1	66,1	0,6	13,5	4,3
1977	7,358	19,348	144,3	...	123,2	1,8	263,3	...	39,2	86,4	0,6	13,1	4,7
1978	6,920	23,594	113,5	...	172,6	1,6	194,4	...	44,2	105,9	0,4	13,1	3,8
1978	6,951	21,906	94,8	...	225,8	3,2	77,3	...	43,6	141,6	0,3	11,6	1,8
1980	6,839	21,980	200,7	...	208,3	3,1	39,1	...	44,7	169,4	0,3	11,6	1,0
1981	7,836	27,595	425,1	...	147,2	5,9	190,1	...	36,9	201,8	0,2	8,6	1,8
1982	8,732	27,441	191,5	...	208,4	3,4	238,8	...	38,5	238,9	0,2	8,5	1,3
1983	8,527	33,000	291,1	...	101,2	3,0	33,2	...	44,3	294,3	0,2	7,7	0,6
1984	8,777	31,810	351,0	...	78,4	4,0	34,0	...	53,2	355,6	0,1	7,1	0,6
1985	10,487	38,160	820,8	...	209,2	4,5	28,5	...	62,6	359,6	0,1	6,7	0,6
1986	9,824	35,816	373,2	...	300,4	4,0	32,5	...	71,4	340,0	0,1	6,4	0,7
1987	11,436	35,452	374,9	...	238,3	2,8	8,3	...	84,2	352,7	0,1	6,2	0,7
1988	9,939	40,308	415,3	...	165,7	7,9	1,2	...	82,3	371,3	n.d.	6,0	0,9
1989	8,842	36,804	365,6	...	106,1	7,2	0,1	...	82,1	381,3	0,1	5,5	0,5

Índice cifras mínimas o nulas.

FUENTES: Mesa-Lago, 1983, y CEE, AEC, 1977 a 1989.

CUADRO 23

TASAS DE ANALFABETISMO Y PORCENTAJE DE POBLACIÓN
MATRICULADA EN LA ENSEÑANZA: 193-1989

Año	Tasas de analfabetismo ^a			Matriculados en enseñanza ^a		
	Nacional	Urbana	Rural	Primaria	Media	Superior
1953	23,6	11,6	41,7	n.d.	n.d.	n.d.
1960	3,9 ^c	n.d.	n.d.	110	14	3
1965				129	25	4
1970	12,9	7,1	21,5	121	25	5
1971				126	25	5
1972				130	28	7
1973				126	33	8
1974				128	41	9
1975				124	54	11
1976				121	66	14
1977				118	75	16
1978				115	80	18
1979	4,0	2,3	7,1	112	83	19
1980				108	80	20
1981	1,9	n.d.	n.d.	108	81	20
1982				111	78	19
1983				111	81	20
1984				106	83	20
1985				104	85	21
1986				105	88	23
1987				104	88	23
1989	3,8	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

^a En 1953-70, porcentaje de la población de 10 años o más; en 1979-81 están excluidos los mayores de 49 años (el número de analfabetos —de acuerdo a un informe oficial— se redujo a la mitad en 1979-81, de 236.622 a 115.374); la cifra de 1990 es supuestamente para los de 10 años o más.

^b Los límites de edad de los distintos niveles educativos son: primaria, 6 a 11 años; media, 12 a 17 (12-18 en 1971-74), y superior, 20 a 24. La matriculación en el nivel primario supera el 100 % debido a un desajuste entre cifras de población y edades educativas.

^c 1961.

FUENTES: tasas de analfabetismo proceden de ONCDE, 1953; JUCEPLAN, *Censo 1970*, 1973; CEE, *Encuesta*, 1979, y ONC, 1983. La matriculación procede de CEPAL, *Anuario*, 1980 a 1989.

CUA

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN

Año	Estado				Población		
	Total ^a	Civil	Militar	Cooperativas	Habitables	Sin certificado de habitabilidad	Total
1959-63 ^b		17.089		0			
1964		7.088		0			
1965		5.040		0			
1966		6.271		0			
1967		10.257		0			
1968		6.458		0			
1969		4.817		0			
1970		4.004		0			
1971		5.014		0			
1972		16.807		0			
1973		20.710		0			
1974		18.552		0			
1975		18.602		0			
1976		15.342		0			
1977		20.024		0			
1978		17.072		0			
1979		14.523		0			
1980		15.462		0	4.916		
1981	20.453	18.247	2.206	610	6.655	32.858	39.513
1982	23.851	21.211	2.640	1.384	8.499	31.014	39.513
1983	27.674	24.090	3.584	2.766	10.519	28.994	39.513
1984	26.246	22.829	3.417	2.564	13.591	29.979	43.570
1985	27.265	24.195	3.070	2.053	11.852	33.267	45.119
1986	25.833	23.132	2.701	2.709	10.792	34.281	45.073
1987	23.770	21.760	2.008	4.800	9.564	30.539	40.535
1988	25.168	n.d.	n.d.	3.127	7.364	n.d.	n.d.
1989	26.380	n.d.	n.d.	2.899	8.394	n.d.	n.d.

^a Desde 1989 se añade una nueva serie de viviendas para médicos, comenzando en 1986, que ha sido excluida.

^b Promedio anual.

FUENTES: basado en Mesa-Lago, 1983; JUCEPLAN, *Boletín*, 1966 a 1971; AEC, 1972 a 1976, y CEE, AEC, 1977 a 1989.

DRO 24

CUBA POR CONSTRUCTOR: 1959-1989

Totales			Unidades construidas por 1.000 habitantes			
Todas	Menos militares	Menos las sin certificado de habitabilidad	Públicas civiles	Privadas habitables	Todas menos las sin certificado	Déficit de viviendas
			2,4			655.000
			0,9			
			0,6			
			0,8			
			1,2			
			0,8			
			0,6			755.000
			0,6			
			0,6			
			1,9			
			2,3			
			2,0			
			2,0			
			1,6			
			2,1			
			1,7			
			1,5			877.000
		20.378	1,6	0,5		
60.576	58.370	25.512	1,9	0,7	2,8	
64.748	62.108	31.094	2,5	0,9	3,4	
69.953	66.369	37.375	2,4	1,0	4,1	
72.380	68.396	38.984	2,3	1,4	4,2	
74.437	71.367	38.100	2,4	1,2	4,0	
73.615	70.914	36.633	2,2	1,0	3,8	
69.107	67.099	36.560	2,1	0,9	3,7	
n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	0,7	n.d.	
n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	0,8	n.d.	

CUADRO 25
ALCANCE DE COBERTURA POBLACIONAL Y COSTES DE LA SEGURIDAD SOCIAL: 1958-1990

Año	% de población cubierto		Porcentaje pensiones/fuerza de trabajo	Costes de Seguridad Social ^c	
	Total ^a	Fuerza de trabajo ^b		% del PSG	Déficit financiado por el Estado (% de la renta) ^e
1958	4,2	62,6	6,8	6,0 ^d	n.d.
1970	100,0	88,7	13,8	7,4	30,9
1979	100,0	89,6	20,0	6,4	41,1
1981	100,0	93,0	n.d.	5,9	32,9
1989	100,0	n.d.	n.d.	8,1	n.d.
1990	100,0	n.d.	26,1	9,3	41,0

^a Cobertura sanitaria; desde 1970 basado en la ley y no en estadísticas.

^b Cobertura de jubilación, estimación del autor.

^c Incluye seguridad social y sanidad.

^d PIB.

^e Los años corresponden a 1974, 1978 y 1982.

FUENTES: Mesa-Lago, 1990^b.

10. BIBLIOGRAFIA

- Anónimo (1988): «Población y fondo de viviendas: 1975-1985». *Economía y Desarrollo*, 8 (marzo-abril), pp. 118-123.
- Añé, Lía, y Nérida Pérez (1989): «El proceso de cooperativización agrícola en Cuba». *Temas de Economía Mundial*, 26, pp. 105-109.
- Ayala Castro, Héctor (1982): «Transformación de la propiedad en el período 1964-1980». *Economía y Desarrollo*, 68 (mayo-junio), pp. 12-20.
- Banco Nacional de Cuba (BNC [1982-89]): *Informe Económico 1982-1989*. La Habana.
- (1982): *Cuba Quarterly Economic Review 1982-1989*.
- Barrett, Kathleen (1993): «The impact of the Collapse of the Soviet Union and East Bloc on the Cuban Health Care System». Washington, DC. Master Thesis at Georgetown University.
- Bernardo, Roberto M. (1971): «Managing and Financing the Firm». *Revolutionary Change in Cuba*, ed. de C. Mesa-Lago, pp. 185-208. Pittsburgh, Pittsburgh University Press.
- Boorstein, Edward (1968): *The Economic Transformation of Cuba*. Nueva York, Monthly Review Press.
- Brundenius, Claes (1979): «Measuring Income Distribution in Pre- and Post-Revolutionary Cuba». *Cuban Studies*, 9 (julio), pp. 29-44.
- (1984): *Revolutionary Cuba: The Challenge of Economic Growth with Equity*. Boulder, Westview.
- Brunner, Heinrich (1977): *Cuban Sugar Policy from 1963 to 1970*. Pittsburgh. Pittsburgh University Press.
- Cardoso, Eliana, y Ann Helwege (1992): *Cuba After Communism*. Cambridge, MIT Press.
- Castro, Fidel (1989): «Discurso en el 30 aniversario del triunfo de la Revolución». *Granma. Resumen Semanal*, 22 de enero, p. 4.
- (1992a): «Discurso en la clausura de la plenaria del 6.º Congreso de la UJC». *Havana Radio*, 4 de abril.

- (1992b): «Discurso en la clausura de la cosecha de la papa en La Habana...». *Granma*, mayo.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL [1980]): *Cuba: estilo de desarrollo y políticas sociales*. México, Siglo XXI.
- (1981a-1991a): *Anuario estadístico de América Latina (1980-1989)*. Santiago.
- (1981b-1992b): *Estudio económico para América Latina y el Caribe (1980-1991)*. Santiago.
- (1989c-1991c): *Balance preliminar de la economía de América Latina (1989-1991)*. Santiago.
- Comité Estatal de Estadística (CEE [1974a-1990a]): *Anuario Estadístico de Cuba (AEC), 1972-1989*. La Habana.
- (1981b): *Cuba: desarrollo económico y social durante el período 1958-1980*. La Habana.
- (1980c-1990c): *Cuba en Cifras (CeC), 1979-1989*. La Habana.
- (1981d): *Principales características laborales de la población de Cuba. Encuesta demográfica*. La Habana.
- (1981e): *Encuesta demográfica nacional de 1979, metodología y tablas seleccionadas*. La Habana.
- (1989f): *Compendio estadístico de energía*. La Habana.
- «Constitución de la República de Cuba» (1992): *Granma*, 22 de septiembre, pp. 3-10.
- Cuban Economic Research Project (CERP [1965]): *A Study on Cuba*. Coral Gables, Miami University Press.
- (1963): *Labor Conditions in Communist Cuba*. Coral Gables, Miami University Press.
- Cuban Research Institute (CRI): *Transition in Cuba: New Challenges for U.S. Policy*. Miami, Florida International University.
- Díaz-Briquets, Sergio (1983): *The Health Revolution in Cuba*. Austin, Texas University Press.
- Eckstein, Susan (1990): «The Rectification of Errors or the Errors of the Rectification Process in Cuba». *Cuban Studies*, 20, pp. 67-85.
- (1991): «More on the Cuban Rectification Process: Whose Errors?» *Cuban Studies*, 21, pp. 193-198.
- Fabian, Horst (1992): «Will Cuba be the Next Domino?». Trabajo inédito.
- Food and Agricultural Organization (FAO [1970-91]): *Production Yearbook*. Roma.
- Ghai, Dharam, Cristobal Kay y Peter Leek (1988): *Labour and Development in Cuba*. Londres, Macmillan.
- González, Edward, y David Ronfeldt (1992): *Cuba Adrift in a Postcommunist World*. Santa Mónica, Rand Corporation.
- Gutiérrez, Gustavo (1958): *El empleo, el subempleo y el desempleo en Cuba*. La Habana, Consejo Nacional de Economía.
- Junta Central de Planificación (JUCEPLAN [1973]): *Censo de población y viviendas 1970. Datos fundamentales de la población*. La Habana, Instituto del Libro.
- (s.f.): *Compendio Estadístico de Cuba (CEC), 1966-1968*. La Habana.

- (1968-73): *Boletín Estadístico de Cuba (BEC)*, 1966-1971. La Habana.
- Lataste, Albán (1968): *Cuba: ¿hacia una nueva economía política del socialismo*, s/p. Santiago.
- Linden, Ronald (1993): «Analogies and the Loss of Community: Cuba and East Europe in the 1990's». *Cuba After the Cold War*, cap. 2, ed. de Carmelo Mesa-Lago. Pittsburgh, Pittsburgh University Press.
- Lugo Fonte, Orlando (1989): «La ANAP: sus principales tareas». *Cuba Socialista*, 9 (mayo-junio), pp. 1-14.
- Marris, Katherine (1992): «Cuba: ¿qué pasa?...» *Seafood Business*, 11, 1 (enero-febrero), pp. 30-96.
- Martínez Fagundo, Carlos (1989): «Presencia e influencia de los factores de desequilibrio en las finanzas internas de Cuba». *Economía y Desarrollo*, 5 (septiembre-octubre), pp. 166-190.
- Martínez Fernández, Ramón (1988): «El turismo y su destino». *Economía y Desarrollo*, 18 (septiembre-octubre), pp. 30-37.
- Masso, Alfredo (1992): «Las medidas de ajuste: el caso cubano». *Cuba Económica*, 2, 3 (octubre-marzo), pp. 104-111.
- Mesa-Lago, Carmelo (1971): «Economic Policies and Growth». *Revolutionary Change in Cuba*, ed. de C. Mesa-Lago, pp. 277-338. Pittsburgh, Pittsburgh University Press.
- (1972): *The Labor Force. Employment, Unemployment and Underemployment in Cuba (1989-1970)*. Beverly Hills, Sage Publications.
- (1978): *Cuba in the 1970's: Pragmatism and Institutionalization*. Albuquerque, New Mexico University Press.
- (1982): «The Economy: Caution, Frugality and Resilient Ideology». *Cuba: Internal and International Affairs*, ed. de Jorge Domínguez, pp. 113-166. Beverly Hills, Sage Publications.
- (1983): *La economía de Cuba socialista: una evaluación de dos décadas*. Madrid, Playor.
- (1985): *The Crisis of Social Security and Health Care: Latin American Experiences and Lessons*, ed. de C. Mesa-Lago. Pittsburgh, Latin American Monograph Series, Pittsburgh University Press.
- (1986): «Cuba's Centrally Planned Economy: An Equity Trade off for Growth». *Latin American Political Economy: Financial Crisis and Political Change*, ed. de Jonathan Hartlyn y Samuel Morely, pp. 292-318. Bulder, Westview.
- (1988a): «The Cuban Economy in the 1980's: The Return of Ideology». *Socialist Cuba: Past Interpretations and Future Challenges*, ed. de Sergio Roca, pp. 59-100. Boulder, Westview.
- (1988b): «Cuban Statistics: One More Time». *Cuban Studies*, 18, pp. 133-145.
- (1990a): Cuba's Economic Counter-Reform (*Rectification*): Causes, Policies and Effects». *Cuba After Thirty Years: Rectification and the Revolution*, ed. de Richard Gillespie, pp. 98-139. Londres, Frank Cass.
- (1990b): *Ascent to Bankruptcy: Social Security Financing and Development in Latin America*. Pittsburgh, Pittsburgh University Press.
- (1990c): «Countdown in Cuba?» *Hemisfile*, 1, 2 (marzo), pp. 6-8.

- (1990d): «On Rectifying Errors of a Courteous Dissenter». *Cuban Studies*, 20, pp. 87-108.
- (1991a): *Economic and Financial Aspects of Social Security in Latin America and the Caribbean Tendencies, Problems and Alternatives for the Year 2000*. Washington, DC, World Bank.
- (1991b): «Rectification Round Two: An Answer to Eckstein's Rebuttal». *Cuban Studies*, 21.
- (1992): «Cuba: un caso único de reforma antimercado. Retrospectiva y perspectivas». *Pensamiento Iberoamericano*, 22-23, tomo II, pp. 65-100.
- (1993a): «The Economic Effects of the Soviet-Eastern European Crisis on Cuba». *Cuba After the Cold War*, ed. de C. Mesa-Lago, cap. 5. Pittsburgh, Pittsburgh University Press.
- (1993b): «Cuba's Economic Policies and Alternatives to Confront the Crisis». *Cuba After the Cold War*, cap. 6.
- (1993d): «The Social Safety Net in the Two Cuban Transitions». *CRI, Transition in Cuba*, pp. 601-670.
- (1994): *Are Economic Reforms Propelling Cuba to the Market?* Nueva York, Courial on Foreign Relations.
- y Sergio Díaz-Briquets (1988): «Estrategias diferentes, países similares: las consecuencias para el crecimiento y la equidad en Costa Rica y Cuba». *Anuario de Estudios Centroamericanos*, 14, 1-2, pp. 5-23.
- y Horst Fabian (1993): «Analogies-Differences in Regimes and Factors of Change and Politico-Economic Scenarios». *Cuba After the Cold War*, cap. 10.
- y Fernando Gil (1989): «Soviet Economic Relations with Cuba». *Soviet Relations with Latin America in the 1980's*, ed. de Eusebio Mujal-León, pp. 183-228. Boston, Allen & Unwin.
- , Fernando Gil e Ivan Brenes (1990): *Relaciones económicas de Cuba con la URSS y el CAME: pasado, presente y futuro*. Madrid, SODEPAZ.
- y Roberto E. Hernández (1971): «Labor Organization and Wages». *Revolutionary Change in Cuba*, ed. de C. Mesa-Lago, pp. 209-249. Pittsburgh, Pittsburgh University Press.
- y Jorge Pérez-López (1985a): *A Study of Cuba's National Product System, its Conversion to the System of National Accounts, and Estimation of GDP Per Capita and Growth Rates*. Washington, DC, Banco Mundial.
- (1985b): «Estimating Cuban GDP Per Capita in Dollars using Physical Indicator». *Social Indicators Research*, 16, pp. 275-300.
- (1985c): «Imbroglios on the Cuban Economy: A Reply to Brundenius and Zimbalist». *Comparative Economic Studies*, 27, 1 (primavera), pp. 47-83.
- (1985d): «The Endless Cuban Economic Saga: A Terminal Rebuttal». *Comparative Economic Studies*, 27, 4 (invierno), pp. 67-82.
- (1992): «Cuban Economic Growth in Current and Constant Prices, 1975-1988: A Puzzle on the Foreign Trade Component of the Material Product System». *Statistical Abstract for Latin America*, 29, parte 1, pp. 598-615. Los Ángeles, UCLA Latin American Center Publications.
- y Sergio Roca (1990): «Cuba». *Social Welfare in Latin America*, ed. de John Dixon y Bob Scheurell, pp. 100-137. Londres, Croom Helm.

- y Luc Zepeherin (1971): «Central Planning». *Revolutionary Change in Cuba*, ed. de C. Mesa-Lago, pp. 145-184. Pittsburgh, Pittsburgh University Press.
- Oficina Internacional del Trabajo (OIT [1986]): *Economically Active Population (1950-2025)*. Ginebra.
- Oficina Nacional de los Censos Demográfico y Electoral (ONCDE [1955]): *Censo de población, vivienda y electoral 1953*. La Habana.
- (1959-61): *Muestreo sobre empleo, subempleo y desempleo*. La Habana.
- Oficina Nacional del Censo (ONC [1983]): *Censo de población y viviendas 1981. República de Cuba*. La Habana.
- Pérez-López, Jorge F. (1979): «Sugar and Petroleum in Cuban-Soviet Terms of Trade». *Cuba in the World*, ed. de Cole Blasier y C. Mesa-Lago, pp. 273-296. Pittsburgh, Pittsburgh University Press.
- (1981): «Energy Production, Imports and Consumption in Revolutionary Cuba». *Latin American Research Review*, 16, 2, pp. 111-137.
- (1985): *The 1982 Cuban Joint Venture Law: Context, Assessment and Prospects*. Miami, Institute of Interamerican Studies, Miami University Press.
- (1986): «The Economics of Cuban Joint Ventures». *Cuban Studies*, 16, pp. 181-207.
- (1986): «Cuban Economy in the 1980's». *Problems of Communism*, 35 (septiembre-octubre), pp. 16-34.
- (1987a): «Cuban Oil Reexports: Significance and Prospects». *Energy Journal*, 8, 1, pp. 1-16.
- (1978b): *Measuring Cuban Economic Performance*. Austin, Texas University Press.
- (1988): «Cuban-Soviet Sugar Trade: Price and Subsidy Issues». *Bulletin of Latin American Research*, 7, 1, pp. 123-147.
- (1989): «Sugar and Structural Change in the Cuban Economy». *World Development*, 17, 10 (octubre), pp. 1627-1646.
- (1991): *The Economics of Cuban Sugar*. Pittsburgh, Pittsburgh University Press.
- (1992): «The Cuban Economy: Rectification in a Changing World». *Cambridge Journal of Economics*, 16, pp. 113-126.
- y Carmelo Mesa-Lago (1990): «Cuba: Domestic Counter Reform Leads to Crisis». *Transition*, 1, 8 (noviembre), pp. 6-8.
- Perkins, Swight H. (1992): *China: el enfoque gradualista a la reforma de mercado*. El Escorial. Conferencia sobre «Reforma económica: experiencias recientes en economías de mercado y socialistas», 6-8 de julio.
- Radell, Williard W. (1987): «Comparative Performance of Large Cuban Factories in the 1984 "Zafra"». *Cuban Studies*, 17, pp. 141-155.
- Ritter, Archibald R. M. (1974): *The Economic Development of Revolutionary Cuba: Strategy and Performance*. Nueva York, Prager.
- (1990): «The Cuban Economy in the 1990's: External Challenge and Policy Imperatives». *Journal of Interamerican Studies and World Affairs*, 32 (otoño), pp. 117-149.
- Roca, Sergio G. (1976): *Cuban Economic Policy and Ideology: The Ten Million Ton Harvest*. Beverly Hills, Sage Publications.

- (1988): *Socialist Cuba: Past Interpretations and Future Challenges*, ed. de Boulder. Westview.
- Rodríguez, José Luis (1982): «La economía cubana entre 1976 y 1980». *Economía y Desarrollo*, 66 (enero-febrero), pp. 109-149.
- (1988): *Crítica a nuestros críticos*. La Habana, Editorial Ciencias Sociales.
- (1989): «El desarrollo económico y social en Cuba: resultados de treinta años de revolución». *Cuba Socialista*, 9, 3 (mayo-junio), pp. 35-65.
- (1990): «Aspectos económicos del proceso de rectificación». *Cuba Socialista*, 44 (abril-junio), pp. 86-101.
- (1992): «Commentary». *International Congress on Cuba After the Cold War*, Pittsburgh University, abril, 27-28.
- y George Carriazo Moreno (1987): *Erradicación de la pobreza en Cuba*. La Habana, Editorial Ciencias Sociales.
- Svejnár, Jan, y Jorge Pérez-López (1993): «A Strategy for the Transition in Cuba Based on the Eastern European Experience». *Cuba After the Cold War*, cap. 9, ed. de C. Mesa-Lago. Pittsburgh, Pittsburgh University Press.
- Zimbalist, Andrew (1987): *Cuba's Socialist Economy Toward the 1990's*, ed. de Boulder, Lynne Rienner.
- (1988): *Cuban Political Economy: Controversies in Cubanology*, ed. de Boulder. Westview.
- y Claes Brundenius (1989): *The Cuban Economy: Measurement and Analysis of Socialist Performance*. Baltimore, Johns Hopkins.
- y Susan Eckstein (1987): «Patterns of Cuban Development: The First Twenty-Five Years». *Cuba's Socialist Economy Toward the 1990's*, ed. de Andrew Zimbalist, pp. 7-24. Boulder, Lynne Rienner.

Fotografía de cubierta:
© Paco Elvira
Archivo: COVER

C

uba no sólo es la
 única nación comunista de las Américas, sino
 además uno de los últimos países que aún
 mantienen un sistema económico de «mandato»
 o de alta centralización en las decisiones. Sin
 embargo, el continuismo político no encuentra
 equivalente en el campo económico. Cuba ha ex-
 perimentado múltiples modelos de desarrollo,
 económica y estrategias de desarrollo,
 oscilantes y con frecuencia contradictorios,
 desde la fase estalinista hasta sus esfuerzos por
 incorporarse al mercado capitalista mundial.
BREVE HISTORIA ECONÓMICA DE LA
CUBA SOCIALISTA analiza todas estas fases y
 trata de responder a una serie de preguntas
 cruciales: ¿cuáles son los logros y fracasos
 económicos de la Revolución cubana?, ¿es
 factible su supervivencia después del colapso
 del socialismo real en Europa?, ¿cuál es el
 papel del embargo impuesto por Estados
 Unidos?, ¿qué alternativas tiene Cuba?
 Buscando la mayor objetividad posible en un
 tema que ha polarizado a la opinión mundial
 durante años, CARMELO MESA-LAGO trata de
 contribuir al mejor conocimiento de estos
 fenómenos desde una posición que, afirmando
 los logros sociales de la Revolución, se decanta
 por un transición pacífica a un sistema
 democrático.

ISBN 84-206-4235-5



9 788420 642352

BIBLIOTECARIO

W7-AYE-059

